

ESTUDIOS CRÍTICOS DE DESARROLLO

VOLUMEN VII, NÚMERO 12, PRIMER SEMESTRE DE 2017

ISSN: 2448-5020



Estudios Críticos del Desarrollo, volumen VII, número 12, primer semestre 2017, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas», a través de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Jardín Juárez 147, colonia Centro, 98000 Zacatecas, Zacatecas, *Teléfono*: (01) 492 92 291 09, www.uaz.edu.mx, www.estudiosdeldesarrollo.mx, revista@estudiosdeldesarrollo.net

Editor responsable: Humberto Márquez Covarrubias

Reserva de derechos al uso exclusivo número 04-2014-041111305600-102, ISSN: 2448-5020, otorgados ambos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Impresión: Editorial Los Reyes, S.A. de C.V., Plazuela de los Reyes 45, interior B-102, Coyoacán, 04330 Ciudad de México

Tiraje: 500 ejemplares. Todos los textos aquí incluidos © y ® por *Estudios Críticos del Desarrollo*.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de los editores de la publicación.



Impreso en México

Printed in Mexico

Contenido

Editorial

- 7 La pobreza en el juego de espejos
Humberto Márquez Covarrubias

Artículos

- 19 Economía social en América Latina:
¿alter o posdesarrollo?
Henry Veltmeyer
- 55 Desarrollo y democracia en América Latina:
resultados y perspectivas
Ronaldo Munck
- 87 Desenlace del ciclo progresista
Claudio Katz
- 123 Claves para descifrar el sistema imperial
de innovación comandado por Estados Unidos
Raúl Delgado Wise
- 153 Los buenos convivires.
Filosofías sin filósofos, prácticas sin teorías
Alberto Acosta
- 193 Posdesarrollo como herramienta
para el análisis crítico del desarrollo
Eduardo Gudynas
- 211 Entre el extractivismo y el Vivir Bien:
experiencias y desafíos desde Bolivia
Fernanda Wanderley

Debate

- 249 Urdimbres de la crisis del capitalismo:
proceso histórico y colapso civilizatorio
Humberto Márquez Covarrubias

Reseña

- 295 Discusiones en torno a la pobreza
y el campesinado
Mónica Guadalupe Chávez Elorza

Editorial

La pobreza en el juego de espejos

Humberto Márquez Covarrubias

La sal de la tierra

Reflejado en un juego de espejos, el capitalismo aparece como un espectro de inconmensurable riqueza y de desbordante miseria: tan sólo 62 personas poseen una fortuna equivalente a la de 3 mil 600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad (Oxfam, 2016). El poder del gran dinero es capaz de producir mercancías de sobra hasta estallar en colosales crisis de sobreproducción y, al mismo tiempo, de sumir a miles de millones de seres humanos en el fango de la pobreza y la exclusión.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de mil millones de personas padecen hambre en el mundo, la cifra más alta de la historia, y 3 mil millones sufren desnutrición. Bastaría con canalizar «menos de 1 por ciento» de los fondos empleados para salvar de la crisis a bancos y empresas y destinarlos a «resolver» el problema del hambre, según la ONU. Pero el capitalismo no tiene vocación samaritana y sólo rescata a los grandes capitales, eso sí, mediante la «socialización de las pérdidas». En el improbable caso de que emprendiera una cruzada humanitaria, dicha acción sería insuficiente, pues dejaría intacta la raíz estructural del problema, el despojo y la explotación, dado que el sistema tampoco tiene vocación suicida.

Considerado por los epígonos como la única civilización posible del progreso y la prosperidad, el capitalismo expelle a la población que

considera redundante del mercado laboral, donde no tiene cabida ni siquiera como fuerza de trabajo extremadamente barata; del circuito de consumo, por ser insolvente, y de la ciudadanía, por la derogación de derechos sociales, laborales y políticos. Una parte significativa de la población mundial se convierte en una suerte de amasijo humano expulsado del paraíso terrenal en el que manda el dios dinero.

Ante los grandes problemas, el capitalismo huye hacia adelante al convertir la miseria humana en espléndidas oportunidades de negocio. La desbordante pobreza permite blanquear o humanizar al sistema con políticas de «combate a la pobreza», mientras se convierte un problema social en un espacio redituable. Quienes son excluidos y desechados terminan a la postre por ser incluidos y reinsertados a la estructura funcional. Los expertos exploran los mecanismos para reinsertar a esa masa amorfa de desahuciados que arroja la explotación y el despojo a fin de abrir nuevos mercados con altos márgenes de rentabilidad.

Los que sobran

Los pobres entre los pobres son considerados personas desechables por el capital. Una materia humana que no produce valor y no es rentable. Los excluidos carecen de medios de producción y de vida para cubrir las necesidades esenciales que imponen los mecanismos del mercado según la lógica de la valorización. La mayoría vive con ingresos insuficientes —menos de 4 dólares diarios—, carece de acceso a servicios básicos y no dispone de propiedades, cuentas bancarias o servicios financieros. Tampoco tiene acceso a los mercados para vender sus productos, sobrevive en la economía

informal y es más vulnerable a los desastres naturales. La paradoja es que siendo pobres en términos relativos pagan más que los consumidores ricos por productos y servicios que además son de menor calidad.

Los mecanismos de empobrecimiento son diversos. Los productores de subsistencia son despojados de tierras y otros bienes comunales que se venden a precio de saldo a corporaciones y fondos de inversión, los agentes del «nuevo imperialismo» (Harvey, 2004), para instalar grandes proyectos mineros, petroleros, agrícolas, turísticos, etcétera. La abundancia de trabajadores precarios atrae a maquiladoras, comercios y servicios que obtienen alta productividad y rentabilidad a cambio de salarios miserables. La institucionalidad garante de protección social amparada en un catálogo de derechos sociales y laborales es desmantelada y en su lugar se abren otros espacios de valorización a costa de quebrantar la reproducción social (Márquez, 2013).

De un modo más extremo, los sectores populares de los países periféricos son víctimas de guerras de conquista de territorios provistos de fuentes de energía, de disímiles guerras supuestamente contra el terrorismo y el narcotráfico, y de la militarización de las fronteras con el objeto de contener la inmigración. Distintas agendas geopolíticas, militares y diplomáticas atenazan a los más variados países y pueblos: Líbano, Irak, Palestina, Afganistán, Pakistán, Sudán, Somalia, Sri Lanka, México, Colombia... El Sur global se ha convertido en escenario militarizado donde cunden estrategias abiertas o encubiertas de exterminio y limpieza social en contra de la población redundante y en pos de las riquezas naturales y el trabajo vivo.

Fábrica de pobres

Los grandes prestamistas de los países subdesarrollados, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), están controlados por las potencias capitalistas, en particular Estados Unidos. En tanto agentes centrales de las finanzas globales poseen la facultad de implantar el proyecto neoliberal en las periferias del mundo, lo cual incluye la imposición de deudas externas perpetuas e ilegítimas —cínicamente bajo la rúbrica del «financiamiento para el desarrollo»— y severos programas de ajuste que desmantelan las economías nacionales, multiplican exponencialmente la pobreza y garantizan la rentabilidad de los capitales multinacionales.

Sumidos en la eterna deuda externa y el déficit fiscal crónico, los créditos del BM terminan por ser casi la única fuente de ingresos de los programas sociales en los países con más pobreza. Al estar condicionados a seguir los postulados del «libre mercado» y la rentabilidad capitalista se impone el régimen de ajuste que privilegia el oneroso pago de deuda contraída con los organismos financieros internacionales y otras instituciones crediticias, en consecuencia, recortan los programas sociales que eventualmente podrían contribuir a la educación, la salud, la alimentación y el empleo. De manera sintomática, la mayor parte de los préstamos del BM (alrededor de 80 por ciento) no se destina a los países sumidos en la pobreza más aguda, sino que con sentido estratégico se canaliza hacia los países en desarrollo que brindan un mayor potencial de inversión para el capital global y garantizan una rentabilidad.

Siendo en gran parte responsables del subdesarrollo y la pobreza en los ámbitos del Sur global, los organismos financieros internacionales tienen la osadía de presentarse también como los brujos financieros que resolverán el

flagelo de la pobreza en el mundo. En 1990, el BM declaró que la «reducción de la pobreza» era uno de sus objetivos prioritarios (BM, 1990); no obstante, promueve estrategias para reciclar a los pobres con nuevos métodos gerenciales y convertir al fantasma de la pobreza en un gran negocio (BM, 2007).

La pobreza es rentable

Además de que el sistema capitalista depara a miles de millones de personas despojo y sobreexplotación, pobreza, hambre, enfermedad y violencia, implementa estrategias de mercado con la intención de reciclar a la masa humana previamente expoliada y excluida. El sistema explotador aprovecha las propias lacras que genera para maquillarse con un rostro humano de desarrollo incluyente. Orondamente, el BM decreta que «la pobreza también es rentable» (WRI/IFC, 2007); bajo esa premisa, se trata de formar verdaderos mercados emergentes con rentabilidad asegurada.

El BM considera que los pobres forman la base de la pirámide de la economía mundial (BOP, por sus siglas en inglés) compuesta por 4 mil millones de personas de bajos ingresos (menos de 3.35 dólares al día) que viven en pobreza relativa; pero al conformar la mayoría de la población mundial representa un mercado potencial estimado en 5 billones de dólares (WRI/IFC, 2007). Esta población, ubicada debajo de la escala de supervivencia sin satisfacer sus necesidades básicas, se concentra en las periferias de Asia, África, Europa del Este y América Latina y el Caribe. En principio pareciera tratarse de un mercado insolvente, pues la mayoría de esas personas vive con menos de 4 dólares diarios, no es propietaria, no tiene acceso a servicios básicos y no dispone de cuentas bancarias ni servicios financieros, es decir,

están por debajo de la línea de pobreza tal como se establece en las sociedades occidentales. Sin embargo, sumada esa masa poblacional representa un apetitoso potencial de negocios que el capital no quiere desaprovechar.

Los organismos financieros internacionales suelen atribuir la inequidad a los sistemas de precios relativos del mercado financiero, como las comisiones exorbitantes por préstamos o transferencias de dinero a familiares, o los costos elevados por servicios básicos, entre otros. En esa medida las recomendaciones insisten en incrustar a los pobres en las actividades bancarias y promover su consumo. No se hace mayor reparo sobre el modelo económico político porque el cometido es convertir las necesidades esenciales de la masa de pobres generada por el propio capitalismo en oportunidades de negocio para el sector privado. Los pobres deberían ingresar en la economía formal en una estrategia de «generación de riqueza y crecimiento inclusivo» que cubriría las necesidades, el bienestar, la productividad y el ingreso de modo que las familias salieran de la pobreza.

La trama geopolítica

El tema de la «erradicación de la pobreza» se colocó en la agenda internacional con la proclamación de los Objetivos del Milenio de la ONU en 2000; una agenda imposible de cumplir porque no contempla cambios estructurales. En tanto que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) canaliza créditos y donaciones para respaldar a países con altos niveles de pobreza y deuda externa, pero en realidad se destinan a los mercados del Sur donde las corporaciones multinacionales tienen negocios e inversiones, con lo

que garantizan su rentabilidad. Los recursos de la AOD se condicionan a la formalización de alianzas público-privadas cuyo objetivo es ofrecer los fondos públicos a los capitales privados con sede en los países emisores. La cooperación al desarrollo es un mecanismo más de inclusión de los pobres en el mercado mundial.

En esa tónica, el grueso de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) brindan cobertura territorial a las operaciones políticas y diplomáticas de los países centrales amparadas en la noción de cooperación para el desarrollo. El discurso de las ONG suele ser débil cuando resaltan la falta de voluntad política para luchar contra la pobreza; no obstante, las instancias responsables —gobiernos centrales, organismos financieros internacionales y organizaciones internacionales— no pretenden, en el fondo, suprimirla sino gestionarla según los preceptos del mercado que buscan la rentabilidad, no la erradicación de las contradicciones sociales.

Reinserción al mercado

La exclusión social es ambigua: alternativamente los pobres aparecen y desaparecen de los ámbitos de la producción y el consumo. Por una parte son separados de los medios de producción y subsistencia, relegados al desempleo estructural y denegados de derechos sociales y laborales; por otra, son reinsertados al mercado, la institución primordial de la vida contemporánea, como trabajadores precarios y consumidores de bajos ingresos. A fin de cuentas ninguna clase social es rechazada si aporta a la producción y realización mercantil.

Los expulsados del paraíso mercantil dan lugar al diseño de políticas asistencialistas promercado planteadas por los organismos internacionales con la intención de conferirle un rostro humano al capitalismo (el «combate a la pobreza»), no sin dejar de advertir que representan una carga en los balances gubernamentales. Así, los programas estatales de asistencia a los pobres se orientan a respaldar el mercado de consumo de las grandes corporaciones. Los pobres son canalizados parcialmente a los circuitos de consumo solvente. Por ejemplo, los gobiernos nacionales obsequian teléfonos móviles, televisores, tabletas o computadoras para expandir el mercado de telecomunicaciones e informática que de otra forma estaría deprimido.

La democracia de elites, típica del capitalismo, se ofrece empaquetada a los pobres. La democracia electoral simula el principio liberal de «una persona, un voto» con el propósito de legitimar los comicios en los que simplemente se eligen personajes de la clase política extraídos de la elite. Las políticas asistencialistas son instrumentos clientelares que convierten a los sectores subalternos en una especie de mercado electoral cautivo para acarrear votos y distraer la atención de los grandes problemas sociales.

Consumidores solventes

La población pobre de bajos ingresos representa una contrariedad para el desarrollo del capitalismo: resulta contraproducente que más de la mitad del conjunto de la población se desconecte total o parcialmente del consumo capitalista. A fin de alentar la realización mercantil es imperativo reinsertar a los pobres en los circuitos de consumo y no necesariamente con el incremento de salarios, una exigencia permanente del capital.

Las empresas están muy interesadas en que los pobres sean sus clientes habituales. Por ende se elaboran diversos proyectos que pretenden reinsertar a los pobres en segmentos de mercado formados con baja inversión pero con altas expectativas de rentabilidad. En esa proyección configuran la base de la pirámide económica y pese a los magros niveles de ingreso y merced a su gran cantidad conforman un inmenso volumen de mercado que el capital intenta aprovechar hasta los últimos reductos.

Diferentes planes de negocio han sido confeccionados por las corporaciones según los perfiles sociodemográficos, económicos, culturales y las necesidades básicas. Muestra de ellos es la venta de mercancías y servicios variados, desde agua embotellada, ropa y electrodomésticos, hasta paquetes vacacionales y planes funerarios. La formación de un mercado de consumo para los pobres se acompaña de una organización del «estilo de vida»; es decir, patrones de consumo vinculados a un determinado producto o una canasta de productos, independientemente de que sean de primera necesidad o se tornen suntuarios.

Asimismo, las empresas crean mercados y estilos de vida para los consumidores pobres. Implantan la idea de pagar por determinados productos e inducen a los consumidores a incorporarlos en sus hábitos. Un ejemplo de ello es el agua, otrora un bien común de acceso gratuito, del pozo o la llave, que se convirtió en una mercancía cara, habitualmente con la forma de agua embotellada o de las bebidas edulcoradas, que además de su costo elevado se asocian con problemas de salud como diabetes e hipertensión, las enfermedades de los pobres. Otro ejemplo es el teléfono móvil, el cual se ha convertido en un artículo de «primera necesidad» para todas las clases sociales.

Las comunidades locales son subsumidas por negocios y productos que desplazan a los proveedores locales y las economías de subsistencia. No es

extraño que comunidades rurales consuman leche pasteurizada proveniente de centros urbanos industriales y no la leche producida en la región. Patentes, normas oficiales de producción, envasado y etiquetado forman un paquete legal y mercadotécnico que protege a los oligopolios y desplaza del mercado a los productores tradicionales y artesanales, considerados resabios del pasado. En adición, se diseñan, promueven y condicionan ciertos patrones de consumo para que los sectores populares asuman los modos de vida modernos empaquetados con señuelos como el estilo de vida estadounidense, el último grito de la moda u otro imperativo eficaz de la propaganda corporativa.

Es preciso aclarar que las campañas de mercadeo persuaden a los compradores para probar y aceptar sus mercancías y relegar a los productos vernáculos. Las empresas privadas involucran a la comunidad en la difusión de los nuevos productos y marcas con la finalidad de eliminar a los competidores y generar un sentido de identidad con la marca. Además imprimen una dosis de ideología en las mercancías, por ejemplo, en la publicidad no se menciona que el consumo de ciertas bebidas o golosinas no resolverá los problemas de nutrición o pobreza, pero sí que les brindará a sus vidas sensaciones de placer y realización personal de manera instantánea. Incluso, el fetichismo redoblado de la mercancía hace posible que se venda con una fuerte carga erótica inoculada en las campañas publicitarias o en el diseño del producto o empaque, lo cual nada tiene que ver con su valor de uso real.

Referencias

- Banco Mundial (BM) (1990), *Informe sobre el desarrollo mundial*, Washington.
- Harvey, David (2004), *El nuevo imperialismo*, Madrid, Akal.
- Márquez Covarrubias, Humberto (2013), «Apogeo del capitalismo corporativo y dominación de los mundos de vida», *Estudios Críticos del Desarrollo*, (3)5.
- Oxfam (18 de enero de 2016), «Una economía al servicio del 1 por ciento. Acabar con los privilegios y la concentración de poder para frenar la desigualdad extrema», *Informe de Oxfam*, p. 210, en https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-es_0.pdf
- World Resources Institute e International Finance Corporation (WRI/IFC) (2007), *Los siguientes 4 mil millones. Tamaño del mercado y estrategia de negocios en la base de la pirámide*, Washington.

Economía social en América Latina: *¿alter o posdesarrollo?*

Henry Veltmeyer*

Resumen. En América Latina la construcción de la economía social y solidaria corresponde a dos visiones teóricas y diversas prácticas. La primera vertiente es funcional al desarrollo capitalista, bajo las directrices internacionales de organismos financieros y agencias de cooperación que pretenden conciliar el desarrollo urbano y rural con las políticas de ajustes y las estrategias de desarrollo local comunitario basado en el «empoderamiento de los pobres» para conferirle cierta viabilidad al desarrollo capitalista. La segunda vertiente responde a las estrategias anticapitalistas de los movimientos sociales de base que confrontan, en palabras del zapatismo, a la Hidra capitalista y buscan alternativas a fin de generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de las clases populares. Ante la pregunta de si la economía social y solidaria es una estratagema neoliberal que defiende al sistema de las fuerzas de resistencia y subversión del movimiento anticapitalista, se analizan la agenda neoliberal, la experiencia del cooperativismo y la autogestión de los trabajadores en la construcción de la economía social; y en particular se examina el caso de Venezuela.

Palabras clave: economía social y solidaria, neoliberalismo, anticapitalismo, América Latina, Venezuela.

* Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

Traducción del inglés por Georgia Aralú González Pérez y Jesús Alberto Gaytán Castañeda.

The social economy in Latin America:
alter or post-development?

Abstract. In Latin America, the construction of a social and solidarity economy falls under two theoretical perspectives and various practices. The first approach is functional, via capitalist development, under the international direction of financial institutions and agency of cooperation that aim to reconcile urban and rural development with the adjustment policies and local community development strategies based on the «empowerment of the poor» to confer some kind of legitimacy to capitalist development. The second approach relates to the anti-capitalist strategies of grassroots social movements that challenge, in the words of *Zapatismo*, the «capitalist Hydra» and search for alternatives to create opportunities and improve the quality of life for the working class. On the question as to whether the social and solidarity economy is a neoliberal stratagem that defends the system from the forces of resistance and subversion by the anti-capitalist movement, we analyze the neoliberal agenda, the experience of co-operativism and worker self-management in the construction of the social economy; and in particular, we analyze the case of Venezuela.

Keywords: social and solidarity economy, neoliberalism, anti-capitalism, Latin America, Venezuela.

Introducción

Actualmente, en México y a lo largo de América Latina, muchos grupos están organizando maneras alternativas para asegurar su supervivencia y la de sus comunidades. Existen numerosos ejemplos de personas de las áreas rurales y urbanas que promueven actividades locales, organizan cooperativas y mercados locales de intercambio (de mercancías o bien uso de la moneda local o nacional) dentro de las comunidades. Sin embargo, de acuerdo con David Barkin (2016), en la mayor parte de América Latina esas estrategias alternativas emergen en específico entre los campesinos y grupos indígenas, organizados colectivamente en áreas rurales y al mismo tiempo que forjan economías sociales que evidencian el compromiso con una variedad de modelos de solidaridad social y que Barkin define como «economía ecológica desde abajo».¹ La proliferación de esas iniciativas, como él argumenta, refleja un reconocimiento de la importancia del desarrollo humano y de la relación de procesos socioeconómicos con el ambiente, una relación recuperada en el concepto indígena de Buen Vivir (o Vivir Bien) —para vivir bien en solidaridad social y armonía con la naturaleza (Acosta, 2012; Gudynas, 2013, 2014).

En estas acciones y experiencias colectivas sobresalen dos concepciones diferentes de la economía solidaria y social: una avanzada como parte de una estrategia en el manejo de las dinámicas complejas del desarrollo urbano y rural, y la otra como parte de la estrategia del movimiento social

¹ La economía ecológica desde abajo, como refiere Barkin, se fundamenta en principios que están ampliamente acordados en el movimiento social popular y se basan en consultas entre organizaciones y comunidades que conforman este movimiento. Se trata de la autonomía, solidaridad, autosuficiencia, diversificación productiva y gestión sustentable de los recursos regionales (Barkin, 2005).

de base para enfrentar lo que los zapatistas denominan la Hidra capitalista. Ello permitirá encontrar alternativas que brinden más oportunidades y una mejor calidad de vida que la ofrecida por el modelo económico capitalista reciente. La idea es que las estrategias ideadas por las organizaciones internacionales y las fuerzas involucradas en el proyecto de cooperación internacional y desarrollo, que comprende una estrategia de desarrollo local comunitario enfocado en el «empoderamiento de los pobres» (movilizando su capital social para el autodesarrollo, a fin de que ellos «posean» su propio desarrollo), se diseñan como mecanismos de ajuste que son funcionales en la continuación del capitalismo. Desde una perspectiva izquierdista, sin embargo, ¿esta estrategia también puede ser vista como una estrategia neoliberal que defienda al sistema de las fuerzas de resistencia y subversión del movimiento anticapitalista?

El argumento del presente trabajo es que la aparente vitalidad de los esfuerzos desplegados en la región para construir una economía social y solidaria derivan del hecho de que ésta es funcional para el capitalismo y el movimiento anticapitalista. En efecto, no se trata de determinar cuál interpretación es superior para explicar la dinámica de la construcción de una economía solidaria y social. Pese al supuesto conflicto entre las dos perspectivas teóricas, convergen, se complementan, lo que responde a las preocupaciones de los guardianes del sistema y a las demandas del movimiento anticapitalista.

En principio, se reconstruye la agenda neoliberal de la economía social implementada en los espacios locales mediante la acción colectiva de los «pobres rurales» —según el discurso del desarrollo— y la política gubernamental. En seguida, se retoma la historia del cooperativismo en la región asociada con el proceso de desarrollo capitalista y con distintas

experiencias autogestivas de los trabajadores y los posteriores esfuerzos por generar una economía social. Después se sitúa el concepto y los múltiples proyectos de una economía social y solidaria dentro de una estrategia de desarrollo local comunitario. Como se observa, esta estrategia es abordada desde dos perspectivas teóricas y diversas prácticas. El trabajo concluye con una breve discusión del proyecto de una economía social y solidaria en construcción en Venezuela dentro del marco institucional y político de la Revolución bolivariana. No se trata de romantizar o elogiar el logro del proceso (está plagado de obstáculos), sino de mostrar que el proyecto se construye desde arriba y desde abajo.

Eje neoliberal de la economía social

Los 1980 comenzaron con una contrarrevolución conservadora, un movimiento para detener los beneficios incrementales pero constantes obtenidos en décadas anteriores por la clase obrera bajo la égida y dentro de la reforma social-liberal del desarrollo del Estado de bienestar.² Tanto el movimiento obrero organizado como la lucha por la tierra en el campo, estos últimos en forma de diversos ejércitos de liberación nacional, habían sido derrotados a consecuencia de la represión estatal y una estrategia de desarrollo rural

² A lo largo de lo que los historiadores han denominado «la edad de oro del capitalismo», pero que podríamos nombrar como «era del desarrollo» (aproximadamente entre los 1950 y los 1970), la principal agencia para el cambio social fue el Estado nación a través de políticas de desarrollo económico y la reforma social. La mano de obra organizada fue otro factor clave, ya que podría negociar convenios colectivos con el capital para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. Sin embargo, en los 1960 y 1970, los regímenes militares comenzaron a surgir como reacción a la izquierda política y los lentos pero constantes beneficios de las clases trabajadoras y productoras en el proceso de desarrollo.

integral diseñada para apartar a los pobres rurales —las masas de familias campesinas desposeídas forzadas por el desarrollo capitalista de la agricultura a abandonar sus medios de vida rural y las comunidades en el campo— de la política de confrontación de los movimientos sociales que buscan el cambio revolucionario (Delgado y Veltmeyer, 2016). Esa derrota, junto a la dinámica de la deuda externa acumulada y en expansión, creó condiciones que permitieron al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales agencias y guardianes del sistema, imponen a los gobiernos de la región un programa de ajustes estructurales en sus políticas macroeconómicas, con lo cual se inicia lo que David Harvey, entre otros, han denominado la «era neoliberal».

Un gran objetivo y la meta propuesta por la reforma política neoliberal —verbigracia, privatización de empresas, desregulación de los mercados, libertad de comercio y flujo de capital de inversión así como descentralización de la administración pública— fue liberar las conocidas «fuerzas de la libertad económica» de las restricciones reguladoras del Estado de bienestar. El resultado inmediato de esas reformas estructurales, sin mencionar un extenso proceso de descapitalización asociado al uso obligatorio de los ingresos de las exportaciones de bienes para atender la deuda externa acumulada,³ ha sido ampliamente estudiado. Por ejemplo, el avance del capital en las ciudades y el campo, con la consiguiente destrucción de las fuerzas productivas en la agricultura y la industria, y un virtual colapso e involución del mercado de trabajo, lo cual obligó a la creciente

³ Durante los 1980, América Latina experimentó un bajo nivel de formación de capital, resultado de una política concertada por el BM y el FMI, que se unieron en 1983 para obligar a los países endeudados —especialmente México, Brasil y Argentina— a elevar sus economías al mercado mundial y utilizar sus ingresos de exportación para atender la deuda externa.

masa de migrantes rurales a laborar «por su cuenta» en las calles en lugar de intercambiar su fuerza de trabajo contra el capital por un salario digno. Algunos economistas y sociólogos del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimaron que en el vórtice de estas fuerzas hasta 80 por ciento de los nuevos empleos generados en los 1980 se formaron en «sector informal» (Portes y Benton, 1987; Tokman y Klein, 1988; Tokman, 1988, 1991).

Teóricos y analistas de la comunidad de desarrollo, aquellos asociados con el proyecto de cooperación internacional en la guerra contra la pobreza global, enfocaron su preocupación y atención no en éstos ni en los cambios estructurales, sino en el deterioro de la condición social de los habitantes de los centros urbanos, muchos de los cuales sustituyeron la pobreza rural por una nueva forma de pobreza (los «nuevos pobres» como se les llamó en las estadísticas). El diagnóstico de lo que el cambio en el nuevo orden mundial había provocado —de 40 a 44 por ciento en la década de 1980— se reflejaba en la frase «una década perdida para el desarrollo».

Lo que estaba perdido, casi del todo, en las diversas reflexiones teóricas sobre dicho proceso —el avance del capital y el retiro del Estado— fue la respuesta estratégica y política de los pobres urbanos,⁴ misma que se presentó de dos maneras. Una fue la formación de comedores populares y

⁴ Las respuestas de los pobres de las zonas rurales eran diferentes (véase Delgado y Veltmeyer, 2016). Mientras que muchos se ajustaron a las fuerzas del desarrollo capitalista (proletarización, globalización, modernización, urbanización) tomando las vías de desarrollo de la migración y el trabajo abiertas por las agencias de desarrollo, otros optaron por el camino de la resistencia colectiva organizada y otros más se volvieron hacia lo que resultó una economía social basada en las relaciones de solidaridad social, lo que un economista chileno adscrito al PREALC conceptualizó en su momento, a mediados de los 1980, como una «economía solidaria» (Razeto, 1988, 1993).

diferentes acciones colectivas y organizaciones solidarias para ayudar a los pobres a hacer frente a las fuerzas de desarrollo capitalista y sobrevivir en las nuevas condiciones (Petras y Leiva, 1994). Esa respuesta, que en algunos casos condujo a la formación de una vibrante economía social dentro de barrios marginales de ciudades en expansión en la periferia latinoamericana —para citar un estudio de Mike Davis (2006)— estaba particularmente avanzada en Chile y Perú, así como en México, donde un terremoto de 8.0 grados en la escala de Richter acabó con la vida de alrededor de 10 mil personas⁵ y tuvo un impacto dramático en la proliferación de organizaciones no gubernamentales (ONG) que incursionaban en el vacío de un Estado en retirada y en la construcción de una economía social sustentada en la autoayuda, el apoyo mutuo y la solidaridad social.⁶

La construcción de una economía social fundamentada en relaciones de solidaridad social,⁷ y el surgimiento y expansión de la «sociedad civil» basada en la asociación de un tipo de ONG, derivó de la convergencia de distintas fuerzas; sin embargo, ésta fue sólo una de varias respuestas a esas fuerzas y condiciones cambiantes. Otra fue la expansión de las protestas y resistencias. A finales de los 1960 y gran parte de la década de 1980, tales protestas y resistencias contra la agenda de reformas neoliberales —entonces se llamaba

⁵ Los informes han contabilizado de entre 5 mil y 30 mil (reclamados por varios grupos de ciudadanos) a 45 mil muertos reclamados por el Servicio Sismológico Nacional (Crisp, 1998:150); no obstante, la cifra más citada es aproximadamente de 10 mil, si bien es alto como un número absoluto (Campos, 19 de septiembre de 2005).

⁶ Pese a que el número total de «asociaciones voluntarias privadas» u ONG a comienzos de los 1980, en el umbral de la era neoliberal, podría ser de cientos, y se estima que a mediados de los 1990, a una década en la era neoliberal, en América Latina podían numerarse en decenas de miles. Sobre la dinámica de estas ONG frente a los movimientos sociales, véase Veltmeyer (2007).

⁷ En teoría, una economía social y la acumulación de capital social sólo pueden darse en condiciones de una cultura de solidaridad, que por lo normal existen en las comunidades rurales, especialmente en las que forman los campesinos indígenas (Durstun, 1998).

«protestas del FMI»— eran espontáneas y desorganizadas (Walton y Ragin, 1990).⁸ Su principal objetivo eran las medidas de austeridad dictadas por el FMI, incluyendo recortes en el gasto público, eliminación de los subsidios a servicios públicos y utilidades que elevaban el costo del transporte, combustible, electricidad, agua, alimentos, más allá del alcance de los pobres rurales.⁹ Durante la década de 1990 la resistencia, cada vez más dirigida contra la agenda neoliberal del BM de reforma estructural, en lugar de las medidas de austeridad del FMI, se tornó más organizada. La agencia y los agentes de esta resistencia fueron nuevos movimientos sociales formados en el medio rural por campesinos, trabajadores rurales sin tierra o trabajadores semiproletarizados y comunidades indígenas (Petras y Veltmeyer, 2009). Esa nueva

⁸ Aunque en 1983 se combinaron en lo que se conocía como «programa de ajuste estructural», debía distinguirse entre las «reformas estructurales» impulsadas por el BM (privatización, liberalización, desregulación, descentralización) y las medidas de austeridad impuestas por el FMI como condición para acceder al capital público. En la década de 1980 la resistencia se llevó a cabo en respuesta a medidas de austeridad prescritas por el FMI, mientras que en la década de 1990 el objetivo central de ésta fueron las reformas estructurales más profundas del Banco. Respecto al primer caso, surge en Venezuela el *caracazo*, protesta callejera contra estas reformas del FMI que derivaron en aumentos en el precio de la gasolina y el transporte; comenzó el 27 de febrero de 1989 y resultó en la muerte de cientos de manifestantes, incluso miles según algunas cuentas (Uppsala Conflict Data Program Conflict Encyclopedia, Venezuela, Violencia unilateral, Gobierno de Venezuela—, http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?Id=167®ionSelect=5-Southern_Americas#). El *caracazo* fue quizá la razón por la que la agenda neoliberal de reforma no se implementó plenamente, mientras que en Perú, Argentina y Brasil —los tres países principales que habían eludido la agenda de reformas neoliberal— aceptaron la segunda generación de reformas estructurales en los 1990.

⁹ En Argentina, los recortes prescritos por el FMI en el gasto social culminaron en fuertes protestas y huelgas en 2000. Por su parte en Bolivia, un préstamo del FMI condicionado a la privatización de los servicios de agua llevó a un aumento de 200 por ciento en los precios del agua, lo que provocó protestas generalizadas. En Ecuador, el préstamo del FMI aprobado en 2000 requirió una reducción del gasto público, la moderación salarial, la eliminación de los subsidios, las reformas en el mercado de trabajo y el sector petrolero y la privatización. Miles de manifestantes salieron a las calles en respuesta y los trabajadores hicieron una huelga general contra las continuas reformas económicas exigidas por el FMI.

ola de movimientos sociales contra el avance del capital y la política neoliberal del gobierno comenzó en Ecuador con un levantamiento en 1990 orquestado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una confederación de varias docenas de nacionalidades indígenas (Petras y Veltmeyer, 2013).

Luego de la irrupción de la Conaie y de otros movimientos campesinos e indígenas en la región, especialmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),¹⁰ algunos identificaron la década de 1990 como una «edad de oro» de la resistencia, con referencia al poder de estos movimientos para detener la agenda neoliberal de reforma de políticas y poner al neoliberalismo a la defensiva, hasta el punto de provocar su inevitable desaparición. A fines de ese periodo, la agenda neoliberal estaba muerta en las aguas, lo que condujo a una «marea» de cambios de régimen, la aparición de un ciclo progresista en la política latinoamericana que se remonta al activismo de los movimientos de la sociedad campesina en ese tiempo (Petras y Veltmeyer, 2013).

Economía social y movimiento cooperativo en América Latina

En el contexto latinoamericano, la construcción de una economía social se ha asociado estrechamente con el movimiento cooperativo de principios del siglo XX, incluso más atrás en ciertos casos (Fabra, 1943). No obstante,

¹⁰ Al describirse como un «ejército de liberación nacional», el EZLN recuerda un periodo de fermento revolucionario en los 1960 y 1970, cuando los principales movimientos sociales de la época se describieron en esos términos. Pero una vez que el movimiento zapatista se estableció después de una erupción inicial en 1994, auguró una «nueva forma» de «producir cambio y hacer política» —el «primer movimiento posmoderno en la historia» (Burbach, 1994).

empezó a tomar forma y ejercer una influencia de manera positiva en la vida nacional hasta principios de los 1930 con la Revolución mexicana. Esta última condujo a una oleada decisiva en el movimiento cooperativo así como en el sindicalismo, que dejó su impronta en el movimiento cooperativo.¹¹ La historia del cooperativismo y el sindicalismo, manifiesto de distintas formas en varios países, también incluye dinámicas de desarrollo local y experimentos de fábricas dirigidas mediante la autogestión de los trabajadores, es decir, eran conducidas por consejos de trabajadores y asambleas de fábricas surgidas en determinados países en el contexto más amplio de lo que podría describirse como lucha de clases.

Cabe referir el caso de Chile bajo el régimen socialista de Salvador Allende (1970-1973), cuando alrededor de 125 fábricas se sometieron a algún sistema de autogestión de los trabajadores, medio controlado por servidores públicos, lo que representó una forma de gobierno parlamentario con sus divisiones políticas de izquierda-centro-derecha; la otra mitad era liderada por las comisiones de trabajadores a nivel de fábrica, organizadas en la línea de los consejos o *soviets* obreros, al igual que la Comuna de París de la Francia de mediados del siglo XIX.

Por su parte, Argentina experimentó la crisis 2001-2002, cuando los trabajadores se apoderaron de más de doscientas fábricas, defendiéndolas del cierre, protegiendo su empleo y haciendo enormes mejoras a las condiciones laborales, pero sobre todo, concientizando a los trabajadores. La mayoría de las fábricas —Empresas Recuperadas por sus Trabajadores

¹¹ México, Argentina y Brasil podrían ser considerados pioneros del movimiento cooperativo en América Latina, el cual avanzó lentamente durante la primera década del siglo XX. El Hogar Obrero fundado en Argentina en 1905 todavía existe. En Brasil, en los estados de Río de Janeiro y Río Grande del Sur, se inició un fuerte movimiento para formar cooperativas a comienzos del siglo.

(ERT), como algunos las han nombrado— se organizó como cooperativas autogestionadas por el colectivo de trabajadores (Petras y Veltmeyer, 2002; Montiel, 2005).

En cuanto a la Revolución de 1952 en Bolivia y de Perú en 1967, cuando un grupo de oficiales militares nacionalistas progresistas encabezados por el general Velasco Álvarez tomó el poder y expropió un gran número de minas, fábricas y plantíos, se estableció un sistema de cooperativas industriales (y comunidades) basado en decisiones conjuntas por la dirección y los trabajadores. Aunque rara vez se menciona, el caso de Brasil es fundamental. Actualmente, más de doscientas empresas han sido recuperadas por sus trabajadores, con la primera experiencia de la fábrica de zapatos Makerli en 1991. La Asociación Nacional de Trabajadores y Empresas de Autogestión y Participación Accionaria (ANTEAG) se asentó en 1994 con el objetivo de coordinar los proyectos que fueron materializados en condiciones de crisis y en el umbral del colapso de la industria. Esta asociación cuenta con oficinas en seis estados encargadas de acompañar proyectos de autogestión (se busca la integración con ONG), gobiernos estatales y municipales. ANTEAG considera la autogestión como un modelo organizacional que combina la posesión colectiva de los medios de producción con una autonomía de la toma de decisiones empresariales y la participación activa en la gestión democrática.

El punto crucial de éste y otros experimentos similares del cooperativismo y el sindicalismo es que requieren ser entendidos en el contexto más amplio del desarrollo capitalista, en la historia del capitalismo de la región. Aunque la historia del cooperativismo en América Latina es muy compleja, con una experiencia distinta en cada país y un gran auge en la década de 1930, tiene sentido iniciar con el periodo de posguerra del

desarrollo capitalista, los 1950 y los 1960, cuando «el desarrollo» como se entiende hoy, es decir un proyecto de construcción nacional y de cooperación internacional, se inventó como un medio para impedir que los países de la periferia del sistema capitalista mundial lucharan para liberarse de las ataduras de la explotación colonialista e imperialista, y que en consecuencia no tomaran una vía socialista de desarrollo nacional;¹² asimismo, se intentaba mantener a los pobres rurales —las masas de pequeños productores y campesinos despojados de sus tierras en la transición hacia el capitalismo— lejos de los movimientos sociales revolucionarios, a fin de evitar la emergencia de otra Cuba.

La solución teórica de esos problemas, esto es, la resistencia al avance del capital, el socialismo o el comunismo como camino alternativo hacia el desarrollo nacional y la demanda de cambio revolucionario era triple: 1) reforma estatal a nivel de programas sociales (salud, educación, bienestar) y tenencia de la tierra; 2) programa de desarrollo integral comunitario local o rural basado en la agencia del Estado con cooperación internacional y mediado por asociaciones voluntarias privadas, con la participación de ONG u organizaciones de la sociedad civil (OSC) financiadas por las agencias de cooperación internacional (en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional [USAID, por sus siglas en inglés]); 3) organización de cooperativas. El gobierno de Estados Unidos y varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comisionaron una serie de estudios sistemáticos del movimiento cooperativo y de las experiencias

¹² Hay aquí una interesante convergencia teórica entre el argumento presentado por varios defensores del posdesarrollo a mediados de los 1980 (Escobar y Ferguson en Sachs, 1992) y el argumento propuesto más tarde por Veltmeyer (2005) desde un punto de vista de la economía política marxista muy diferente, con respecto al «desarrollo» como forma de imperialismo y medio de desmovilización política.

de diversos países (aunque no fue hasta 1985 que la CEPAL y otras agencias incorporaron el cooperativismo en su programa de desarrollo social).

El cooperativismo emergió como una forma de desarrollo local, aunque tenía una historia bastante corta: desde finales de los 1960 a mediados de los 1970 (1967-1974). A pesar de que en muchos países se establecieron cooperativas con diferentes grados de éxito y fracaso —en gran cantidad financiados por el gobierno de Estados Unidos/USAID—, el movimiento se extinguió porque a menudo las condiciones no eran propicias al cooperativismo y al desarrollo cooperativo. Además, el valor del cooperativismo fue cuestionado por algunos analistas —por ejemplo, Robert Guimaraes, economista brasileño asociado a CEPAL, quien ha hecho una gran contribución al entendimiento de las dinámicas alternativas de desarrollo en América Latina—, que argumentaron que las cooperativas eran una forma ineficaz de organización para satisfacer las necesidades básicas de los pobres y un fracaso como agencias de transformación social (Guimaraes, 1989).

Sobre la base de extensas investigaciones de campo y estudios de caso encargados por el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD, por sus siglas en inglés) y coordinados por Fals Borda, conocido teórico colombiano de la acción social, Guimaraes concluyó que las cooperativas no sólo eran una manera poco efectiva de terminar con la pobreza sino que tenían escaso éxito como agencia de transformación social. La conclusión general a la cual llegó el equipo del UNRISD, apoyada por Guimaraes, puede resumirse en cuatro premisas:

1. Las cooperativas no son agentes de cambio, producen pocos beneficios para los sectores más pobres de la sociedad; en realidad, el fortalecimiento de las cooperativas en la mayoría de los lugares ha desembocado en un inexplicable aumento de las brechas de ingresos.

2. Las cooperativas tienden a reproducir la estructura de las relaciones y condiciones de la comunidad, en lugar de transformarlas.

3. Refuerzan, extienden y profundizan las desigualdades sociales pre-existentes, en parte porque los grupos e individuos que están acomodados en la estructura de poder son más propensos a controlar los comités clave y la administración de las cooperativas

4. En los contados casos donde las cooperativas estaban compuestas por campesinos pobres, pese a que se representaban sus intereses, eran manifiestamente incapaces de promoverlos (Guimaraes, 1989:285-286).

En cuanto a las condiciones necesarias o propicias para el desarrollo cooperativo, se incluye una cultura de solidaridad que en el caso de muchas comunidades era y sigue indiscutiblemente ausente (Durston, 1998). O'Malley (2001), entre otros, considera que, con excepción de las comunidades indígenas de Bolivia, Ecuador, México y Guatemala, diversas comunidades rurales en la región están divididas en clases sociales o sujetas a fuerzas que han socavado el sentido de comunidad y la cultura de solidaridad. Bajo tales circunstancias, los campesinos no indígenas por lo general quieren su propia parcela de tierra para trabajarla con fuerza laboral familiar. Además, la penetración de diversas fuerzas de cambio (modernización, empresas privadas y capitalismo), la promoción del sector privado y el mercado por el BM y otras instituciones financieras y agencias de desarrollo, así como una cultura capitalista basada en la propiedad privada, el individualismo posesivo y la empresa privada, se han manifestado en contra del cooperativismo. Asimismo, la mayoría de las cooperativas exitosas, incluso en el sector agrícola, no eran cooperativas de productores o colectivos de trabajadores, sino grupos de comerciantes. En realidad, al menos en México, según las leyes establecidas en ese momento por el gobierno para controlar

las cooperativas, los miembros sólo podían provenir de la clase trabajadora. Se prohibió tener empleados asalariados, los trabajadores únicamente podían formar cooperativas sindicales de consumidores si la asamblea general de la cooperativa coincidía con la propia unión.

La estrategia de desarrollo dominante no era promover el desarrollo local o comunitario, sino explotar la oferta ilimitada de excedente de fuerza de trabajo rural como una palanca de acumulación de capital, con la intención de alentar a los pobres rurales a adaptarse a las fuerzas de cambio a través de una vía de desarrollo que posibilitara a los gobiernos incorporarlos en el mercado laboral.¹³

Hasta mediados de los 1990, esa era la estrategia dominante, pues el mercado laboral estaba saturado y los mecanismos de migración y trabajo, como una válvula de escape, habían alcanzado límites internos y externos. La destrucción de las fuerzas de producción en la agricultura y la industria propició la formación de un gran semiproletariado de trabajadores rurales sin tierra y de un sector urbano informal, en el cual los migrantes rurales debieron asumir la adversidad en lugar de trabajar por un salario.¹⁴ La estrategia se orientó hacia la promoción del desarrollo local basado en la comunidad, con el propósito de capacitar a los pobres para que actuaran

¹³ La teoría detrás de esta estrategia la esboza con claridad el BM en su *Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008* acerca de la «Agricultura para el desarrollo».

¹⁴ Para una elaboración de este punto y un análisis de la formación del semiproletariado en condiciones de capitalismo periférico, véase Delgado y Veltmeyer (2016). La teoría fundamental de Marx y los marxistas fue que la transición hacia la agricultura capitalista conduciría a la desaparición del campesinado y a la formación de un proletariado industrial. Es evidente que eso no sucedió en América Latina. Lo que tenemos en cambio con el inicio de la era neoliberal y la invasión del capital en forma de inversión extranjera directa así como la corporación multinacional es la persistencia del campesinado y la desaparición del proletariado industrial, aunado a la formación de un semiproletariado con un pie en la economía urbana moderna (y capitalista) y el otro en la agricultura campesina y la comunidad rural.

por sí mismos, a la vez que aprovecharan su capital social, único bien que se consideraba abundante (Atria, Siles, Arriagada, Robison y Whiteford, 2004; Portes, 1998; Solow, 2000).

Con el apoyo de un marco institucional de gobernanza descentralizada se estableció una nueva política social enfocada en la reducción de la pobreza, la cooperación internacional en la formación de microfinanzas y la participación social, es decir, la intervención de la sociedad civil en el proceso de desarrollo. Los pobres rurales debían diversificar su fuente de ingreso familiar, lo que les permitía mantenerse y desarrollar sus comunidades. La solución —una estrategia de supervivencia en lugar de una estrategia de desarrollo local— consistía en combinar varias fuentes de ingreso de los hogares: agricultura, fuerza de trabajo, remesas, financiamiento y proyectos de microdesarrollo así como transferencias monetarias condicionadas del gobierno a los hogares pobres (Kay, 2008).

Dentro de ese contexto, las condiciones fueron favorables no sólo para el crecimiento del cooperativismo sino para la construcción de una economía social complementaria al sector privado dominante de pequeñas, medianas y grandes empresas, y al sector público de las empresas estatales: un tercer sector sostenido por la economía solidaria y un proceso de desarrollo local comunitario sustentado en el capital social y no en la empresa privada y el Estado. La noción de economía solidaria surgió a finales de los 1970 y principios de la siguiente década como un modelo económico que combatiera la pobreza y la desigualdad, además de mostrar una postura sobre la transformación social (Razeto, 1998). Sin embargo, en la segunda mitad de la década de 1990 se convirtió en «el nuevo paradigma de desarrollo» denominado desarrollo inclusivo y sostenible, diseñado para expandir un tercer sector de la economía centrado en el capital social y

una cultura de solidaridad social, que a su vez se apoyó por una forma descentralizada de gobernanza y una nueva política social orientada a la reducción de la pobreza y el empoderamiento de los pobres (Narayan, 2002; Rao, 2002; Rondinelli, McCullough y Johnson, 1989).

Los economistas de la CEPAL, fundados en una concepción sociocéntrica y neoestructuralista del desarrollo nacional, con base en el Estado (con cooperación internacional y cooperación social), conceptualizaron el nuevo modelo alternativo como un «desarrollo hacia adentro» (Sunkel, 1993), «nuevo desarrollismo» (Bresser-Pereira, 2007, 2009) y «desarrollo inclusivo» (Infante y Sunkel, 2009).¹⁵ Otros, no obstante, desde una perspectiva de desarrollo local, veían la «economía social y solidaria» desde las organizaciones sociales cimentadas en la comunidad como una manera de «desarrollo inclusivo y sostenible» (Vieta, 2014). En esta parte se hace referencia a un concepto desarrollado por Peter Utting (2015), economista de UNRISD, y en un texto editado por un equipo reunido por la Academia de Economía Social y Solidaria de Campinas, publicado por el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ambas publicaciones, centradas en explorar las condiciones de ampliación de la economía social y solidaria, se dirigen a espacios y estrategias de creación de capacidades, innovación institucional y estrategias de cambio social en el contexto de las limitaciones internas existentes o fuerzas de oposición.

Además de éstos y otros estudios que ofrecen un panorama «de desarrollo», hay quienes consideran la economía social y solidaria no como un modelo de desarrollo alternativo sino como un movimiento social o una agencia de transformación social, una forma de confrontar a la Hidra

¹⁵ Para un análisis de la conexión entre el neoestructuralismo y el nuevo desarrollismo —el primero como fundamento teórico del segundo— véase Leiva (2008) y Mallorquín (2010).

capitalista (Comisión Sexta del EZLN, 2015). Un modelo ejemplar y paradigmático de tal fenómeno es el EZLN, que a raíz de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona de 2005 construyó una vibrante economía social en los márgenes del sistema capitalista y del Estado mexicano. Aunque a la fecha se carece de un modelo teórico reconstruido de dicha economía, es autónoma y comunal con una significativa participación de base. El apoyo se vislumbra en los esfuerzos colectivos y cooperativos de los miembros de la comunidad no así del mercado o el Estado.¹⁶

Cabe mencionar que los zapatistas no son los únicos que se rigen bajo esta concepción, tampoco se encuentran aislados de una amplia red de América Latina dedicada a la promulgación de una economía social y solidaria (Coraggio, 2011; Jubeto, Guridi y Fernández, 2014; Pérez de Mendiguren, Etxazarreta y Guridi, 2009; REASRed de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, s/f). La visión y la práctica de los zapatistas es anticapitalista y por ende fuera de la mentalidad y el marco institucional de las políticas de la economía y la sociedad imaginadas por teóricos y profesionales de la corriente principal, y de varias corrientes alternativas de desarrollo.¹⁷

¹⁶ Por varios relatos (conversaciones con activistas eruditos cercanos a la organización), los zapatistas han tenido mucho éxito en la organización de la gobernanza, las escuelas y la atención sanitaria autónomas. Su situación económica ha sido más difícil de estudiar, aunque tienen algunas ventajas por su ubicación en el campo, donde han podido hacerse cargo de la tierra y establecer una gobernanza territorial autónoma.

¹⁷ Es difícil evaluar el desempeño real de la economía construida por los zapatistas dado que no han autorizado tal evaluación. No obstante, se sabe más sobre la organización de lo que los propios zapatistas y varios observadores externos (David Barkin, Peter Rosset y Sergio Rodríguez Lascano, editor de *Rebeldía*) ven como una economía social y solidaria. Parece que los zapatistas han dividido su territorio en cinco regiones que llaman Caracoles. Dentro de cada Caracol existen varios municipios autónomos. Cada municipio está gobernado por un consejo formado por miembros de la comunidad nominados para servir por dos o tres años.

Los arquitectos y teóricos del desarrollo de la OIT y otras agencias de desarrollo internacional (incluyendo UNRISD y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil) valoran la economía social y solidaria como una agencia dedicada a la reducción de la pobreza, la inclusión y la transformación social. Ello se palpa al menos a nivel del discurso. Todavía más: se concibe como una válvula de escape, un medio para aliviar las presiones sobre los gobiernos a fin de que reduzcan la pobreza mediante el gasto de ingresos fiscales y las presiones sobre el mercado de trabajo para absorber el exceso de mano de obra rural. En cuanto al cooperativismo, las agencias de desarrollo internacional coinciden en que se trata de una forma importante de organización social en pro de una sociedad de operadores de pequeñas empresas, empresarios y gerentes, en vez de una clase trabajadora con sus demandas y problemas.

Desarrollo local comunitario y economía social

La duración de la agenda neoliberal, basada en el Consenso de Washington sobre las virtudes del capitalismo de libre mercado fue breve. A finales de los 1980, apenas seis años después, el neoliberalismo era económicamente disfuncional —en lugar de cumplir la promesa de prosperidad

Cada uno de los Caracoles tiene una Junta de Buen Gobierno. Estos consejos se componen de un grupo rotatorio de miembros que provienen de todos los municipios autónomos que corresponden a un Caracol particular. Los representantes municipales sirven de enlace para la retroalimentación entre las comunidades y la Junta de Buen Gobierno. Las decisiones se consultan y se toman por consenso. Los miembros de la comunidad que prestan servicios en las estructuras de gobierno autónomo no son remunerados y alternan frecuentemente para que la gobernanza sea una cuestión de participación popular.

general, el resultado incluyó una década perdida para el desarrollo— y desestabilizador, lo que generó protestas sociales masivas y resistencias políticas (Veltmeyer y Petras, 2000). En respuesta, algunos arquitectos de la agenda neoliberal y varios guardianes del nuevo orden mundial, como el BM, se reunieron a finales de la década con la intención de forjar un nuevo consenso y construir un nuevo paradigma (Banco Mundial, 2007).

El Posconsenso de Washington se originó por la necesidad de traer de vuelta al Estado y conseguir un mejor equilibrio entre éste y el mercado, así como una forma de desarrollo más «inclusiva» y participativa (Infante y Sunkel, 2009). Existen varias formulaciones del nuevo consenso, incluyendo «ajuste estructural con rostro humano» (UNICEF, 1989), «crecimiento con equidad» (Guimaraes, 1989), «desarrollo desde adentro» (Sunkel, 1993) y «desarrollo inclusivo», sintetizados como el «nuevo desarrollismo» (Bresser, 2007, 2009). No hubo consenso en cuanto al mejor modelo económico, sino un amplio acuerdo de principio sobre distintas necesidades: *a)* reforma estructural a nivel de política macroeconómica; *b)* «nueva política social» dirigida a la reducción de la pobreza; *c)* formación de capital humano a través de inversiones en educación y salud, pilares básicos de la inclusión social; *d)* buena gobernanza a manera de descentralización administrativa y participación social (o popular);¹⁸ *e)* empoderar a los pobres para que actúen por sí mismos al iniciar un proceso de desarrollo local comunitario (Veltmeyer, 2007).

¹⁸ El llamado a la «participación popular» se originó en la política radical, como un clamor de cambio revolucionario, pero en la década de 1970 se convirtió en un principio de reforma liberal y poco después en un principio fundamental de otro desarrollo. La participación en este contexto fue vista como «el eslabón perdido en el proceso de transformación productiva con equidad» (Boisier *et al.*, 1992; CEPAL, 1990). En el contexto de la programación del desarrollo y del ciclo de los proyectos, la participación se considera una cuestión de principio y, como tal, una cuestión de equidad. Pero para el Banco Mundial también se ve como una cuestión de eficiencia, un modo de mejorar la productividad de los proyectos de desarrollo (Blaikie, 1985).

Con anterioridad se mencionó que no hubo un acuerdo respecto a cuál modelo sería más apropiado para servir como guía a los formuladores de políticas a fin de implementar la agenda. Los arquitectos del Posconsenso de Washington, reunidos a puertas cerradas en 1989 en busca de una solución, se dirigieron a Gonzalo Sánchez de Lozada, ministro de Planificación de Bolivia en ese momento e ideólogo neoliberal, quien a su vez estaba convencido de que en pocos años asumiría la presidencia. Bolivia serviría como laboratorio experimental, con el propósito de probar la reciente política y construir un nuevo modelo,¹⁹ cuyo marco institucional se estableció por la administración de Lozada en 1994 bajo la forma de la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley de Participación Popular.²⁰

Según lo constatan los estudios emprendidos por Fernanda Wanderley y sus asociados en CIDES, dicha legislación no sólo otorgó el marco institucional para la agenda política neoliberal enfocada en el desarrollo local, sino que abrió espacio para la construcción de una economía social y solidaria alternativa. Sin embargo, algunos grupos de izquierda, en concreto aquellos que participaban en la «vieja política» —uso del mecanismo

¹⁹ Sobre la base de la información proporcionada por la Asociación Danesa para el Desarrollo Internacional, el plan de desarrollo resultante especificó tres consideraciones estratégicas. Para avanzar en ellas, el equipo económico del gobierno (encabezado por Sánchez de Lozada, Ministro de Planificación de la época) entró en una serie de reuniones de alto nivel con funcionarios de la comunidad financiera internacional (BM, BID, etcétera), el PNUD y representantes de las más importantes asociaciones de desarrollo de ultramar que operan en Bolivia (como USAID). Estas reuniones se extendieron de 1986 a 1992, meses antes de que Sánchez de Lozada asumiera la presidencia.

²⁰ Estas leyes se establecieron con clara referencia a una agenda política neoliberal; sin embargo, también fueron una respuesta a las demandas de autonomía territorial y regional así como de acceso y control sobre la tierra y otros recursos productivos por parte de los pueblos indígenas del país y diversas asociaciones cívicas; de igual modo, fue una respuesta a la izquierda para la participación popular.

electoral y otras trampas de la democracia liberal, por ejemplo los partidos políticos como vía hacia el poder estatal— criticaban el interés del régimen por apoyar y promocionar el desarrollo local basado en la comunidad y la economía social. Ellos, naturalmente, lo consideraron una estrategia neoliberal, y sin duda lo fue. Para otros —los que habían desistido por el cambio social mediante el poder del Estado²¹ con el objeto de alcanzar una nueva política de desarrollo— fue una oportunidad para construir una economía diferente y una forma alternativa de desarrollo iniciada desde abajo a través de la agencia de las bases (Wanderley, 2015).

El reciente marco institucional creó espacios a nivel local dirigidos a la acción política y la participación de las organizaciones sociales de base en la toma de decisiones respecto a proyectos de desarrollo social en la comunidad. En ese sentido, fue difícil para la izquierda oponerse a esa política de descentralización y participación popular. Dicha política derivó en lo que el BM (Bebbington *et al.*, 2006) denomina «empoderamiento» de los pobres. En Bolivia, la Ley de Participación Popular en la práctica pugnó para debilitar a las organizaciones de solidaridad comunitaria y de clase que tuviesen la capacidad de ir más allá de la comunidad, con la intención de desafiar el poder económico y político, a la vez realizar cambios a nivel nacional; al respecto, véase Veltmeyer (2007).

²¹ Una formulación teórica de la nueva estrategia fue la concepción de John Holloway sobre cómo «cambiar el mundo sin tomar el poder del Estado», basada en su interpretación del zapatismo, el pensamiento asociado al movimiento zapatista en Chiapas y articulado por el subcomandante Marcos (Holloway, 2000). Para una variación de esta interpretación del zapatismo véase Burbach (1994).

Economía social y solidaria en Venezuela

Más allá del proyecto zapatista y otras experiencias en Bolivia (véase Wanderley, 2015), los experimentos más trascendentales en la creación de una economía social y solidaria se perciben en Venezuela, en el proyecto de creación del socialismo del siglo XXI. Aunque la Constitución bolivariana de 1999 se enfocó en el desarrollo de la capacidad humana, también contenía cierto apoyo al capitalismo. Por ejemplo, mientras se rechazaba el neoliberalismo y se subrayaba la importancia de la presencia del Estado en industrias estratégicas, el plan de desarrollo del gobierno para 2001-2007 fomentó la inversión del capital privado —tanto local como extranjero—, lo que creó una «atmósfera de confianza». A ello se agregó el desarrollo de una «economía social» concebida como una «vía alternativa y complementaria» para los sectores privado y público.

El cooperativismo y las cooperativas desempeñan un papel en esta economía social; no obstante, lo significativo, aun desconcertante —como en la última «actualización» del modelo cubano llamado «nuevas directrices»— es cuán pequeño fue su papel asignado a las actividades de autogestión y de cooperación. Al igual que en las agencias de desarrollo de cooperación internacional, en Venezuela el desarrollo de la economía social parece ser, en esencia, un programa que incorpora el sector informal a la economía nacional. Es prioritario, según el plan de gobierno, «transformar a los trabajadores informales en pequeños administradores». Consecuentemente, las microempresas familiares, las cooperativas y las autogestionadas deberían fomentarse mediante la capacitación, el microfinanciamiento (proveniente de instituciones como el Banco de Desarrollo de la Mujer) y la reducción de la reglamentación y las cargas fiscales.

Por ende, la economía social debía ejecutar la función que despliega en Brasil y en otras partes: las islas de cooperación alimentadas por los Estados, las ONG, los bancos tipo Grameen y las organizaciones benéficas eclesíásticas que amortiguan los efectos económicos y políticos de la globalización capitalista. Lo anterior mejoraría las situación de los desempleados y los excluidos (la mitad de la clase obrera venezolana en el sector informal). La cuestión aquí es que la economía social no fue concebida como una alternativa al capitalismo, excepto en la medida en que la supervivencia dentro de los rincones del capitalismo global constituye una alternativa. El objetivo no era el socialismo tal como lo entendemos, sino un tipo diferente de capitalismo, es decir, el socialismo visto como una forma distinta, más humana, de capitalismo —basada en la participación popular o social— que asegurara el desarrollo integral de las personas tanto individuales como colectivas.

Existe una diferencia fundamental entre «el desarrollo de la economía social» en el contexto de la Revolución bolivariana (concebida por Hugo Chávez) y la economía social/economía solidaria entendida y promovida por la CEPAL, la FAO, la OIT y las agencias de desarrollo de Cooperación Internacional. En el caso de la primera, la economía social es un mecanismo de ajuste a las fuerzas del desarrollo capitalista, una forma de crear espacios dentro del sistema para la reducción de la pobreza fundamentada en el autodesarrollo sostenible local, el capital social de los pobres y el empoderamiento y la agencia de los marginados, así como maneras de convertir al sector informal en una esfera más productiva del desarrollo económico.

Para los teóricos y arquitectos de la Revolución bolivariana (véase los artículos 62 y 70 de la Constitución de 1999), la economía social o la economía solidaria es analizada desde la óptica del desarrollo humano socialista,

es decir, «autogestión, cogestión, cooperativas en todas sus formas» como ejemplos de «formas de asociación guiadas por los valores de cooperación y solidaridad mutuas». Con énfasis en una sociedad «democrática, participativa y protagónica», la Constitución bolivariana contiene las semillas de la «economía social» concebida no como un complemento de los sectores públicos y privados dominantes sino como núcleos del socialismo para el siglo XXI, es decir, como un modelo de desarrollo nacional no sólo local, provocado desde abajo y desde arriba.

Las cooperativas y el cooperativismo son esenciales en el modelo. Cualquier forma de desarrollo requiere un marco institucional. El marco del desarrollo humano endógeno socialista que se produce en la Revolución bolivariana se basa en la institución de las Misiones y la Comuna orientada hacia la construcción de nuevas capacidades humanas, prepara a la gente para entrar en nuevas relaciones productivas mediante cursos de cooperación y autogestión. El efecto de este programa de desarrollo fue dramático: el número de cooperativas aumentó de menos de 800, cuando Chávez fue elegido por primera vez en 1998, a casi 84 mil en agosto de 2005.

En enero de 2005, en el Foro Social Mundial, Chávez llamó explícitamente a reinventar el socialismo, algo diferente de lo que existía en la Unión Soviética: «Debemos recuperar el socialismo como una tesis, un proyecto y un camino, pero un nuevo tipo de socialismo, humanista, que pone a los seres humanos y no a las máquinas o al Estado por delante de todo». Seis meses más tarde, argumentó la relevancia de construir un nuevo sistema comunal de producción y consumo, en el cual hay un intercambio de actividades determinado por necesidades comunales y por fines comunales, no únicamente lo que Marx describió como el «nexo de dinero» o el incentivo para ganar dinero, acumular capital: «Tenemos que ayudar a

crearlo, desde las bases populares, con la participación de las comunidades, a través de las organizaciones comunitarias, las cooperativas, la autogestión y las diferentes maneras de crear este sistema».

Se creó entonces una nueva institución —las Empresas de Producción Social (EPS), que promueven la comparación con las «empresas socialmente responsables» (ESR), identificadas por Betancourt y Sagebien (2013), y otros las identifican como las principales unidades operativas de una economía social y solidaria— y un camino organizativo hacia el logro de un «crecimiento inclusivo». ²² De acuerdo con diversas fuentes —las cooperativas existentes se comprometieron con la comunidad en lugar de sólo intereses colectivos, empresas estatales más pequeñas y firmas privadas ansiosas por obtener acceso a negocios estatales y términos de crédito favorables—, esas nuevas empresas de producción social debían comprometerse a atender las necesidades de la comunidad y a incorporar la participación de los trabajadores.

En la reelección de Chávez en diciembre de 2006 se agregó un componente: los consejos comunales (basados en 200-400 familias en barrios urbanos existentes y 20-50 en zonas rurales). Éstos se establecieron para diagnosticar democráticamente las necesidades y prioridades de la comunidad. A partir del cambio de los recursos desde los niveles municipales

²² Los defensores del «crecimiento inclusivo» lo consideran una forma de desarrollo nacional, una alternativa al «desarrollo inclusivo» concebido dentro del marco neoestructuralista del Posconsenso de Washington. La diferencia entre estos dos «modelos», uno avanzado por los economistas del desarrollo de la CEPAL y otro por una red global de *think y tanks* y foros de política neoliberales, es que se basa en el «activismo estatal inclusivo» mientras que el otro asigna el papel de «conductor» o «impulsor» del proceso de desarrollo al sector privado. Un informe de 2012 del Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá es una formulación paradigmática del modelo de «crecimiento inclusivo» (Canadá, Cámara de los Comunes, 2012).

hasta el nivel comunitario, se apoyaría a los nuevos bancos comunales dirigidos a proyectos locales; su tamaño permitiría a la asamblea general ser el órgano supremo en la toma de decisiones, en lugar de los representantes elegidos. Además de una transformación de las personas en el transcurso de las circunstancias cambiantes, se conseguiría también la actividad productiva cimentada ahora en las necesidades y propósitos comunales.

Esos consejos se identificaron como la célula fundamental del socialismo bolivariano y la base para un nuevo Estado. «Todo el poder a los consejos comunales», declaró Chávez.²³ Una «explosión en el poder comunal», designada como la quinta de «cinco motores» que conduce el camino hacia el socialismo. La lógica es la de una profunda descentralización de la toma de decisiones y el poder.

Conclusiones

En esencia, existen dos perspectivas teóricas sobre la construcción de una economía social y solidaria. La primera se enfoca en una estrategia neoliberal ideada a mediados de la década de 1990 como respuesta a la problemática generada por el funcionamiento del capitalismo en la periferia latinoamericana. En este contexto, la economía social y solidaria se considera un tercer sector, complementario al sector público de las empresas estatales y del sector privado; asimismo, como un mecanismo de reducción de

²³ Huelga decir que se trataba de una declaración ideológica de intención política y no de una declaración programática. En la práctica, parece que el poder de los consejos locales se limita estrictamente a las cuestiones de desarrollo local. Aun así, parece que dichos consejos locales logran funcionar incluso con la caída de la macroeconomía —o activamente empujados— a la crisis (Teruggi, 2015).

la pobreza mediante la absorción del excedente de fuerza de trabajo rural atrapada en la economía informal. Lo anterior, funciona como una válvula de escape, una manera de reducir las presiones del gobierno y del mercado laboral.

Una segunda perspectiva tiene su más clara expresión teórica y práctica en la economía social creada por los zapatistas, desde su obligado retorno a la selva para ocultarse por segunda vez, tras un intento fallido de llegar a un acuerdo con el Estado mexicano. En ese sentido, la economía social y solidaria es un agente de transformación social, un espacio de cooperación social y una acción de solidaridad de base dentro de un sistema macroeconómico más amplio, o como un movimiento social pos, anti y no capitalista. Prevalcen dos variantes: en la primera, el cooperativismo puede ser articulado con instituciones del sistema capitalista o socialista más amplio y realizar funciones como las formas alternativas de organización de empresas locales dentro de la economía social (cooperativas) y del sector privado (empresas socialmente responsables). Sin embargo, desde una perspectiva pos o anticapitalista —por ejemplo, la articulada por los zapatistas (Comisión Sexta del EZLN, 2015)— la economía social y solidaria es el núcleo de una forma de sociedad alternativa y emergente de tipo poscapitalista.

Referente a las perspectivas de desarrollo de una economía social y solidaria más allá de varios enclaves de desarrollo local y comunitario —aún se cuestiona la posibilidad de ampliarse y coordinarse de manera que constituyan una alternativa viable y vibrante de desarrollo o incluso una alternativa al desarrollo— continúa en debate. El jurado todavía no da por concluido este proceso, la interrogante plantea un estudio más profundo.

Referencias

- Allison, Dean (ed.) (2012), *Driving Inclusive Economic Growth: The Role of the Private Sector in International Development* (Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, House of Commons), Ottawa: Public Works and Government Services Canada.
- Atria, Raúl, Marcelo Siles, Irma Arriagada, Lindon Robison & Scott Whiteford (2004), *Social Capital and Poverty Reduction in Latin America and the Caribbean: Towards a New Paradigm*, Santiago, Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
- Bebbington, Anthony, Michael Woolcock, Scott Guggenheim & Elizabeth Olson (2006), *The Search for Empowerment: Social Capital as Idea and Practice at the World Bank*, West Hartford Conn, Kumarian Press.
- Betancourt, Rafael & Julia Sagebien (julio-septiembre, 2013), «Para un crecimiento inclusivo: empresas no estatales responsables en Cuba», *Temas* (75), pp. 58-65.
- Blaikie, Piers (1985), «Why do Policies Usually Fail?», in *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*, London, Longman.
- Borja, Jordi (1987), *The Decentralization of the State, Social Movements and Local Management*, Santiago, Flacso.
- Bresser Pereira, Luiz Carlos (julio-agosto, 2007), «Estado y mercado en el nuevo desarrollismo», *Nueva Sociedad* (210), pp. 110-25.
- _____ (2009), *Developing Brazil: Overcoming the failure of the Washington Consensus*, Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers.
- Burbach, Roger (1994), «Roots of the Postmodern Rebellion in Chiapas», *New Left Review*, 1(205).
- Campos, Yunnuen (19 de septiembre de 2005), «A 20 años del sismo del 85», en <http://archive.li/QtrsB>

- Coraggio, José Luis (2011), *Economía Social y Solidaria. El trabajo antes que el capital*, Quito, AbyaYala, en <http://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/economiasocial.pdf>
- Crisp, Brian (1998), «Presidential Decree Authority in Venezuela», en John M. Carey & Matthew Soberg Shugart (eds.), *Executive Decree Authority*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Davis, Mike (2006), *Planet of Slums*, London, Verso.
- Delgado Wise, Raúl & Henry Veltmeyer (2016), *Agrarian Change, Migration and Development*, Halifax, Fernwood Publications.
- Durston, John (1998), *Building Social Capital in Rural Communities (Where it Doesn't Exist). Theoretical and Policy Implications of Peasant Empowerment in Chiquimula, Guatemala*, Santiago de Chile, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
- Comisión Sexta del EZLN (2015), *El pensamiento crítico frente a la Hidra capitalista* (vol. 1), <http://enlace Zapatista.ezln.org.mx/2015/07/13/indice-volumen-uno-participaciones-de-la-comision-sexta-del-ezln-en-el-seminario-el-pensamiento-critico-frente-a-la-hidra-capitalista>
- Fabra Ribas, Antonio (1943), *The Cooperative Movement in Latin America: its Significance in Hemisphere Solidarity*, New Mexico, University of New Mexico Press.
- Ferguson, James (1994). *The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Guimaraes, Roberto (abril, 1989), «Desarrollo con equidad: ¿un nuevo cuento de hadas para los años noventa?», *Economic Commission for Latin America and the Caribbean*.
- Holloway, John (2002), *Change the World without Taking Power: The Meaning of Revolution Today*, London, Pluto.

- Infante B., Ricardo y Osvaldo Sunkel (2009), «Chile: hacia un desarrollo inclusivo», *CEPAL*, 10(97), pp. 135-54.
- Jubeto, Yolanda, Luis Guridi y Maite Fernández Villa (2014), *Diálogos sobre economía social y solidaria en Ecuador: encuentros y desencuentros con las propuestas para otra economía*, Bilbao, Instituto Hegoa/Universidad del País Vasco, en http://publicaciones.hegoa.ehu.es/assets/pdfs/318/Dialogos_sobre_ESS_en_Ecuador.pdf?14029%2008778
- Kay, Cristóbal (2008), «Reflections on Latin American Rural Studies in the Neoliberal Globalization Period: A New Rurality?» *Development and Change* 39(6), pp. 915-943.
- Leiva, Fernando Ignacio (2008), *Latin American Neostructuralism. The Contradictions of Post-Neoliberal Development*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Mallorquín, Carlos (2010), «Review of *Latin American Neostructuralism: The Contradictions of Post-Neoliberal Development* by Fernando Ignacio Leiva», *Canadian Journal of Latin American & Caribbean Studies*, 35(70), pp. 275-278.
- Márquez, Humberto (2009), «Venezuela: Wound Still Gaping 20 Years after <Caracazo>», en <http://www.ipsnews.net/2009/02/venezuela-wound-still-gaping-20-years-after-lsquocaracazorsquo/>
- Montiel, Juan Domingo (junio-septiembre, 2003), «Apuntes sobre empresas recuperadas por los trabajadores en la Argentina», *Trabajo y Sociedad*, 5(6).
- _____ (2005), «Empresas recuperadas por los trabajadores en Argentina», en <https://www.gestiopolis.com/empresas-recuperadas-por-los-trabajadores-en-argentina/>
- Mukendi, Didier (1990), *Participación de los sectores pobres en programas de desarrollo local*, Santiago de Chile, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

- Narayan, Deepa (2002), *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. Washington, DC, World Bank.
- Pérez de Mendiguren, Juan Carlos, Enekoitz Etxezarreta y Luis Guridi (2009), «Economía Social, Empresa Social y Economía Solidaria: diferentes conceptos para un mismo debate», *Papeles de Economía Solidaria* (1), en http://www.economiasolidaria.org/files/papeles_ES_1_ReasEuskadi.pdf
- Petras, James & Fernando Ignacio Leiva, with Henry Veltmeyer (1994), *Democracy and poverty in Chile: the limits of electoral politics*, Boulder CO, Westview Press.
- Petras, James y Henry Veltmeyer (2002), «Autogestión de trabajadores en una perspectiva histórica», en Enrique Carpintero y Mario Hernández (eds.), *Produciendo Realidad. Las Empresas Comunitarias*, Buenos Aires, Topia.
- (2005), *Social Movements and the State: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador*, London, Pluto.
- (2013), *Social Movements in Latin America: Neoliberalism and Popular Resistance*, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
- Portes, Alejandro (1998), «Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology», *Annual Review of Sociology* (24), pp. 1-24.
- Portes, Alejandro y Lauren Benton (1987), «Desarrollo industrial y absorción laboral: una reinterpretación», *Estudios Sociológicos*, 5(13), pp. 111-137.
- Rao, Vijayendra (2002), *Community Driven Development: A Brief Review of the Research*. Washington, DC, World Bank.
- Razeto, Luis (1993), *De la economía popular a la economía de solidaridad en un proyecto de desarrollo alternativo*, Santiago de Chile, Programa de Economía del Trabajo.
- (1988), *Economía de solidaridad y mercado democrático* (vol. III), Santiago de Chile, Programa de Economía del Trabajo/Academia de Humanismo Cristiano.

- Rondinelli, Dennis, James McCullough & Ronald Johnson (1989), «Analyzing Decentralization Policies in Developing Countries: A Political Economy Framework», *Development and Change*, 20(1), pp. 57-87.
- Sachs, Wolfgang (1992), *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge and Power*, London, Zed Books.
- Solow, Robert (2000), «Notes on Social Capital and Economic Performance», en Partha Dasgupta & Ismail Serageldin (eds.), *Social Capital: A multifaceted perspective*, Washington, DC, World Bank.
- Sunkel, Osvaldo (1993), *Development from Within: Toward a Neostructuralist Approach for Latin America*, Boulder, Colorado, Lynne Rienner.
- Teruggi, Marco (20 de octubre de 2015), «Venezuela. Communes or Nothing? Three years since the change of Direction», *The Dawn*.
- Tokman, Victor (1991), *El sector informal en América Latina: dos décadas de análisis*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- Tokman, Victor y Emilio Klein (abril de 1988), «Sector Informal: una forma de utilizar el trabajo como consecuencia de la manera de producir y no viceversa», *Estudios Sociológicos*, 6(16), pp. 205-212.
- Utting, Peter (2015), *Social and Solidarity Economy: Beyond the Fringe*, London, Zed Books.
- Veltmeyer, Henry (2005), «Development and Globalization as Imperialism», *Canadian Journal of Development Studies*, 26(1), pp. 89-106.
- _____ (2007), *On the Move: The Politics of Social Change in Latin America*, Toronto, University of Toronto Press.
- Veltmeyer, Henry & Anthony O'Malley (2001), *Transcending Neoliberalism: Community-Based Development in Latin America*, West Hartford Conn, Kumarian Press.

- Veltmeyer, Henry & James Petras (2000), *The Dynamics of Social Change in Latin America*, London, Macmillan Press.
- Vieta, Marcelo *et al.* (2014), *Social and Solidarity Economy: Towards Inclusive and Sustainable Development*, Curso impartido en la International Labour Organization Academy, Campinas, Brasil.
- Walton, John & Charles Ragin (diciembre de 1990), «Global and National Sources of Political Protest: Third World Responses to the Debt Crisis», *American Sociological Review*, 55(6), pp. 876-890.
- Wanderley, Fernanda, Fernanda Sostres e Ivonne Farah (2015), *La economía solidaria en la economía plural: discursos, prácticas y resultados en Bolivia*, La Paz, Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés.
- World Bank (2007), *Meeting the Challenges of Global Development: a Long-term Strategic Exercise for the World Bank Group*, Washington, DC, World Bank.

Desarrollo y democracia en América Latina: resultados y perspectivas

Ronaldo Munck*

Resumen. Tras una década y media de posneoliberalismo en América Latina, resulta conveniente examinar los desafíos del desarrollo democrático y las estrategias implementadas para satisfacerlos. Desde el año 2000 la transformación social en la región se debe a la aparición y consolidación de gobiernos de izquierda y movimientos sociales. Sin embargo, esta dinámica sociopolítica y su halo teórico no han tenido el impacto global que detentó la teoría latinoamericana de la dependencia en los 1970, debido a la diversidad y a la contradicción de las estrategias de gobiernos progresistas y movimientos sociales radicales. En ese sentido, el texto revisa los grandes problemas inherentes al desarrollo democrático: crecimiento, equidad, sustentabilidad y gobernabilidad. Además se exponen las políticas aplicadas: neoextractivismo, neodesarrollismo, socialismo del siglo XXI y Buen Vivir. Por último, realiza un análisis prospectivo acerca de los escenarios futuros del desarrollo democrático en América Latina.

Palabras clave: desarrollo, democracia, transformación social, análisis prospectivo, América Latina.

* Jefe de la oficina de Participación Cívica en la Universidad Ciudad de Dublín e investigador principal en el Instituto Ernesto Laclau de Estudios Interdisciplinarios de América Latina en la Universidad de Buenos Aires.

Traducción del inglés por Mauricio Alan Cabral Pérez.

Development and democracy in Latin America:
results and prospects

Abstract. Following a decade-and-a-half of post-neoliberalism in Latin America, it is appropriate now to examine the challenges of democratic development and the strategies implemented to address them. Since 2000, the social transformation in the región has been due to the appearance and establishment of leftist governments and social movements. However, this socio-political dynamic and its theoretical «halo» have not had the global impact expected from Latin American dependency theory of the 1970s, due to the diversity and the contradictions in strategies of progressive governments and radical social movements. In this sense, the article reviews the broad problems inherent in democratic development: growth, equity, sustainability and governability. It also outlines the policies that were applied: neo-extractivism, neo-developmentalism, socialism of the 21st Century and *Buen Vivir*. Lastly, it offers a forward-looking analysis of future scenarios in democratic development in Latin America.

Keywords: development, democracy, social transformation, prospective analysis, Latin America.

Desafíos

Al examinar los principales desafíos para el desarrollo y la democracia desde una perspectiva latinoamericana, es posible proponer varios temas clave surgidos tras la larga noche de neoliberalismo: crecimiento, equidad, sustentabilidad y gobernabilidad. Esta es ahora una agenda ampliamente compartida, incluso para los otrora partidarios del neoliberalismo y tales desafíos incumben igualmente a gobiernos que favorecen al mercado o a la sociedad; es decir, en términos de dónde se encuentran los gobiernos con relación al doble movimiento planteado por Michael Polanyi: promover una lógica del mercado contra la sociedad o promover contramovimientos sociales que dominen las desnudas fuerzas del mercado (véase Munck, 2015). Al respecto se delinean dichos desafíos con el propósito de realizar más tarde un balance sobre la medida en que las fuerzas que buscan una alternativa al *statu quo* han subido a la palestra.

Crecimiento

Existe poco desacuerdo en el ámbito político —a excepción de algunos ambientalistas— de que el crecimiento económico sigue siendo el objetivo primordial para América Latina, al igual que en etapas anteriores. El periodo de posguerra en la región se caracterizó por un modelo de desarrollo hacia adentro, dirigido por el Estado, dedicado al consumo masivo. Alrededor de 1980 ocurre un giro brusco que conlleva a un modelo sustentado en la exportación, orientado por el mercado, donde el consumo masivo dejaba de ser esencial. En esa década el producto interno bruto (PIB) per cápita disminuyó en 0.8 por ciento, a consecuencia de una crisis

de deuda masiva. Después, en la década de 1990 aumentó 1.5 por ciento en general, seguido por un significativo incremento de 2.1 por ciento en la década de 2000 (Bulmer, 2014:426). Sin embargo, esas tasas de crecimiento contrastan pobremente con otras regiones «en desarrollo» de Asia oriental. Desde 1980 Chile ha sido el único país que ha podido superar los índices de crecimiento de desarrollo hacia adentro del periodo 1950-1980. En 2015, en el contexto de una economía global lenta, América Latina creció 2.2 por ciento en promedio, lo que es razonablemente positivo.

La forma en que América Latina respondió a la crisis económica mundial de 2008-2009 ofrece un indicio de los avances logrados desde el punto más alto de la era neoliberal, cuando las fortunas de la región se vinculaban a la fluctuación económica del Norte opulento. Mientras que en el pasado una crisis financiera en el Norte provocó un colapso en el Sur, esta vez el PIB de Brasil creció 7.5 por ciento en 2010 y el de Argentina 9.2 por ciento (después del virtual colapso en 2001 del modelo neoliberal extremo). Al principio parecía que estaba ocurriendo el «desacoplamiento» de las economías latinoamericanas de la economía global, que alguna vez fue propugnado por los teóricos de la dependencia en la década de los 1960. La realidad era más prosaica pero igualmente significativa.

Como argumentan Michael Cohen y otros, en un análisis detallado del periodo, la disparidad en el desempeño durante y después de la crisis entre América Latina y el Norte es sorprendente y «resultó en recesiones relativamente más cortas y superficiales, menores aumentos en el desempleo y la pobreza, y una recuperación mucho más rápida de las tasas de crecimiento anteriores» (Cohen *et al.*, 2012:13). En última instancia, la cuestión del crecimiento económico recae en decisiones políticas. En palabras de Karl Polanyi: «No había nada natural en el *laissez-faire*, los mercados libres

nunca pudieron haber existido simplemente permitiendo que las cosas siguieran su curso» (Polanyi, 2001:145). Asimismo, la marcha atrás en la denigración neoliberal del Estado y la subordinación de la sociedad al mercado es un proceso eminentemente político.

Igualdad

En años recientes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha enfatizado la igualdad en sus recomendaciones de política económica: «El valor de la igualdad, junto con el de la libertad, es la forma más humanizada de asumir las tareas de la modernidad» (CEPAL, 2010:39). Hoy, la igualdad política en América Latina está siendo socavada por niveles masivos de desigualdad socioeconómica. Así pues, la igualdad y la justicia sociales se consideran de modo correcto como los mayores desafíos en la región para el desarrollo democrático. La CEPAL plantea esta tarea en términos algo tecnocráticos —el gasto social para abordar la desigualdad debe ser visto como una inversión social en capacidades humanas—, pero es importante que sea abordada por los formuladores de políticas, incluso si se encuentra en el contexto de «crecimiento con equidad» y no por derecho propio. Esta prioridad es central en un escenario posterior a la crisis, donde se acepta un mayor grado de regulación social del mercado (como argumentaba Polanyi).

Cabe resaltar que en los últimos años ha emergido una nueva ortodoxia en los círculos creadores de políticas globales, quienes asumen que la desigualdad en América Latina se redujo de manera considerable en la década de los 1990, lo que demuestra la conveniencia del Consenso de Washington. Por tal motivo, los datos del Banco Mundial (BM) sugieren que la pobreza moderada ha decaído de 26 por ciento en 1990 a 22 por ciento en

2004 (BM, 2007). Los datos de la CEPAL van más allá e indican que la pobreza extrema disminuyó de 23 a 15 por ciento entre 1990 y 2005 (CEPAL, 2010). En cierta forma esto no es inaudito, ya que con altos niveles de crecimiento se necesitaría un empeoramiento de la desigualdad de ingresos para que la pobreza no se reduzca. Además, estos hallazgos se basan en el dudoso planteamiento de que los índices de pobreza de México disminuyeron en más de la mitad en la década de 1990. Si bien las transferencias monetarias condicionadas (en concreto en Brasil) han tenido un impacto, los niveles de desigualdad en América Latina son extremadamente altos. A principios del siglo XXI, 10 por ciento de los hogares más ricos recibía cerca de un tercio del ingreso nacional, mientras que 40 por ciento más pobre de la población apenas percibía 10 por ciento (CEPAL, 2000:6); sólo Costa Rica y Uruguay lograron mantenerse fuera de ese escenario inhóspito y desigual.

De todas las formas de desigualdad, el aspecto más problemático y donde podría encontrarse el mayor impacto en términos de reducción de la pobreza es la desigualdad de género. Aunque los niveles de equidad de género en la educación están de cierto modo establecidos, es claro que, como sostiene la CEPAL, «la desigualdad sigue siendo un sello estructural del mercado de trabajo y la fuerza laboral femenina» (CEPAL, 2015:30). Mientras que las mujeres con grados más altos de educación han mostrado mayores grados de participación económica, las diferencias en el uso del tiempo entre hombres y mujeres revelan que «los costos de la participación de la fuerza de trabajo han sido cubiertos clara y exclusivamente por las mujeres» (CEPAL, 2010:30). Si se toma en cuenta el trabajo en el mundo —trabajo remunerado y no remunerado— se aprecia cuán desigual es la división de género del trabajo. Dada la insignificante participación de los

hombres en el trabajo doméstico y en las labores del cuidado, es difícil esperar que las mujeres sean capaces de participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones. A la fecha no existe un apoyo de los gobiernos de centro-izquierda para atender lo que, en efecto, es la división dominante en la sociedad junto con la clase social. Tal apoyo tendría un efecto masivo en los niveles de desigualdad de ingresos de los hogares.

Sustentabilidad

Comparado con el periodo de crecimiento orientado hacia adentro (1950-1980) y el periodo neoliberal (1980-2000), ahora se ha enfatizado con mayor firmeza en el ámbito político sobre la importancia de la sustentabilidad. El término desarrollo sustentable suele usarse para referirse a la sustentabilidad ambiental, pero también se puede aludir a la democracia sustentable. En la primera acepción, ha sido definido como «el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias» (Brundtland, 1987:143). En ese sentido, América Latina ha entrado a un periodo de intensa vulnerabilidad debido a los efectos del cambio climático y se considera que en 2030 casi todos los países se encontrarán en categoría de «riesgo» (DARA, 2012). Es bien sabido, más no completamente comprendido, que los países andinos han sido afectados con severidad por el fenómeno de El Niño (Oscilación del Sur). Ahora el reto es revertir la destrucción ecológica y crear vías de desarrollo sustentable mientras se atienden las necesidades de subsistencia de una población en crecimiento.

Uno de los problemas más relevantes que afectan el desarrollo sustentable en América Latina es la dependencia de la exportación de sus

recursos. Al examinar el cuadro 1 se observa hasta qué punto la exportación principal representa una considerable proporción del total.

Cuadro 1
Especialización exportadora en América Latina (2000)

<i>País</i>	<i>Exportación principal</i>	<i>%</i>	<i>Siguientes dos</i>	<i>%</i>	<i>Primeros 3%</i>
Venezuela	Petróleo crudo	58.9	Productos derivados del petróleo, aluminio	28.6	87.5
Ecuador	Petróleo crudo	43.5	Plátano, mariscos	22.5	69.5
Nicaragua	Café	27.1	Mariscos, carne	27.1	54.2
Paraguay	Granos de soya	32.8	Algodón bruto, vegetales	17.8	50.6

Fuente: adaptado de Warwick y Silva (2004:121).

Si bien las cifras agregadas para América Latina muestran que la exportación de bienes primarios se ha reducido de 90 a 42 por ciento en 2000, en cuanto a los países del cuadro 1 la mitad de sus exportaciones son bienes primarios renovables y, en el caso de petróleo crudo, no renovables. De modo semejante al énfasis anterior en el impacto negativo de la «economía de enclave», este tipo de desarrollo tampoco es sustentable porque los productos (petróleo y minerales) no son renovables; socialmente tampoco lo son porque es capital intensivo y no genera mucho empleo ni vínculos en la economía en general.

El daño ambiental por la explotación de los productos primarios en América Latina es también un gran problema. La deforestación en Brasil y

el agotamiento de los recursos pesqueros en Chile son dos ejemplos sobresalientes. La minería en gran escala y la industria del petróleo han tenido una amplia repercusión ecológica en la contaminación del aire y los sistemas fluviales con efectos negativos en el ecosistema y la salud humana. Sin embargo, las políticas de desarrollo sustentable deben tomar en cuenta la sustentabilidad social y el contexto general de desigualdad. Murray y Silva sostienen: «La necesidad extrema obliga a la gente a abusar de los recursos naturales, en especial los renovables. Las densas poblaciones de pobres son forzadas continuamente a talar los bosques para obtener combustible y terrenos en ciclos de roza y quema» (2004:129). La aplicación de los modelos ambientales del Norte no necesariamente funciona bien en este contexto; en tanto que, por lo menos en teoría, las estrategias de «crecimiento con equidad» sí lo hacen. El crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad y la degradación ambiental se hallan interconectados, por lo que es imprescindible el desarrollo de estrategias sustentables y progresivas que sean políticamente viables para atenderlas.

También es preciso aclarar que en América Latina se han dado grandes pasos en materia ambiental. A la par de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015 en París, Uruguay anunciaba que las energías renovables proveían 95 por ciento de la electricidad del país. En menos de diez años Uruguay redujo de manera drástica su huella de carbono y disminuyó los costos de la energía. Esto se compara con una situación previa en la que casi 30 por ciento de las importaciones del país fueron contabilizadas por el petróleo.

Gobernanza

Después del crecimiento, la igualdad y la sustentabilidad, el cuarto desafío crítico del desarrollo es la gobernabilidad. En la era de la globalización, el gobierno es más complejo de lo que solía ser: desde «afuera» poderosas fuerzas económicas restringen la toma de decisiones y desde «adentro» el Estado se encuentra «vacío» por las reformas neoliberales de los 1990. Por lo tanto, cada vez se hace referencia a la gobernanza con el propósito de implicar un proceso de «dirección» (en lugar de dictado) de la sociedad y la economía. El primer punto a destacar es que desde la redemocratización en la segunda mitad de los 1980, América Latina se ha caracterizado por una gobernabilidad democrática bastante estable, con muy pocas amenazas de intervención militar y ninguna en los países más grandes, donde el gobierno militar había durado décadas. La mayoría de las repúblicas latinoamericanas pueden denominarse «poliarquías», pues la participación es alta y el poder es distribuido entre grupos organizados y competentes, es decir, son regímenes basados en elites políticas que reconocen la necesidad de poner límites a su poder. En general, se caracterizan por elecciones libres y competitivas, así como por la libertad de expresión y de asociación que las hacen posibles.

Tras el colapso de las luchas armadas en numerosos países, a menudo traumatizantes, la izquierda comenzó a priorizar la democracia, que empezó a perder el epíteto de «burguesa» a medida que se revalorizaba la democracia liberal. Hoy, el Estado de derecho es universalmente considerado un requisito para la democracia y la buena gobernanza. Significa, ante todo, que los derechos civiles básicos sean aplicados de forma equitativa a todos los miembros de la población. Pero la larga noche de las dictaduras creó

una cultura de impunidad entre ricos y poderosos. Ser económicamente seguro y socialmente poderoso significa estar «por encima de la ley». Hay una cultura arraigada con fuerza entre los poderosos, en la que obedecer la ley sólo es una obligación que deben seguir los pobres o los estúpidos; pagar impuestos, o de alguna otra manera ser parte del marco legal de la sociedad, con frecuencia es considerado como criminalmente descabellado para cumplirlo por voluntad propia. Somos conscientes, por supuesto, de que si bien la ley, que consagra ciertos derechos formales, puede emancipar individuos y empoderar movimientos sociales, refleja de modo inevitable las relaciones de poder más amplias en la sociedad. También es visible cómo el desarrollo democrático requiere diferentes formas de democracia además de aquellas asociadas a las tradiciones liberales del Norte.

Para la izquierda hay asuntos bajo la rúbrica de la gobernanza que no son fáciles de tratar, pero pueden evitarse, por ello una expresión común de los círculos políticos internacionales es que América Latina se enfrenta a un desafío clave con el interés de crear un mejor «clima para los negocios», atendiendo a «derechos de propiedad mal definidos, regulaciones complejas e inconsistentemente aplicadas, y sistemas judiciales impredecibles» (Ferranti y Ody, 2015:23). Es cierto que desde el punto de vista de los tribunales estadounidenses que otorgaron concesiones extraordinarias a los «fondos buitres» que impugnaban el acuerdo posterior a la crisis de Argentina de 2001, éste podría ser visto como un problema fundamental. Desde una perspectiva latinoamericana, resulta menos cierto, aunque las regulaciones claras y un poder judicial independiente son de interés para todos. El otro gran desafío mencionado a escala internacional es el tema de la seguridad ciudadana y el tráfico de drogas. Una vez más, al atestiguar la manera en que Estados Unidos ha explotado la «guerra contra las

drogas» por ambiciones imperiales y para uso de grupos contrainsurgentes, es posible ser escépticos. Sin embargo, ningún movimiento o gobierno progresista puede hacer caso omiso de la terrible situación de la seguridad ciudadana en numerosas partes de América Latina, un problema central dentro del desarrollo democrático.

Estrategias

Frente a los desafíos ya mencionados para el desarrollo democrático en América Latina, ¿cuáles son las principales estrategias o proyectos de desarrollo emprendidos? Durante un largo periodo histórico (1950-1980, aproximadamente) prevalecía el modelo de modernización desarrollista. Su sucesor desde 1980 hasta 2000 fue el modelo neoliberal que logró una hegemonía indiscutible como el único camino hacia el desarrollo, y cuya sombra aún es proyectada sobre los acontecimientos por razones de dependencia, y porque las fuerzas sociales que se beneficiaron del modelo todavía conservan el poder (véase Munck, 2012). Algunos países como México y Colombia (y de cierta forma Chile) deambulan por ese camino y buscan una integración ventajosa aunque subordinada con Estados Unidos y el orden económico global. No obstante, desde el cambio de siglo, han surgido varios proyectos o modelos alternativos de desarrollo, ninguno es hegemónico y algunos se yuxtaponen. De ellos, sobresalen cuatro:

1. Neoextractivismo. Enfocado en exportaciones de minerales, petróleo y la agroindustria para generar ingresos.

2. Neodesarrollismo. Una repetición del modelo de desarrollo de la década de 1950 que hace concesiones al modelo neoliberal más favorable al mercado.

3. Buen Vivir. Un nuevo modelo andino enfocado en la sustentabilidad y la recuperación de normas establecidas antes de la conquista.

4. Socialismo del siglo XXI. Una agenda nueva, o revivida, procedente principalmente de Venezuela, que articula un socialismo para la actualidad.

Cada uno de los modelos ideales será presentado y evaluado con relación a los desafíos aludidos.

Neoextractivismo

Mientras que los procesos políticos ocurridos en las últimas décadas en Venezuela, Ecuador y Bolivia han transformado el modelo de desarrollo en cierta medida, todavía dependen económicamente de la extracción de recursos naturales y de las rentas petroleras. Estos gobiernos de centro-izquierda se han caracterizado por tensiones persistentes entre estrategias neodesarrollistas —el objetivo de perseguir el crecimiento y el desarrollo en la línea del modelo anterior, aunque con un discurso más social— y una estrategia de desarrollo alternativo vista como una búsqueda de una forma de desarrollo verdaderamente humana y potenciadora. Asimismo, han intentado incrementar el crecimiento económico a través de la explotación de energía, hidrocarburos, minería y agronegocios; sin embargo, existe una tensión significativa entre la política minera dominante, por ejemplo, y los principios del Buen Vivir. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, argumentó que el petróleo «puede ser una bendición» siempre y cuando las rentas se redistribuyan en el resto de la economía; para otros la promoción de la inversión extranjera en la minería, con todas las consecuencias humanas y ambientales que genera es una

clara demostración de la contradicción entre el discurso radical y las prácticas desarrollistas convencionales de los nuevos gobiernos de izquierda.

El largo periodo de crecimiento económico estable bajo un Estado oligárquico (1860-1930, aproximadamente) se sustentaba en un modelo de exportación agro-minero que era económicamente dinámico y socialmente excluyente. Desde los 1990 se produjo un giro en muchas regiones de América Latina hacia un modelo neoextractivista, ya sea que impulse la exportación de gas y petróleo o soya y trigo. Está basado en la subordinación al mercado internacional, difícilmente podría ser de otra forma, y debe sujetarse a las variaciones de los precios de mercado de tales productos. En algunos casos, el Estado se involucra en dicho proceso y los gobiernos nacionales progresistas pretenden usar esas rentas en la inclusión y la redistribución social. Para los críticos de los gobiernos orientados hacia la izquierda, se trata de una nueva forma de imperialismo que se está recreando, pero sus defensores y varios analistas independientes responden que es una crítica ahistórica (véase Gudynas, 2009). Es evidente que los proyectos de desarrollo se forjan dentro de los parámetros de los patrones nacionales y geográficos ya preestablecidos y no pueden ser alterados por mera voluntad política.

Hoy en América Latina el neoextractivismo se ha convertido en un elemento integral del proyecto de desarrollo al propiciar antiguas dependencias mientras se busca un orden político más híbrido. Los crecientes ingresos generados por el petróleo o la minería —basta pensar en Venezuela y Bolivia— han permitido ambiciosos programas de redistribución social presentados como «la voluntad del pueblo». Podría sostenerse entonces que el modelo de crecimiento neoextractivista representa un retorno al Estado desarrollista, incluso defensores de los gobiernos actuales en

Bolivia podrían argumentarlo. El Estado de desarrollo clásico promueve activamente el desarrollo (frente al Estado mínimo del neoliberalismo), media entre intereses en competencia (por ejemplo, con los ambientalistas) y proporciona legitimidad política (en contra del antiguo Estado oligárquico). Sea como fuere, una perspectiva a largo plazo apunta hacia los costos de una integración, claramente asimétrica, al mercado mundial y la contradicción fundamental con la sustentabilidad ambiental (véase Burchardt y Dietz, 2014). Con seguridad continuará siendo un proyecto de desarrollo dominante, aunque subyacente, en el corto y el mediano plazo.

Basado en el reconocimiento de los errores de la izquierda en el pasado, la búsqueda de una forma de desarrollo más allá del neoliberalismo y la incorporación de nuevas interrogantes sobre las posibilidades del crecimiento económico en una era de globalización, participación política, medio ambiente, cultura y mujeres, el nuevo socialismo latinoamericano rechaza los problemas asociados con previos modelos socialistas y propone un socialismo relevante a los tiempos contemporáneos y las particularidades de los gobiernos latinoamericanos.

Neodesarrollismo

El proyecto de desarrollo conocido como neodesarrollismo retoma el proyecto desarrollista de los 1950 al tiempo que incorpora críticas formuladas en su contra por las teorías neoliberales en la década de 1990. El viejo Estado desarrollista no regresó a plena potencia, pero reconoció que el mercado no podía por sí solo regular la economía o generar desarrollo. Los asuntos vitales de igualdad social y la necesidad de combatir la pobreza salieron de nuevo a la luz. En la era neoliberal existía una creencia

implícita de que había ganadores y perdedores en el sistema del mercado y que estos últimos eran un daño colateral. Ante todo, el neodesarrollismo volvió a incorporar en la agenda el desarrollo nacional y regional. Para el neoliberalismo, el desarrollo nacional era un anacronismo, o peor aún, un impedimento; lo que contaba era la expansión global del mercado sin interferencias de Estados o naciones. En efecto, tal perspectiva constituye un paradigma posneoliberal, pese a que reconozca las críticas al modelo desarrollista de la década de 1950, tales como el proteccionismo excesivo y *dirigismo* del Estado.

El proyecto neodesarrollista aceptó los imperativos de la competitividad en la nueva economía global y también reconoció la necesidad de una reforma institucional, no sólo de la burocracia estatal. Deben tenerse en cuenta las peculiaridades de este periodo a aquel que creó la perspectiva desarrollista original, de la que se derivó la dependencia como una consecuencia radical. En los años de 1970 hubo un lapso en el que la Revolución cubana —y la URSS que la apoyaba— gozaba de una amplia credibilidad en América Latina; en contraste, los 1990 arribaron después del colapso total de la alternativa global al capitalismo, a saber, el régimen soviético y el de sus satélites. Así, el neodesarrollismo fue muy valiente al articular las políticas posneoliberales y no es de extrañar que no incorporase posiciones dependientes. No obstante, diversos autores han argumentado que el neodesarrollismo es simplemente una variante del neoliberalismo (Petras y Veltmeyer, 2001) o el «rostro humano» del neoliberalismo en el Posconsenso de Washington (Green, 1995). En cualquier caso es importante reconocer la complejidad y las raíces históricas de dicha visión.

En palabras de Gwynne y Kay, «el neoestructuralismo no debe interpretarse como la rendición de los estructuralistas al neoliberalismo,

sino como un intento de llegar a un acuerdo con la nueva realidad de la globalización y formar la exitosa experiencia de desarrollo de los países recientemente industrializados del Este asiático» (2004:263). Una simple repetición de las políticas de desarrollo nacional de los 1950 detrás de barreras proteccionistas no sería posible en la actualidad. La relevancia de la inversión extranjera directa (IED) fue aceptada por los primeros desarrollistas, pero es más contundente en la versión actual. La trascendencia de la educación, la innovación, la reducción de pobreza, la estabilidad fiscal, la reforma del Estado, el imperio de la ley —que son centrales al neodesarrollismo—, no puede equipararse con el neoliberalismo sólo porque no son un programa socialista. Para las economías latinoamericanas tampoco se ha desvinculado una factible —y ciertamente no progresista. De las distintas opciones al neoliberalismo, el neodesarrollismo parece ofrecer la opción más viable para el crecimiento económico y la democratización política.

Socialismo del siglo XXI

El socialismo del siglo XXI fue un proyecto propuesto en principio por el presidente Hugo Chávez en Venezuela, alrededor de 2005. Fue apoyado en varias medidas por los gobiernos más radicales de izquierda, entre los cuales destacan Bolivia, Ecuador y, en menor grado, Argentina. Se basa en la necesidad de un nuevo régimen de desarrollo que ofrezca una ruptura con los regímenes neoliberales previos, y con un nuevo tipo de socialismo que planteaba un modelo nuevo y distinto de los anteriores socialismos de la URSS, China y Cuba (véase Harnecker, 2012). La búsqueda de un modelo de desarrollo alternativo surgió de la crítica y la reevaluación

de las estrategias socialdemócratas del pasado respaldadas en el reconocimiento de los errores de la izquierda, a fin de superar el neoliberalismo e incorporar nuevas cuestiones sobre las posibilidades de crecimiento económico en una era de globalización, participación política, medio ambiente, cultura y mujeres. El nuevo socialismo latinoamericano rechazó los problemas asociados con los antiguos modelos socialistas y propuso un socialismo relevante para los tiempos contemporáneos y las particularidades de los gobiernos latinoamericanos.

Una idea clave es el nuevo enfoque de la relación entre el Estado y la sociedad civil, el cual rechaza las nociones previas de Estado y sociedad civil, como el mandato antidemocrático y la negación de los derechos civiles conectados con otros socialismos, el corporativismo del Estado desarrollista y el concepto individualista de Estado y sociedad que prevalece bajo el neoliberalismo. Se ha defendido la necesidad de desdeñar muchas formas de organización política de izquierda, por ejemplo el vanguardismo obrero de partidos y movimientos. En cambio, los nuevos gobiernos de izquierda han creado tipos de espacios políticos en alianza con movimientos políticos y sociales, que abogan por un enfoque revitalizado de democracia sustentado en «procesos constitucionales radicales» (Cicariello, 2013:128) y una configuración distinta de la relación entre Estados y movimientos sociales, «un proceso creativo constituyente de experimentación e innovación democrática» (Beasley, Cameron y Hershberg, 2012:21). En el caso de Bolivia, un aspecto central de este enfoque es, como afirma García Linera, el «proyecto de auto representación de los movimientos sociales de la sociedad plebeya» (Rockefeller, 2007:166). De acuerdo con esa idea, la participación política de las comunidades marginadas no solamente es una cuestión de reunir apoyo para los partidos políticos, ya sea que estén encabezados por

liberales, conservadores o por una «vanguardia» proletaria; en su lugar, deben ser protagonistas de una nueva forma de poder que involucre una «relación dinámica y cambiante entre movimientos y el Estado» (Ciccarriello, 2013:127). Se rehúsan a la manipulación de movimientos indígenas del pasado, al papel del partido de vanguardia y a la aplicación dogmática de la teoría con poca o nula aplicación a la realidad social latinoamericana. En contraste con el énfasis del capitalismo neoliberal sobre el individuo, el socialismo del siglo XXI posee un fuerte componente moral y ético que promueve el bienestar social, la fraternidad y la solidaridad social.

Hasta qué punto la alternativa socialista ha cumplido los desafíos planteados con anterioridad es un tópico disputado con opiniones muy polarizadas que también se expresan —o quizá especialmente— desde la izquierda. Por ahora, debe considerarse si la opción «bolivariana» planteada por Chávez es una opción política sostenible y si la naturaleza populista y personalista de muchos gobiernos de izquierda puede cumplir con los desafíos de la gobernabilidad democrática a largo plazo. Sin embargo, es importante reconocer los elementos verdaderamente novedosos que este hilo ha traído al debate político en América Latina.

Buen Vivir

Desde 2000, América Latina ha vivido una primavera política sin precedentes por la profundidad y amplitud de la transformación social progresiva. Han surgido nuevos paradigmas de cambio social y experimentación política que tal vez tengan una significación global. Lo que el enfoque de dependencia representó para la década de 1970 concerniente al paradigma de desarrollo general, es lo que hoy significa el concepto de

Sumak Kawsay (Buen Vivir) —traducido de modo imperfecto al inglés como *Good Living* o *Living Well*. Este concepto captura muy bien el filo radical del pensamiento alternativo actual (véase Acosta, 2010; Radcliffe, 2012). En esencia habla de la reproducción ampliada de la vida más que la del capital. Defiende un modelo civilizatorio diferente al del capitalismo individualista, donde tienen prioridad los valores comunitarios y el respeto por la naturaleza. Es un paradigma de desarrollo consagrado en las constituciones de Ecuador y Bolivia, y ha causado diversos efectos en toda la región. *Sumak Kawsay* trabaja sobre la premisa de que hay dos transiciones en curso en América Latina: una, relativamente reciente hacia el socialismo, apenas de cien años de edad; otra, a largo plazo del colonialismo que se remonta al siglo XV. El fin de todas las manifestaciones de racismo y una mayor autodeterminación integran la lucha a largo plazo. No niega en absoluto la relevancia de las formas occidentales de democracia representativa, pero añade la necesidad de modelos de democracias participativas y comunales. Si bien la nueva cosmovisión no sólo rearticula las antiguas prácticas indígenas y se caracteriza por un hibridismo profundo, representa un desafío al eurocentrismo. Estructura nuevos principios de producción y propiedad, identidad y subjetividad y, no menos relevante, una nueva manera de entender el mundo y producir conocimiento.

La filosofía del Buen Vivir expresa un enfoque crítico de la ideología del progreso y la búsqueda de alternativas al desarrollo contemporáneo como el crecimiento económico, la explotación de la naturaleza y una sociedad basada en el materialismo y el consumismo. Supone una ruptura con ideologías y prácticas de desarrollo anteriores y ofrece «una oportunidad para construir colectivamente un nuevo régimen de desarrollo» (Acosta, 2010:39). Reconoce los valores inherentes en la naturaleza y la

expresión de culturas y conocimientos de indígenas oprimidos o subordinados. En Ecuador, el Buen Vivir es visto como un conjunto de derechos entre los que se incluyen aquellos relacionados con salud, vivienda, educación, alimentación y medio ambiente; mientras que en Bolivia es un principio ético-cultural, a la par de la dignidad, la libertad, la solidaridad y la reciprocidad. Busca enlazar las necesidades del desarrollo con un criterio ecológico y promueve una ética que subordina los objetivos económicos a criterios ecológicos. Adicionalmente, reconoce las diferencias culturales y de género al posicionar el interculturalismo como un principio rector, y aboga por nuevas estrategias a fin de asegurar la soberanía alimentaria, el control de los recursos naturales y el agua como un derecho humano. También ha puesto en evidencia en América Latina la trascendencia de la biopolítica, en tanto que su concepción biocéntrica del socialismo representa una crítica del marxismo y de la teoría de la modernización. En efecto, el tema del análisis crítico se centra en qué medida esta visión del desarrollo democrático cumple con su promesa en la práctica en aquellos países que se inspiran en dicho enfoque y hasta qué punto se puede generalizar, por ejemplo, en el Cono Sur y México. Por supuesto, es factible pensar en el Buen Vivir en términos de una utopía, siempre una parte indispensable de los procesos de transformación social, tal como lo argumenta el ministro ecuatoriano René Ramírez (2010).

Previsión

Mirando hacia el futuro en América Latina, es imprescindible contemplar preceptos básicos político-metodológicos. Si el futuro latinoamericano es

el objeto de estudio, se debe reconocer que la investigación social no es ingenua y que los hechos sociales no son sólo hechos. Más bien, la investigación social crea realidades sociales y los hechos sociales son contruidos. Los métodos de investigación no describen simplemente el mundo social, sino que lo promulgan. En opinión de Law y Urry, «si la investigación social hace mundos, entonces, en cierta medida puede pensar acerca de los mundos que quiere *ayudar* a crear» (2004:391). Ello abre el potencial radical del programa de investigación prospectiva/futura que va más allá de una sencilla descripción del mundo tal como es. Mientras que las ciencias sociales trabajan más a menudo con el poder de representar las realidades sociales dominantes, pueden —y posiblemente deberían— trabajar hacia la presentación y promulgación de realidades sociales alternativas.

Un precepto metodológico básico que hay que seguir es reconocer la complejidad del mundo social actual. Contra el pensamiento lineal y reduccionista es preciso estar conscientes de los efectos secundarios y las externalidades en todas las estrategias políticas. En lugar de buscar intervenciones instrumentales para formar la realidad de acuerdo con las lecturas racionalistas de desarrollo, deben colocarse en primer plano los sistemas abiertos y la agenda social. De lo anterior se desprende que las lecturas políticas no pueden ser simplistas o maniqueas. Más bien, al seguir los avances metodológicos del enfoque de interseccionalidad (véase Lutz *et al.*, 2011) resulta primordial la intersección de las identidades sociales y sistemas complejos de dominación y opresión. En consecuencia, la resistencia y la construcción de alternativas políticas no se sustentarán en experiencias, identidades o proyectos singulares. Siguiendo el avance conceptual de Ernesto Laclau sobre la noción de «articulación» (véase Howard, 2015) se requiere explorar la pluralidad de las demandas políticas y la forma en que

constituyen una subjetividad social más amplia a través de la articulación equivalencial. El desarrollo de políticas alternativas no constituye una opción simplista, sino que implica una difícil —y nunca terminada— construcción de articulaciones hegemónicas. Tal proceso inevitablemente involucra esfuerzos antagónicos para estructurar contradicciones no clasistas y unificar demandas mediante un proceso de equivalencia que conduce a un sistema estable de significación.

En síntesis, se presenta una estrategia de investigación y acción colectiva orientada hacia la prospectiva según un análisis crítico de tendencias actuales y una aceptación de la radical indeterminabilidad del futuro (véase Inayatullah, 2013). El futuro no está predeterminado, no es predecible y se halla influenciado por nuestras acciones en el presente. En la era de la globalización hay una compleja red de cambios que no puede entenderse ni desde la modernización lineal y simplista ni desde las perspectivas de la dependencia. También se argumenta que el futuro es más abierto que estas dos perspectivas teleológicas, a pesar de que ideológicamente se encuentren en extremos diferentes.

Con frecuencia, la previsión es vista como una herramienta del Norte, parte integral de la revolución tecnológica de la década de 1960 (popularizada por Shell, por ejemplo) y descendiente del positivismo (predicción); recientemente se ha sometido a la influencia del posestructuralismo (véase Sardar, 2010) que destaca su complejidad y problematiza las unidades de análisis. A su vez la variante poscolonial busca aquello que falta en las imágenes actuales que se tienen del futuro. El enfoque de futuros alternativos se ha extendido con éxito en un entorno meridional, en especial en los influyentes escenarios de Mont Fleur, que desempeñaron un papel importante en la transición de Sudáfrica más allá del *apartheid* de la década de 1990 (véase

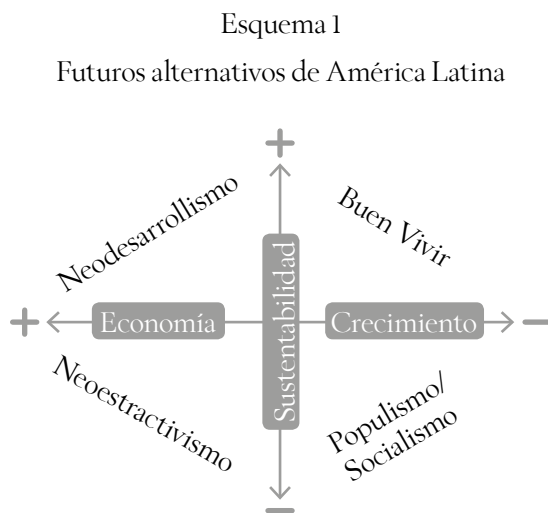
Kahane, 2000). Hay una serie de herramientas empleadas en sentido prospectivo: exploración ambiental o de horizonte, planificación de escenarios, mapeo de rutas y método Delphi (véase GCPSE, 2014). En específico existen intentos de crear un enfoque cimentado en escenarios y diseñado para concebir mundos futuros que sean consistentes al interior y verificables al exterior en la investigación del desarrollo (véase Van Asselt *et al.*, 2010).

Uno de esos enfoques en América Latina fue el estudio prospectivo de Francisco Sagasti, llevado a cabo a mediados de los 1990 (Sagasti, 2004). Este esfuerzo colectivo planteó dos ejes clave para trazar el futuro de América Latina: por una parte, si el contexto internacional era favorable o no; y por otra parte, el segundo eje tomaba en cuenta la calidad de la gobernanza. A partir de allí y de acuerdo con las tendencias actuales y el pensamiento futurista, los participantes identificaron los siguientes escenarios:

1. El vuelo del cóndor, basado en un contexto internacional positivo, buena gobernanza y avances científicos.
2. El delfín herido, sustentado en un contexto positivo internacional que no puede aprovecharse debido a la mala gobernanza.
3. El jaguar captivo, donde una economía global que mira hacia dentro limita el desarrollo pero el contexto interno es muy positivo.
4. El fénix renacido, mientras el contexto internacional es negativo, éste es superado por una estrategia de desarrollo cohesiva e inclusiva.

En un periodo de complejidad e incertidumbre tal ejercicio de escenificación puede, por lo menos, ayudar a los participantes —a través del diálogo político honesto y abierto— a establecer cuáles son los parámetros más importantes para el futuro del desarrollo y la democracia, incluso si nosotros pudiésemos estar en desacuerdo con el mejor camino a seguir.

Desde nuestro propio análisis en las páginas anteriores, haríamos avanzar la siguiente y muy provisional matriz (abierta a la deconstrucción) para explorar los futuros alternativos de América Latina. Posicionamos dos ejes principales para «colocar» estrategias alternativas: uno horizontal centrado en un mayor o menor nivel de crecimiento económico y uno vertical basado en un mayor o menor grado de sustentabilidad. El esquema 1 matriz nos permite trazar las fortalezas y debilidades relativas de los distintos escenarios alternativos descritos anteriormente.



Ahora bien, estos son tipos ideales y no deben asociarse directamente con países o gobiernos actuales. El escenario del neodesarrollismo, que plantea el «crecimiento con equidad», ha hecho algunas concesiones a los modelos previos sustentados en el mercado; sin embargo, ha mostrado grados considerables de sustentabilidad, en términos políticos, lo que puede generar un fuerte crecimiento económico. Uno puede pensar en

el Brasil de Lula da Silva e incluso en Chile bajo los socialistas (aunque en formas muy distintas) como aspirantes a ese modelo. Es la estrategia que ostenta mayores probabilidades de reclutar el apoyo de los industrialistas locales y puede generar fuertes interpelaciones nacionalistas.

Por supuesto, el neoextractivismo no se plantea como una estrategia progresiva en la transformación social, pero varios gobiernos progresistas (por ejemplo, Bolivia y Venezuela) han puesto en práctica elementos de dicho modelo. Aunque es cierto que puede producir altas tasas de crecimiento económico, es evidente que no es sustentable en términos medioambientales. Existe un debate sobre si la extracción de recursos naturales y la dependencia de la inversión extranjera configuran una estrategia de transformación social progresiva. Hay evidencia de que el *boom* de las materias primas ha dado lugar a un grado de redistribución social en algunos países; no obstante, una vez más, esto en realidad no es una estrategia sustentable ni en aspectos ecológicos ni económicos, puesto que los auges de las materias primas se derrumban en algún momento (por ejemplo, el precio del petróleo).

El populismo/socialismo es una amalgama de dos discursos y estrategias bastante distintos, aunque interconectados. El socialismo del siglo XXI fue el modelo promovido en Venezuela bajo el gobierno de Chávez, en tanto que el populismo puede ser mejor ejemplificado por el modo de gobierno de Kirchner en Argentina. Tal vez parecería negativo afirmar que el crecimiento económico será bajo con ese modelo, con todo y eso los patrones actuales en ambos países indican que el modelo no es económicamente fuerte. La caída del modelo de Kirchner en 2015 a manos de una inteligente campaña política a favor del mercado por parte de los partidos de oposición —incluidos los desertores de Kirchner— muestra la inestabilidad

del modelo populista. Pese a que no es políticamente sustentable por la sencilla razón de que depende de caudillos que necesitan ser elegidos con el apoyo de la clase media, como el chavismo lo aprendió a finales de 2015.

Probablemente nos encontramos en una era posneoliberal, incluso si diversos principios neoliberales —como la apertura del comercio y la inversión al mercado global— continúan vigentes. Las políticas económicas posneoliberales (¿todavía neoliberales?) están tratando de reconectar el mercado con el ámbito social. La influencia de la crisis capitalista global de 2008-2009 y la posterior crisis europea de 2011 forma el telón de fondo de un replanteamiento de las opciones políticas latinoamericanas. Fue el impacto combinado de alrededor de 13 gobiernos de izquierda y una sociedad civil dinámica —y algunas veces rebelde— lo que alentó nuevas formas de pensamiento acerca del desarrollo en América Latina. El movimiento encaminado hacia una alternativa al neoliberalismo está más avanzado en América Latina, según Perry Anderson, porque «aquí, y sólo aquí, la resistencia al neoliberalismo y al neoimperialismo funde lo cultural con lo social y lo nacional. Es decir, implica la visión emergente de otro tipo de organización de sociedad y otro modelo de relación entre los Estados» (2004:42).

Antes de concluir es pertinente efectuar una nota reflexiva y no proclamatoria, dado que en 2015 se discernió un claro margen elevado para la «marea rosa» cuando el kirchnerismo perdió las elecciones presidenciales en Argentina; los opositores del chavismo ganaron por una «supermayoría» en las elecciones parlamentarias en Venezuela; y en Brasil, Dilma Rousseff, la sucesora electa de Lula da Silva, fue desacreditada por el parlamento. Tales acontecimientos reflejan un creciente sentimiento de desencanto con los gobiernos progresistas, semejante al que sufrió la primera

ola de gobiernos posteriores a las dictaduras, en los 1980. Se percibía con claridad una sensación de que la corrupción estaba de vuelta, había poca fe en las capacidades de gestión económica de los gobiernos y su estilo personalista enajenó a las personas de las que recibían apoyo (por ejemplo piénsese en Chávez). Es tiempo de realizar un balance general serio de lo que se ha ganado —como la aceptación generalizada de reformas sociales y el anti-imperialismo— y lo que se ha perdido, como una despolitización masiva y la reducción del socialismo a una retórica vacía (véase Gudynas, 2015), para después, quizá, empezar de nuevo con «lo que hay que hacer», acción con la que algunos analistas menos reflexivos están comenzando.

Referencias

- Acosta, Alberto (2010), «El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo», *Friedrich Ebert Stiftung* (Policy Paper 9).
- Anderson, Perry (2004), «The Role of Ideas in the Construction of Alternatives», en Borón, Atilio (ed.), *New Worldwide Hegemony: Alternatives for Change and Social Movements*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Beasley Murray, Jon, Maxwell Cameron & Eric Hershberg (2012), «Latin America's left turns: A tour d'Horizon», en Maxwell Cameron & Eric Hershberg, *Latin America's left turns: Politics, Policies and Trajectories of Change*, Boulder, Lynne Rienner, pp. 1-22.
- Brundtland, Harlem (1987), *Our Common Future*, Oxford, Oxford University Press.
- Bulmer Thomas, Victor (2014), *The Economic History of Latin America Since Independence*, Cambridge, Cambridge University Press.

- Burchardt, Hans Jürgen & Kristina Dietz (2014), «(Neo-)extractivism: a New Challenge for Development Theory from Latin America», *Third World Quarterly*, 35(3), pp. 468-486.
- Ciccariello Maher, George (2013), «Constituent Moments, Constitutional Processes. Social Movements and the New Latin American Left», in <http://www.academia.edu/3610680>
- Cohen, Michael, Mitchell Cook, Tanushree Dutta Isaacman (2012), «Introduction», in Michael Cohen (ed.), *The Global Economic Crisis in Latin America. Impacts and Responses*, London, Routledge.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2010), *Time for Equality: Closing the Gap, Opening Trails*, Santiago de Chile, Naciones Unidas.
- _____ (2013), *Sustainable Development in Latin America and the Caribbean: Follow up to the United Nations development Agenda. Beyond 2015 and to Rio+20*, Santiago de Chile, CEPAL.
- _____ (2015), *Latin America and the Caribbean: Looking ahead after the Millennium Development Goals*, Santiago de Chile, CEPAL.
- DARA (2012), *Climate Vulnerability Monitor. A Guide to the Cold Calculus of a Hot Planet*, Madrid, Fundación DARA Internacional.
- De Ferranti, David & Anthony Ody (2015), «Key Economic and Social Challenges for Latin America: Perspectives from Recent Studies», *Brookings Report*, in <http://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/20060803.pdf>
- Garretón, Antonio, Marcelo Cavarozzi, Peter Cleaves, Gary Gereffi & Jonathan Hartlyn (2003), *Latin America in the 21st Century. Toward a New Socio-political Matrix*, Miami, University of Miami Press.
- Global Centre for Public Service Excellence (GCPSE) (2014), *Foresight: The Manual*, Singapore, United Nations Development Programme.

- Green, Duncan (1995), *Silent Revolution: The Rise of Market Economics in Latin America*, London, Cassell/LAB.
- Gudynas, Eduardo (2009), «Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo: contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual», en Jürgen Schuldt *et al.* (ed.), *Extractivismo, política y sociedad*. Quito, Centro de Ayuda Académica Profesional/Centro Latinoamericano de Estudios Superiores, pp. 187-225.
- (2 de diciembre de 2015), «Sopesando las herencias progresistas y renovación de las izquierdas», *Noticias de América Latina y el Caribe*, en <http://www.nodal.am/2015/12/sepesando-las-herencias-progresistas-y-renovacion-de-las-izquierdas-por-eduardo-gudynas/>
- Harnecker, Marta (2012), *A World to Build: New Paths Towards Twenty First Century Socialism*, New York, Monthly Review Press.
- Howard, John (2015), *Ernesto Laclau. Post-Marxism, populism and critique*, London, Routledge.
- Inayatullah, Sohail (2012), «Future Studies: Theories and Methods», in Fernando Gutiérrez Junquera (ed.), *There's a Future: Visions for a Better World*, Madrid, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, pp. 36-66.
- Kahane, Adam (2000), «The Mont Fleur Scenarios What will South Africa be like in the year 2002?» *Deeper News*, 7(1).
- Law, John & John Urry (2004), «Enacting the social», *Economy and Society*, 33(3), pp. 390-410.
- Lutz, Helma, María Teresa Herrera & Linda Supik (2011), *Framing Intersectionality. Debates on a Multi-Faceted Concept in Gender Studies*, Surrey, Ashgate.
- Munck, Ronaldo (2013), *Rethinking Latin America. Development, Hegemony and Social Transformation*, New York, Palgrave.

- (2015), «Polanyi for Latin America: Markets, Society and Development», *Canadian Journal of Development Studies*, 36(15), pp. 1-17.
- Murray, Warwick & Eduardo Silva (2004), *Latin America Transformed. Globalization and Modernity*, London, Hodder Arnold.
- Petras, James & Henry Veltmeyer (2001), *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century*, London, Zed Books.
- Polanyi, Karl (2001), *The Great Transformation*, Boston, Beacon Press.
- Radcliffe, Sarah (2011), «Development for a Postneoliberal Era? *Sumak Kawsay*, Living Well and the Limits to Decolonization in Ecuador», *Geoforum* (43), pp. 240-249.
- Ramírez, René (2010), «Socialismo del *Sumak Kawsay* o biosocialismo republicano», en *Los nuevos retos de América Latina: socialismo y Sumak Kawsay*. Quito, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
- Rockefeller, Stuart Alexander (2007), «Dual Power in Bolivia. Movement and Government since the election of 2005», *Urban Anthropology*, 36(3), pp. 161-193.
- Sagasti, Fernando (2004), «Thinking about the Future: Trends and Scenarios in Latin America», *Development*, 47(4), pp. 15-25.
- Sardar, Zia (2010), «The Namesake: Futures, future studies, futurology, futuristic, foresight: what's in a name?», *Futures* (42), pp. 177-184.
- Van Asselt, Marjolein B.A. et al. (2010), *Foresight in Action Developing Policy-Oriented Scenarios*, London, Earthscan.

Desenlace del ciclo progresista

Claudio Katz*

Resumen. El ciclo progresista surgió de rebeliones populares que modificaron las relaciones de fuerza en Sudamérica. Hubo mejoras sociales, conquistas democráticas y frenos a la agresión imperial, pero se acentuó el extractivismo exportador y la balcanización comercial. Los convenios de cada país con China ilustran fracturas en la integración que han facilitado el resurgimiento de los tratados de libre comercio. El progresismo fue afectado por ensayos neodesarrollistas fallidos que no lograron canalizar las rentas agroexportadoras hacia actividades productivas. Aunque el gasto social distendió la protesta, el descontento se extendió bajo los gobiernos de centroizquierda. Los conservadores ocultan la corrupción, el narcotráfico y la desigualdad que acosan a sus gobiernos. La caracterización del ciclo progresista como periodo posliberal omite las continuidades respecto a la fase previa e ignora los conflictos con el movimiento popular. Finalmente, puede afirmarse que los proyectos socialistas ofrecen el mejor desemboque para la etapa en curso.

Palabras clave: ciclo progresista, neodesarrollismo, extractivismo, socialismo, América Latina.

*Profesor investigador de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

End of the progressive cycle

Abstract. The progressive cycle arose out of popular revolts that altered the power relations in South America. There were social gains, democratic conquests, and curbs on imperial aggression, but export-extractivism and trade balkanization worsened. The trade agreements formed by each country with China showed fractures in regional integration, which led to the resurgence of free trade agreements. Progressivism was affected by failed neo-developmental experiments that were unable to channel agro-export rents toward productive activities. Although social expenditures defused the protests, discontent grew under center-left governments. The conservatives hid corruption, narco-trafficking and the inequalities that stalked their governments. The portrayal of the progressive cycle as a post-liberal period omits the persistent characteristics of the previous phase, and ignores conflicts with popular movements. Last, we conclude that socialist projects offer the better path to escape from the stage currently underway.

Keywords: progressive cycle, neodevelopmentalism, extractivism, socialism, Latin America.

Introducción

El año 2015 concluyó con significativos avances de la derecha en Sudamérica. Mauricio Macri llegó a la presidencia de Argentina, la oposición obtuvo la mayoría en el parlamento venezolano y las presiones para acosar a Dilma Rousseff en Brasil persisten. Los conservadores realizan campañas, y en el caso de Bolivia surge la interrogante sobre si Evo Morales conseguirá un nuevo mandato. ¿En qué momento se encuentra la región de Sudamérica? ¿Concluyó el periodo de gobiernos distanciados del neoliberalismo? La respuesta exige definir las peculiaridades de la última década.

Causas y resultados

El ciclo progresista surgió de rebeliones populares que abatieron gobiernos neoliberales (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina) o erosionaron su continuidad (Brasil, Uruguay). Esas sublevaciones modificaron las relaciones de fuerza, pero no alteraron la inserción económica de Sudamérica en la división internacional del trabajo. Al contrario, en un decenio de valorización de las materias primas, todos los países reforzaron su perfil de exportadores básicos.

Los gobiernos derechistas (Piñera, Uribe-Santos, Fox-Peña Nieto) utilizaron la bonanza de divisas para consolidar el modelo de apertura comercial y las privatizaciones. Las administraciones de centroizquierda (Kirchner-Cristina, Lula-Dilma, Tabaré-Mugica, Correa) privilegiaron la ampliación del consumo interno, los subsidios al empresariado local y el asistencialismo. Los presidentes radicales (Chávez-Maduro, Morales)

aplicaron modelos de mayor redistribución y afrontaron severos conflictos con las clases dominantes.

La afluencia de dólares, el temor a nuevas sublevaciones y el impacto de políticas expansivas evitaron los fuertes ajustes neoliberales que prevalecieron en otros lugares. Los clásicos atropellos que padecía el Nuevo Mundo se trasladaron al Viejo Continente. La cirugía de Grecia no tuvo correlato en la zona y tampoco se padecieron los desgarros financieros que afectaron a Portugal, Islandia o Irlanda. Este desahogo fue también un efecto de la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El proyecto de crear una zona continental de libre comercio quedó suspendido y ese freno facilitó alivios productivos y mejoras sociales.

Durante el decenio imperó una drástica limitación del intervencionismo estadounidense. Los marines y la IV flota continuaron operando, sin consumir las típicas invasiones de Washington. Esa contención se verificó en el declive de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Ministerio de Colonias perdió peso frente a nuevos organismos como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que fungieron como intermediarios en los principales conflictos (por ejemplo, en Colombia).

El reconocimiento estadounidense de Cuba reflejó este nuevo escenario; al cabo de 53 años Estados Unidos no pudo doblegar a la isla y optó por un camino de negocios y diplomacia, para recuperar imagen y hegemonía en la región. La cautela del Departamento de Estado contrasta con su virulencia en otras partes del planeta. Basta observar la secuencia de masacres que soporta el mundo árabe para constatar la diferencia. El Pentágono asegura desde allí el control del petróleo, aniquilando Estados y sosteniendo a gobiernos que aplastan las primaveras democráticas.

Esa demolición (o las guerras de saqueo en África) estuvieron ausentes en Sudamérica.

El ciclo progresista permitió conquistas democráticas y reformas constitucionales (Bolivia, Venezuela, Ecuador) que introdujeron derechos bloqueados durante décadas por las élites dominantes. También se impuso un hábito de mayor tolerancia hacia las protestas sociales. En ese ámbito, sobresale el contraste con los regímenes más represivos (Colombia, Perú) o con los gobiernos que utilizan la guerra contra el narcotráfico para aterrozar al pueblo (México).

Además, el periodo progresista incluyó la recuperación de tradiciones ideológicas antiimperialistas. Reapropiación visible en las conmemoraciones de los bicentenarios que actualizaron la agenda de una Segunda Independencia. En varios países ese clima contribuyó al resurgimiento del horizonte socialista. También involucró transformaciones internacionalmente valoradas por los movimientos sociales. Si bien Sudamérica se convirtió en una referencia de propuestas populares, en la actualidad han salido a flote los límites de los cambios operados durante esa etapa.

Frustraciones con la integración

Durante 2015, las exportaciones latinoamericanas declinaron por tercer año consecutivo. El freno del crecimiento chino, la menor demanda de agrocombustibles y el retorno de la especulación a los activos financieros tienden a revertir la valorización de las materias primas. Esa caída de precios se afianzará si el *shale* coexiste con el petróleo tradicional y se consolidan otros sustitutos de insumos básicos. No es la primera vez que el

capitalismo desenvuelve nuevas técnicas para contrarrestar el encarecimiento de los productos primarios. Tales tendencias suelen arruinar a las economías latinoamericanas atadas a la exportación agrominera.

Las adversidades del nuevo escenario se verifican en la reducción del crecimiento debido a que la deuda pública es inferior al pasado, no se avizoran aún los colapsos tradicionales, pero ya declinan los recursos fiscales y se reduce el margen que posibilite desenvolver políticas de reactivación. El ciclo progresista no fue aprovechado para modificar la vulnerabilidad regional. Esta fragilidad persiste por la expansión de negocios primarizados en desmedro de la integración y la diversificación productiva. Los proyectos de asociación sudamericana fueron nuevamente desbordados por actividades nacionales de exportación, que incentivaron la balcanización comercial y el deterioro de procesos fabriles.

Luego de la derrota del ALCA surgieron numerosas iniciativas, cuyo objetivo era forjar estructuras comunes de la zona. En general, pese a que se propusieron metas de industrialización, anillos energéticos y redes de comunicación compartidas, los programas han languidecido año tras año. El banco regional, el fondo de reserva y el sistema cambiario coordinado nunca se concretaron. Las normas para minimizar el uso del dólar en transacciones comerciales y los emprendimientos prioritarios de infraestructura zonal quedaron en los papeles. Tampoco se puso en marcha un blindaje concertado frente a la caída de los precios de exportación. Cada gobierno optó por negociar con sus propios clientes y se archivaron las convocatorias de creación de un bloque regional.

El congelamiento del Banco del Sur sintetiza esa impotencia, pues Brasil obstruyó su desarrollo al privilegiar al Banco Nacional de Desarrollo (BNDS) y al Banco de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

La ausencia de una institución financiera común socavó los programas de convergencia cambiaria y moneda común. La misma fractura regional se observa en las negociaciones con China. Cada gobierno suscribe unilateralmente acuerdos con la nueva potencia asiática, que acapara compras de materias primas, ventas de manufacturas y otorgamientos de créditos. China prioriza los emprendimientos de productos básicos y retacea la transferencia de tecnología. La asimetría que estableció con la región sólo es superada por la subordinación que impuso en África.

Las consecuencias de esta desigualdad comenzaron a notarse el año pasado, cuando China redujo su crecimiento y disminuyó sus adquisiciones en Latinoamérica. Además, devaluó el yuan para incrementar sus exportaciones y adecuar su paridad cambiaria a las exigencias de una moneda mundial; esas medidas acentuaron su colocación de mercancías baratas en Sudamérica. Hasta ahora, China se expande sin exhibir ambiciones geopolíticas o militares. Algunos analistas identifican esta conducta con políticas eficientes hacia la región, otros observan en ese comportamiento una estrategia neocolonial de apropiación de los recursos naturales. En cualquier caso, el resultado ha sido un aumento geométrico de la primarización sudamericana.

En lugar de establecer vínculos inteligentes con el gigante asiático para contrapesar la dominación estadounidense, los gobiernos progresistas optaron por el endeudamiento y la atadura comercial. En Unasur o Celac nunca se discutió cómo negociar en bloque con China para suscribir acuerdos más equitativos. Los fracasos en la integración dilucidan el nuevo impulso que logró el Tratado del Pacífico; los tratados de libre comercio (TLC) rebrotan con la misma intensidad que decae la cohesión sudamericana. Estados Unidos tiene objetivos más nítidos que en la época del ALCA, alienta

un convenio con Asia (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TTP) y otro con Europa (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, TTIP) para asegurar su preeminencia en actividades estratégicas (laboratorios, informática, medicina, militares). Posterior al temblor de 2008 promovió con renovada intensidad el libre comercio.

Sudamérica es un mercado apetecido por todas las empresas transnacionales. Estas compañías exigen tratados con mayor flexibilidad laboral y explícitas ventajas para litigar en los pleitos de contaminación ambiental. Estados Unidos y China rivalizan al emplear los mismos instrumentos de apertura comercial. Chile, Perú y Colombia ya aceptaron las nuevas exigencias librecambistas del TTP en materia de propiedad intelectual, patentes y compras públicas, sólo esperan lograr mayores mercados para sus exportaciones agrominerales; no obstante la gran novedad es la disposición del gobierno argentino a participar en ese tipo de negociaciones. Macri pretende destrabar el acuerdo con la Unión Europea e inducir a Brasil a cierta participación en la Alianza del Pacífico. Asimismo, ha registrado que el gabinete de Rousseff incluye representantes del agronegocio, más proclives a la liberalización comercial que al industrialismo del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Una prueba de los TLC se verificará en las tratativas de otro convenio, se negoció en secreto por cincuenta países, con cláusulas extremas de liberalización en los servicios (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, TISA). Aunque la iniciativa ya afrontó un rechazo en Uruguay, las tratativas continúan. El ciclo progresista está directamente amenazado por la avalancha de libre comercio que propicia el imperio.

Fallidos neodesarrollistas

Los límites del progresismo han sido más visibles en los intentos nacionales de implementar políticas neodesarrollistas. Estos ensayos pretendieron retomar la industrialización con estrategias de mayor intervención estatal, para imitar el desenvolvimiento del sudeste asiático. A diferencia del desarrollismo clásico promovieron alianzas con el agronegocio y apostaron a un largo periodo de reversión del deterioro de los términos de intercambio.

Después de una década no lograron avanzar en ninguna meta industrializadora. La expectativa de igualar el avance asiático se diluyó, ante la mayor rentabilidad que genera la explotación de los trabajadores en el Extremo Oriente, así como el anhelo de conductas emprendedoras de los empresarios locales, frente a la continuada exigencia de auxilios estatales. La promoción de un funcionariado eficiente quedó neutralizada por la recreación de ineptas burocracias.

El principal intento neodesarrollista se llevó a cabo en Argentina durante el decenio que sucedió al estallido de 2001. Ese experimento fue erosionado por múltiples desequilibrios. Se renunció a administrar en forma productiva el excedente agrario mediante un manejo estatal del comercio exterior. También se confió en empresarios que utilizaron los subsidios para fugar capital sin aportar inversiones significativas. Además, se apostó a un virtuosismo de la demanda cimentado en aportes de los capitalistas, que prefirieron remarcar los precios.

Ese modelo preservó todos los desequilibrios estructurales de la economía argentina. Afianzó la primarización, potenció el estancamiento de la provisión de energía, perpetuó un esqueleto industrial concentrado y

sostuvo un sistema financiero adverso a la inversión. El mantenimiento de una política impositiva regresiva impidió modificar los pilares de la desigualdad social.

Las tensiones acumuladas inducían a un viraje regresivo que el candidato del kirchnerismo (Scioli) eludió al perder los comicios. Postulaba un programa gradual de ajuste con reendeudamiento, devaluación, arreglo con los buitres, mayores tarifas y recortes del gasto social. En Brasil se ha discutido si el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) gestiona una variante conservadora de neodesarrollismo o una versión regulada del neoliberalismo. Debido a que no se afrontaron la crisis y la rebelión popular que convulsionaron a la Argentina, los cambios de política económica tuvieron menor intensidad.

Al cabo de un decenio los resultados son semejantes en ambos países. La economía brasileña se ha estancado y la expansión del consumo no ha resuelto las desigualdades sociales, ni masificado a la clase media. Hay mayor dependencia de exportaciones básicas y un fuerte retroceso industrial. Los privilegios al capital financiero persisten y el agronegocio sofoca cualquier esperanza de reforma agraria.

Rousseff introdujo el viraje conservador que el progresismo evitó en Argentina. Ganó la elección al cuestionar el ajuste promovido por su rival (Aécio Neves) y desconoció esas promesas frente a las presiones de los mercados. Designó un ministro de economía ultraliberal (Levy) que reprodujo el debut de Lula con personajes del mismo tipo (Palocci). Durante 2015 esta gestión ortodoxa generó aumentos de tasas y de tarifas. Rousseff justificó el recorte de las políticas sociales y mantuvo las ventajas que tienen los financistas para acumular fortunas. No obstante, al comienzo del nuevo año reemplazó al hombre de los banqueros por un economista

más heterodoxo (Barbosa), quien prometió un ajuste fiscal más pausado a fin de atenuar la recesión. Este giro no anticipa salidas al pantano que generen las políticas conservadoras.

Ecuador ha padecido la misma involución del neodesarrollismo. Correa debutó con una reorganización del Estado que potenció el mercado interno; aumentó los ingresos fiscales, otorgó mejoras sociales y canalizó parte de la renta hacia la inversión pública. Posteriormente, enfrentó los límites de experimentos análogos y optó por el endeudamiento y el privilegio de las exportaciones. Aparte de suscribir un TLC con Europa, facilitó la privatización de las carreteras y la entrega de campos maduros de petróleo a las grandes compañías.

De acuerdo con lo anterior puede afirmarse que las falencias del neodesarrollismo han obstruido el ciclo progresista. Si bien ese modelo intentó canalizar los excedentes de la exportación hacia actividades productivas, asumió resistencias del poder económico y se sometió a esas presiones.

El nuevo tipo de protestas

Durante la última década se atenuaron los estallidos de descontento popular. Las administraciones en general contaron con un significativo remanente de ingresos fiscales para lidiar con las demandas sociales. La derecha recurrió al asistencialismo, la centroizquierda concretó mejoras sin afectar a los poderosos y los procesos radicales facilitaron conquistas de mayor gravitación. En la región hubo mayor distensión social y los conflictos primordiales se trasladaron al plano político. Se verificaron grandes resistencias contra las acciones destituyentes de la derecha y gigantescas

movilizaciones para apuntalar las batallas electorales, pero no se registraron levantamientos equivalentes al periodo preprogresista. Sólo la heroica respuesta al golpe de Honduras se aproximó a esa escala.

La combatividad popular se expresó en otros ámbitos. Irrumpieron multitudinarias manifestaciones de estudiantes chilenos por la gratuidad de la educación y se consumó una llamativa huelga general en Paraguay. De igual modo se observaron activas demandas de los campesinos, indígenas y ambientalistas en Colombia y Perú. Cabe mencionar que la principal novedad de la etapa fueron las protestas sociales en los países gobernados por la centroizquierda. En un contexto de fuertes presiones políticas de la derecha, esa interpelación desde abajo resaltó la insatisfacción popular.

El desafío fue notorio en Argentina: primero se extendieron las huelgas de docentes y estatales, luego apareció el rechazo al pago de un impuesto que grava a los asalariados de mayores ingresos. Este disgusto detonó cuatro paros generales en 2014-2015. Las acciones masivas sorprendieron a los gremialistas del oficialismo quienes se opusieron a la protesta. En Brasil el descontento emergió en las jornadas de julio de 2013. Las grandes manifestaciones para reclamar mejoras en el transporte y la educación convulsionaron a las ciudades más importantes. Dichas peticiones no sólo constituyeron reclamos de «segunda generación» suplementarios de lo ya logrado, expresaron el fastidio respecto a las condiciones de vida. El malestar se constató en los cuestionamientos a los gastos superfluos realizados con la intención de financiar el mundial de fútbol, en desmedro de las inversiones en educación.

Finalmente, en Ecuador, las movilizaciones sociales e indígenas incrementaron su presencia callejera y alcanzaron el año pasado un porcentaje

de masividad. Correa respondió con dureza y autoritarismo, al mismo tiempo que ensanchó la grieta que separa al oficialismo de amplios sectores populares.

¿Por qué avanza la derecha?

El arribo de Macri a la presidencia representa el primer desplazamiento electoral de una administración centroizquierdista por sus adversarios conservadores. Este viraje no es comparable a lo ocurrido en Chile con la victoria de Piñera sobre Bachelet. Allí se registró una acotada sustitución dentro de las mismas reglas neoliberales. Macri es un crudo exponente de la derecha, su triunfo no fue una casualidad, pues se valió de la demagogia, la despolitización y las ilusiones de concordia; con promesas vacías transformó los virulentos cacerolazos en una oleada de votos.

Una vez que asumió el mandato, designó un gabinete de gerentes para administrar el Estado como si fuera una empresa. Asimismo, inició una drástica transferencia regresiva de ingresos mediante la devaluación y la carestía. A través de los decretos criminalizó la protesta social y preparó la anulación de los logros democráticos. Su victoria estuvo precedida por la negativa del progresismo a asumir numerosas demandas que la derecha recogió en forma distorsionada y demagógica. La responsabilidad del kirchnerismo es omitida por sus seguidores.

Algunos progresistas consideran la victoria de la Propuesta Republicana (PRO) como una desventura pasajera y esperan retomar el gobierno en pocos años, pero desconocen las probables modificaciones del mapa político en ese interregno. Otros suponen que la elección se perdió por

mala suerte o por el desgaste de 12 años, como si ese tedio siguiera una cronología fija.

Quienes atribuyen el desenlace electoral a la prédica ciertamente efectiva de los medios de comunicación hegemónicos, no aceptan que paralelamente falló el armado alternativo de la propaganda oficial. Lo mismo vale para aquellos que se burlan de la «pospolítica» del macrismo, sin registrar la decreciente credibilidad del discurso kirchnerista. El fastidio con la corrupción, el clientelismo y la cultura justicialista de verticalismo y lealtad explican la victoria de Macri.

Pese a que la ofensiva reaccionaria para acosar a Rousseff no obtuvo los resultados de Argentina, desconcertó al gobierno brasileño durante 2015. Los derechistas comenzaron con grandes manifestaciones en marzo, que no pudieron sostener en agosto y menos aún en diciembre. Las movilizaciones sociales contra el golpe institucional siguieron en cambio un curso opuesto y se engrosaron con el paso del tiempo. El Tribunal Supremo frenó por ese momento el juicio político y el gobierno logró un alivio, que empleó para reordenar alianzas a cambio de cierto desahogo fiscal. Rousseff sólo consiguió una tregua con sus oponentes en el Congreso y los medios de comunicación.

Al igual que en Argentina el progresismo elude cualquier explicación del retroceso. Simplemente maniobra para asegurar la supervivencia del gobierno, mediante nuevos pactos con el poder económico, las elites provinciales y la partidocracia. Sus teóricos evitan indagar la involución del PT que erosionó su base social al aceptar los ajustes. En la última elección Rousseff ganó por muy poco y compensó con votos del nordeste los sufragios perdidos en el sur. El sostén de las viejas bases obreras del PT disminuyó frente al clientelismo tradicional.

Lo anterior, aunado a los graves escándalos de corrupción del gobierno, se evidenciaron por ejemplo en negocios con la elite industrial, que retratan las consecuencias de gobernar en alianzas con los acaudalados. En lugar de analizar esa dramática mutación, los teóricos del progresismo reiteran sus genéricos mensajes contra la restauración conservadora.

Una regresión semejante se observa en Ecuador, la gestión de Correa está signada por una gran disolución entre la retórica beligerante y la administración del *statu quo*. El presidente polemiza con los derechistas y es implacable en sus denuncias de la injerencia imperial. En adición, cada día cruza una nueva barrera en la aceptación del libre comercio y en la confrontación con los movimientos sociales. A pesar de que los análisis del progresismo se limitan a redoblar las alertas contra la derecha, omiten la desilusión que genera un presidente comprometido con la agenda del *establishment*. Este giro explica su decisión de renunciar a un próximo mandato.

La centralidad de Venezuela

El desenlace del ciclo progresista se vislumbra en Venezuela, lo acontecido allí no equivale a lo sucedido en otros países. Tales diferencias son desconocidas por aquellos que equiparan los recientes triunfos de las derechas venezolana y argentina, de manera que ambas situaciones son incomparables. En el primer caso los comicios se desarrollaron en medio de una guerra económica, con desabastecimiento, hiperinflación y contrabando de las mercancías subsidiadas. Fue una campaña llena de pólvora, paramilitares, ONG conspirativas y provocaciones criminales.

La derecha preparaba sus típicas denuncias de fraude para descalificar un resultado adverso en los comicios; no obstante, al ganar no alcanza a dilucidar cómo pudo registrarse esa victoria bajo una dictadura. Por primera vez en 16 años obtuvo mayoría en el Parlamento, de ahí que intentaran convocar a un revocatorio para deponer a Maduro. Como no están dispuestos a esperar hasta 2018 se avecina un gran conflicto con el Ejecutivo. Promoverán en el Congreso exigencias inaceptables, con el explícito propósito de acosar al presidente (liberar golpistas, transparentar la especulación, anular conquistas sociales). Ningún rasgo de ese escenario se observa en Argentina. No sólo Capriles tiene prioridades muy distintas a Macri, sino que el chavismo difiere significativamente del kirchnerismo. El primero surgió de una rebelión popular y declaró su intención de alcanzar objetivos socialistas. El segundo se limitó a capturar los efectos de una sublevación y siempre enalteció al capitalismo.

En Venezuela hubo redistribución de la renta y afectó los privilegios de las clases dominantes, en el caso de Argentina ese excedente se repartió sin alterar las ventajas de la burguesía. El empoderamiento popular que desencadenó el chavismo no se equipara con la expansión del consumo que promovió el kirchnerismo. Tampoco el proyecto antiimperialista de la de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba) guarda semejanzas con el conservadurismo del Mercosur (Cieza, 2015; Mazzeo, 2015; Stedile, 2015).

La principal singularidad de Venezuela proviene del lugar que ocupa en la dominación imperial. Estados Unidos concentra todos sus dardos contra ese país, con la intención de recuperar el control de las principales reservas petroleras del continente, por ello mantiene una estrategia de agresión permanente. Basta constatar la guerra que libró el Pentágono en

Medio Oriente —demoliendo a Irak y Libia— para verificar la importancia que le asigna al control del crudo. El Departamento de Estado puede reconocer a Cuba y discutir con presidentes adversos, pero Venezuela es una presa no negociable.

Los medios de comunicación hegemónicos martillean día y noche sobre el mismo país, con imágenes de un desastre que requiere salvamento externo. Los golpistas son presentados como víctimas inocentes de una persecución, y omiten que Leopoldo López fue condenado por los asesinatos perpetrados durante las guarimbas. Cualquier tribunal estadounidense hubiera dictado sentencias mucho más duras frente a esas tropelías. La diabolización mediática busca aislar al chavismo para incentivar mayores condenas de la socialdemocracia. Esta campaña no logró resultados hasta la reciente victoria electoral de la derecha. Ahora se disponen a retomar los planes para destituir a Maduro, combinando el desgaste que promueve Capriles con la destitución violenta que impulsa López. Tratan de orillar al gobierno a una situación caótica para repetir el golpe institucional perpetrado en Paraguay.

Macri es el articulador internacional de esa conspiración. Encabeza todos los cuestionamientos a Venezuela, mientras criminaliza la protesta en Argentina. Gobierna por decreto en su país y exige respeto a los parlamentarios de otra nación. El líder del PRO ya sugiere sanciones contra el nuevo socio del Mercosur, pero no habla de Guantánamo ni menciona los padecimientos de los presos políticos en las cárceles estadounidenses. A pesar de que pospuso su exigencia de sanciones a Venezuela a la espera de mayores definiciones de Rouseff, volverá a la dureza si estima oportuno acompañar las provocaciones de López.

Definiciones impostergables

El chavismo ha confrontado fuertes agresiones por la radicalidad de su proceso, la furia de la burguesía y la decisión imperial de manejar el petróleo. Es notorio el contraste con Bolivia, pues allí también ha primado un gobierno radical antiimperialista. El Altiplano no tiene la relevancia estratégica de Venezuela y arrastra un nivel muy superior de subdesarrollo. Morales mantuvo la hegemonía política y logró un crecimiento económico significativo: forjó un Estado plurinacional que desplazó a las viejas elites racistas e impuso por primera vez la autoridad real de ese organismo en todo el territorio. Hasta ahora la derecha no pudo disputarle el gobierno, pero hay una batalla abierta en torno su reelección. En cualquier caso, Bolivia no afronta aún las impostergables definiciones que debe asumir el chavismo.

Desde la caída del precio del petróleo Venezuela sufre un drástico recorte de los ingresos: las importaciones requeridas para el funcionamiento corriente de la economía están amenazadas, se verifica también un gran desborde del déficit fiscal, la brecha cambiaria, la inflación y la emisión. La simple constatación de la guerra económica es insuficiente, ello asociado a la incapacidad del gobierno para enfrentar tal atropello. A Maduro le ha faltado la firmeza que tuvo Fidel Castro durante el periodo especial. El sabotaje económico es efectivo porque la burocracia estatal continúa sosteniendo con los dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA), un sistema cambiario que facilita el desfaldo organizado de los recursos públicos (Gómez, 2015; Aharonian, 2016; Colussi, 2015).

Esta falta de manejo del recurso económico acentúa el estancamiento del modelo distribucionista, que canalizó inicialmente la renta hacia

programas asistenciales y no logró después gestar una economía productiva. El escenario actual ofrece una nueva (y quizá última) oportunidad para reordenar la economía. Resulta imprescindible cortar el uso de las divisas con relación al contrabando de mercancías y el ingreso de importaciones encarecidas. Ese fraude enriquece al funcionariado aburguesado y subleva a la población. No basta con reorganizar Petróleos de Venezuela (PDVSA), controlar las fronteras o encarcelar a ciertos delincuentes; sin remover a los corruptos el proceso bolivariano se autocondena al declive.

A partir de la nacionalización de los bancos y el comercio exterior, el chavismo necesita un contragolpe que permita recuperar el sostén popular. Varios economistas han elaborado detallados programas con la finalidad de implementar otra gestión cambiaria. Como consecuencia de la falta de dólares para solventar las importaciones y pagar la deuda habría que enfrentar también una auditoría de ese pasivo.

Maduro ha declarado que no se rendirá; sin embargo, y debido a la compleja situación no bastan las definiciones de aquellos que detentan el poder. La supervivencia del proceso bolivariano exige construir un poder popular desde abajo, ya existe una legislación que define las atribuciones del poder comunal. Sólo esos organismos permitirían sostener la batalla contra capitalistas que burlan controles cambiarios y recuperan excedentes petroleros. El ejercicio del poder comunal está bloqueado desde hace años por una burocracia que empobrece al Estado, ese sector sería el primer afectado por una democracia desde abajo. Al comenzar el año, Maduro instaló una asamblea del poder comunal, pero el verticalismo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la hostilidad hacia las corrientes más radicales obstruyeron la iniciativa (Guerrero, 2015; Iturriza, 2015; Szalkowicz, 2015; Teruggi, 2015).

Cualquier impulso a la organización comunal redoblará las denuncias de la prensa internacional contra la «violación de la democracia» en Venezuela. Tales cuestionamientos serán propagados por los artífices del golpe estadounidense en Honduras y por los inspiradores de la farsa institucional que derrocó a Lugo en Paraguay. Se trata de los mismos personajes que silencian el terrorismo de Estado imperante en México o Colombia. Aunque han aceptado la institucionalidad cubana dentro de Unasur, no están dispuestos a tolerar el desafío de Venezuela. Confrontar con ese *establishment* mediático es una prioridad en todo el continente.

Ocultamientos derechistas

El nuevo escenario sudamericano ha enaltecido a la derecha, pues asume que llegó su hora y promete cerrar el ciclo «populista», para reemplazar el «intervencionismo por el mercado» y el «autoritarismo por la libertad». Con estos mensajes oculta su responsabilidad directa en la devastación sufrida durante los años 1980 y 1990. Los gobiernos progresistas impugnados aparecieron frente al colapso económico y el desangramiento social provocado por los neoliberales. La derecha no sólo retrata ese pasado como un proceso ajeno a sus gestiones, también encubre lo que sucede en los países que gobierna.

Pareciera que los únicos problemas de América Latina se ubican fuera de ese radio. El engaño ha sido construido por los medios hegemónicos de comunicación, que pasan por alto cualquier información adversa a las administraciones derechistas. El fraude es tan obvio que la mayoría de la población desconoce cualquier información ajena a los países objetados por

la prensa dominante. Los medios describen la inflación y las tensiones cambiarias reinantes en los gobiernos impugnados, pero omiten el desempleo y la precarización imperantes en las economías neoliberales. Resaltan, de igual modo, la «pérdida de oportunidades» que ocasiona el control de los capitales y silencian los terremotos que provoca la desregulación. Despotrican contra el «artificio del consumo» y encubren el deterioro originado por la desigualdad. Quizá la omisión más grave se ubica en el funcionamiento del Estado. La derecha impugna el «paternalismo discrecional» vigente en el área progresista y desconoce el desmoronamiento que afecta a los narco-Estados, expandidos al calor del libre comercio y la desregulación financiera. Tres economías ponderadas por su grado de apertura y afinidad con el capital —México, Colombia y Perú— sufren esa corrosión del Estado.

México padece el nivel de violencia más dramático de la región, ningún funcionario de alto rango ha sido encarcelado y numerosos territorios están bajo control de bandas criminales. En Colombia los cárteles de la droga financian presidentes, partidos y sectores del ejército. En Perú el grado de complicidad oficial con el tráfico de drogas incluyó la conmutación de penas a 3 mil 200 condenados por ese delito. Los anteriores datos no se difunden con la misma insistencia en que se retratan las desventuras de Venezuela. Esa dualidad comunicacional se extiende al tema de la corrupción. La derecha presenta esta adversidad como una gangrena del progresismo, a la vez que olvida la participación protagónica de los capitalistas en los principales desfalcos de los Estados.

Los grandes medios exponen los detalles del oscuro manejo oficial del dinero público en Venezuela, Brasil o Bolivia, pero no hablan de los casos más escandalosos que afectan a sus protegidos. La indignación colectiva

que precipitó la reciente renuncia del presidente de Guatemala no encabeza los noticieros. La derecha recurre a las mismas unilateralidades mediáticas para embellecer el modelo económico de Chile, cuyo esquema es ponderado por sus privatizaciones; no obstante, se oculta el asfixiante endeudamiento de las familias, la precarización laboral y las miserables pensiones de la jubilación privada. Tampoco se comenta el freno del crecimiento y el aumento de la corrupción, que socavan las reformas de la educación y la previsión social prometidas por Bachelet.

El contraste entre el paraíso neoliberal y el infierno progresista también incluye el silenciamiento del único caso de cesación de pagos de 2015. Puerto Rico se quedó sin plata para financiar el despojo de sus recursos humanos (emigración), naturales (reemplazo de la agricultura por la importación de alimentos) y económicos (deslocalización de la industria y el turismo). Las consecuencias del neoliberalismo no tienen espacio en los periódicos, ni minutos en los informativos. La derecha discute el fin del ciclo progresista pero omite lo que sucede fuera de ese universo.

¿Un periodo posliberal?

La engañosa mirada de la derecha sobre el ciclo progresista contrasta con el importante debate que se desenvuelve en la izquierda, entre teóricos de la continuidad y del agotamiento de ese periodo. El primer enfoque resalta la solidez de las transformaciones de la última década; subrayan los logros socioeconómicos, los avances en la integración, los aciertos geopolíticos y las victorias electorales (Arkonada, 2015a; Sader, 2015a). La consistencia observada en los cambios operados se verifica en el uso del calificativo posliberal

para describir ese ciclo, pues se estima que una etapa «pos» ha dejado atrás a la fase precedente por la contundencia de las mutaciones registradas. A partir de dicho enfoque se polemiza con las visiones que remarcan el declive del proceso (Itzamná, 2015; Sader, 2016b; Rauber, 2015).

El triunfo de Macri, el avance de Capriles-López y la parálisis de Rousseff o Correa han moderado las apreciaciones e inducido a ciertas críticas. Algunos destacan los efectos nocivos de la burocracia o las falencias en la batalla cultural (Arana, 2015; Arkonada, 2015b). Sin embargo, en general mantienen la caracterización del periodo y enfatizan las limitaciones de la ofensiva conservadora así como la debilidad del proyecto, la transitoriedad de sus éxitos o la proximidad de grandes resistencias sociales (Puga, 2015; Arkonada, 2015b). Tal visión no permite registrar hasta qué punto la profundización del patrón extractivista ha socavado el ciclo progresista. La sintonía de ese esquema económico con las administraciones derechistas no se extiende a sus pares de centroizquierda. Los gobiernos son afectados por las nefastas consecuencias de un modelo que deteriora el empleo e impide el desarrollo productivo, por tanto tal contradicción es mucho más severa en los procesos radicales.

El supuesto de un periodo posliberal omite esas tensiones, porque no sólo olvida que la superación del neoliberalismo exige comenzar a revertir la primarización de la región, también recurre a muchas indefiniciones en la caracterización del periodo. Nunca se aclara si el posliberalismo alude a los gobiernos o a los patrones de acumulación. Aunque a veces se sugiere que conforma un periodo contrapuesto al Consenso de Washington, hace hincapié en el giro político hacia la autonomía, al mismo tiempo que se desconoce la persistencia del patrón de exportaciones básicas.

Adicionalmente, se argumenta que un cambio más sustancial del modelo económico desborda lo que puede encarar América Latina. Si bien este giro supondría virajes más significativos en un capitalismo multipolar en gestación, nadie precisa cómo esas transformaciones alterarían la fisonomía tradicional de la región. Lo ocurrido en la última década ilustra un curso de primarización, contrapuesto a los pasos que debería transitar la región para forjar una economía industrializada, diversificada e integrada.

El enfoque afín al progresismo reivindica asimismo el basamento económico neodesarrollista del último decenio y resalta sus contrastes con el neoliberalismo; en cambio, no registra las numerosas áreas de complementariedad entre ambos modelos; tampoco nota que ningún ensayo de mayor regulación estatal ha revertido las privatizaciones, erradicado la precariedad laboral o modificado los pagos de la deuda. Esas insuficiencias no constituyen el «precio a pagar» por la gestación de un escenario posliberal; perpetúan la dependencia y la especialización primario-exportadora.

Es cierto que en la última década hubo mejoras sociales, mayor consumo y crecimiento, pero tales repuntes ya ocurrieron en otros ciclos de reactivación y valorización exportadora. Lo que no ha cambiado es el perfil del capitalismo regional y su adaptación a los requerimientos actuales de la mundialización. Cuando este dato es ignorado se tiende a observar avances donde hay estancamiento y logros perdurables donde imperan los desaciertos. El trasfondo del problema es la santificación del capitalismo como único sistema factible. Los teóricos del progresismo descartan la implementación de programas socialistas o a lo sumo aceptan su eventualidad para futuros lejanos. Con ese presupuesto imaginan la viabilidad de esquemas heterodoxos, inclusivos o productivos de capitalismo latinoamericano.

Cada evidencia de fracaso del modelo es sustituida por otra esperanza del mismo tipo, que desemboca en desengaños semejantes.

Oficialismo sin reflexión

Los problemas reales que afectan al progresismo son con frecuencia eludidos; se cuestiona exclusivamente a la burocracia, la corrupción o la ineficiencia. Se olvida que esas adversidades suelen acosar en algún momento a todos los modelos económicos y no constituyen una peculiaridad de la última década. Como se supone, también, que la única alternativa frente a esas administraciones es el retorno conservador, se justifican conductas que terminan facilitando la restauración derechista.

Ese comportamiento se corroboró durante las protestas que irrumpieron bajo los gobiernos de centroizquierda. Los oficialistas rechazaron las manifestaciones al observar la intervención de la derecha en su gestación. Cuestionaron a los «desagradecidos» que ganaron las calles, desconociendo lo hecho por las administraciones progresistas. Durante los paros de Argentina (2014-2015), el progresismo repitió los argumentos tradicionales del *establishment*. Objetó el carácter «político» de las huelgas, omitiendo que ese perfil no reduce su legitimidad. Arremetió contra la «extorsión de los piquetes», olvidando que el chantaje es ejercido por las patronales y no por los activistas. En adición, ignoró que los cortes protegen de sanciones a los trabajadores precarizados sin derecho a la protesta. Otros progresistas descalificaron las huelgas bajo la afirmación «mañana todo seguirá igual», como si un acto de fuerza de los trabajadores no favoreciera su capacidad de negociación. Incluso presentaron la huelga como un acto de «egoísmo»

de los asalariados con mayores sueldos, cuando esa ventaja ha permitido motorizar las mayores resistencias sociales de la historia argentina.

En Brasil la reacción del PT fue semejante, no participó en el inicio de las jornadas de 2013, expresó su desconfianza hacia los manifestantes y sólo aceptó la validez de las marchas cuando se masificaron. El gobierno se limitó a acusar a la derecha de incentivar el descontento, en lugar de registrar la desilusión popular con una administración que designa ministros neoliberales. La hostilidad hacia las acciones callejeras derivó de la involuación del PT, partido que perdió sensibilidad hacia los reclamos populares al estrechar vínculos con el empresariado y los banqueros. Su cúpula gestiona la economía al servicio de los capitalistas y se sorprende cuando sus bases sociales demandan lo que siempre reclamaron.

Las mismas tensiones salieron a flote en Ecuador frente a numerosas peticiones de los movimientos sociales en defensa de la tierra y el agua. Como las marchas coincidieron con rechazos de la derecha a los proyectos impositivos del gobierno, los oficialistas subrayaron la convergencia de ambas acciones en un mismo proceso de restauración conservadora. En vez de propiciar una aproximación a los reclamos sociales para forjar un frente común contra los reaccionarios, el progresismo acompañó ciegamente a Correa. Lo ocurrido frente a las protestas en los tres países gobernados por la centroizquierda ilustra cómo las administraciones progresistas toman distancia (en vez de aproximarse) del movimiento popular. De esa forma pavimentan el repunte de la derecha.

Distinciones perdurables

Las tesis posliberales son objetadas por otros autores que remarcan el agotamiento del ciclo progresista, como consecuencia del extractivismo. Estiman que los emprendimientos megamineros (Tipnis, Famaitina, Yasuni, Aratiri) y la primacía de la soja o los hidrocarburos han impedido reducir la desigualdad social. Consideran, además, que todos los gobiernos de América Latina convergen en un «consenso de *commodities*» que acentúa la primarización (Svampa, 2014; Zibechi, 2016, 2015a).

A pesar de que esa visión describe correctamente las consecuencias de un modelo que privilegia las exportaciones básicas, postula de forma errónea la preeminencia de una fisonomía uniforme en la región. Tampoco registra las significativas divergencias que separan a los gobiernos derechistas, centroizquierdistas y radicales en todos los terrenos ajenos al extractivismo. Venezuela no erradicó la gravitación del petróleo, Bolivia no se liberó de la centralidad del gas y Cuba mantiene su atadura al níquel o al turismo; sin embargo, esta dependencia no convierte a Maduro, Morales o Castro en mandatarios semejantes a Peña Nieto, Santos o Pinera. Las exportaciones básicas prevalecen en general en la economía latinoamericana sin definir el perfil de los gobiernos.

Al resaltar los nefastos efectos del extractivismo se evita la ingenua visión posliberal. Las limitaciones del progresismo no se reducen al reforzamiento del patrón agrominero, ni el neodesarrollismo se define por dicha dimensión. Si la impronta extractiva constituyera el rasgo principal del modelo, no presentaría diferencias relevantes con el neoliberalismo. Los nuevos desarrollistas intentaron canalizar la renta agrominera hacia el mercado interno y la recomposición industrial, pero fallaron

en ese objetivo y tuvieron una pretensión ausente en sus adversarios librecambistas.

Es importante precisar las distinciones para elaborar alternativas. De la exclusiva contraposición en torno al extractivismo no emergen las respuestas. Frente al capitalismo posliberal impulsado por los teóricos de la continuidad del ciclo progresista, sus objetores no postulan la opción socialista. Enuncian más bien genéricas convocatorias a proyectos centrados en la multiplicación de comunidades autogestionadas. El horizonte localista suele desechar la necesidad de un Estado administrado por las mayorías populares, que concilie la protección del medio ambiente con el desenvolvimiento industrial. América Latina necesita nacionalizar los principales soportes de su economía, con el propósito de financiar emprendimientos productivos con la renta agrominera. Los beneficiarios de tales propuestas serían las mayorías laboriosas y no las minorías capitalistas. Aquí radica la principal diferencia del socialismo con el neodesarrollismo.

Los teóricos del declive progresista cuestionan el autoritarismo de los gobiernos de ese signo. Describen restricciones a las libertades públicas, agresiones al movimiento indígena y reforzamientos del presidencialismo. También denuncian la sustitución de dinámicas de hegemonía por lógicas coercitivas y el silenciamiento de las voces independientes frente a la palabra oficial (Svampa, 2015; Gudynas, 2015; Zibechi, 2015b). Ninguna de estas tendencias ha convertido a una administración de centroizquierda en un gobierno de la reacción. El único caso de ese tipo sería Ollanta Humala, que se disfrazó de chavista y ejerce la presidencia con mano dura y entrega neocolonial.

Es imprescindible reconocer las diferencias mencionadas a fin de tomar distancia de los mensajes que divulga la derecha contra el «autoritarismo»

y el «populismo». Mientras que los políticos conservadores buscan unificar las críticas al progresismo en un engañoso discurso común, la izquierda necesita delimitarse. Repudiar explícitamente argumentos o posturas de los reaccionarios es la mejor forma de evitar esa trampa. Conviene no olvidar que radicalizar los procesos empantanados por las vacilaciones del progresismo es una meta contrapuesta a la regresión neoliberal. Por ello pueden existir áreas de convergencia con la centroizquierda, mas nunca con la derecha. La confrontación con los reaccionarios es un requisito de la acción política popular.

Las anteriores distinciones se verifican en todos los planos y tienen especial vigencia en el terreno democrático. El progresismo puede adoptar actitudes coercitivas pero no actúa estructuralmente con patrones represivos. Así, un pasaje de formas hegemónicas (consenso) a dominantes (coerción) en la gestión estatal se acompaña por lo habitual por cambios en el tipo de gobierno. Las diferencias entre la centroizquierda y la derecha que aparecieron al inicio del ciclo progresista persisten en el presente.

Controversias concretas

Actualmente, los debates en curso asumen en Venezuela un contenido urgente. Allí no se discuten diagnósticos genéricos de continuidad o agotamiento de la etapa, sino propuestas específicas de radicalización o involuación del proceso bolivariano. El primer planteamiento es alentado por los revolucionarios, quienes rechazan los pactos con la burguesía, promueven acciones efectivas contra los especuladores y auspician la consolidación del

poder comunal. Se trata de iniciativas que retoman la audacia que caracterizó a las revoluciones exitosas del siglo XX, pues pretenden emprender acciones antes que la derecha gane la partida (Conde, 2015; Valderrama y Aponte, 2015; Aznárez, 2015; Carcione, 2015).

El segundo enfoque es alentado por los socialdemócratas y los funcionarios que lucran con el *statu quo*. Sus teóricos no explicitan con claridad un programa, ni siquiera objetan de modo abierto las tesis radicales; simplemente soslayan las definiciones, arguyendo que el gobierno encontrará el camino correcto. Con esa actitud suelen denunciar la culpabilidad del imperialismo en todos los atropellos que sufre Venezuela, sin aportar propuestas para derrotar las agresiones. Convocan a redoblar los esfuerzos contra la «ineficiencia» o el «descontrol», pero evitan mencionar la nacionalización de los bancos, la expropiación de quienes fugan capital o la auditoría de la deuda.

En la disyuntiva actual la simple reivindicación del proceso bolivariano (y de la adhesión que preserva) no resuelve ningún problema. Sin discutir abiertamente por qué el chavismo perdió votantes activos, no hay forma de revertir el mayor predicamento de la derecha. Tampoco alcanza a señalar elípticamente que el gobierno «no supo o no pudo» adoptar las políticas adecuadas. Más desacertado aún es culpabilizar al pueblo por su «olvido» de lo otorgado por el chavismo. Esta forma de razonar supone que las mejoras concedidas paternalmente por una administración deben ser aplaudidas sin chistar. Es la mirada contrapuesta al poder comunal y al protagonismo de trabajadores que construyen su propio futuro.

Los proyectos de capitalismo posliberal chocan con la realidad venezolana; allí se comprueba el carácter fantasioso de ese modelo y la necesidad de abrir caminos anticapitalistas para impedir la restauración

conservadora. Rechazar estos senderos con un recetario de imposibilidades conduce sencillamente a bajar los brazos. Algunos pensadores coinciden con esa caracterización, pero estiman que «ya pasó el momento» para avanzar en tal dirección. ¿Cómo se determina entonces la temporalidad? ¿Cuál es el barómetro para dictaminar el fin de un proceso transformador? La pérdida de entusiasmo, el repliegue a la vida privada y las proclamas de «adiós al chavismo» son datos de la coyuntura, aunque en múltiples ocasiones el pueblo reaccionó ante situaciones de extrema adversidad. No sería la primera vez que las divisiones y los errores de la derecha precipitan un contragolpe bolivariano.

Identidad socialista

La persistencia, renovación o extinción del ciclo progresista en la región depende de la resistencia popular. No es posible indagar la continuidad o la cancelación de ese periodo omitiendo esta dimensión. Es un craso error evaluar cambios de gobiernos e ignorar las etapas de lucha, organización o conciencia de los oprimidos. Por el momento la derecha tiene la iniciativa, pero el signo del periodo se definirá en las batallas sociales que seguramente precipitarán los propios conservadores. El resultado de esos conflictos no sólo depende de la disposición de lucha. La influencia de corrientes socialistas, antiimperialistas y revolucionarias será un factor clave en el final.

Las tradiciones de las vertientes indicadas se han actualizado en la última década por movimientos sociales y procesos políticos radicales. Una nueva generación de militantes retomó en especial el legado de la revolución cubana y el marxismo latinoamericano. Chávez desempeñó un papel

trascendental en esa recuperación y su fallecimiento afectó severamente el renacimiento de la ideología socialista. El impacto fue tan grande que indujo a buscar referentes sustitutos. La centralidad asignada al papa Francisco es un ejemplo de esos reemplazos, que suelen confundir funciones de mediación con los de liderazgo.

Es incuestionable la utilidad de ciertas figuras que negocien con los enemigos. El primer latinoamericano que accede al papado aporta una buena carta de intermediación con el imperialismo. Su presencia puede servir para romper el bloqueo económico sobre Cuba, contrarrestar el sabotaje a las negociaciones de paz en Colombia o interceder frente a las bandas criminales que operan en la región. Sería insensato desperdiciar el puente que aporta Francisco para cualquiera de las tratativas señaladas. Semejante función no implica protagonismo del papa en las batallas contra el capitalismo neoliberal. Muchos suponen que Francisco dirige esa confrontación, mediante mensajes contra la desigualdad, la especulación financiera o la devastación ambiental. No registran que estas proclamas contradicen la continuada fastuosidad del Vaticano y su financiamiento a través de oscuras operaciones bancarias. La disolución entre prédica y realidad ha sido un clásico de la historia eclesiástica.

El papa retoma también varios preceptos de la doctrina social de la Iglesia, que auspician modelos de capitalismo con mayor injerencia estatal. Dichos esquemas buscan regular los mercados, alentar la compasión de los poderosos y garantizar la sumisión de los desposeídos. Desenvuelven una ideología forjada durante el siglo XX en polémica con el marxismo y sus influyentes ideas de emancipación. Las concepciones de la Iglesia no han cambiado. Francisco intenta retomarlas a fin de recuperar la pérdida de adhesión que sufre el catolicismo a causa de credos rivales. Religiones que

aparte de modernizarse, son más accesibles a las clases populares y están menos identificadas con los intereses de las elites dominantes.

La campaña del Vaticano cuenta con el beneplácito de los medios de comunicación que enaltecen la figura de Francisco, pero ocultan su cuestionado pasado bajo la dictadura argentina. Bergoglio mantiene su vieja hostilidad a la Teología de la Liberación, rechaza la diversidad sexual, niega los derechos de las mujeres y evita la penalización de los pedófilos. Encubre, además, obispos impugnados por las comunidades (Chile), canoniza misioneros que esclavizaron indígenas (California) y facilita las agresiones contra el laicismo.

Es un error suponer que la izquierda latinoamericana se construye en un ámbito compartido con Francisco. No sólo persiste una contraposición de ideas y objetivos. Mientras que el Vaticano continúa reclutando fieles para disuadir la lucha, la izquierda organiza protagonistas de la resistencia. Reforzar esta actitud combativa es tan importante como afianzar la identidad política de los socialistas. La izquierda del siglo XXI se define por su perfil anticapitalista. Batallar por los ideales comunistas de igualdad, democracia y justicia es la mejor forma de contribuir a un desemboque positivo del ciclo progresista.

Referencias

Aharonian, Aram (7 de diciembre de 2015), «Venezuela, ejemplo cívico..., ¿y ahora qué?», *Noticias de América Latina y el Caribe*, en <http://www.nodal.am/2015/12/venezuela-ejemplo-civico-y-ahora-que-por-aram>

- Arana, Silvia (1 de octubre de 2015), «Respuesta a los profetas del ‹fin de ciclo› latinoamericano. Los aciertos históricos de los gobiernos progresistas son innegables», *Rebelión*, en <http://www.rebelion.org/noticias/2015/10/203924.pdf>
- Arkonada, Katu (8 de septiembre de 2015a), «¿Fin del ciclo progresista o reflujó del cambio de época en América Latina? 7 tesis para el debate», *Rebelión*, en <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203029>
- Arkonada, Katu (2015b), «¿Fin de ciclo? La disputa por el relato», en <http://www.mdzol.com/opinion/646979-fin-de-ciclo-la-disputa-por-el-relato/>
- Aznárez, Carlos (7 de diciembre de 2015), «Venezuela: aún se está a tiempo de salvar la Revolución», *Resumen Latinoamericano*, en <http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/12/07/venezuela-aun-se-esta-a-tiempo-de-salvar-la-revolucion/>
- Carcione, Carlos (15 de octubre de 2015), «Una mirada desde Venezuela. Lo que viene en América Latina: ¿un nuevo ciclo o un periodo de grandes disputas?», *Rebelión*, en <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204490>
- Cieza, Guillermo (2015), «¿Fin de ciclo o fin de cuento?», en <http://contrahegemonia.web.com.ar/fin-de-ciclo-o-fin-de-cuento/>
- Colussi, Marcelo (2015), «Un espejo donde mirarse», en <http://www.aporrea.org/ideologia/a214219.html>
- Gómez Freire, Gonzalo (2015), «Para los que le echan la culpa a la ‹guerra económica› y al ‹pueblo desagrado›», en <http://www.aporrea.org/ideologia/a218577.html>
- Gudynas, Eduardo (7 de octubre de 2015), «La identidad del progresismo, su agotamiento y los relanzamientos de las izquierdas», *América Latina en movimiento*, en <http://www.alainet.org/es/articulo/172855>

- Guerrero, Modesto Emilio (2015), «La cuestión es que el gobierno nunca se propuso destruir al Estado capitalista», en <http://www.aporrea.org/actualidad/n282586.html>
- Guido, Emiliano y Maristella Svampa (13 de noviembre de 2014), «Entrevista a la socióloga Maristella Svampa. Cristina, el maldesarrollo y el progresismo sudamericano», *Rebelión*, en <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=191895>
- Isa Conde, Narciso (10 de diciembre de 2015), «Venezuela: causas, efectos y respuestas a un gran revés», *ABP Noticias*, en <http://www.abpnoticias.org/index.php/venezuela/2844-venezuela-causas-efectos-y-respuestas-a-un-gran-reves>
- Iturriza, Reinaldo (8 de diciembre de 2015), «Venezuela: después del 6-D no hay chavismo vencido», *Resumen Latinoamericano*, en <http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/12/08/venezuela-despues-del-6-d-no>
- Itzamná, Ollantay (24 de septiembre de 2015), «Latinoamérica emergente: ¿se acaba la esperanza?», *América Latina en movimiento*, en <http://www.alainet.org/es/articulo/172606>
- Puga Álvarez, Valeria (diciembre de 2015), «América Latina en disputa: contra la tesis del fin de ciclo progresista», *Cuadernos de Coyuntura*, en <http://coyuntura.sociales.uba.ar/america-latina-en-disputa-contrala-tesis-del-fin-de-ciclo>
- Rauber, Isabel (2015), «La clave del protagonismo popular. Gobiernos populares de América Latina, ¿fin de ciclo o nuevo tiempo político?», en <http://isabelrauber.blogspot.com.ar/2015/12/la-clave-del-protagonismo-popular.html>
- Rojas, Pablo y Miguel Mazzeo (2015), «Fin de ciclo, progresismo e izquierda. Entrevista con Miguel Mazzeo», en <http://contrahegemoniaweb.com.ar/hay-que-sembrarse-en-las-experiencias-del-pueblo>
- Sader, Emir (14 de septiembre de 2015a) «¿El final del ciclo (que no hubo)?», *América Latina en movimiento*, en <http://www.alainet.org/es/articulo/172389>

- _____ (4 de enero de 2016b), «La izquierda del siglo XXI», *Página 12*, en <http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-289505-2016-01-04.html>
- Stedile, João Pedro (24 de noviembre de 2015), «El imperio pasó a jugar más duro», *América Latina en movimiento*, en <http://www.alainet.org/es/articulo/173811>
- Szalkowicz, Gerardo (9 de diciembre de 2015), «Venezuela: golpe de timón o peligro de naufragio», *Marcha*, en <http://www.marcha.org.ar/venezuela-golpe-de-timon-o-peligro-de-naufragio/>
- Svampa, Maristella (25 de agosto de 2015), «Termina la era de las promesas andinas», *Clarín*, en https://www.clarin.com/rn/ideas/Termina-promesas-andinas_0_BJvEN4tv7e.html
- Teruggi, Marco (10 de diciembre de 2015), «Venezuela: recalculando (para vencer)», *América Latina en movimiento*, en <https://www.alainet.org/es/articulo/174167>
- Valderrama, Toby y Antonio Aponte (8 de diciembre de 2015), «Venezuela. El presidente Maduro y la revolución en su laberinto, ¿cómo resolver el enigma?», *Resumen Latinoamericano*, en <http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/12/08/venezuela-el-presidente-maduro-y-la-revolucion-en-su-laberinto-como-resolver-el-enigma/>
- Zibechi, Raúl (4 de agosto de 2015a), «Hacer balance del progresismo», *Resumen Latinoamericano*, en <http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/08/04/hacer-balance-del-progresismo/>
- _____ (27 de septiembre de 2015b), «Las tormentas que vienen», *La Jornada*, en <http://www.jornada.unam.mx/2015/11/27/opinion/024a2pol>
- _____ (30 de diciembre de 2016), «Crisis de los gobiernos progresistas», *Contrapunto*, en <http://www.contrapunto.com.sv/opinion/tribuna/crisis-de-los-gobiernos-progresistas>

Claves para descifrar el sistema imperial de innovación comandado por Estados Unidos

Raúl Delgado Wise*

Resumen. Un rasgo consustancial del capitalismo contemporáneo es la concentración y apropiación privada sin precedentes de los productos del *General Intellect* a través del patentamiento. Se trata de un fenómeno que atraviesa todos los poros de la sociedad capitalista y que, lejos de favorecer una ruta progresista de desarrollo de las fuerzas productivas, conduce a una fase regresiva en el avance del conocimiento, que profundiza el desarrollo desigual y atenta contra la naturaleza y la humanidad entera, a grado tal de convertirse en una amenaza de dimensiones y alcances civilizatorios. Este trabajo se propone contribuir en el desentrañamiento de la nueva arquitectura que caracteriza a los sistemas de innovación en la actualidad y que ha dado lugar a lo que aquí se concibe como un sistema imperial de innovación, con epicentro en Silicon Valley y su constelación de satélites a lo largo y ancho del planeta.

Palabras clave: sistema imperial de innovación, patentes, capitalismo neoliberal, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, apropiación del conocimiento.

* Director de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

Keys for deciphering the imperial innovation system
led by the United States

Abstract. One key trait of contemporary capitalism is the unprecedented concentration and private accumulation of the products of General Intellect through the patenting system. This phenomenon seeps through all the pores of capitalist society and —far from encouraging a progressive development path for the forces of production— drives a regressive phase in the advancement of knowledge that deepens unequal development and threatens nature and the whole of humanity, to the degree that it is a threat of immense scale and reach. This study intends to contribute to the unravelling of the new architecture that characterizes current innovation systems and which have given way to that which we conceive of as an imperial system of innovation, with its epicenter in Silicon Valley and its constellation of satellites which ring the entire planet.

Keywords: imperial system of innovation, patents, neoliberal capitalism, World Intellectual Property Organization, knowledge appropriation.

Introducción

Asistimos a una época en la que las patentes se han convertido en un aspecto consustancial a la lógica de reestructuración capitalista promovida por las grandes corporaciones multinacionales y los gobiernos imperialistas encabezados por Estados Unidos. Este fenómeno se produce en el marco de lo que Samir Amin (2013) concibe, con perspicacia, como la era de los monopolios generalizados. Los desbordantes niveles conseguidos por la concentración y centralización del capital han alterado el *modus operandi* propio de las esferas de producción, circulación y distribución del capital, lo que acentúa a grados extremos las contradicciones del sistema. Un aspecto clave y relativamente poco estudiado del proceso es la profunda reestructuración que experimentan los sistemas de innovación desde la década de 1990 y, con particular ímpetu, a partir del siglo XXI. En esos años la expansión, la concentración y la apropiación privada de los productos del *General Intellect* han alcanzado categorías y ritmos inimaginables, que penetran todos los poros de la sociedad capitalista y que, lejos de propiciar una ruta progresista de desarrollo de las fuerzas productivas, promueven una fase regresiva y oscurantista en el avance del conocimiento. Ello profundiza el desarrollo desigual y atenta contra la naturaleza y la humanidad entera, a tal punto que se convierte en una amenaza de dimensiones y alcances civilizatorios.

En efecto, en el curso de las últimas dos décadas y media se han producido drásticas transformaciones en las formas de generación y apropiación del conocimiento. Entre otros aspectos, las dinámicas de apropiación del trabajo científico-tecnológico por la vía del patentamiento se han expandido y crecido a ritmos sin parangón en la historia del capitalismo

contemporáneo. Se trata, en el fondo, de un viraje trascendental en la forma de operación y desarrollo de los sistemas de innovación, con epicentro en Estados Unidos, y cuyos artífices primordiales son las grandes corporaciones multinacionales. Una parte significativa de la lógica que subyace en los acuerdos de libre comercio en boga, tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo Transatlántico de Cooperación Económica (TTP, por sus siglas en inglés), reside en este proceso y en el tejido institucional de raigambre neoliberal que lo sustenta, impulsado por el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, más recientemente —como pieza clave de las nuevas dinámicas de innovación y apropiación de los productos del trabajo científico-tecnológico—, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés).

Al interior del argumento aquí presentado subyace la hipótesis de que los sistemas de innovación atraviesan por una profunda fase de reestructuración comandada por las grandes corporaciones multinacionales, sobre todo de origen estadounidense —con epicentro en Silicon Valley y sus satélites alrededor del mundo—, la cual da lugar a una desbordante carrera por la generación y concentración de patentes. Bajo el nuevo andamiaje, que al lema «¡acumulad, acumulad!», agrega la proclama de «¡patentad, patentad!», el capital monopolista, en su insaciable afán de lucro, torna en su contrario el carácter progresista que Marx atribuyó al desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad durante el capitalismo: una senda que atenta contra la naturaleza y contra la vida misma. Lo anterior no sólo cuestiona la noción de desarrollo sino que promueve la generación de nuevos modos de intercambio desigual que acentúan las asimetrías entre países, agudizan las

desigualdades sociales, al tiempo que desajustan los mecanismos del sistema y lo sumergen en una profunda crisis que amenaza a la humanidad entera y de la que en apariencia no ha podido encontrar más que falsas salidas; es el caso de la financiarización, el extractivismo, el acaparamiento de tierras (*land grabbing*) y la sobreexplotación salarial.

A manera de contextualización: radiografía del capital monopolista

Un primer rasgo omnipresente en el capitalismo contemporáneo es el hecho de que, como en ninguna otra época de su larga historia, el capital monopolista se ha convertido en el agente dominante de la economía política internacional. Su influencia es tal que, como se indicó al comienzo, Samir Amin (2013) se refiere a la época actual como la de los monopolios generalizados. A través de megafusiones y alianzas estratégicas, esta fracción del capital ha llegado a niveles de concentración y centralización inimaginables: «Las mayores compañías del mundo (aquellas con más de mil millones [de dólares estadounidenses] en ventas anuales) (...) dan cuenta de aproximadamente 60 por ciento del ingreso, 65 por ciento de la capitalización de mercado y 75 por ciento de las ganancias [mundiales]» (McKinsey Global Institute, 2015:21). No es, empero, un simple cambio cuantitativo, sino una profunda transformación cualitativa en las formas de organización y dominio del capital monopolista basadas en la financiarización, el saqueo de recursos naturales de los países periféricos y las ventajas comparativas derivadas del arbitraje laboral global, es decir, la persistencia de significativos diferenciales salariales entre países y regiones.

En esencia, comprende una reestructuración del capital monopolista a escala planetaria, la cual ha dotado al imperialismo contemporáneo de un nuevo rostro (Suwandy y Foster, 2016) que se caracteriza, entre otros elementos, por:

1. La *financiarización* vinculada al ascenso y predominio del capital financiero sobre otras fracciones del capital (Bello, 2005). Ante la falta de inversiones redituables en la esfera productiva por la crisis de sobreproducción desencadenada a fines de la década de 1970, el capital comienza a trasladarse hacia la especulación financiera (Brenner, 2002). Asimismo, con la presión «a la baja» ejercida en los salarios reales mediante el arbitraje laboral global, se promueve una explosión de deudas encabezada por el sector financiero, la cual posibilita que la producción encuentre canales de realización, aunque sean endebles e insustentables. Ocurre así la financiarización de la clase capitalista, del capital industrial y de las ganancias corporativas, que impulsa una explosión de capital ficticio, de títulos financieros sin contraparte en la producción material (Foster, 2010). En opinión de Sergio Rodríguez Lascano (2015), implica una mutación del ciclo básico del capital D-M-D' en D-D'.

2. La configuración de *redes globales de capital monopolista* generadas a partir de una estrategia de reestructuración encabezada por las grandes corporaciones multinacionales que, por medio de operaciones de *outsourcing* y cadenas de subcontratación, extienden segmentos de sus procesos productivos, comerciales, financieros y de servicios a los países periféricos en busca de mano de obra flexible y barata. Un claro ejemplo de esa estrategia son las plataformas de exportación que operan como economías de enclave en los países periféricos.

El giro hacia lo que algunos autores, entre ellos Gary Gereffi y Timothy Sturgeon (2013), caracterizan como cadenas globales de valor ha sido

espectacular: «Las 100 mayores corporaciones globales han desplazado su producción hacia sus filiales extranjeras [en concreto en el Sur], donde ahora se localizan cerca de 60 por ciento del total de sus bienes y empleados y más de 60 por ciento de sus ventas a nivel global» (UNCTAD, 2010). En realidad entraña un «nuevo «nomadismo» surgido al interior del sistema de producción global, en el que la selección de localidades se determina en buena parte a partir de dónde es más barata la mano de obra» (Foster *et al.*, 2011a:18). En esa perspectiva, cabe destacar que: *a*) al menos 40 por ciento del comercio mundial se asocia a operaciones de *outsourcing*, incluyendo subcontrataciones y comercio intrafirma entre filiales de una misma compañía (Andreff, 2009); y *b*) se estima que en la periferia capitalista hay 85 millones de trabajadores directamente empleados en más de 3 mil 500 zonas de procesamiento para la exportación ubicadas en 130 países (McKinsey Global Institute, 2012).

La estrategia de reestructuración en cuestión ha modificado la geografía global de la producción; en la actualidad poco más de 70 por ciento del empleo industrial se localiza en países periféricos (Foster *et al.*, 2011b). Lo significativo de la estrategia es que descansa en el aprovechamiento y la profundización de las brechas salariales entre países y regiones; esto es, el llamado arbitraje laboral global que para autores como Intan Suwandi y John Bellamy Foster (2016) constituye el rasgo distintivo del imperialismo contemporáneo. Bajo tal mecanismo, las grandes corporaciones multinacionales logran obtener ganancias extraordinarias con el establecimiento de límites a la libre movilidad de la más importante mercancía para la acumulación de capital: la fuerza de trabajo (Delgado y Martín, 2015).

3. El *extractivismo* y el *nuevo extractivismo* (Gudynas, 2015) en alusión a la creciente apropiación y exportación de minerales, petróleo y gas de

los países periféricos por las grandes corporaciones extractivas nacionales y multinacionales, a través de la sobreexplotación de recursos naturales y la consecuente expropiación de bienes comunes, lo que exacerba los conflictos sobre territorios y aguas (Veltmeyer, 2013). Ello ha traído consigo severas consecuencias para el medio ambiente a causa de la minería a tajo o cielo abierto, el *fracking*, el gas lutitas, etcétera.

Dado que los ingresos de varias de las corporaciones multinacionales más poderosas del mundo dependen de la extracción, la producción y el consumo de combustibles fósiles, lo más probable es que este patrón persista, situación que ahondará aún más la crisis ecológica y sus efectos sobre el calentamiento global y el cambio climático. La nueva ola extractivista originada por la reestructuración neoliberal ha empeorado la degradación ambiental, no sólo al expandir la geografía de la destrucción, también con la estrategia del arbitraje ambiental regulatorio de parte del capital extractivo (Xing y Kolstad, 2002).

4. El *acaparamiento* o *control de la tierra* y recursos naturales por los agonegocios (*land grabbing*). Este fenómeno se relaciona a cambios en los regímenes alimentarios acompañados de dinámicas de financiarización, procesos de acumulación por desposesión (que han implicado un brutal despojo de campesinos y pueblos originarios), alteraciones en los patrones de cultivo (monocultivo, uso de transgénicos, etcétera) y daños severos e irreversibles al entorno natural (pérdida de biodiversidad, destrucción de suelos, quebranto de la soberanía alimentaria, etcétera) (Borras *et al.*, 2012). En este caso, se produce también una notable expropiación de bienes comunes, con la consecuente exacerbación de los conflictos sobre territorios y aguas.

El otro efecto de la profunda reestructuración y el espectacular crecimiento de la concentración y centralización del capital monopolista

es, precisamente, la brutal embestida desencadenada en contra de la clase trabajadora y los sectores populares en todos los rincones del planeta. En ese sentido, otra pieza fundamental del imperialismo contemporáneo es la reconfiguración de la división internacional del trabajo, en la que la fuerza de trabajo figura de manera abierta, a tono con la perspectiva marxista planteada por Emmanuel (1972) para analizar el intercambio desigual, como la principal mercancía de intercambio entre países centrales y periféricos, lo que ocasiona la aparición de nuevas y extremas formas de intercambio desigual (Márquez y Delgado, 2011). La dinámica de creciente internacionalización de las finanzas, la producción, el comercio y los servicios, propia del capitalismo neoliberal, se acompaña de una creciente fragmentación de la geografía mundial y un desbordante aumento de las desigualdades sociales a niveles inusitados hasta hace poco:

Tan sólo ocho personas (ocho hombres en realidad) poseen ya la misma riqueza que 3 mil 600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad. La súper concentración de riqueza sigue imparable. El crecimiento económico tan sólo está beneficiando a los que más tienen. El resto, la gran mayoría de ciudadanos de todo el mundo y especialmente los sectores más pobres, se están quedando al margen de la reactivación de la economía. El modelo económico y los principios que rigen su funcionamiento nos han llevado a esta situación que se ha vuelto extrema, insostenible e injusta. Es hora de plantear una alternativa (Oxfam, 2017:1).

Este «orden» o desorden planetario encierra profundas y peligrosas contradicciones (Harvey, 2014) que desde la década de 1970 han sumergido al capitalismo mundial en una crisis aguda que abrió la puerta a la

implantación del neoliberalismo y que persiste hasta la fecha. En efecto, la Hidra capitalista con sus nuevos rostros —en alusión a la extraordinaria metáfora capitalista que alude al régimen del capital— sólo ha encontrado falsas y limitadas salidas a la crisis que le dio origen y, peor aún, lejos de abrir caminos hacia una fase sostenida de crecimiento de la economía mundial, a cada paso ha contribuido a profundizarla y a *la tormenta*. En palabras de Humberto Márquez (2010:67):

La crisis que afronta el capitalismo contemporáneo representa una ruptura en el proceso de expansión capitalista promovido por los países centrales, encabezados por Estados Unidos, desde la década de los setenta. Se trata de una reestructuración fallida que ha hecho colapsar al centro mismo del sistema capitalista mundial, sobre todo a sus centros financieros e industriales más dinámicos, y que se ha transmitido con prontitud hacia todos los sectores, circuitos y rincones del capitalismo. Sin embargo, no podemos perder de vista que la estrategia de reestructuración y expansión ha cumplido con creces su cometido principal: concentrar capital, poder y riqueza en manos de una delgada elite de capitalistas transnacionalizados y, en contrapartida, ha deteriorado de manera drástica las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población.

Por consiguiente, nos hallamos en una grave crisis multidimensional: financiera, económica, social, cultural y ecológica, que no sólo ha puesto en jaque al sistema capitalista, sino que al poner en predicamento las fuentes materiales de la vida —el trabajo y la naturaleza— ha adquirido proporciones civilizatorias. En el trasfondo de esta compleja e intrincada trama subyace una quinta dimensión de la metamorfosis experimentada

por el capital monopolista: la vasta reestructuración operada en los sistemas de innovación a partir de la década de 1990, la cual es fundamental en la comprensión de las contradicciones esenciales que caracterizan al capitalismo contemporáneo.

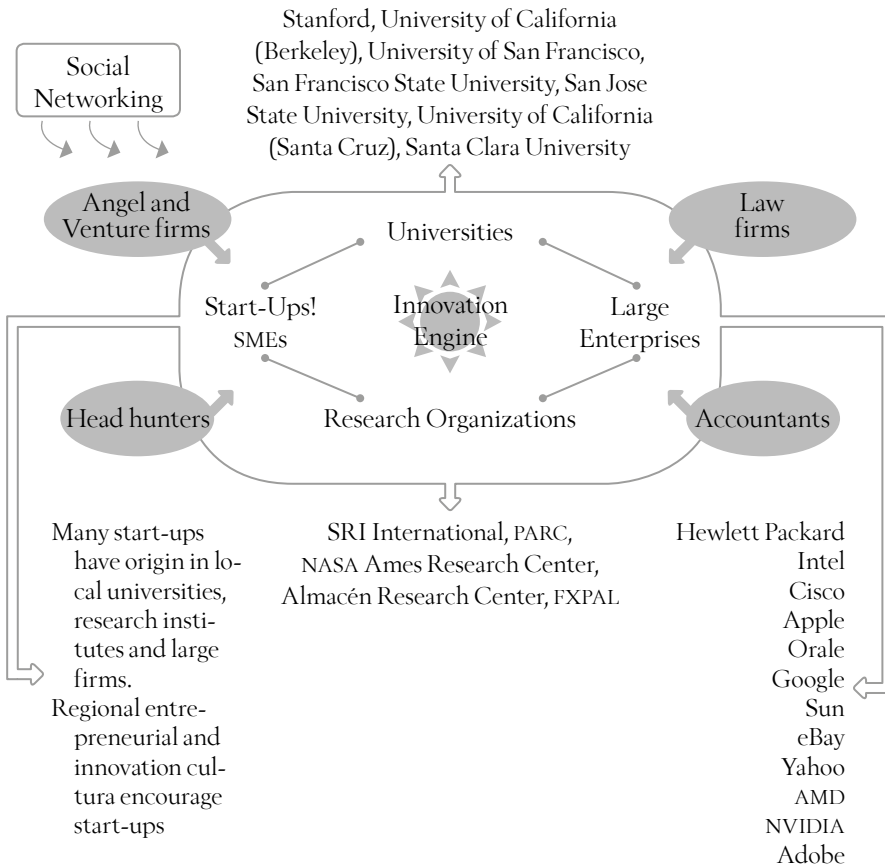
Claves para descifrar la reestructuración de los sistemas de innovación

Las formas tradicionales de comprender los sistemas de innovación, como la triple hélice o el triángulo de Sábato, resultan anacrónicas e inapropiadas para desentrañar las nuevas dinámicas de «desarrollo» científico y tecnológico. Hablar de sistema nacional de innovación es igualmente inadecuado para captar la complejidad de los ecosistemas dominantes. Al respecto, tomando como referente el caso paradigmático de Silicon Valley y sus satélites, es posible distinguir cuatro ejes que, en grandes pinceladas, describen las dinámicas de generación y apropiación del trabajo científico-tecnológico promovidas bajo la égida del capitalismo neoliberal (Delgado, 2015).

a) Internacionalización y fragmentación de las actividades de investigación y desarrollo en alusión a la preeminencia de modalidades «colectivas»: *peer-to-peer, share economy, commons economy* y *crowdsourcing economy* de innovación, a través de lo que se conoce como innovación abierta (*open innovation*). Son modalidades de invención «extramuros», fuera del entorno de la corporación multinacional, que entrañan una apertura y redistribución espacial de actividades intensivas en conocimiento, con la creciente participación de socios externos a las grandes corporaciones multinacionales

(*start-ups*, proveedores de capital de riesgo, clientes, subcontratistas, *head hunters*, firmas de abogados, universidades y centros de investigación), lo que ha fomentado la permanente configuración y reconfiguración de redes de innovación (véase figura 1).

Figura 1. Representación gráfica del ecosistema de Silicon Valley

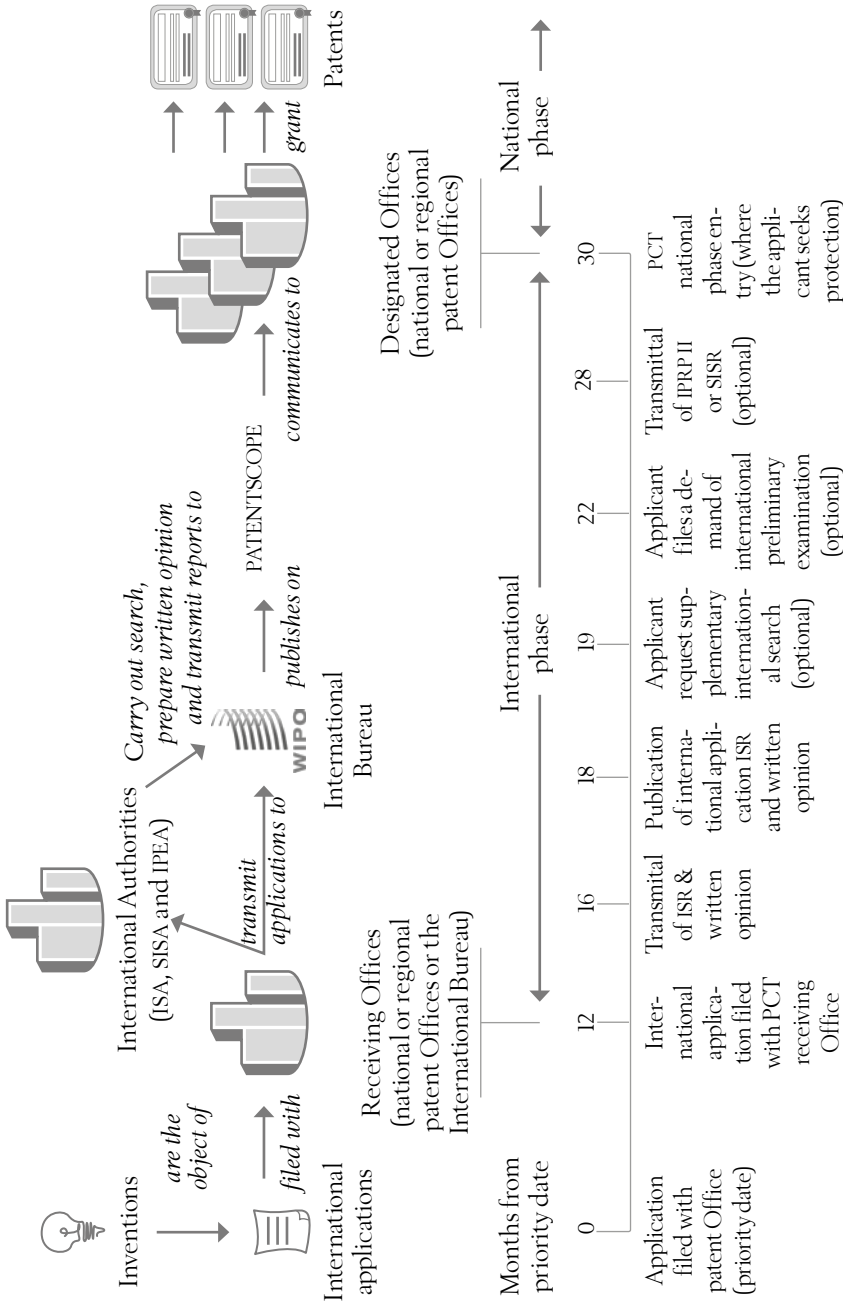


Fuente: Strategic Business Insights.

b) *Ciudades científicas*, por medio de las cuales se crean sinergias colectivas que conducen a una aceleración de la investigación y el desarrollo y, en consecuencia, de la innovación. Consiste, de acuerdo con AnnaLee Saxenian (2002 y 2006), en un nuevo paradigma que se aparta de los viejos modelos «cerrados» de investigación y desarrollo, y hace factible una *nueva cultura de la innovación* basada en la flexibilidad, la descentralización y la incorporación, bajo diferentes modalidades, de nuevos y cada vez más numerosos jugadores que interaccionan en espacios locales y transnacionales. Silicon Valley figura como el pivote de una nueva arquitectura de la innovación mundial, a cuyo alrededor se tejen múltiples eslabones periféricos que operan como una suerte de maquiladoras científicas localizadas en regiones, ciudades y universidades de todo el mundo.

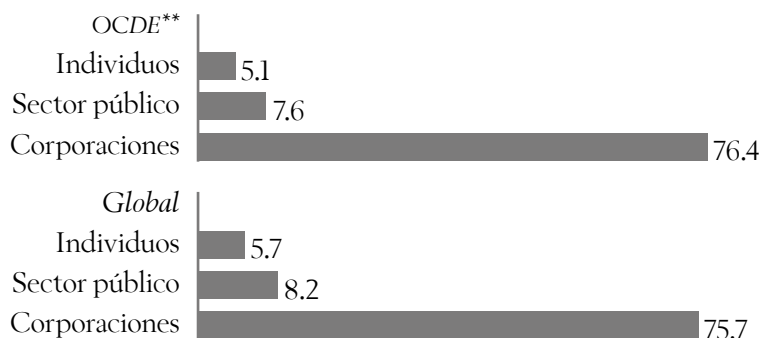
c) Nuevas formas de *control de las agendas de investigación y de apropiación de los productos del trabajo científico* —es decir las patentes— por las grandes corporaciones multinacionales (CMN) a través de multivariadas formas de subcontratación, asociación, manejo y diversificación del capital de riesgo. Y lo más importante, la disposición de *equipos especializados de abogados* que negocian con los potenciales subcontratistas y operan a la manera de *head hunters*, pues conocen los entretelones de la operación de la nueva y compleja arquitectura de los sistemas de patentamiento, establecidos en el Tratado de Cooperación sobre patentes de la WIPO (véase figura 2). A las nuevas formas de gestión y control de las agendas de innovación y apropiación de patentes (véase figura 3) se les conoce como *strategic investment* (Galama y Josek, 2008).

Figura 2. Tratado de Cooperación sobre Patentes de la WIPO



Fuente: *Patent Cooperation Treaty-WIPO (2015)*.

Figura 3. Solicitudes de patentes según tipo de solicitante
PCT-WIPO* 1996-2010



*Patent Cooperation Treaty (PCT), World International Patent Organization (WIPO).

**Países de la OCDE (no incluye a México, Chile y Turquía).

Fuente: estimaciones propias con datos de Miguelez & Fink (2013).

d) *Expansión en el horizonte Norte-Sur de la fuerza de trabajo en áreas de ciencia, tecnología, innovación y matemáticas* y el creciente reclutamiento de fuerza de trabajo altamente calificada proveniente de las periferias vía *outsourcing* y *offshoring*. La migración altamente calificada desempeña un papel cada vez más relevante en los procesos de innovación, circunstancia que propicia una paradójica y contradictoria dependencia del Sur respecto del Norte: cada vez más los generadores de patentes son originarios de países periféricos; según datos de la WIPO, en 2014 aproximadamente la mitad provenía de esas latitudes, no obstante que alrededor de 75 por ciento de las patentes fueron concentradas y apropiadas por corporaciones multinacionales (véase figura 3).

Teniendo en cuenta este nuevo escenario, que perfila lo que podría concebirse como la implantación de un *sistema imperial de innovación*,

a continuación se describirá la estrategia en materia de derechos de propiedad intelectual seguida por Estados Unidos a partir de 1990. No debe perderse de vista —atendiendo a lo reseñado en este apartado— que las patentes encierran una permanente y creciente tensión entre los beneficios de las grandes corporaciones, los intereses de los innovadores y las necesidades de los consumidores y de la sociedad en general. En dicha tensión es, precisamente, donde el «derecho internacional» impuesto por los organismos internacionales al servicio de Estados Unidos devela, sin ambages, su carácter eminentemente parcial a favor de las primeras.

Las patentes como instrumentos de apropiación del *General Intellect*

Desde finales de la década de 1980, en Estados Unidos inició una tendencia a legislar *ad hoc*, de conformidad con los intereses estratégicos de las grandes corporaciones concernientes a la propiedad intelectual (Messitte, 2012). Con las regulaciones impulsadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) —Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Díaz, 2008; Guerrero y Gutiérrez, 2011)— dicha normatividad se expandió a escala global durante las negociaciones para la suscripción y puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio (TLC) (García, 1998). Las negociaciones se realizaron a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, quien a su vez ha protegido y representado los intereses de las industrias intensivas en el uso de la propiedad intelectual y farmacéutica, Business Software Alliance (BSA) en derechos de autor y la Pharmaceutical Research

and Manufacturers of America (PhRMA) en patentes farmacéuticas (Díaz, 2008).¹ Por su carácter multilateral las disputas acerca de propiedad intelectual al seno de la OMC tienden a ser complejas, de ahí que la estrategia estadounidense contemple asimismo la negociación bilateral de TLC, a fin de controlar mercados y acrecentar ganancias corporativas.

Dentro de los procesos de intercambio comercial, un aspecto medular de los TLC ha sido favorecer a los inversionistas (léase, las grandes corporaciones multinacionales), mediante la extensión y ampliación de la cobertura de patentes y la flexibilización de requisitos de patentamiento, dejando de lado las funciones que, en principio, debieran cumplir las propias patentes: asegurar que la creación cumpla con los requisitos de invención, originalidad y aplicabilidad socioeconómica, así como difundir el conocimiento incorporado en la invención y evitar con ello la duplicación de esfuerzos (Díaz, 2008). En otras palabras, los TLC atentan contra la naturaleza de bien común que debiera tener el conocimiento, en tanto motor del progreso y desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad.

Impactos de los acuerdos comerciales

En primer lugar, uno de los impactos importantes —y no tan obvio— es la adhesión de países periféricos a los convenios relacionados con patentes,²

¹ Estas industrias enfrentan altos costos de investigación y desarrollo (I+D), mientras que el costo marginal de reproducción de los nuevos bienes es muy reducido; las patentes les proveen de una ventaja competitiva de mercado.

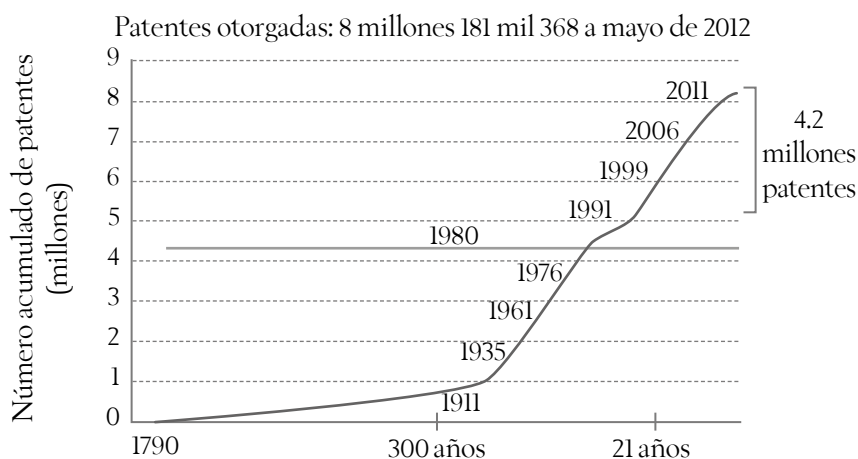
² Cabe apuntar que parte de la agenda del TPP por el convenio bilateral Estados Unidos-Unión Europea es penetrar en los mercados internos de varios países de la Unión Europea, donde el arribo de las grandes corporaciones multinacionales ha sido contenido mediante normas internas de protección.

además de la adecuación interna de sus leyes sobre propiedad intelectual. Esto ha ocurrido sin que tales modificaciones guarden conexión alguna con el nivel interno de desarrollo de la ciencia y la tecnología. En opinión de Shadlen (2011:68), «México adoptó un sistema de patentes que es apropiado para un país con infraestructura científica, tecnológica e industrial significativamente más avanzada». Lo anterior cobra mayor sentido aún si se considera que la generación de patentes se vincula con el gasto en investigación y desarrollo, el tipo de inversión que se lleva a cabo en investigación científica aplicada o innovación patentable y la capacidad de absorción de conocimientos tecnológicos (Díaz, 2008). *A contrario sensu*, si no operara la lógica corporativa e imperialista referida, la legislación correspondiente a propiedad intelectual debería ser diametralmente distinta, lo que permitiría a los países periféricos desarrollar sus capacidades endógenas en ciencia, tecnología e innovación.

En segundo lugar, entre 1991 y 2011 se promovió una dinámica desbordante de crecimiento en el plano del patentamiento, sintetizada en el lema antes referido y por lo demás ajeno a una visión positiva y equitativa del progreso: «¡patentad, patentad!» En efecto, como se aprecia en la figura 4, en las dos décadas referidas se generaron en Estados Unidos más patentes que en 300 años de historia previa. Este desproporcionado y espectacular crecimiento, aunque se asocia estrechamente con la lógica de la reestructuración de los sistemas de innovación descrita en el primer apartado, entraña también una cierta ampliación, vulgarización y aprisionamiento (*enclosure*) de lo que materialmente tiene sentido patentar y que daña la lógica del conocimiento como bien común, en tanto producto del *General Intellect* conforme a la definición de Marx de trabajo científico. Más aún, en ocasiones se trata de patentes adquiridas con la finalidad

de no aplicarlas o postergar su aplicación para que el capital monopolista controle y regule los mercados, dando lugar a lo que Guillermo Foladori (2014) concibe como «ciencia ficticia» por su carácter especulativo, que semeja la noción acuñada por Marx de capital ficticio.

Figura 4. Evolución de las patentes registradas en Estados Unidos



Fuente: Smith (2010).

A tono con lo hasta aquí referido, del cuadro 1 se desprende que Estados Unidos despunta como la primera potencia capitalista del mundo en materia de innovación,³ al concentrar 28 por ciento de la totalidad de patentes gestionadas. Al considerar al total de países de la OCDE —sin incluir a México, Chile y Turquía— se aprecia que, en conjunto, concentran 90

³ En sintonía con su dominio en el plano de las patentes, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia imperialista del planeta, como se ha planteado a lo largo de este trabajo, al dominar también en el área de las corporaciones multinacionales, la moneda mundial, la fuerza militar y al ejercer control sobre los principales organismos internacionales: BM, FMI, OMC y WIPO.

por ciento de las solicitudes mundiales de patentes. Asimismo, se observa un bajo nivel de participación de América Latina y el Caribe en la generación de patentes, cuyo aporte al cúmulo global de solicitudes consignadas fue de apenas 0.7 por ciento.

Cuadro 1
Solicitudes de patentes, PCT-WIPO* 1996-2010

<i>País</i>	<i>Solicitudes patentes</i>	<i>País</i>	<i>Solicitud patentes</i>
Total global	4 482 343		
Total OCDE**	4 032 186	América Latina y el Caribe	30 366
Primeros 10 países	3 673 953	Primeros seis países de América Latina y el Caribe	26 778
Estados Unidos	1 237 060		
Japón	710 516	Brasil	12 779
Alemania	627 460	México	6 335
Reino Unido	216 480	Argentina	2 966
Francia	212 571	Colombia	1 673
China	208 665	Chile	1 522
República de Corea	183 584	Cuba	1 503
Canadá	102 917		
Países Bajos	93 105		
Suecia	81 595		

*Patent Cooperation Treaty (PCT), World International Patent Organization (WIPO).

**No incluye a México, Chile y Turquía.

Fuente: estimaciones propias con datos de Miguelez & Fink (2013).

Cuadro 2

Solicitud de patentes: balance en el horizonte Norte-Sur (1990-2010)

<i>Dirección de flujos</i>	<i>Periodo 1990-2010</i>	<i>Año</i>		<i>Tasa de crecimiento</i>	<i>Distribución porcentual</i>		
		<i>1990</i>	<i>2010</i>	<i>1990-2010</i>	<i>1990-2010</i>	<i>1990</i>	<i>2010</i>
Total	820 072	2 922	91 720	18.8	100.0	100.0	100.0
Sur-Norte países no OCDE a países OCDE*	317 946	654	39 936	22.8	38.8	22.4	43.5
Norte-Sur países OCDE a países no OCDE*	23 598	54	3 822	23.7	2.9	1.8	4.2
Norte-Norte países OCDE a países OCDE*	464 900	2 208	45 880	16.4	56.7	75.6	50.0
Sur-Sur países no OCDE a países no OCDE*	13 628	6	2 082	34.0	1.7	0.2	2.3

Patent Cooperation Treaty (PCT), World International Patent Organization (WIPO). *No se incluye a México, Chile y Turquía.

Fuente: estimaciones propias con datos de Miguelez & Fink (2013) y países firmantes del PCT (WIPO, 2017).

Tras este aumento acelerado de las solicitudes de patentes se registra, por un lado, un incremento de las solicitudes extranjeras en países periféricos. Así, en el caso de México, con la entrada en vigor del TLCAN

se da un proceso de sustitución de patentes nacionales por extranjeras (Díaz, 2008). Por otro lado, y de manera un tanto paradójica, en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos se percibe una tendencia hacia el aumento de solicitudes de extranjeros, principalmente provenientes de países del Sur.

En tercer lugar, es en la industria farmacéutica donde se presentan los efectos más visibles de las legislaciones aprobadas con relación a quiénes ganan y quiénes pierden. Los ganadores son las grandes corporaciones multinacionales, con dividendos provenientes de mercados monopólicos y de compensaciones por atrasos «injustificados» en la tramitación de patentes y permisos de comercialización; mientras que los perdedores suelen ser los consumidores finales, que no pueden adquirir los medicamentos a los precios de monopolio impuestos, ni acceder, por efecto de los derechos de exclusividad encarnados en las patentes, a medicamentos genéricos (Luna, 2012; Lindner, 2012). A esto último se agrega la regla 90-10, aquella que alude a que 90 por ciento de la investigación se dirige a enfermedades que afectan a 10 por ciento de la población (Stiglitz, 2010 citado en Berasaluce y Ruiz, 2012).

En cuarto lugar, el arbitraje internacional en materia de propiedad intelectual ha resultado ser un negocio bastante lucrativo para las grandes corporaciones y los bufetes de abogados especializados, en detrimento de los gobiernos demandados y, a final de cuentas, del ciudadano común. Van Harten y Malysheuski (2016) estiman que los montos agregados en transferencias de los Estados demandados hacia los inversionistas fue de 9 mil 164 millones de dólares en 214 casos y 856 millones de dólares hacia la industria del arbitraje inversionista-Estado (véase diagrama 1).

Diagrama 1. Ganancias de los arreglos en disputas inversionista-Estado (ISDS) (millones por caso adjudicado en paréntesis)

<i>Grandes ganadores</i>		<i>Ganadores modestos</i>		<i>Perdedores modestos</i>		<i>Grandes perdedores</i>	
1. Compañías extragrandes: 6 mil 526 millones (136)		5. Otros individuos: 145 millones (3)		7. Compañías con ingreso desconocido: 10 millones (-0.2)		8. Estados demandados: -10 mil 020 millones (-47)	
2. Industria ISDS: mil 712 millones (8)		6. Compañías medianas y pequeñas: 36 millones (2)					
3. Individuos súper ricos: 984 millones (45)							
4. Grandes compañías: 628 millones (17)							

Notas: 1) Ingreso anual > 10 millones de dólares; 2) Abogados y mediadores. 3) Riqueza neta > 100 millones de dólares de dólares. 4) 10 billones de dólares > Ingreso anual > 1 billón de dólares. 5) Riqueza neta < 100 millones de dólares. 6) y 7) 1 billón de dólares < Ingreso anual < 100 millones de dólares.

Fuente: Van Harten y Malysheuski (2016:12-13).

Por último, y como efecto de las regulaciones internacionales referidas, muchos países son orillados a adherir agendas de investigación en ciencia y tecnología que devienen en consecuencias nefastas para sus economías y sociedades en cuestiones financieras, económicas y medioambientales. Van Harten (2011) alude a este fenómeno como una suerte de compra de soberanía por parte de las grandes corporaciones multinacionales.

Reflexiones finales

La reestructuración de los sistemas de innovación constituye un mirador privilegiado para analizar y comprender el significado y las implicaciones de los modos de apropiación del conocimiento que distinguen a la globalización neoliberal y que subyacen a la lógica de dominación que acompaña a los TLC promovidos por las grandes corporaciones multinacionales y las principales potencias imperialistas, encabezadas por Estados Unidos. No son acuerdos en los que todos los participantes ganan, son estrategias que profundizan las dinámicas de desarrollo desigual que caracterizan al capitalismo contemporáneo. Conducen asimismo a una carrera desenfrenada hacia la expansión y apropiación de los productos del *General Intellect* bajo una perspectiva de obtención de ingentes ganancias monopólicas a cualquier costo.

Todo indica, en ese sentido, que nos encontramos ante una crisis, con visos de terminal, de la modernidad capitalista, que reclama avanzar hacia una modernidad alternativa, es decir, una modernidad no capitalista que «implique una verdadera abundancia y una verdadera emancipación (...) una modernidad que nunca fue, que nunca existió, no —como dice Habermas— completar el proyecto de modernidad, sino inventar otra distinta que fue posible incluso desde antes y que fue reprimida y negada, y hasta ahora postergada» (Echeverría, 2011:290). Se trata, en el fondo, de avanzar hacia una ruta de transformación social radical, centrada en las necesidades sociales y en armonía con la naturaleza, que entrañe, entre otros elementos, la defensa a ultranza de los bienes comunes tangibles e intangibles (Laval y Dardot, 2015).

Referencias

- Amin, Samir (2013), *The Implosion of Capitalism*, London, Pluto Press.
- Andreff, Wladimir (2009), «Outsourcing in the New Strategy of Multinational Companies: Foreign Investment, International Subcontracting and Production Relocation», *Papeles de Europa* (18), pp. 5-34.
- Bello, Walden (2005), *Dilemmas of Domination: The Unmaking of the American Empire*, New York, Metropolitan Books.
- Berasaluce Iza, Julen y Salvador Francisco Ruiz Medrano (2012), «Patentes y otros incentivos a la innovación. Perspectiva económico-legal aplicada al caso de medicamentos», en Héctor Arturo Oropeza García y Víctor Manuel Guízar López (coords.), *Los retos de la industria farmacéutica en el siglo XXI. Una visión comparada sobre su régimen de propiedad intelectual*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Cofepris, pp. 351-376.
- Borras, Saturnino, Jennifer Franco, Sergio Gómez, Cristóbal Kay & Max Spoor (2012), «Land grabbing in Latin America and the Caribbean», *The Journal of Peasant Studies*, 39(3-4), pp. 845-872.
- Brenner, Robert (2002), *The Boom and the Bubble: The US in the World Economy*, New York, Verso.
- Delgado Wise, Raúl (2015), «Unraveling Mexican Highly-Skilled Migration in the Context of Neoliberal Globalization», in Stephen Castles, Magdalena Arias Cubas & Derya Ozkul (eds.), *Social Transformation and Migration: National and Local Experiences in South Korea, Turkey, Mexico and Australia*, United Kingdom, Palgrave MacMillan, pp. 201-218.
- Delgado Wise, Raúl & David Martin (2015), «The political economy of global labour arbitrage», in Kees van der Pijl (ed.), *The International Political Economy of Production*, Cheltenham, Edward Elgar, pp. 59-75.

- Díaz, Álvaro (2008), *América Latina y el Caribe: la propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Dobbs, Richard et al. (2012), *The World at Work: Jobs, Pay, and Skills for 3.5 billion People*, McKinsey Global Institute in http://www.mckinsey.com/insights/employment_and_growth/the_world_at_work/19/03/2015
- _____ (2015), *Playing to Win: The New Global Competition for Corporate Profits*, en file:///C:/Users/Raul/Downloads/MGI%20Global%20Competition_Full%20Report_Sep%202015.pdf
- Echeverría, Bolívar (2011), *Antología. Crítica de la modernidad capitalista*, La Paz, Oxfam/Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Emmanuel, Arghiri (1972), *El intercambio desigual: ensayo sobre los antagonismos en las relaciones económicas internacionales*, México, Siglo XXI.
- Foladori, Guillermo (2014), «Ciencia ficticia», *Estudios Críticos del Desarrollo* 4(7), pp. 41-66.
- Foster, John Bellamy (2010), «The Financialization of the Capitalist Class: Monopoly-Finance Capital and the New Contradictory Relations of Ruling Class Power», in Henry Veltmeyer (ed.), *Imperialism, Crisis and Class Struggle: The Enduring Verities and Contemporary Face of Capitalism*, Boston, Brill Publishers.
- Foster, John Bellamy, Robert McChesney & Jamil Jonna (2011a), «The Internationalization of Monopoly Capital», *Monthly Review*, 63(2), pp. 3-18.
- _____ (2011b), «The Global Reserve Army of Labour and the New Imperialism», *Monthly Review*, 63(6), pp. 1-15.
- Fulton, Deirdre (January 15th 2015), «Don't buy the hype: 20 years of data reveals 'Free Trade' fallacies», *Common Dreams*, in <http://www.common>

dreams.org/news/2015/01/15/dont-buy-hype-20-years-data-reveals-free-trade-fallacies

Galama, Titus & James Hosek (2008), *US Competitiveness in Science and Technology*, Santa Mónica, Research and Development Corporation (RAND).

García Moreno, Víctor Carlos (1998), «El capítulo XVII del TLCAN y su influencia en la nueva Ley Mexicana del Derecho de Autor», en Manuel Becerra Ramírez (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 103-116.

Gereffi, Gary & Timothy Sturgeon (2013), «Global value chain-oriented industrial policy: the role of emerging economies», in Deborah Elms & Patrick Low (eds.), *Global value chains in a changing world*, Geneva, World Trade Organization, pp. 329-360.

Gudynas, Eduardo (2015), *Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza*, Bolivia, Centro de Documentación e Información Bolivia.

Guerrero Castro, Rodrigo y Roberto Gutiérrez (2011), «Los ADPIC y el TLCAN en la industria farmacéutica mexicana: un análisis TradeCAN», *Nueva Época* (35), pp. 93-129.

Harvey, David (2014), *Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo*, Quito, Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.

Laval, Christian y Pierre Dardot (2015), *Común: ensayo sobre la revolución en el siglo XXI*, Barcelona, Gedisa.

Luna, Alejandro (2012), «Patentes de invención. Patentes farmacéuticas, protección de datos clínicos y otros temas de interés para la industria farmacéutica en México», en Héctor Arturo Oropeza García y Víctor Manuel Guízar López (coords.), *Los retos de la industria farmacéutica en el siglo XXI. Una*

- visión comparada sobre su régimen de propiedad intelectual*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Cofepris, pp. 391-424.
- Márquez, Humberto (2010), «La gran crisis del capitalismo neoliberal», *Andamios* (13), pp. 57-84.
- Messitte, Peter (2012), «Desarrollo del derecho de patentes estadounidense en el siglo XXI. Implicaciones para la industria farmacéutica», en Héctor Arturo Oropeza García y Víctor Manuel Guízar López (coords.), *Los retos de la industria farmacéutica en el siglo XXI. Una visión comparada sobre su régimen de propiedad intelectual*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Cofepris, pp. 179-200.
- Miguelez, Ernest & Carsten Fink (may 2013), «Measuring the international mobility of inventors: a new database», WIPO, *Working Paper No. 8*, en http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_8.pdf
- Oxfam (2017), «Una economía para el 99%. Es hora de construir una economía más humana y justa al servicio de las personas», en <http://www.oxfam.mx/wp-content/uploads/2017/01/bp-economy-for-99-percent-160117-es.pdf>
- Rodríguez Lascano, Sergio (2015), «Apuntes sobre el pensamiento crítico vs las mutaciones de la Hidra», en *El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista II*, México, EZLN, pp. 434-455.
- Secretaría de Economía (6 noviembre 2015), «Capitulado completo del Tratado de Asociación Trans-Pacífico (TPP) versión español», en <http://www.gob.mx/tpp#textos>
- Saxenian, AnnaLee (2002), *Local and Global Networks of Immigrant Professionals in Silicon Valley*, San Francisco, Public Policy Institute of California.
- _____ (2006), *The New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy*, Boston, Harvard University Press.

- Shadlen, Kenneth (2011), «Propiedad intelectual para el desarrollo en México», en Kevin Gallagher, Enrique Dussel Peters y Timothy Wise (eds.), *El futuro de la política de comercio en América del Norte: lecciones del TLCAN*. Estados Unidos-México: Pardee Center Task Force Report/Universidad Autónoma de Zacatecas/Global Development and Environment Institute/Boston University/Frederick S. Pardee Center/Universidad Nacional Autónoma de México, en http://www.ase.tufts.edu/gdae/policy_research/pardee.html
- Suwandi, Intan y John Bellamy Foster (2016), «Multinational Corporations and the Globalization of Monopoly Capital. From the 1960s to the Present», *Monthly Review*, 68(3).
- United Nations Conference on Trade and Liberalization (UNCTAD) (2010), *World Investment Report 2010*, Nueva York, UNCTAD.
- Van Harten, Gus & Pavel Malysheuski (2016), «Who has benefited financially from investment treaty arbitration? An evaluation of the size and wealth of claimants», *Osgoode Legal Studies Research Paper*, 12(14).
- Van Harten, Gus (2011), «Reformando el régimen de inversión del TLCAN», en Kevin Gallagher, Enrique Dussel Peters y Timothy Wise (eds.), *El futuro de la política de comercio en América del Norte: lecciones del TLCAN*. Estados Unidos-México: Pardee Center Task Force Report/Universidad Autónoma de Zacatecas/Global Development and Environment Institute/Boston University/Frederick S. Pardee Center/Universidad Nacional Autónoma de México, en http://www.ase.tufts.edu/gdae/policy_research/pardee.html
- Veltmeyer, Henry (2013), «The Political Economy of Natural Resource Extraction: A New Model or Extractive Imperialism?», *Canadian Journal of Development Studies*, 34(1), pp. 79-95.

World Intellectual Property Organization (WIPO) (2017), «The PCT now has 152 Contracting States», in http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html

Xing, Yuqing & Charles Kolstad (2002), «Do Lax Environmental Regulations Attract Foreign Investment?», *Environmental and Resource Economics*, 21(1), pp. 1-22.

Los buenos convivires

Filosofías sin filósofos, prácticas sin teorías

Alberto Acosta*

Resumen. El mundo vive un «maldesarrollo» generalizado, incluyendo a los países desarrollados. Atrás quedaron las promesas de la modernidad y su idea de progreso. El desarrollo se desvanece y con ello sus preceptos Estado-céntricos y el mercado como macroinstitución organizadora de la economía. El desencanto se expande y el cuestionamiento configura un escenario de posdesarrollo. Las propuestas oscilan desde alternativas que pretenden superar los conceptos dominantes a partir de la matriz del progreso, atravesando la visión del mundo indígena que recupera sus orígenes y prácticas ancestrales para proyectarse hacia el futuro, hasta quienes tratan de tender puentes entre estas orillas para construir otros contextos donde la vida con dignidad sea posible. El concepto de desarrollo está sujeto a crítica; se convierte en una entelequia que norma la vida de gran parte de la humanidad, que no puede alcanzarlo. Varias de las propuestas alternativas provienen de grupos tradicionalmente marginados, conquistados y permanentemente explotados. El Buen Vivir es una categoría central de «la filosofía de vida» en diversas sociedades indígenas que no se insertan (plenamente) en la modernidad; de ahí que se proyecte como una propuesta con potencial global.

Palabras clave: Buen Vivir, mercado, Estado, derechos de la naturaleza, Ecuador.

* Profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Ecuador.

The kinds of Living Well

Philosophies without philosophers, actions without theories

Abstract. The world is experiencing a generalized period of «bad development», and that includes the developed countries. The promises of modernity and its idea of progress have been left behind. Development is fading away and with it the precepts of the centrality of the State and the market as the economy-organizing macro-institution. The disillusionment grows and a reconsideration leads to a post-development context. Recommendations oscillate between alternatives that aim to overcome the dominant ideas drawn from the progressive matrix; to a vision from the indigenous world that revisits their origins and ancestral practices to update them for the future; to those that attempt to build bridges between these positions in order to construct new contexts where a life with dignity could be possible. The concept of development is subject to criticism; it has become a pipe dream, but one that dictates the lives of a great part of humanity that is unable to attain it. Many of the alternative proposals come from groups that are typically marginalized, defeated and permanently exploited. *Buen Vivir* is a central concept of the «philosophy of life» in various indigenous societies that are not (completely) integrated into modernity; from there arises an alternative with potentially global reach.

Keywords: Living Well, market, state, rights of nature, Ecuador.

La difusión del imaginario del «Vivir Bien»
no sólo pretende mostrar al mundo
que otros modos de vida son posibles...
el imaginario del Buen Vivir propone
otra comprensión del mundo.

Enrique Leff

Palabras preliminares

En diversas partes del planeta, a partir de una renovada crítica al desarrollo, cada vez son más quienes cuestionan las ideas convencionales del progreso. Muchos recuperan y proponen alternativas que superan los conceptos dominantes desde la propia matriz del progreso; otros, en particular en el mundo indígena, rescatan sus orígenes y fortalecen sus prácticas ancestrales con la intención de proyectarse hacia el futuro. No faltan incluso aquellos que tratan de tender puentes entre esas orillas, desde las que se podría potenciar la construcción de diversos mundos donde la vida con dignidad sea una posibilidad.

Es una realidad que paulatinamente quedan atrás aquellas promesas del desarrollo que se nutren de la idea del progreso emergida con la modernidad. Es notorio el desvanecimiento de las ilusiones que aparecieron con inusitada fuerza a raíz del cuarto punto del discurso del presidente Harry Truman de Estados Unidos en su alocución frente a la nación, el 20 de enero de 1949, cuando propuso el objetivo del desarrollo para superar la situación contraria, el subdesarrollo. Situación que dio lugar a la cruzada más amplia y sostenida de la historia de la humanidad: conseguir el desarrollo, pensándolo sobre todo, con fundamento en posturas Estado-céntricas,

en las que el mercado, como gran institución organizadora de la economía, no estuvo ni está ausente.

La búsqueda del desarrollo ha sido, y es todavía, incesante. Se ha oscilado desde las versiones más economicistas que lo identifican con el crecimiento del producto interno bruto (PIB) a las más complejas del desarrollo a escala humana o del desarrollo sustentable. Sin embargo, en la medida en que el desencanto se expande por el mundo, surgen interrogantes que van configurando un escenario de posdesarrollo.¹ Las críticas desnudan los errores y las limitaciones de las múltiples visiones, concepciones y teorías del desarrollo. Lo que subyace es que ahora se cuestiona ese concepto transformado en una entelequia que norma y rige la vida de un número considerable de la humanidad, a la que perversamente le es imposible alcanzar el tan ansiado desarrollo.

Simultáneamente se constata que también aquellos países que se asumen como desarrollados aparecen presos en la trampa del progreso. Basta con observar las señales inequívocas de graves contradicciones, conflictos y dificultades en Estados Unidos, Europa o Japón: crecientes brechas que separan a los ricos de los pobres, insatisfacción inclusive en los sectores beneficiarios de una mayor acumulación material, incapacidad de responder a una crítica situación económica que no encuentra salida con las herramientas tradicionales, entre otras. Lo anterior aunado a la destrucción de la naturaleza que continúa imparable. Al mismo tiempo, los países del mundo empobrecido siguen dependiendo de las lógicas de acumulación del capital transnacional, en el que se desempeñan los extractivismos.²

¹ Para profundizar en dicha evolución se recomienda el importante aporte de Koldo Unceta (2014).

² La cuestión de la dependencia sigue vigente. Al respecto, véase Acosta (2016).

En síntesis: el mundo vive un «maldesarrollo» generalizado, incluyendo aquellos países considerados como desarrollados. En palabras de José María Tortosa (2011):

El funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es «maldesarrollador» (...) La razón es fácil de entender: es un sistema basado en la eficiencia que trata de maximizar los resultados, reducir costes y conseguir la acumulación incesante de capital (...). Si «todo vale», el problema no es de quién ha jugado qué, cuándo, sino que el problema son las mismas reglas del juego. En otras palabras, el sistema mundial está maldesarrollado por su propia lógica y es a esa lógica a donde hay que dirigir la atención.

Este «maldesarrollo» no aqueja por igual a todos los países, es más evidente en los países periféricos que en las metrópolis capitalistas. Lo anterior explicita porqué afloran cada vez más concepciones alternativas en diversas partes del planeta, contemplando las regiones con sociedades que han alcanzado mejores niveles de vida. Lo destacable y profundo de estas propuestas alternativas es, sin embargo, que muchas provienen desde grupos tradicionalmente marginados, conquistados y permanentemente explotados. Los pueblos indígenas procuran mantener sus valores, experiencias y prácticas. Se trata de propuestas y experiencias originarias de pueblos considerados como ancestrales. En ese sentido, a través de un proceso de crítica y auto-crítica, el presente texto recoge varias de las reflexiones citadas. Por tanto, así como se ratifican algunas cuestiones, se plantean nuevos asuntos y dudas. De manera que el debate y la reflexión a lo largo del artículo es permanente.³

³ Esta puntualización es relevante considerando que el autor de estas líneas discute dicha cuestión desde hace algún tiempo. Destacan dos libros en particular (Acosta, 2005, 2013), con

¿Qué entendemos por Buen Vivir?

En principio, debemos reconocer que mientras buena parte de las posturas sobre el desarrollo convencional y muchas de las corrientes críticas se desenvuelven dentro de los conocimientos occidentales de la modernidad, las visiones alternativas son alterativas en tanto escapan a los límites de la civilización capitalista dominante establecidos por el antropocentrismo y el utilitarismo. De ello se discutirá en las siguientes líneas, en específico de las visiones de los pueblos del Abya Yala: América desde la llegada de los conquistadores europeos.

Las expresiones que remiten al Buen Vivir o Vivir Bien⁴ provienen de lenguas indígenas de América del Sur, tradicionalmente marginadas, pero no desaparecidas, como el *Sumak Kawsay* (en kichwa), el *suma qamaña* (en aymara), el *ñande reko* o *tekó porã* (en guaraní) y el *pénker pujústin* (en shuar). Existen nociones similares en otros pueblos indígenas, por ejemplo entre los mapuches de Chile, los kunas de Panamá y en la tradición maya de Guatemala y de Chiapas, México. Si bien son numerosos los movimientos indígenas que alientan estas tesis, no puede afirmarse que haya movimientos sociales del Buen Vivir en cuanto tales.

Interesa destacar que este tipo de enfoques y propuestas —similares en muchos aspectos, mas no necesariamente iguales— también se encuentran presentes en otros lugares con varios nombres y características.

ediciones actualizadas publicadas en francés (2014), alemán (2015), portugués (2016), aparte de una primera versión en Ecuador (2012).

⁴ La lista de textos que abordan el tema es cada vez más amplia. Conviene conocer los aportes de Oviedo Freire (2011), Huanacuni Mamani (2010), Gudynas (2014), Estermann (2014) y Solón (2016). Es posible también leer visiones emparentadas que resultan provechosas, como Houtart (2011).

Se trata de valores, experiencias y particularmente prácticas existentes en diferentes periodos y regiones de la Madre Tierra. Es indispensable destacar el *ubuntu* (sentido comunitario: una persona es una persona sólo a través de las otras y de los seres vivos) en África⁵ o el *swaraj* (democracia ecológica radical) en India (Kothari, Demaria y Acosta, 2015). Las propuestas originarias de América Latina entraron en el debate nacional en un momento de crisis generalizada del Estado nación, oligárquico y de rai-gambre colonial, así como del neoliberalismo, gracias a la creciente fuerza organizativa y programática de los movimientos indígenas, en alianza en ocasiones con otras fuerzas populares.

Resalta la irrupción de los movimientos indígenas, en tanto vigorosos sujetos políticos. Ello explica la emergencia y el posicionamiento de las ideas paradigmáticas del Buen Vivir, propias de un mundo indígena al que no consiguieron destruir los procesos de conquista y colonización, manifestados en la época republicana. Asimismo, comenzaron a consolidarse los cuestionamientos y las alternativas ecologistas, muchas de ellas sintonizadas con la visión de las armonías con la naturaleza que distinguen el Buen Vivir. Esas visiones contestatarias, sobre todo las indígenas, cuentan con profundas raíces y una gran actualidad. El Buen Vivir encarna visiones filosóficas de pueblos indígenas, que no son equiparables con las filosofías occidentales; por el contrario, son filosofías vivas sin filósofos profesionales, son prácticas sin teorías, son experiencias comunitarias y memorias colectivas, más que conceptos fríos, son vivencias cotidianas.

Es necesario aclarar que el Buen Vivir no sintetiza ninguna propuesta totalmente elaborada ni indiscutible, no emerge de reflexiones académicas

⁵ Una breve aproximación al tema está disponible en D'Alisa, Demaria y Kallis (2015).

ni de propuestas partidarias. Tampoco pretende volverse un mandato global único como sucedió con el concepto de desarrollo a mediados del siglo XX. Si el Buen Vivir proviene de una matriz andino-amazónica milenaria, con otras racionalidades y otros sentipensares,⁶ es muy complejo, si no imposible, entenderlo utilizando el instrumentario teórico de la modernidad.

Estas cosmovisiones plantean opciones distintas a la occidental al surgir de raíces comunitarias no capitalistas, armónicamente relacionadas con la naturaleza. Por tanto, el Buen Vivir propone una transformación de alcance civilizatorio al ser biocéntrica en lugar de antropocéntrica; comunitaria, no sólo individualista; sustentada en la pluralidad y la diversidad, no unidimensional, ni monocultural. Para lograrlo, se precisa de un profundo proceso de decolonización⁷ intelectual en lo político, lo social, lo económico y lo cultural.

Debe entenderse que al hablar de Buen Vivir (como se dice en Ecuador, o de Vivir Bien, como se acostumbra en Bolivia) se piensa en plural, es decir, imaginamos buenos convivires y no un Buen Vivir único y homogéneo que resulta imposible cristalizar. Estos buenos convivires (o Buen Vivir, así se continuará presentando en el resto del texto, pero pensando siempre en plural) pueden abrir la puerta a caminos que deben ser imaginados, por un lado para ser construidos; pero por el otro ya son una realidad. Ahí radica el gran potencial de estas visiones y experiencias. Todavía más: de acuerdo con Enrique Leff (2010), el imaginario del Buen Vivir no sólo ofrece otras formas de cómo organizar la vida sino diferentes maneras

⁶ Uno de los tratadistas más connotados en este tema es el colombiano Arturo Escobar (2014), quien ofrece valiosas reflexiones.

⁷ Entre los diferentes autores que han estudiado la colonialidad del poder, resalto los aportes del brillante pensador peruano Aníbal Quijano (2014) sobre esta cuestión y otras más.

para comprender el mundo. Esas dos cuestiones sintetizan su mayor potencial.

Puede decirse en consecuencia que el Buen Vivir es una vivencia eminentemente subversiva de futuro. No sintetiza una simple invitación para retroceder en el tiempo y reencontrarse con un mundo idílico, inexistente por lo demás. No obstante, para ser realmente transformadora, no puede convertirse en una suerte de religión con su catequismo, manuales, ministerios, comisarios políticos. En efecto, existen muchos límites, que emergen cuando se reclaman soluciones nacionales o internacionales desde lo que propone el Buen Vivir; una labor compleja si entendemos que las prácticas conocidas del Buen Vivir se afincan especialmente en el ámbito comunitario. Ese límite no representa un freno que impida reflexionar acerca de cómo se podrían introducir criterios del Buen Vivir en los otros ámbitos estratégicos de acción: los niveles estatal e internacional.

En principio, en los saberes indígenas no existe una idea análoga a la de desarrollo, tampoco la concepción de un proceso lineal de la vida que establezca un estado anterior y posterior de subdesarrollo y desarrollo; dicotomía por la que deberían transitar las personas y los países para la consecución del bienestar, como ocurre en el mundo occidental. De modo semejante, no existen conceptos de riqueza y pobreza determinados por la acumulación y la carencia de bienes materiales. Además es importante ver al ser humano como un actor más en la naturaleza, no como su corona.

El Buen Vivir tiene como postulado rector la armonía: la vida en armonía del ser humano consigo mismo, de los individuos viviendo armónicamente en comunidad; esa armonía habría que extrapolarla a pueblos y naciones, y luego, individuos y comunidades deberán armonizar con la

naturaleza. Dicha concepción plantea un incesante y complejo flujo de interacciones y de intercambios. El dar y el recibir, en un interminable proceso de reciprocidades y solidaridades, constituye la base del Buen Vivir. Se asume entonces la postura ética que debe regir la vida de un ser humano: cuidar de sí mismo y de los demás seres vivos. Por tanto, incorpora una relación de armonía con la naturaleza, con sus ritmos, ciclos y movimientos. Dentro de ese mundo de armonías, se encuentra la vida por sobre cualquier otra consideración. Se diría que interesa la reproducción de la vida y no la del capital.

De cualquier manera, en la medida en que los conceptos de Buen Vivir deben ser comprendidos desde diferentes enfoques y visiones, es necesario obviar la homogenización de concepciones en tanto restringen visiones y comprensiones de los otros. Pese a aquello, el núcleo de los debates encierra la perspectiva holística de ver a la vida en comunidad y a la *Pacha Mama* (Madre Tierra) en relación y complementariedad entre los unos y los otros. Ambos elementos, comunidad y naturaleza, establecen las bases para la construcción de las propuestas del Buen Vivir; no obstante, falta algo, el mundo espiritual de las culturas indígenas es esencial en el Buen Vivir, su *Sumak Kawsay*.

Tal cosmovisión, que para ser comprendida requiere de la historia y del presente de los pueblos indígenas, es en esencia parte de un proceso sustentado en el principio de continuidad histórica. El pasado y el futuro se fusionan en un presente de reconstrucción y construcción de dichas alternativas. La comunidad indígena, sin idealizarla, en términos amplios tiene un proyecto colectivo a futuro. Las utopías andinas y amazónicas se plasman de diversas maneras en su discurso (inclusive económicas), proyectos políticos y prácticas sociales y culturales.

Esta aproximación no debería ser excluyente y conformadora de visiones dogmáticas. Ese es el riesgo cuando se quiere no sólo diferenciar sino separar lo que es el Buen Vivir de lo que representaría el *Sumak Kawsay*. Es indispensable complementar y ampliar conceptos y vivencias incorporando otros discursos y propuestas prácticas provenientes de distintas regiones del planeta, espiritualmente emparentadas en la lucha por una transformación civilizatoria. Incluso puede ser enriquecedor establecer un diálogo con alternativas que todavía disputan el sentido histórico en los márgenes de la modernidad. Cada una de las iniciativas debe fundamentarse y tomar en cuenta el contexto correspondiente, con la participación de los múltiples sujetos políticos portadores del cambio.

El mundo indígena es lo que es en la actualidad. Un mundo que ha sido víctima de la conquista y la Colonia, en tanto proceso de dominación, explotación y represión de la larga noche colonial, que se proyecta hasta nuestros días republicanos. La influencia novohispana y capitalista se manifiesta a través de múltiples formas, hecho que cierra la puerta a aproximaciones románticas con respecto a la realidad indígena.

Debemos prestar atención a fin de no manipular el concepto del Buen Vivir, al desvirtuar sus sentidos y sus alcances. Ello sucede en Ecuador y Bolivia, pues no es significativo que esta cosmovisión —Buen Vivir o Vivir Bien, incluyendo su traducción en las lenguas indígenas— se haya incorporado en la Constitución de la República de Ecuador en 2008 y en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia en 2009. En la práctica, en estos países —donde se habla incluso de *socialismo del buen vivir*, *socialismo comunitario*, *biosocialismo*— se despliega un neodesarrollismo sustentado en un desbocado extractivismo, con el cual se quieren financiar procesos orientados a la modernización del capitalismo.

De esa forma, no se puede caer en «la trampa» de la propaganda del Buen Vivir de los gobiernos de ambos países, que han terminado por vampirizar dicho concepto para ponerlo al servicio de sus apetencias de concentración de poder y de disciplinar a sus sociedades. Así, el Buen Vivir funciona como dispositivo de poder para modernizar el capitalismo, lo que constituye una verdadera aberración. No debe olvidarse que el Buen Vivir, como alternativa al desarrollo y cuestionador del concepto tradicional del progreso, propone una propuesta civilizatoria que reconfigura un horizonte de salida al capitalismo fuera de las visiones de la modernidad.

El Buen Vivir, una utopía realizada en el mundo indígena

Es necesario insistir que el Buen Vivir, en tanto sumatoria de prácticas vivenciales de resistencia al colonialismo y sus secuelas, nutre un modo de vida en varias comunidades indígenas, en especial en aquellas que no han sido totalmente absorbidas por la modernidad capitalista o que han resuelto mantenerse al margen de ella. Pero aún en las comunidades que «han sucumbido» a la modernidad, hay elementos propios de lo que podríamos entender por Buen Vivir.

Inclusive en otros espacios, no vinculados directamente con el mundo indígena, se construyen opciones de vida comunitarias armoniosas entre sus miembros y la naturaleza. No obstante, en el hipotético caso de que estas comunidades indígenas llegaran a desaparecer, podríamos imaginar otros mundos aprendiendo de lo que fueron sus vivencias y sus valores, acotándolos a otras realidades sociales y culturales.

Un punto de partida para comprender mejor el Buen Vivir podría ser una aproximación «filosófica», si cabe ese término. Desde la lectura de los significados de la *chakana*, la cruz andina o cruz sagrada, se podrían extraer valiosas lecciones para entender el significado de la unidad en la diversidad, la cual mantiene una permanente tensión de reciprocidad, complementariedad, relacionalidad, correspondencia entre los distintos componentes de la vida.⁸

A pesar de que en este artículo no se profundiza sobre las bases conceptuales y filosóficas de las culturas indígenas, sin duda son elementos fundamentales del Buen Vivir y complejos para quienes se consideran hijos de la modernidad. Atawallpa Oviedo Freire, destacado estudioso de la materia, propone no traducir el *Sumak Kawsay* a ningún idioma puesto que se deformaría su espíritu y se perdería su potencial transformador.

Se corre el riesgo además de dar paso a renovados dogmatismos y purismos, no sólo a acciones burocratizadoras desde los gobiernos progresistas. Sin adentrarnos en esta discusión, se rescata la posibilidad de asumir el Buen Vivir como un concepto abierto, reconociendo sus raíces indígenas, desde donde es posible comenzar a construir otros mundos, sin negarse a un amplio y enriquecedor debate con otros saberes y conocimientos.

Lo anterior implica valorar de modo adecuado los saberes considerados ancestrales, a la vez que se asume lo difícil que resulta definir su ancestralidad. Para hacerlo, es preciso establecer un puente de relaciones respetuosas entre saberes y conocimientos. De igual modo, poner las tecnologías al

⁸ La lista de textos sobre este asunto es vasta y muy importante. Aquí se sugiere la lectura del trabajo elaborado por la Universidad Intercultural Amawtay Wasi (2004) publicado en tres idiomas: kechwa, español e inglés. La universidad fue cerrada por el gobierno de Rafael Correa porque no se ajustaba a los criterios establecidos para la educación superior en función de su proyecto neodesarrollista, modernizador del capitalismo.

servicio de la vida y no de la acumulación del capital. Existen posibilidades que impiden que las tecnologías se vuelvan presas de los designios de la acumulación del capital. Vale la pena recordar que el sistema operativo de *software* libre más extendido y conocido es el Ubuntu, su lógica funciona de la siguiente forma: una vez que alguien hace uso de su creación la cede libremente a quien desee mejorarla, así la primera persona creadora podrá beneficiarse aún más en el futuro.

El prerrequisito ineludible consiste en disponer de sistemas para desarrollar y apropiarse de los avances de la ciencia y la tecnología, que se nutran de manera activa y respetuosa de los saberes y conocimientos ancestrales. Deben recuperarse las prácticas que han perdurado hasta ahora o que pueden ser aprehendidas conociendo su historia. Tales casos son especialmente relevantes si se considera que muchas de esas experiencias han sobrevivido centurias de colonización y marginación. En paralelo, se recomienda aprender también de aquellas historias trágicas o fracasadas de culturas desaparecidas por diversas razones (errores, agresiones a la naturaleza, desigualdad, violencia), así como de los procesos abiertos todavía, de manera que se puedan obtener elementos que permitan construir soluciones innovadoras para los actuales desafíos sociales y ecológicos. Los conocimientos ancestrales nos brindan innumerables lecciones y muchos de ellos son aprovechados y patentados por las empresas transnacionales, especialmente los productos agrícolas medicinales andinos o amazónicos (para producir cosméticos).

En sí, es prioritario reducir las diversas formas de dependencia existentes (en tecnología, patrones de consumo, métodos de administración, sistemas de educación de valores, normas, expectativas, etcétera) a fin de enfrentar los graves problemas acumulados desde la Colonia hasta las

actuales repúblicas. Es indispensable una transformación de la modalidad de acumulación primario-exportadora. Para lograrlo deben desnudarse las condiciones intrínsecas en ese tipo de economías dependientes, antes de diseñar una estrategia que permita aprovechar de manera inteligente los recursos naturales, como parte de una adecuada planificación, y arribar a un esquema posextractivista.

Desde el ámbito político, en concreto de la toma de decisiones, es interesante reconocer que en las comunidades y en los *ayllus*⁹ en numerosos sitios de las regiones andina y amazónica, el Buen Vivir muestra un estilo y una forma de gobierno diferentes. Asimismo, plantea la construcción de una sociedad fundamentada en la horizontalidad, lo que demanda democracia directa, acción comunitaria y autogestión. No hay espacios para nuevas formas de imposición vertical y menos aún liderazgos individuales e iluminados. A través de discusiones amplias y participativas se avanza hacia consensos, que luego son sostenidos por la comunidad. Nuestra lógica de democracia tiene mucho que aprender de tales experiencias.

Un punto esencial, que será detallado con posterioridad, es que la solución no se halla en el Estado como lo conocemos (menos aún en el mercado). Es imprescindible pensar en otro tipo de Estado —quizá un Estado plurinacional, como proponen los movimientos indígenas de Bolivia y Ecuador—,¹⁰ que pueda contribuir a la construcción de una sociedad no jerarquizada ni autoritaria siempre que sea controlado desde abajo, desde lo comunitario. ¿Cómo recuperar la política en tanto espacio vivo de la sociedad?

⁹ Se entiende como *ayllu* al conjunto de familias emparentadas por rasgos de consanguinidad y afinidad.

¹⁰ Tampoco se ha avanzado significativamente en esta cuestión en Bolivia y mucho menos en Ecuador.

Respecto a lo social y lo económico, las lecciones son múltiples. En principio, el trabajo es clave en el Buen Vivir. Este último se entiende como una institución grupal de construcción de sociedad y de ayuda recíproca en el ámbito comunitario. Por tanto, el trabajo está destinado hacia el bien común de la población y no para la acumulación individual; se espera que el resultado final sea positivo para todos, como plantea ingenuamente el liberalismo económico. En el Buen Vivir se trabaja con la intención de satisfacer las necesidades e intereses colectivos de la comunidad; en las prácticas —no sólo económicas— los cimientos que se destacan son reciprocidad, solidaridad, correspondencia y relacionalidad, propios de los saberes andino y amazónico.

Sin pretender agotar el tema y sin intentar insinuar que tales formas productivas deben ser aplicables en cualquier tipo de situación económica, se exponen ciertas formas de relaciones económicas propias de las comunidades indígenas:

Minka (minga). Institución de ayuda recíproca en el ámbito comunitario. Asegura el trabajo destinado para el bien común de la población. Se realiza con la finalidad de satisfacer necesidades e intereses colectivos, por ejemplo en la construcción y el mantenimiento de un canal de riego o de un camino. Se trata entonces de un mecanismo laboral colectivo muy potente. Es interesante constatar que la *minka* o *minga* ha influenciado a otros grupos humanos, fuera del mundo indígena, en especial en ámbitos populares.

Ranti-ranti (randi-randi). A diferencia del trueque puntual y único de algunas economías mestizas, el intercambio forma parte de una cadena que desata una serie interminable de transferencias de valores, productos y jornadas de trabajo. Se sustenta en el principio de dar y recibir sin

determinar un rango de tiempo, acción y espacio, vinculado con valores concretos de la comunidad con referencia a la ética, la cultura y el contenido histórico. También se encuentra en otros espacios sociales, donde inclusive se le conoce como «el presta manos».

Uyanza. Es un momento para llamar a la convivencia y unidad de las comunidades, así como una ocasión para agradecer a la *Pacha Mama* por su capacidad de regeneración, es decir, por los productos que brinda a los seres humanos. Adicionalmente, es una institución de ayuda social y reconocimiento a las familias que dieron su fuerza laboral en préstamo.

Uniguilla. Actividad destinada al intercambio para complementar lo alimentario, lo utilitario; permite mejorar la dieta con productos de otras zonas, sobre todo a partir de diferentes pisos o nichos ecológicos.

Waki. Otorgación de tierras cultivables al partir a otra comunidad o familia que trabaja en el terreno. Involucra la repartición de los productos cultivados entre ambas comunidades o familias. Esta actividad también se efectúa en el cuidado y crianza de animales.

Makikuna. Apoyo moral que involucra a la comunidad, familia ampliada, amigos, vecinos, en el momento que más requiere una familia; obedece a situaciones imprevistas y a emergencias.

Estas formas de organización económica han permitido a muchas comunidades indígenas enfrentar el olvido y la exclusión del sistema colonial y republicano. Además, han ayudado a las comunidades a sostener su producción en condiciones muy adversas, al estimular la creatividad y fomentar un ahorro atado a las demandas sociales. Son igualmente potentes articuladores de rituales culturales y ceremoniales de convocatoria y cohesión de las comunidades, así como espacios de intercambio de normas socioculturales.

Es obvio que este tipo de formas de organizar la producción y el consumo generan complicaciones cuando se las concibe en espacios más amplios, no comunitarios. Pretender integrarlas en la episteme de la microeconomía o de la macroeconomía convencionales, aparece como algo irrealizable. Quizá se podría reflexionar sobre el potencial que existe en estas prácticas para enriquecer el funcionamiento productivo de una economía, pensándolas desde su lógica cultural. Sin embargo, tales opciones podrían conducir simplemente a adecuar el Buen Vivir a las demandas empresariales dominantes de la modernidad, no a superarla, hecho que por cierto desvirtuaría el Buen Vivir. El reto es imaginar y luego construir economías pensadas desde la reciprocidad, la solidaridad, la correspondencia, pero sobre todo desde las armonías.

Otro punto fundamental radica en el reconocimiento de que el Buen Vivir no puede circunscribirse al mundo rural. Es cierto que las propuestas básicas, rápidamente descritas, provienen en especial de esos ámbitos. Los actuales espacios urbanos, signados por un ritmo frenético e individualizante, parecieran relativamente lejanos a una vida solidaria y respetuosa del ambiente. Este es uno de los más grandes y complejos desafíos: pensar el Buen Vivir para y desde las ciudades. Diversas son las opciones de asumir el reto, por ejemplo en América Latina, gran parte de los inmigrantes a las urbes aún mantienen lazos estrechos con sus comunidades de origen. En Bolivia se han formado grupos cuya meta es construir/reconstruir formas de Vivir Bien en El Alto.¹¹

¹¹ Véase las memorias del Encuentro de Movimientos y organizaciones urbanas «Vivir Bien/ Buen Vivir desde contextos urbanos», El Alto, La Paz (Bolivia), del 28 de abril al 5 de mayo de 2013 (Unceta, 2014).

En otras partes del mundo existen prácticas y propuestas múltiples e interesantes. Destacan aquellas que se conocen como «comunidades de transición» (*transitions towns*), las cuales pretenden dotar de control a las mismas comunidades para soportar el desafío del cambio climático y de la construcción de una economía pospetrolera. Este movimiento se encuentra activo en varios países del mundo.¹²

Buen Vivir, base para otra economía

Con el objeto de resaltar ciertas lecciones de la economía del Buen Vivir es necesario conocer las limitaciones de la economía convencional, de acuerdo con los elementos fundacionales de la cosmovisión indígena. En concreto lo que podríamos entender como justicia social y justicia ecológica, íntimamente interrelacionadas, pues no hay la una sin la otra y viceversa.

Si se plantea superar la explotación de la naturaleza en función de la acumulación del capital, con mayor razón habrá que dejar atrás la explotación del ser humano. Esto implica poner en entredicho muchas «verdades», en principio la que sostiene que el crecimiento económico es indispensable para resolver los problemas de la humanidad.

El crecimiento económico permanente no va más

En un mundo finito no hay espacio para un crecimiento económico permanente. Seguir por esa senda nos conduciría a una situación cada vez más

¹² Los orígenes de la propia *Energiewende* pueden ser incorporados en este esfuerzo de construcción de otro mundo desde las comunidades, véase Tadzio Müller (2015).

insostenible en términos ambientales y más explosiva en términos sociales. Superar tal crecimiento económico, en específico en el Norte global, deberá ligarse al posextractivismo en el Sur global.¹³ Se ha comprobado cómo el crecimiento económico, provocado por la voracidad del capital, que acumula produciendo y especulando, se genera sobre bases de crecientes desigualdades. Es evidente que la inequidad social, tan propia del capitalismo, en tanto civilización de la desigualdad, es una cuestión que se registra a escala global e inclusive de manera creciente en las economías consideradas como exitosas, donde aumentan cada vez más los grados de frustración e infelicidad.

Basta observar algunas cifras de la inequitativa distribución de la riqueza en el mundo, pues apenas 1 por ciento de la población posee más riqueza que el resto (99 por ciento), según datos de Oxfam (2016); además, en 2015 sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 3 mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). Sin embargo, la riqueza en manos de las 62 personas más acaudaladas del mundo ha incrementado 44 por ciento únicamente en cinco años y aquella de la mitad más pobre cayó en más de un billón de dólares, un desplome de 41 por ciento. Revisar las cifras de la inequidad en Alemania, uno de los países considerados como modelo de desarrollo en el mundo, lo constata: en 2008, 10 por ciento más rico de la población poseía 53 por ciento de los activos (en 1998, 48 por ciento), mientras que la mitad era propietaria de 1 por ciento de los activos (en 1998, 3 por ciento). Como se comprueba, esta situación no sólo no ha mejorado, sino que podría haber empeorado (*Der Spiegel*, 2014).

¹³ Gudynas (2015) ofrece un estudio recomendable sobre las actividades extractivas, asimismo es posible citar los aportes de Schuldt (2005) concernientes al tema. Igualmente se recomienda el libro de Acosta (2009).

Es importante dejar claro que cuando se plantea una convergencia entre las críticas del decrecimiento y el posextractivismo, no se trata de que las sociedades de los países empobrecidos mantengan inalteradas sus deplorables condiciones de vida para que sus elites y las sociedades de los países ricos continúen con sus insostenibles niveles de consumo y despilfarro. Conviene señalar lo que tienen en común ambas perspectivas: *a)* Una fuerte crítica al capitalismo, lo que conlleva una mercantilización cada vez más marcada de las diversas constelaciones sociales y de los elementos de la naturaleza. *b)* Las visiones y las prácticas de progreso, desarrollo y crecimiento económico, profundamente enraizadas, son el problema social de fondo. Conceptualmente, las dos visiones se complementan: el decrecimiento configura un concepto «obús» en tanto destructor, no constructor (Unceta, 2014); mientras que el Buen Vivir es constructor en esencia.

El vínculo de esos procesos, el decrecimiento y el posextractivismo, en un contexto global es fácil de prever; por ejemplo, si en el Norte se detiene el crecimiento de las economías, su demanda de materias primas tendrá que disminuir. Entonces, los países del Sur harían mal si continúan sosteniendo el financiamiento de sus economías en la exportación de dichas materias primas. Por esta simple razón y muchas más,¹⁴ es indispensable abordar con responsabilidad el tema del crecimiento en los países empobrecidos. En síntesis: la tarea implica una deconstrucción y reconstrucción de la economía, para que no se vuelva «invivable» la existencia del ser humano en el planeta, sea por razones ambientales o por la creciente violencia social.

¹⁴ Junto con Ulrich Brand, profesor de la Universidad de Viena, preparo una reflexión sobre decrecimiento y posextractivismo como opciones que nos ayuden a encontrar salidas del capitalismo.

Si la economía debe subordinarse a los mandatos de la Tierra, de igual forma debe someterse a las demandas de la sociedad, que es parte de la naturaleza. Este reto precisa una racionalidad socioambiental capaz de deconstruir la actual lógica de producción y consumo. Es forzoso desengancharse de los engranajes y mecanismos perversos del mercado mundial, en particular de sus lógicas especulativas. Al respecto, aunque sorprenda si se alude al Buen Vivir y a otra economía, cabe la recomendación de John Maynard Keynes (1933):

Yo simpatizo, por lo tanto, con aquellos quienes minimizarían, antes que con quienes maximizarían, el enredo económico entre naciones. Ideas, conocimiento, ciencia, hospitalidad, viajes, esas son las cosas que por su naturaleza deberían ser internacionales. Pero dejen que los bienes sean producidos localmente siempre y cuando sea razonable y convenientemente posible, y, sobre todo, dejemos que las finanzas sean primordialmente nacionales.

Como parte de una «gran transformación», en los términos concebidos por Karl Polanyi (1944), se requiere de una visión que supere —ya se asentó— la religión dominante del crecimiento económico y de la acumulación incesante de bienes materiales establecida desde hace mucho tiempo —alrededor de quinientos años— nutriendo las bases de la economía capitalista. Salir de la sociedad del crecimiento es un punto crucial.¹⁵ El decrecimiento, en definitiva, debe ir más allá de la reducción física

¹⁵ Cada vez son más los economistas destacados como Nicholas Georgescu-Roegen, Kenneth Boulding, Herman Daly, Serge Latouche, Roefie Hueting, Enrique Leff, Manfred Max-Neef, Joan Martínez Alier, Tim Jackson o Nico Paech, entre otros, que han demostrado no sólo las limitaciones del crecimiento económico, sino la imperiosa necesidad de impulsar el decrecimiento. Incluso Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, quien no discute el mercado ni el capitalismo, cuestionó el crecimiento económico visto como sinónimo de desarrollo.

del metabolismo económico. Debe abandonarse la búsqueda permanente de ganancias obtenidas explotando a los seres humanos y a la naturaleza y sobre todo imaginar otras opciones de vida fuera de los límites utilitaristas y antropocentristas de la modernidad. Esta es una postura biocéntrica basada en una perspectiva ética alternativa, al aceptar valores intrínsecos en el entorno. Todos los seres, aunque no sean idénticos, tienen un valor ontológico, aun cuando no sean de utilidad para los humanos.

No hay duda de que las valoraciones de múltiples criterios (incluso el diseño de cuentas patrimoniales alejadas de las visiones de capital natural, por ejemplo) alimentan el debate acerca de calidad de vida y tópicos ambientales, pero no superan las raíces depredadoras y concentradoras subyacentes en las ideas del progreso. Por tanto, aquí se instala una cuestión mayor: ¿cómo construir una economía que no esté atada al valor de cambio y tampoco al valor de uso, es decir, una economía que no se nutra del utilitarismo?

Pese a lo anterior, no es posible excluir el uso de valores económicos como un tipo de valoración humana, que en un momento determinado sean de utilidad en específico para diseñar y concretar políticas dentro de los procesos de transición del antropocentrismo al biocentrismo. Es palpable que no toda valoración económica representa un precio: a modo de ejemplo, si el agua es un derecho humano fundamental y se prohíbe su privatización, como manda la Constitución ecuatoriana de 2008 (disposición que no cumple el gobierno de Rafael Correa), significa que este líquido vital debe ser gratuito para cualquier uso. Es necesaria una valoración que no surja del mercado, sino que se oriente por otras reflexiones; la valoración del agua para un hospital no puede ser similar que la demanda del regadío para un campo de golf.

Se requiere, entonces, una visión que al superar el fetiche del crecimiento económico, propicie de modo simultáneo la desmercantilización de la naturaleza y de los bienes comunes, la introducción de criterios bio-céntricos y comunitarios para la fijación de las ineludibles valoraciones de bienes y servicios, la descentralización y la desconcentración de los aparatos productivos, el cambio profundo de los patrones de consumo y en particular la redistribución de la riqueza y del poder. Estas son algunas de las bases dirigidas a una estrategia de construcción colectiva de otra economía, indispensable para otra civilización. Esa nueva economía, que no se sustentará en el productivismo, ni en el consumismo, demanda un posicionamiento distinto frente a los mercados, el Estado y las comunidades. El reto está planteado.

El mercado como sirviente, no como amo

Uno de los mayores fetiches a superar es el mercado. Frente a él muchas personas bajan la cabeza: el mercado habla, el mercado reacciona, el mercado protesta, el mercado siente. Igual de grave es sujetar el Estado al mercado y todavía más la sociedad al mercado. Ello subordina la vida a las relaciones mercantiles y al individualismo ególatra. Cabe mencionar que esta crítica al mercado no significa que el Estado sea la solución, como se demostrará más adelante.

Se tiene la convicción de que el mercado, como mecanismo de funcionamiento de «la mano invisible» de Adam Smith, regularía eficientemente las mercancías a producirse; además, el mercado conduce a racionalizar el consumo y se asignan factores de la producción. La esencia de su economía es que en él todo se convierte en mercancías con un precio y que su oferta es

sensible a los cambios que se experimenten. Así, es el mercado el que decidiría la cantidad de bienes que manufacturados, su demanda incentivaría a los productores a obtener más beneficios e incrementarían la producción. Las interrelaciones de consumidores y productores determinarían, casi automáticamente, la cantidad de bienes elaborados.

En resumen, el funcionamiento económico de la sociedad descansaría en las leyes del mercado y en la interacción del interés individual y la competencia. Esa realidad obligaría al productor a ser eficiente a fin de mantener sus costos bajos y permanecer en condiciones competitivas. Con la intención de promover el bienestar, de conformidad con esta ideología, los medios más óptimos son el estímulo del propio interés y el fomento de la competencia. La matriz de esta lógica dominante es aquella que provocaría el bien común a partir de la acción del individuo en libertad de coacciones estatales o comunitarias.

Se asume la existencia de un ser humano unidimensional, superrealista, muy bien informado.¹⁶ Ese individuo en libertad (valor fundamental), en un proceso de autoformación de soberanías privadas autosuficientes, actuando de forma egoísta, lograría el mejor estado social posible en un ambiente de competencia garantizado por el funcionamiento óptimo del mercado, de acuerdo con Friedrich von Hayek, el maestro más destacado de la escuela austriaca de economía, mentor del neoliberalismo o ultraliberalismo. Lo anterior será posible una vez que se asegure y garantice, a través del Estado, la propiedad privada sobre los medios de producción (siempre será el resultado de un esfuerzo colectivo).

La economía, como si estuviera sustentada en un orden espontáneo, al ser asumida casi como una técnica, pareciera dominada por las matemáticas

¹⁶ Para un análisis más profundo sobre esta materia, véase Acosta (2015).

y por su lenguaje; hecho que no deja espacio para lo político, lo social, lo cultural. Un tratamiento de los problemas económicos con criterios interdisciplinarios invalidaría infinidad de estudios e investigaciones que no se rigen por las normas de la ortodoxia económica.

En este paradigma técnico-económico, muchas veces no se cuestiona a profundidad la distribución de la riqueza y del ingreso existente, pues se consideran casi como un dato. El paradigma de mercado proyectado universalmente se sustenta en la acumulación sin límites, exacerbada por valores desbocados de productivismo, consumismo e individualismo, tan propios del neoliberalismo. Por esa razón, más allá de una economía sobredeterminada por las relaciones mercantiles, en el Buen Vivir se promueve otro tipo de relación dinámica y constructiva entre los miembros de una comunidad y entre las comunidades vecinas, en particular. Es la economía comunitaria el motor que asegura la producción para satisfacer las necesidades de la sociedad.¹⁷

Desde el ideal del Buen Vivir no se propugna una sociedad de mercado, es decir, mercantilizada. Menos aún se promueve una economía controlada por monopolistas y especuladores, tampoco una sociedad estatizada. Se requiere una economía con mercados en plural, al servicio de la sociedad. Desde la lógica del Buen Vivir se tendría que recuperar a los mercados, asumiendo su perspectiva heterogénea y plural, subordinados a la sociedad. Fernand Braudel (1985), gran historiador francés de los *Annales*, reconoció oportunamente que el capitalismo no es un sinónimo de economía de mercado. En contraposición, el capitalismo puede ser incluso el «antimercado», mientras los empresarios —con diversos grados de

¹⁷ Para ahondar en la discusión sobre las necesidades humanas se recomiendan las valiosas reflexiones de Max-Neef, Manfred, Elizalde y Hopenyhayn (1993).

prácticas monopolistas— no se comporten como el empresario tipo-ideal de la teoría económica convencional.

En opinión de Braudel, el capitalismo actuó como el visitante furtivo que ingresa por la noche y se roba algo; en este caso entró en la economía mediterránea y se apropió de sus mercados. En el mundo indígena andino y amazónico, mucho antes de la llegada de los conquistadores, los mercados estaban presentes (lo siguen haciendo aunque no siempre con las lógicas de comercio capitalistas) como construcción social con prácticas de solidaridad, reciprocidad y proporcionalidad (también incorporadas por Karl Polanyi en sus reflexiones), muy alejadas de lo que después sería la imposición del capitalismo metropolitano.

El mercado en tanto orden espontáneo aparece como una categoría mítica, inexistente, que exacerba los conflictos de intereses en el seno de la sociedad, al fomentar la desigualdad para mantener los incentivos. Cabe resaltar que la pretendida libertad del mercado no fue la base para el éxito de los países ricos.¹⁸ En tanto estructura de dominación, el mercado responde y sirve a los intereses concretos y a las aspiraciones de los actores sociales vinculados al poder nacional e internacional. Asimismo, se ha transformado en el espacio donde se desenvuelve el poder dominador de las construcciones humanas, uno de sus mayores ídolos. De ese modo, sin negar la utilidad que pueden tener los mercados, debe desmontarse su real poder simbólico y conceptual. Lo anterior, se insiste, no promueve una visión estatista a ultranza de la economía.

Entonces, el mercado no es un producto de generación espontánea como afirma la teología liberal, es una construcción social, que responde a

¹⁸ Bastaría revisar los textos de List (1841), Bairoch (1995) o Chang (2010).

las demandas concretas de cada época histórica. ¿Cuál debería ser la posición de esta otra economía frente al mercado mundial? Negar la necesidad de asumir dicho reto sería una torpeza y una imposibilidad, pero tenerlo como referencia de todos los esfuerzos económicos sería irresponsable. Es esencial una concepción estratégica para participar en la economía-mundo, maximizando los probables beneficios, al tiempo que se minimizan los impactos nocivos que son muchos.

La tarea es establecer relaciones con economías relevantes, en específico con las economías vecinas; eso demanda otra forma de integración, más autónoma, menos volcada al mercado mundial. La complementariedad del comercio con economías de nivel similar debe producir beneficios mutuos. De manera semejante, habría que comerciar con los mismos países enriquecidos, pero no bajo la lógica de igualdad de condiciones como plantean los tratados de libre comercio. En la medida de lo posible debe buscarse una sostenida diversificación de las exportaciones, con la intención de no depender de pocos mercados y menos aún de uno solo. El comercio debe orientarse y regularse a partir de la lógica social y ambiental, no desde la lógica de acumulación del capital, una labor por demás compleja.

Paralelamente, en sintonía con Karl Polanyi, es conveniente organizar y controlar a los mercados desde el Estado y la sociedad, pero no interpretarlos como mecanismos de dominación, puesto que «el mercado es un buen sirviente, pero un pésimo amo» (Polanyi, 1944). En consecuencia, el mercado habrá de ser civilizado y el Estado socializado; en ambos ámbitos implica una creciente participación de la sociedad desde lo comunitario.

*El complejo desafío de la construcción
de otro tipo de Estado*

A lo largo de la historia han sido permanentes las pugnas políticas para controlar e incluso construir el Estado en función de determinados intereses. Gustavo Esteva (2014) describe con precisión la realidad que se vive en el mundo, no sólo en América Latina: «El Estado nación, desde la más feroz de las dictaduras hasta la más tierna y pura de las democracias, ha sido y es una estructura para dominar y controlar a la población para ponerla al servicio del capital, mediante el uso de su monopolio legal de la violencia».

En algunas ocasiones la sociedad se organizó alrededor del Estado. En otras fue un factor para estructurar la sociedad. En efecto: el Estado significa o sintetiza un espacio de dominación, es decir, un espacio de expresión del poder político. De ahí que sus crisis, en un permanente proceso de disputas múltiples y como parte de las crisis orgánicas del capitalismo, hayan sido recurrentes.

La ambigüedad fundacional de la nación y sus modelos de Estado y sociedad en América Latina, sustentados en la colonialidad del poder, resultaron excluyentes y a su vez limitantes para el desarrollo de las capacidades culturales, sociales y productivas. Los Estados nación subalternos (Prada, 2010) se explicitan en la lógica del sistema-mundo, con relación a los Estados conformados y existentes dentro de la lógica de acumulación del capitalismo.

En América Latina se experimenta una crisis profunda del Estado nación, muchas veces valorada como una entelequia más que como una realidad práctica, en la medida que está atado a las condicionalidades externas.

Una situación comprensible desde varios horizontes, en particular desde la esencia del Estado colonial sobre el cual se fundó el Estado oligárquico, que representa la base del actual Estado liberal. En esta región, el Estado no ha conseguido desligarse y superar sus raíces coloniales, ni lo conseguirá desde su interior...

A partir de esa realidad con facetas múltiples deben analizarse los procesos emancipadores en marcha, movidos por la imperiosa exigencia de superar los profundos resabios coloniales y oligárquicos. No se trata de modernizar el Estado para ajustarlo a las demandas del capitalismo contemporáneo. En el entendido de que el Estado es necesario, el objetivo es construir un tipo distinto, un Estado que asuma, desde la igualdad y la libertad, las múltiples diversidades existentes, normalmente marginadas o subyugadas. En este punto destaca la opción del Estado plurinacional.¹⁹

Es un hecho que el Estado moderno y liberal, heredero de estructuras y prácticas coloniales, sobre las que se instrumentó un esquema de dominación oligárquico, una y otra vez ha tratado de purificar la sociedad. Ha intentado negar e incluso borrar las diversidades; ha ignorado o reprimido la existencia de culturas y lenguas de pueblos y nacionalidades presentes desde antes de la conquista y la colonización de América (que todavía no concluye).

En ese sentido, la plurinacionalidad, valorada como una nueva concepción de organización de la sociedad, rescata la diversidad de visiones étnicas y culturales para repensar íntegramente el Estado. Cuentan los derechos colectivos y no sólo los derechos individuales. Asimismo, una nueva forma de relacionarse con la naturaleza, que desde los Derechos de la Naturaleza

¹⁹ Si se desea profundizar en esta discusión, se recomienda leer los textos sobre el Estado plurinacional de Boaventura de Sousa Santos (2010).

(Acosta, 2011) abriría la puerta a una ciudadanía ambiental o ecológica, si es que aún es posible sostener ese invaluable concepto para la modernidad.²⁰ En sociedades cargadas de racismo y con problemas históricos de antidemocracia, la construcción de un Estado plurinacional se convertiría además de un reto en una necesidad. Es imperante brindar respuestas a temas clave como el racismo y las distintas formas de pertenencia a un territorio.

Plurinacionalidad e interculturalidad nos remiten a una noción de Estado conformado por naciones unidas a través de sus identidades culturales vigorosas, con un pasado histórico y en especial con una voluntad de integración que supere la marginación explotadora de pueblos y nacionalidades. Aceptar esa matriz originaria, aparte de enriquecer culturalmente a esas sociedades, permitirá un comienzo que haga factible superar prácticas y percepciones racistas.

De lo anterior deriva la necesidad de recuperar las prácticas de las comunidades indígenas, considerándolas como son sin llegar a idealizarlas. No se trata de ocultar al actual Estado, como resulta cuando se quiere dar paso a una simple sumatoria de ideas indigenistas a las recientes estructuras estatales. Tampoco se pretende una yuxtaposición de propuestas y visiones indígenas y no indígenas. El Estado plurinacional no puede ser un Estado híbrido. Tiene que ser otro en términos de otra sociedad y otra

²⁰ Más allá de la ciudadanía individual/liberal, desde la lógica de los derechos colectivos, se abre la puerta a ciudadanía colectivas, a ciudadanía comunitarias. De igual manera, los Derechos de la Naturaleza necesitan y a la vez originan otro tipo de definición de ciudadanía, construida en lo individual, lo social colectivo y también lo ambiental. Ese tipo de ciudadanía es plural, ya que depende de las historias sociales y de los ambientes. En adición, este planteamiento de otra ciudadanía acoge criterios de justicia ecológica que superan la visión tradicional de justicia. Para lograrlo debe consolidarse y ampliarse la vigencia del pluralismo jurídico, así como la práctica de la gestión pública con criterios plurinacionales e interculturales que aseguren una mayor y efectiva participación ciudadana y comunitaria.

propuesta de vida, como la que propone el Buen Vivir. De ello se desprende que la plurinacionalidad implica también otro proyecto de vida. Bajo esa perspectiva, el planteamiento de un nuevo Estado debe incorporar elementos clave, como el Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza, con la finalidad de consolidar y ampliar los derechos, en concreto las acciones comunitarias y autonómicas.

Esto exige dar paso a esquemas de redistribución del poder, así como de construcción de equidades en plural, pues no sólo entra en juego la lucha de clases, es decir, el enfrentamiento capital-trabajo. Entra en juego la superación efectiva del concepto de raza en tanto elemento configurador de tales sociedades, donde el racismo es una de sus manifestaciones más crudas. En sí, es menester desarticular las estructuras patriarcales, para conseguirlo es preciso eliminar aproximaciones reduccionistas y antropocéntricas.

Con fundamento en lo mencionado, debemos aceptar que el desafío de construir otro Estado es en extremo complejo, más no imposible. Sus fracasos se dilucidan por las posiciones dominantes de los grupos privilegiados y por las alternativas pensadas y desarrolladas desde las fuentes ontológicas del eurocentrismo. Enfrentarlo requiere, en principio, claridad acerca de los horizontes de otro Estado, en este caso plurinacional, que ha sintetizado Raúl Prada Alcoreza (2010):

El paso del Estado nación al Estado plurinacional, comunitario y autonómico es todo un desafío. Se trata de dejar la modernidad, la historia de la soberanía en la modernidad, la historia del Estado en la modernidad, la historia de una relación entre Estado y sociedad, una historia que define la separación entre gobernantes y gobernados, entre sociedad política y sociedad civil, en

un contexto matricial donde se demarcó la relación entre dominantes y dominados, a partir de mecanismos de dominación y diagramas de poder que atraviesan los cuerpos y los territorios, incidiendo en las conductas y comportamientos, en la administración de la tierra y los territorios, en la explotación de la fuerza de trabajo. Dejamos atrás una historia de colonización y dominaciones polimorfos desplegadas en el mundo, donde la geopolítica de la economía-mundo y del sistema-mundo capitalista divide el planeta entre centro y periferia, racializando la explotación de la fuerza de trabajo y controlando las reservas y recursos naturales, estableciendo una división del trabajo planetaria, convirtiendo a los países periféricos en exportadores de materias primas y reservas de mano de obra barata, transfiriéndoles más tarde, a algunos de estos países que ingresan tardíamente a la Revolución industrial, tecnología obsoleta, desplazando la industria pesada, considerada de alta y masiva inversión de capital, pero con bajos rendimientos a mediano y largo plazo, prefiriendo optar por eso por la circulación y la inversión del capital financiero, que rinde grandes beneficios a corto plazo. Dejamos atrás entonces la ilusión que provocaron los Estado nación subalternos, una vez concluidas las guerras de independencia y las luchas de liberación nacional, la ilusión de nuestra independencia e igualdad en el concierto de las naciones, en el marco jerárquico de las Naciones Unidas.

Surge una interrogante: ¿servirán estas reflexiones para la configuración y conformación de otros Estados también con criterios plurinacionales e interculturales, en otras regiones del planeta? Lo que sí parece indiscutible es la necesidad de construir otro tipo de Estado, hecho que quizá nos conducirá a su reinención o aun a su desaparición, al menos tal como lo conocemos en la actualidad.

Sintética reflexión para repensar el futuro

La tarea implica dar paso a transiciones a partir de miles y diversas prácticas alternativas, sobre todo no capitalistas, muchas de ellas existentes ahora en el planeta. Es cierto que existen opciones orientadas por horizontes utópicos que propugnan una vida en armonía entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza. En ese contexto se sintoniza estrechamente el Buen Vivir con el sentir profundo del decrecimiento.²¹

A fin de propiciar esa gran transformación se cuenta con prácticas concretas, no con simples teorías. Inclusive existen diversas opciones planteadas a escala global. La propuesta de dejar el crudo en el subsuelo en la Amazonía ecuatoriana, la Iniciativa Yasuní-ITT, fue y sigue siendo un notable ejemplo de acción global, surgida desde la sociedad civil de un pequeño país (Acosta, 2014).

En definitiva, se trata de cuestionar el fallido intento de impulsar —como mandato global y camino unilineal— el progreso en su deriva productivista y el desarrollo como dirección única, en específico en su visión mecanicista de crecimiento económico. Tal acto es crucial, sin embargo no basta con reeditar los ejemplos supuestamente exitosos de los países desarrollados, puesto que no es viable; en realidad no son exitosos.

El aporte del Buen Vivir, en un contexto amplio, nacional e internacional, radica en las posibilidades de diálogo que abre. Su contribución podría estar en la construcción colectiva de puentes entre los conocimientos ancestrales y los modernos. Para lograrlo, nada mejor que un debate franco y respetuoso, un debate que recién comienza a desplegarse. Interesa superar

²¹ Para encontrar puntos en común véase el interesante aporte del libro coordinado por D'Alisa, Demaria y Kallis (2015).

las distancias existentes, obvias si consideramos que la modernidad y el capitalismo sintetizan la sumatoria de civilizaciones cimentadas en la dominación concerniente a seres humanos y naturaleza.

De forma paralela, será necesario establecer una relación respetuosa y constructiva entre quienes se atrincheran en la defensa de lo que se considera el Buen Vivir ancestral, el auténtico, y quienes pretenden transformarlo en un concepto abierto, que emerge desde aquellas culturas milenarias de los pueblos indígenas. En una orilla del camino aparece un concepto, en pleno proceso de reconstrucción, extraído del saber ancestral, en ciertos casos mirando demasiado al pasado. En la otra orilla del (mismo) camino, ese concepto, también en reconstrucción e incluso construcción, es asumido mirando al futuro. Tal vez el potencial radica en que los del pasado miren algo más al futuro (y al presente) y los del futuro aporten una visión menos beata del pasado.

Las propuestas del Buen Vivir indígena andino-amazónico no son las únicas, existen muchas otras. La demanda histórica consiste en conjuntar las múltiples propuestas de vida comunitaria, como son las de los zapatistas o de los kurdos, así como a una multiplicidad de luchas feministas, campesinas, ecologistas,²² entre otras. Aquí se constatan múltiples puntos de encuentro con las acciones del movimiento «decrecentista» en ciernes.

La tarea no es fácil, superar las visiones dominantes y construir nuevas opciones de vida tomará tiempo. Habrá que hacerlo sobre la marcha, reaprendiendo y aprendiendo a aprender simultáneamente. Ello exige una gran dosis de constancia, voluntad y humildad. El Buen Vivir debe comprenderse como una categoría en permanente construcción y reproducción. No es un

²² Sobre estos movimientos se puede consultar a Acosta y Machado (2012).

concepto estático y menos aún retrógrado, constituye una categoría central de lo que podría entenderse como la filosofía de vida de muchas sociedades indígenas que no se insertan (plenamente) dentro de la modernidad. Desde esa perspectiva se proyecta como una propuesta con potencial incluso global, aunque históricamente haya sido marginada.

Para concluir, recordemos que el Buen Vivir comprende a la comunidad como la conjunción armónica de los vivos, los antepasados y las futuras generaciones. A partir de dicha armonía, vinculada con la Madre Tierra, se asegura la preservación de la vida. Así, el concepto de vida se amplía al medio ambiente y a nuestros nietos. Los seres humanos, en tanto naturaleza, no somos individuos aislados, formamos parte de una comunidad, somos comunidad social y natural. Estas comunidades, pueblos, naciones y países deberían relacionarse asimismo de forma armónica entre sí y con la naturaleza. Ese doble reencuentro con la naturaleza y con la comunidad nos conmina a dar el paso civilizatorio que demanda vigencia plena de los Derechos Humanos en estrecha comunión con los Derechos de la Naturaleza.

Referencias

- Acosta, Alberto (2005), *Desarrollo glocal: con la Amazonía en la mira*, Quito, Corporación Editora Nacional.
- _____ (2009), *La maldición de la abundancia*, Quito, Comité Ecuménico de Proyectos/Swissaid/Abya Yala.
- _____ (2011), «Los Derechos de la Naturaleza. Una lectura sobre el derecho a la existencia», en Alberto Acosta y Esperanza Martínez (eds.), *La Naturaleza con Derechos: de la filosofía a la política*, Quito, Abya Yala.

- _____ (2013), *El Buen Vivir. Sumak Kawsay. Una oportunidad para imaginar otros mundos*, Barcelona, Icaria.
- _____ (2014), «Iniciativa Yasuni-ITT: la difícil construcción de la utopía», *Rebelión*, en <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=180285>
- _____ (2015), «Las ciencias sociales en el laberinto de la economía», *Polis* (41), en <https://polis.revues.org/10917>
- _____ (2016), «Las dependencias del extractivismo: aporte para un debate incompleto», *Revista Aktuel Marx* (20).
- Acosta, Alberto y Decio Machado (2012), «Movimientos comprometidos con la vida. Ambientalismos y conflictos actuales en América Latina», *Colección*, en <http://lalineadefuego.info/2012/10/01/ambientalismos-y-conflictos-actuales-en-america-latina-movimientos-comprometidos-con-la-vida-por-alberto-acosta-y-decio-machado/>
- Braudel, Fernand (1985), *La dinámica del capitalismo*, Madrid, Alianza.
- D'Alisa, Giacomo, Federico Demaria y Giorgos Kallis (2015), *Decrecimiento. Vocabulario para una nueva era*, Barcelona, Icaria.
- De Souza Santos, Boaventura (2010), «Refundación del Estado en América Latina», en Alberto Acosta y Esperanza Martínez (eds.), *Perspectivas desde una epistemología del Sur*, Quito, Abya Yala.
- Escobar, Arturo (2014), *Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*, Medellín, Ediciones Unaula.
- Estermann, Josef (2014), «Ecosofía andina: un paradigma alternativo de convivencia cósmica y de vida plena», en Atawallpa Oviedo Freire, Eduardo Gudynas, Josef Estermann, Freddy Álvarez y Javier Medina, *Bifurcación del Buen Vivir y el Sumak Kawsay*, Quito, Sumak Editores.
- Gudynas, Eduardo (2014), «Buen Vivir: sobre secuestros, domesticaciones, rescates y alternativas», en Atawallpa Oviedo Freire, Eduardo Gudynas, Josef

- Estermann, Freddy Álvarez y Javier Medina, *Bifurcación del Buen Vivir y el Sumak Kawsay*, Quito, Sumak Editores.
- (2015), *Extractivismos: ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza*, La Paz, Centro Latinoamericano de Estudios Superiores/Centro de Documentación e Información Bolivia.
- Houtart, François (2011), «El concepto del *Sumak Kawsay* (Buen Vivir) y su correspondencia con el bien común de la humanidad», *Ecuador Debate*, (84).
- Huanacuni Mamani, Fernando (2010), *Vivir Bien/Buen Vivir. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales*, La Paz, Convenio Andrés Bello/Instituto Internacional de Investigación/Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.
- Kothari, Ashish, Federico Demaria & Alberto Acosta (2015), «Buen Vivir, Degrowth and Ecological Swaraj: Alternatives to sustainable development and the Green Economy», *Development*, 57(3-4).
- Leff, Enrique (2010), «Imaginario social y sustentabilidad», *Cultura y representaciones sociales*, 5(9).
- Maynard Keynes, John (2003), «Autosuficiencia nacional», *Ecuador Debate* (60), diciembre.
- Max Neef, Manfred (1993), *Desarrollo a escala humana*, Montevideo, Nordan/Comunidad.
- Müller, Tazio (2015), «Alemania: la transición energética. Combinar escalas y estrategias para el cambio», en Miriam Lang, Belén Cevallos y Claudia López, *¿Cómo transformar? Instituciones y cambio social en América Latina y Europa*, Quito, Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala, en <http://www.rosalux.org.ec/attachments/article/880/C%C3%B3mo%20transformarFINAL.pdf>
- Oviedo Freire, Atawallpa (2011), *Qué es el sumakawsay. Más allá del socialismo y capitalismo*, Quito, Sumak Editores.

- Oxfam (2016), «Una economía al servicio del 1%: Acabar con los privilegios y la concentración de poder para frenar la desigualdad extrema», en https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-es_0.pdf
- Polanyi, Karl (1992), *La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Prada Alcoreza, Raúl (2010), «Umbrales y horizontes de la descolonización», en Luis Tapia, Oscar Vega, Álvaro García y Raúl Prada, *El Estado. Campo de lucha*, La Paz, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales/Muela del Diablo/Comuna.
- Quijano, Aníbal (2014), *Cuestiones y horizontes. Antología esencial. De la dependencia histórica-estructural a la colonialidad/decolonialidad del poder*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Schuldt, Jürgen (2005), *¿Somos pobres porque somos ricos? Recursos naturales, tecnología y globalización*, Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Solón, Pablo (2016), *¿Es posible el Buen Vivir? Reflexiones a quema ropa sobre alternativas sistémicas*, La Paz, Fundación Solón.
- Tortosa, José María (2011), «Maldesarrollo y mal vivir: pobreza y violencia a escala mundial», en Alberto Acosta y Esperanza Martínez (eds.), *Debate constituyente*, Quito, Abya Yala, en <http://www.rosalux.org.ec/es/serie-nuevo-constitucionalismo/209-maldesarrollo.html>
- Unceta Satrustegui, Koldo (2014), «Desarrollo, postcrecimiento y Buen Vivir: debates e interrogantes», en Alberto Acosta y Esperanza Martínez (eds.), *Debate Constituyente*, Quito, Abya Yala, en <http://www.rosalux.org.ec/es/alternativas-al-desarrollo/830-postcrecimentokoldounceta.html>

ALBERTO ACOSTA

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi (2004), *Aprender en la sabiduría y en el Buen Vivir*, Quito, Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.

Posdesarrollo como herramienta para el análisis crítico del desarrollo

Eduardo Gudynas*

Resumen. A principios de la década de 1990 comenzó a emitirse un nuevo tipo de críticas al desarrollo que planteaban un cuestionamiento de fondo a esa categoría y a sus diversas manifestaciones. Desde esa óptica es posible considerar diferentes vertientes analíticas. La primera denuncia su fracaso generalizado y postula la necesidad de abandonarlo como discurso y política. La segunda afirma que representa una creencia, mito o religión occidental que se impone a otras culturas. La tercera lo cuestiona: toma como problema central el papel del crecimiento económico y demanda, en contraste, el decrecimiento. La cuarta, denominada posdesarrollo, lo valora como un discurso que expresa premisas como la modernización o la apropiación de la naturaleza, desde una pretensión de verdad universal, por lo que se subordinan otras culturas. Por tanto, la reconstrucción de los estudios críticos del desarrollo recurre a cuatro dimensiones analíticas: acciones específicas, programas de desarrollo sectorial, grandes familias y raíces en cuanto a las concepciones y sensibilidades.

Palabras clave: desarrollo, crítica, posdesarrollo, estudios críticos del desarrollo, *critical root analysis*.

* Secretario ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social, Uruguay.

Post-development as Tools
of a Critical Analysis of Development

Abstract. At the beginning of the 1990s a new kind of criticism of development began to emerge that posed probing questions of the concept and its many expressions. From that perspective, we can consider different analytical approaches. The first exposes its broad failure and proposes the need to abandon the concept as both discourse and policy. The second asserts that it represents a belief, myth or western religion that is imposed on other cultures. The third calls into question the central role of economic growth and demand, but not de-growth. The fourth, labelled «post-development», considers the rhetoric that values assumptions such as modernization or the conquest of nature, from a pre-tension of universal truth, to which other cultures are subordinate. The rebuilding of critical studies on development can draw upon, therefore, four analytical dimensions: specific actions, sectoral development programs, large families and roots pertaining to conceptions and sensitivities.

Keywords: development, criticism, post-development, critical development studies, critical root analysis.

Introducción

A principios de la década de 1990 se consolidó un nuevo tipo de críticas al desarrollo que cuestionaba a esa categoría en sí misma y en todas sus manifestaciones. Bajo esa perspectiva se encuentran al menos cuatro énfasis: *a)* unos denunciaron el fracaso del desarrollo en cualquier expresión y la necesidad de abandonarlo (Esteve, 1992); *b)* otros afirmaron que era esencialmente una creencia, mito o religión occidental que se imponía a diferentes culturas (Rist, 1997); *c)* unos más lo cuestionaron enfocándose en el papel del crecimiento económico como un problema central, y desde allí postularon el decrecimiento (Latouche, 2009b); *d)* una corriente conocida como posdesarrollo, en la formulación de su promotor más conocido, Arturo Escobar, sostiene que debía ser considerado como un discurso que expresaba premisas como la modernización o la apropiación de la naturaleza, que era revestido como verdad universal, con lo cual se subordinaban otras culturas (Escobar, 1995).

Un examen más detallado del posdesarrollo muestra que por lo menos deben distinguirse dos etapas en las proposiciones de Escobar: en la primera se enfatiza al posdesarrollo como un análisis crítico; en la segunda, además de esa crítica, se le otorga más atención a distintas alternativas.

El posdesarrollo como crítica

El posdesarrollo inicial como crítica se inspiró en el posestructuralismo, especialmente en los análisis de los discursos promovidos por Michael

Foucault; por lo tanto, un término más correcto debería ser «crítica poses-
tructuralista» al desarrollo (una introducción a esta corriente se encuentra
en Belsey, 2002; véase además Gibson-Graham, 2000). En tal contexto, los
discursos del desarrollo no sólo incluyen los enunciados, sino también ac-
ciones concretas, instituciones que lo promueven y los modos de legitima-
ción. De esa manera, deberían analizarse cuestiones como las ideas básicas
en un plan de desarrollo, las agencias estatales por las cuales se lo implanta,
las acciones que promueve y los modos de legitimación.

Ese tipo de crítica se orientaba a los aspectos básicos y comunes que
se mantenían en distintas expresiones del desarrollo, y que permitían sos-
tenerlo como una categoría universal que debería ser imitada en todos los
países. La imposición de la idea de desarrollo a imagen de los países indus-
trializados simultáneamente relegó a los demás a la condición de subdesar-
rollados. Por tanto, el desarrollo es simultáneamente tanto imposición de
unos saberes como exclusión de otros.

El posdesarrollo permitió evidenciar una serie de conceptos básicos
que sustentan la idea de desarrollo. Este sería un proceso universal, de tipo
progresivo, en esencia positivo, que discurre linealmente. El principal mo-
tor sería el crecimiento económico, defendido como un principio a perpe-
tuidad, y que a su vez genera el bienestar material de las personas, avances
sociales, culturales y políticos. Así, el desarrollo defiende diferentes ver-
siones de la modernización.

De una manera u otra el desarrollo entiende que sociedad y naturaleza
están separadas. Se niegan o minimizan los impactos ambientales y socia-
les, y se defiende un optimismo científico-técnico. El énfasis económico
del desarrollo genera una creciente mercantilización del entorno y de las
relaciones sociales, ancladas en un estilo de vida y consumo occidental. Se

refuerza el consumismo e incluso se imita una estética occidental. Asimismo, se mantienen posturas patriarcales de diverso tipo, lo que subordina e invisibiliza a las mujeres.

En su aplicación más estricta, un análisis desde el posdesarrollo considera las formas de saber (por ejemplo, la delimitación de disciplinas, las condiciones de validez), las subjetividades involucradas, los modos de representación de esos discursos (incluyendo las instancias donde se apela a la violencia o a las resistencias), y las dinámicas de poder que cruzan todas esas esferas, desde el papel de los expertos a las demandas o resistencias locales ante el desarrollo (Escobar, 1995, 2012). De esta manera, se determinan los criterios de verdad y falsedad sobre qué es el desarrollo, las razones para concebirlo como un proceso positivo, las concepciones aceptables sobre sus ideas constitutivas (tales como bienestar, eficiencia, crecimiento), e incluso las formas por las cuales interpretamos nuestras relaciones con el entorno social y natural.

Como se aprecia, la idea de desarrollo no está restringida a cuestiones económicas, sino que se derrama en las dimensiones sociales, culturales y políticas, e incluso en las sensibilidades y estéticas personales. Esta crítica posdesarrollista muestra que si bien el desarrollo no es un campo unificado ni tiene un significado preciso, se repiten atributos básicos y aparecen procesos de organización, legitimación y acción que son análogos. El desarrollo aparece entonces como un tipo de relacionalidad, que agrupa algunas ideas y prácticas pero excluye otras. A su sombra han surgido conceptos de enorme influencia, como capital humano o capital natural, o se han redefinido otros, como eficiencia o inequidad, todos los cuales se pueden pensar de unas pocas maneras.

El posdesarrollo como crítica y espacio de alternativas

En su etapa inicial el posdesarrollo permitió hacer una distinción clave: por un lado, existirían los «desarrollos alternativos» y, por otro lado, las «alternativas al desarrollo» (véase Escobar, 1995:215). Los primeros son debates sobre ajustes instrumentales o diversas formas de organizar el desarrollo; no están en discusión sus cimientos conceptuales. Corresponden, por ejemplo, discusiones acerca de los mejores modos de alimentar el crecimiento económico, el papel del mercado o del Estado.

Las segundas, como alternativas a cualquiera de las visiones del desarrollo, quedaron en evidencia gracias a las críticas del posdesarrollo. En sus formulaciones originales, el posdesarrollo entendía que esas alternativas se orientaban a conformar un discurso de la diferencia o a rescatar los ensayos y resistencias que partían desde los movimientos del Sur; pero a partir de mediados de la década de 2000, poco a poco, se propagó la confusión.

Varios interpretaron que el prefijo «pos» aludía a un futuro desarrollo que superaría las limitaciones de los actuales o incluso abarcaría las posiciones antidesarrollo (como las de Gustavo Esteva). Así se debilitaba el vínculo directo con el posestructuralismo y se mezclaban algunos desarrollos alternativos con alternativas al desarrollo. Escobar contribuyó a esta confusión al sumar al posdesarrollo la tarea de crear nuevos discursos y representaciones, diversificar los agentes de producción del conocimiento o apoyar resistencias (Escobar, 2005). Recientemente, le sumó cuestiones como los «discursos de transición» (Escobar, 2012). Sin duda en su obra inicial estaba presente cierta superposición entre el cuestionamiento de inspiración posestructuralista y la imaginación de alternativas, pero todo ello se agudizó en esa segunda etapa (véase Ziai, 2007).

Tal ampliación, todavía en marcha, generó una mayor adhesión al rótulo posdesarrollo, sobre todo desde militantes sociales, pero a costa de perder especificidad analítica. A su vez, si bien una crítica posdesarrollista es potente, no es suficiente para generar alternativas, éstas precisan de instrumentos y reflexiones propios (Gudynas, 2014b).

Reacciones y constancias frente al posdesarrollo

El posdesarrollo en su primera etapa fue objeto de muchos cuestionamientos. Entre las objeciones se señalaba la incapacidad de entender la heterogeneidad en las prácticas del desarrollo o la romantización de los movimientos sociales, y por eso no faltaron quienes consideraran que sólo era una retórica antimoderna (véase Nederveen, 2000). A juicio de varios analistas, el problema no era el desarrollo en sí mismo, sino sus aplicaciones capitalistas o la persistencia de la pobreza. También se señalaron problemas metodológicos, entre ellos que los ejercicios iniciales en realidad eran una expresión parcial o empobrecida del posestructuralismo (Ziai, 2004).

Sin embargo, el posdesarrollo se mantuvo como un espacio de análisis crítico y contestación al desarrollo, e incluyó algunos nuevos aportes que seguían la perspectiva posestructuralista de forma más rigurosa. Simultáneamente, desde el campo de los estudios del desarrollo las reacciones de rechazo iniciales dieron paso a reflexiones más rigurosas que aceptaban algunas de las advertencias del posdesarrollo (un resumen de esta situación en Ziai, 2015).

Es pertinente indicar ciertas limitaciones y precisiones: la crítica del posdesarrollo, más allá de invocar vínculos directos con determinados movimientos sociales, en realidad discurrió como un ejercicio académico

con débiles conexiones con las grandes transformaciones políticas. Esto fue evidente en América del Sur, desde donde surgió uno de los cuestionamientos al desarrollo más potentes, conocido como Buen Vivir. Tal concepción es tanto una crítica radical al desarrollo como la apertura a alternativas poscapitalistas y postsocialistas. Es una postura que surgió por fuera de ejercicios académicos, y como resultado de prácticas sociales y políticas ciertamente heterodoxas y desde una notable diversidad de actores (sobresalen militantes indígenas) (Gudynas, 2014b). Esas críticas muestran semejanzas importantes con el posdesarrollo inicial.

Paralelamente, la severa crisis económico-financiera de 2007-2008, que para algunos anunciaba el fin del capitalismo, en realidad no mermó la prevalencia de las ideas del desarrollo, sólo han cambiado sus componentes y expresiones. Ejemplos de ello son la enorme diversidad de debates alrededor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los más recientes Objetivos de Desarrollo Sostenible. El posdesarrollo desempeñó un papel limitado en dichas discusiones, pero esa permanencia coincide con su señalamiento de que el desarrollo está arraigado a determinados componentes que se reproducen una y otra vez.

De la misma manera, un análisis de las estrategias de desarrollo más recientes desde inicios del siglo XXI manifiesta una notable variedad en sus expresiones instrumentales, pero una gran constancia en los componentes básicos. Regímenes muy distintos, como pueden ser las administraciones europeas que defienden ajustes neoliberales o los planes de desarrollo que en China formula el Partido Comunista, sin duda son diferentes, pero a la vez evidencian elementos básicos comunes.

Un examen más detallado para el caso de América del Sur es todavía más impactante, ya que allí se han ensayado en un corto periodo múltiples

estrategias de desarrollo: desde posturas conservadoras (por ejemplo en Chile, Colombia y Perú), a ensayos heterodoxos que invocaban un nuevo socialismo del siglo XXI (en Bolivia, Ecuador y Venezuela), pasando por economías de mercado bajo cierta regulación estatal (en Brasil y Uruguay). Las legitimaciones de estas variedades de desarrollo en unos casos aluden a concepciones neoclásicas ortodoxas, pero en otras se cita a Marx o Lenin (como hacen el presidente de Ecuador, Rafael Correa, o el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera).

Esas experiencias, que son objeto de intensos debates son diversas; si bien hay éxitos en algunas áreas, es impactante observar que se repiten elementos básicos como el apego al crecimiento económico o la ambición de la modernización. Por lo tanto, dichas bases conceptuales son previas a las distintas corrientes ideológico políticas en cualquiera de esos países. Estamos lidiando con concepciones y sensibilidades comunes a ideologías políticas y filosóficas propias de la modernidad. Esto es justamente otro de los puntos que señala el posdesarrollo en su versión original.

Repensando los estudios críticos del desarrollo

La diversidad de expresiones instrumentales del desarrollo aun en contextos de crisis y cambios políticos, deja evidencia de la permanencia de concepciones y sensibilidades básicas, por lo que es imprescindible hacer abordaje crítico en la misma línea del posdesarrollo. Recordemos que bajo el calificativo «crítica» se alude a los cuestionamientos sobre las diferentes manifestaciones del desarrollo. Para algunos, esa crítica parte de compromisos normativos tales como analizar ciertos sujetos (los efectos

del desarrollo sobre los más pobres o la situación del Tercer Mundo) o temas (justicia social, equidad, etcétera). Para otros, la crítica al desarrollo es un medio para cuestionar escuelas de pensamiento económico o político (unos cuestionan al capitalismo y otros al socialismo).

En general, en los últimos años se ha vuelto común entender como estudios críticos del desarrollo a los que parten desde una mirada de «izquierda», incluyendo aportes del marxismo, la poscolonialidad, la ecología, el feminismo y otros (al respecto véase Veltmeyer *et al.*, 2011; Schuurman, 2009; Kothari, 2005). Numerosos abordajes son herederos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, al rechazar el positivismo y defender los saberes social e históricamente enmarcados, que se orientan en prácticas de transformación.

Un problema, tal vez más grave, es que conocidas posturas críticas se enfocan en el capitalismo y no en el desarrollo. En muchos casos esas corrientes desnudan la cara oscura y las contradicciones del capitalismo, pero como no logran abordar las raíces del desarrollo, no presentan cuestionamientos a ese nivel ni alternativas para superarlo (un ejemplo de ello es Harvey, 2015). Todavía más problemático es el intento de recolocar al Buen Vivir como una nueva variedad de desarrollo socialista, tal como promueven actores vinculados a los gobiernos de Ecuador y Bolivia, para despojarlo de su crítica radical.

La cuestión clave es que gran parte de estos abordajes terminan siendo discusiones entre distintos tipos o «familias» de desarrollo, donde se atacan unas versiones mientras se postulan otras alternativas mejores. Por lo tanto, ese tipo de estudios se autolimita al campo del desarrollo. Munck sostiene que «no es posible superar el reto de la teoría crítica del desarrollo alejándose o abandonando el desarrollo. En cambio, el resto es imaginar y

operar el desarrollo de una forma diferente» (Munck, 2011:76-77). Esa perspectiva, que la crítica y la alternativa tienen que estar dentro del desarrollo, es la que precisamente deja en evidencia el posdesarrollo.

Sin duda, los análisis críticos del desarrollo desde una sensibilidad de izquierda son útiles para lidiar con ciertas familias de variedades de desarrollo, pero son insuficientes. Para completar el campo de la crítica, haciéndola rigurosa y abarcadora, es necesario ir hacia niveles más profundos.

Niveles en los estudios críticos sobre los desarrollos

Es posible identificar al menos cuatro niveles en los que operan las evaluaciones críticas sobre los desarrollos (identificados como 3, 2, 1 y 0). El nivel tres es el más común y superficial; corresponde a los análisis sobre acciones de desarrollo específicas, como puede ser un programa de crédito rural o un plan de construcción de viviendas populares. Respecto al nivel dos, compete a los programas de desarrollo sectoriales; las acciones indicadas en el ejemplo anterior atañen a su vez a entendimientos sobre qué es el desarrollo rural o el desarrollo humano. Es obvio que en ese nivel, desde los programas sectoriales se derivan distintos planes y acciones hacia el tercer estrato. En estos dos niveles operan los análisis de desarrollo más conocidos, que sopesan la idoneidad de los instrumentos económicos utilizados, las diferencias entre los resultados esperados y los obtenidos, la generación de empleo, la promoción del crecimiento económico, etcétera.

El nivel uno concierne a una evaluación dentro de alguna de las grandes familias del desarrollo, como puede ser el desarrollo capitalista. En él

se aplican instrumentos de los estudios críticos sobre el desarrollo comprometido con sectores populares o con temas como la justicia social, como se indicó arriba. Un análisis usual en este primer nivel es cuestionar al desarrollo como «ideología», donde la crítica se hace desde posturas filosófico-políticas (por ejemplo, los neoliberales atacando la pretensión de planificación estatal en el desarrollo o los socialistas reclamando el control del mercado). Esta cuestión se repite para los análisis abarcadores del desarrollo que lo consideran como una «ideología», «paradigma» o «cultura».

Finalmente, existe un nivel cero que corresponde a las bases conceptuales y sensibles sobre las que se sostienen las ideas y prácticas del desarrollo, las «raíces» comunes a cualquiera de sus variedades. Este es el estrato más profundo, donde se ubican las raíces conceptuales del desarrollo. Sin duda existen articulaciones entre los niveles, ya que unos están embebidos en los otros. No obstante, los instrumentos críticos que se aplican en un nivel no necesariamente son los mejores para otro. Los estudios críticos del nivel uno pueden ser útiles en los niveles dos y tres, pero no son los más adecuados para el cero.

El posdesarrollo en su sentido inicial, como crítica posestructuralista, es apropiado para una evaluación del nivel cero. No es la mejor herramienta para estudiar, por ejemplo, la efectividad de una estrategia de desarrollo en particular, en especial por sus conocidas limitaciones para entender la heterogeneidad del desarrollo. A su vez, ese tipo de análisis permite apelar a otros instrumentos que complementen la crítica sobre ese nivel. Se requieren varias herramientas complementarias debido a las complejidades y barreras en los prejuicios, entendimientos y sensibilidades profundamente arraigados.

Herramientas para un análisis crítico de las raíces del desarrollo

Para el nivel cero de los análisis, que corresponde a lo que podría llamarse las «raíces» en las concepciones y sensibilidades del desarrollo, se puede describir una caja de herramientas de análisis crítico de esas raíces del desarrollo. En él se encuentran los siguientes instrumentos: posdesarrollo y otros análisis posestructuralistas sobre discursos del desarrollo, deconstrucción, performatividad, ciertas etnografías del desarrollo, varias metodologías en la economía ecológica, ética ambiental en su tratamiento de la asignación de valores, estudios de género, epistemología crítica y algunos de los ensayos sobre las llamadas «aperturas ontológicas». Esta composición es la que resulta de nuestro trabajo en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en los últimos años (más abajo se comentan atributos de esas herramientas).

Es un análisis crítico de las raíces en el sentido que apunta a la base de las ideas, prácticas y sensibilidades del desarrollo en todas sus expresiones. No se refiere a una mera enumeración de errores, ni necesariamente es un medio para elaborar alternativas al desarrollo, aunque la creencia o necesidad de pensar opciones distintas a las actuales sigue siendo uno de los motores de esas críticas.

Bajo tal clasificación, el posdesarrollo sería un instrumento entre otros posibles con estos instrumentos. Difícilmente se podría defender la existencia de una herramienta que fuese más efectiva y completa en desentrañar el nivel cero en todos sus aspectos. Además, cada instrumento tiene una especificidad, donde los componentes que escapan a su consideración pueden ser abordados por otros instrumentos complementarios. En esa complementación se logra un abordaje más completo.

Es posible mencionar aspectos destacados de algunos instrumentos. La deconstrucción permite identificar las condiciones jerárquicas y binarias que imponen determinadas ideas y sensibilidades, y que a su vez excluyen a otras. Asimismo, la performatividad sirve para reconocer prácticas repetidas mediante las cuales el discurso produce efectos a los que da nombre (estos dos instrumentos aparecen en Gibson-Graham, 2000). El desarrollo está repleto de circunstancias donde la actuación genera actos que son defendidos como desarrollo. Las nuevas etnografías del desarrollo abordan prácticas concretas en emprendimientos y sitios específicos, desentrañan cómo las procesan los actores locales, las redes de relaciones que se crean, las resistencias o reinterpretaciones que emergen (véase Mosse, 2005).

La economía ecológica provee instrumentos clave para aproximarse a la imposibilidad del crecimiento económico perpetuo, los reales metabolismos de las articulaciones entre sociedad y naturaleza, y los efectos ecológicos y económicos de los impactos ambientales (véase Martínez y Roca, 2000). Además, ayuda a repensar los esquemas de valoración al cuestionar las conmensurabilidades perfectas.

Relativo a la ética ambiental, en especial la que aborda los valores propios entre los no humanos, sean especies vivas o ecosistemas, es fundamental para desentrañar la base valorativa de los desarrollos propios de la modernidad. En este campo se observan abordajes heterodoxos que incorporan sensibilidades de algunos pueblos indígenas (Gudynas, 2014a), como reflexiones más formales inspiradas, entre otros, en Naess (2016).

Muchos de los instrumentos de arriba implican otros modos de concebir la generación de conocimientos, y por ello se articulan con ciertas epistemologías críticas. A modo de ejemplo se puede citar a Donna Haraway (2004) por su postura antiesencialista y feminista, donde la identidad se

extiende sobre otros que son considerados radicalmente distintos. Se rescatan también los aportes de la colonialidad del poder y del saber (inspirados en Quijano, 2000). Un producto de la modernidad son las bases del desarrollo, las cuales generan saberes y sensibilidades que se han construido en un entramado de poder, y que a la vez subalternan otros saberes y sensibilidades.

Las aperturas ontológicas permiten aproximarse a otras formas de entender y sentir lo que se considera como el mundo en que se vive (en el sentido de De la Cadena, 2014). Aquí se encuentran instrumentos relevantes para ir más allá de la gran división sociedad-naturaleza, son esenciales para los desarrollos convencionales porque rescatan otras cosmovisiones; destacan los aportes de Viveiros de Castro (2004) y Descola (2012) desde la antropología.

El surgimiento de ese conjunto de herramientas para el análisis de los fundamentos abre enormes potencialidades para una nueva generación de estudios críticos en el desarrollo. Aquellas se están aplicando en diversos sitios, y en varios casos son utilizadas directamente desde los movimientos sociales; todas tienen la potencialidad de promover alternativas que eviten volver a caer en los claroscuros del desarrollo.

Referencias

- Belsey, Catherine (2002), *Post-structuralism. A very short introduction*, Oxford, Oxford University Press.
- De la Cadena, Marisol (13 de junio de 2014), «The Politics of Modern Politics Meets Ethnographies of Excess Through Ontological Openings», *Cultural*

- Anthropology*, en <https://culanth.org/fieldsights/471-the-politics-of-modern-politics-meets-ethnographies-of-excess-through-ontological-openings>
- Descola, Philippe (2012), *Más allá de naturaleza y cultura*, Buenos Aires, Amorrortu.
- Escobar, Arturo (2012), «Preface to the 2012 edition», en *Encountering development. The making and unmaking of the Third World*, Princeton, Princeton University Press, pp. 6-43.
- _____ (2005), «El «postdesarrollo» como concepto y práctica social», en Daniel Mato y Sarah Babb (coords.), *Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización*, Caracas, Universidad Central de Venezuela, pp. 17-31.
- _____ (1995), *Encountering development. The making and unmaking of the Third World*, Princeton, Princeton University Press.
- Esteva, Gustavo (1992), «Development», en Wolfgang Sachs (ed.), *The development dictionary*, London, Zed, pp. 6-25.
- Gibson-Graham, J.K. (2000), «Poststructural interventions», en Eric Sheppard & Trevor Barnes, *A companion to economic geography*, Oxford, Blackwell Publishing, pp. 95-110.
- Gudynas, Eduardo (2014a), *Derechos de la Naturaleza. Ética biocéntrica y políticas ambientales*, Lima, CooperAcción/RedGE/Centro Latinoamericano de Estudios Superiores.
- _____ (2014b), «El postdesarrollo como crítica y el Buen Vivir como alternativa», en Gian Carlo Delgado Ramos (coord.), *Buena Vida, Buen Vivir: imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad*, México: Universidad Nacional Autónoma de México-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, pp. 61-95.
- Haraway, Donna (2004), *The Haraway reader*, New York, Routledge.
- Harvey, David (2015), *Seventeen contradictions and the end of capitalism*, London, Oxford University Press.

- Kothari, Uma (2005), «A radical history of development studies: individuals, institutions and ideologies», en Uma Kothari (ed.), *A radical history of development studies. Individuals, institutions and ideologies*, London, Zed Books, pp. 1-13.
- Latouche, Serge (2009), *La apuesta por el decrecimiento*, Barcelona, Icaria.
- Martínez Alier, Joan y Jordi Roca Jusmet (2000), *Economía ecológica y política ambiental*, México, Fondo Cultura Económica.
- Mosse, David (2005), *Cultivating development. An ethnography of aid policy and practice*, Londres, Pluto.
- Munck, Ronaldo (2011), «Teoría crítica del desarrollo», en Henry Veltmeyer, Ivonne Farah & Igor Ampuero (eds.), *Herramientas para el cambio: manual para los estudios críticos del desarrollo*, La Paz, Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable/Oxfam, pp. 73-77.
- Naess, Arne (2016), *Ecology of wisdom*, Londres, Penguin.
- Nederveen Pieterse, Jan (2000), «After post-development», *Third World Quarterly*, 21(2), pp. 175-191.
- Quijano, Anibal (2000), «Coloniality of power, eurocentrism and Latin America», *Nepantla: views from the South*, 1(3), pp. 533-580.
- Rist, Gilbert (1997), *The history of development. From western origins to global faith*, Londres, Zed.
- Schuurman, Frans (2009), «Critical development theory: moving out of the twilight zone», *Third World Quarterly*, 30(5), pp. 831-848.
- Veltmeyer, Henry (2011), «Vías hacia el cambio progresivo y el desarrollo alternativo», en Henry Veltmeyer, Ivonne Farah & Igor Ampuero (eds.), *Herramientas para el cambio: manual para los estudios críticos del desarrollo*, La Paz, Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable/Oxfam, pp. 351-358.

- Veltmeyer, Henry, Ivonne Farah & Igor Ampuero (2011), *Herramientas para el cambio: manual para los estudios críticos del desarrollo*, La Paz, Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable/Oxfam.
- Viveiros de Castro, Eduardo (2004), «Perspectivismo y multiculturalismo en la América indígena», en Alexandre Surralles y Pedro García Hierro (eds.), *Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno*, Lima, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, pp. 37-80.
- Ziai, Aram (2004), «The ambivalence of post-development: between reactionary populism and radical democracy», *Third World Quarterly*, 25(6), pp. 1045-1060.
- (2007), *Exploring post-development. Theory and practice, problems and perspectives*, Routledge, London.
- (2015), «Post-development: premature burials and haunting ghosts», *Development Change*, 46 (4), pp. 833-854.

Entre el extractivismo y el Vivir Bien: experiencias y desafíos desde Bolivia

Fernanda Wanderley*

Resumen. Bolivia, Ecuador y Venezuela han destacado en el mundo al proponer un nuevo paradigma de desarrollo que pretende recuperar y fortalecer la gobernanza comunitaria y los principios pluralistas de organización política: Vivir Bien, Buen Vivir y socialismo del siglo XXI. Varias interrogantes surgen de la experiencia de los gobiernos progresistas en América Latina a comienzos de los 2000. Los gobiernos que lograron canalizar una potente energía política de la sociedad, favorable a modelos alternativos de desarrollo, se apartaron en la práctica de ese compromiso: adoptaron cambios discursivos y dieron continuidad a la política económica, lo que provocó tensiones sociales y contradicciones políticas. El objetivo de este artículo es reconstruir la experiencia boliviana después de diez años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Al respecto, se analizan las movilizaciones sociales que posibilitaron que Evo Morales asumiera la presidencia en 2006. Asimismo, se discuten los resultados del modelo de desarrollo, los cambios políticos y la fragmentación de los movimientos sociales. La comparación de la experiencia boliviana con otros gobiernos progresistas permite delinear las principales contradicciones y proyectar los desafíos de nuevos proyectos políticos progresistas en la región.

Palabras clave: Vivir Bien, movimientos sociales, gobierno progresista, extractivismo, Bolivia.

* Subdirectora de Investigación del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.

**Between extractivism and *Vivir Bien*:
experiences & challenges from Bolivia**

Abstract. Bolivia, Ecuador and Venezuela are notable in the world for their proposal of a new development paradigm that intends to recover and strengthen grassroots government and the pluralist principals of political organization: *Vivir Bien*, *Buen Vivir* and socialism of the 21st Century. Several questions arise from the experience of progressive governments in Latin America beginning in the 2000s. Those governments that succeeded in channeling a strong political energy from society, predisposed to alternative development models, nonetheless departed in practice from that commitment: they adopted controversial changes and continued the existing economic policy, provoking social tensions and policy contradictions. The objective of this article is to reconstruct the Bolivian experience after ten years of the Movement Toward Socialism (MAS) government. To that end, it analyzes the social movements that made possible Evo Morales' rise to the Presidency in 2006. It also discusses the results of the development model, policy changes and the fragmentation of social movements. The comparison of the Bolivian experience with other progressive governments allows for the identification of the key contradictions and to map out the challenges for other progressive political projects in the region.

Keywords: *Vivir Bien*, social movements, progressive government, extractivism, Bolivia.

Introducción

En la década de 1990, frente al retroceso de los derechos sociales y el incremento de la pobreza, la desigualdad y los desequilibrios ambientales, viejos y nuevos movimientos de resistencia al modelo de mercado libre y autorregulado y sus desastrosas consecuencias para la reproducción de la humanidad, la naturaleza y el propio sistema económico se fueron articulando. A los movimientos antiglobalización neoliberal, de defensa del medio ambiente, de la economía social y solidaria, se sumaron los movimientos feministas, indígenas y de jóvenes que debutaron décadas antes. El manifiesto de la convivialidad, la propuesta política de otra economía, las experiencias de comercio justo, de economías de proximidad y de los cortocircuitos y solidarios son algunas de las expresiones de reclamo por una institucionalidad alternativa de organización de la economía.

Al interior de contextos con crecientes conflictos sociales en América Latina, ascendieron al poder partidos de izquierda en Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia en los albores del siglo XXI. Nuevas constituciones, normativas y planes de gobierno fueron aprobados señalando cambios importantes en la orientación política de la economía. La excepcional bonanza económica en la región entre 2005-2013 y la legitimidad política sostenida en gran medida a causa de la disminución de la pobreza en el corto plazo explican la continuidad de estos gobiernos por más de una década. Con el fin de la bonanza los avances sociales están en riesgo. Según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2016), entre 25 y 30 millones de personas pueden recaer en la pobreza.

Bolivia, Ecuador y Venezuela destacaron en el panorama internacional, como países que proponían un nuevo paradigma de desarrollo —el

Vivir Bien, el Buen Vivir y el Socialismo del siglo XXI— a través de propuestas de recuperación y fortalecimiento de gobernanzas comunitarias y principios pluralistas de organización política. A nivel económico, los nuevos gobiernos se declararon promotores de un modelo económico alternativo con inclusión social y en armonía con la naturaleza. A nivel sociocultural, la opinión pública vinculó estas experiencias a la afirmación y proyección de creencias, cosmovisiones, estilos de vida y principios éticos y estéticos propios de las culturas indígenas andino-amazónicas.

En Bolivia, varias normativas fueron aprobadas para impulsar el principio constitucional de economía plural bajo el nuevo paradigma del Vivir Bien.¹ Esas normativas expresaron el compromiso político del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) con las movilizaciones sociales que demandaron un nuevo modelo de desarrollo inclusivo, plural y en armonía con la naturaleza. Si bien la legitimidad del «proceso de cambio» se ha sostenido sobre el compromiso político de superación del modelo neoliberal y de fundación de un Estado poscolonial, las políticas y acciones estatales de los últimos diez años no siguieron una trayectoria coherente en relación con los discursos oficiales, la nueva carta magna y las normativas aprobadas. Proceso que desencadenó nuevas dinámicas políticas, sociales y económicas con la emergencia de disputas al interior de los movimientos sociales.

¹ Entre las normativas resaltan el Plan Nacional de Desarrollo «Para el Vivir Bien» de 2006, el Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo Digno de 2009 y la Estrategia Plurinacional de Economía Solidaria y Comercio Justo de 2010. Importantes leyes fueron aprobadas: la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en 2010, la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria en 2011 y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien en 2012, la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal de 2012, la Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas Originarias (Oeca) y de Organizaciones Económicas Comunitarias (Oecom) para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria de 2013 y la Ley General de Cooperativas de 2013.

Un conjunto de preguntas surge de la experiencia de los gobiernos progresistas en América Latina al inicio del siglo XXI. Es indispensable explicar las razones por las cuales los gobiernos que lograron canalizar una potente energía política gestada al interior de las sociedades a favor de modelos alternativos de desarrollo se apartaron en la práctica de esos compromisos políticos y se caracterizaron por tensiones y contradicciones entre cambios discursivos profundos y continuidades en la orientación de las políticas económicas.

El objetivo del presente texto es reconstruir la experiencia boliviana después de diez años del gobierno del MAS. Se pretende iluminar la trayectoria de las movilizaciones sociales que generaron la energía política por otra economía y otro desarrollo y que más tarde fue canalizada mediante el partido del presidente Evo Morales, quien llegó al poder en 2006. Sobre esta base se examina el modelo de desarrollo efectivamente implementado en Bolivia y sus resultados, además se discute la inflexión del proceso de cambio y la fragmentación de los movimientos sociales. Comparar el caso boliviano con las experiencias de los países con gobiernos progresistas en ese periodo permite delinear las principales contradicciones y proyectar los desafíos de nuevos proyectos políticos progresistas en la región.

Los movimientos sociales en Bolivia y la propuesta política de otra economía

Comprender la energía política que demandó otro modelo de desarrollo exige reconstruir la trayectoria de las organizaciones de la sociedad civil en el país. Bolivia se caracteriza por sólidos tejidos comunitarios y asociativos

con formas plurales de organización social, política y económica. Una de estas formas es el gobierno comunal (no estatal) en el área rural, a través del cual campesinos e indígenas regulan sus relaciones sociales al interior de las comunidades territoriales e interaccionan colectivamente con el Estado a nivel municipal, departamental y nacional.

Además de la afiliación política a gobiernos territoriales, los indígenas y campesinos son miembros de organizaciones económicas como gremios, cooperativas, asociaciones de productores y comerciantes, unidades económicas familiares y comunidades agrarias; en ocasiones participan en más de una. Durante el siglo XX y principios del XXI, estas organizaciones económicas convivieron o se articularon con emprendimientos capitalistas, de modo que tejieron un proceso de modernización en que predominó el trabajo autogenerado. La densidad organizativa de la sociedad boliviana, sus dimensiones político-territorial y económica-ocupacional, fue y sigue siendo continuamente redefinida en los ámbitos político y simbólico por medio de disputas y rearticulaciones entre las organizaciones sociales de base, sus entes matrices y los gobiernos de turno.

A partir de 1980 emergió una nueva identidad colectiva nacional-indígena alrededor de la cual las organizaciones sociales rurales y urbanas se reconstruyeron con fundamento en la recuperación de la memoria y prácticas indígenas y originarias, hecho que sustituyó los referentes clasistas imperantes tiempo atrás. Este proceso se apoyó en la recuperación documental y académica de las prácticas e instituciones económicas de las comunidades indígenas (el *ayllu*), y su amplia difusión a través de centros de investigación, de acción y de radios comunitarias en idiomas autóctonos.²

² Así, instituciones comunitarias como la *chunca* (clasificación de equipos para el laboreo de la tierra), la *mitta* (turno obligatorio de trabajos agrícolas y de otro orden), la *minca* y el *ayni*

Un sobresaliente hito en tal proceso de reconfiguración de los movimientos sociales en torno a la etnicidad fue la Marcha por el Territorio y Dignidad protagonizada por las organizaciones indígenas de las tierras bajas, lideradas por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) en 1990. La trascendencia de la marcha para la sociedad se revela en los cambios legales y medidas políticas de los siguientes gobiernos a favor del reconocimiento de los territorios indígenas, entre otros derechos colectivos.

A comienzos de los 1990 y a consecuencia de esa movilización, Bolivia ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de los pueblos indígenas y aprobó decretos supremos mediante los cuales reconoció legalmente cuatro territorios indígenas: Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS), Territorio Indígena Multiétnico Chimanes (TIMCH), Territorio Indígena del pueblo Sirionó en el Ibiato y un área de 30 mil hectáreas en el Monte San Pablo. Estos decretos también declararon la intención de promulgar una ley específica para pueblos y comunidades nativas, que más adelante se conocerá como Proyecto de Ley para los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía.

(préstamos de trabajo en beneficio general o privado), el *departir* (arreglo relacionado con el cultivo de tierras y que se lo hace generalmente entre un campesino que posee una yunta y poco terreno y otro que tiene mucho terreno y le faltan yuntas), el *waki* (arreglo que tiene tres variedades y cuyo control se realiza sobre todo en la cosecha recogiendo surcos saltados), la *sattakha* (que consiste en apartar un surco al borde de la legua-kallpa o pequeña parcela, para el usufructo de determinadas personas) y la *kala* (intercambio de leguas-kallpas entre los comunarios, con el objeto de conseguir lotes de tierra más próximos a sus casas y por lo tanto más facilidad para cultivarlos) fueron visibilizadas en una serie de documentos (Moller, 1986; Albó, 1999; Rivera, 1992; Condori, 2003). Estas instituciones remiten a los principios de solidaridad de esfuerzos, de cooperación entre familias que componen una comunidad, de trabajo colectivo de la tierra y de unidad de regulación territorial.

La Constitución Política del Estado (CPE) de 1994 reconoció el carácter multicultural y pluriétnico de la nación boliviana. En los años siguientes se aprobaron nuevas leyes: reforma educativa intercultural bilingüe, sobre reestructuración del Estado que promovieron la integración político-administrativa de las comunidades campesinas e indígenas mediante la municipalización del país, mecanismos de participación popular y control social, establecimiento de espacios colectivos étnicos, como las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), y respecto al medio ambiente. Estas reformas legislativas y político-administrativas progresistas fueron promovidas, paradójicamente, bajo la hegemonía de las políticas económicas neoliberales.

Los ajustes estructurales, las privatizaciones, el retroceso del frágil Estado benefactor y la precarización del empleo en el periodo neoliberal constituyeron la base material para la pérdida de legitimidad de los gobiernos de ese periodo y la convergencia de los movimientos alrededor de una agenda política común. Dicha energía social adquirió un nuevo impulso político a partir de 2000, cuando las organizaciones sociales se movilizaron por la defensa de recursos territoriales de gestión comunitaria y por el control de bienes (tierra, agua e hidrocarburos).

Se densificaron las articulaciones entre organizaciones emergentes, Coordinadora del Agua y la Vida; así como antiguas organizaciones de base territorial, Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia «Bartolina Sisa» (FNMCB-BS), Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (Coca Trópico) y Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) en las

ciudades. Dichas organizaciones conformarían el reciente núcleo del movimiento social.

Una de las demandas centrales era la apertura de una Asamblea Constituyente para la refundación del Estado y de su economía, cimentada en los principios y valores colectivos de las comunidades indígenas y campesinas. Las organizaciones sindicales de base territorial, citadas con anterioridad, y otras organizaciones populares formaron el Pacto de Unidad³ entrado el siglo XX. Éste apoyó el MAS a la vez que atestiguó la capacidad del partido para canalizar políticamente la representación de las organizaciones sociales populares de larga tradición comunitaria-indígena y sindical-cooperativista, en articulación con nuevos actores en contra de la hegemonía neoliberal, el imperialismo y el colonialismo interno.

Modelo de desarrollo entre 2006 y 2016

En el marco de los compromisos políticos con las organizaciones sociales, el nuevo gobierno del MAS lideró la instauración de la Asamblea Constituyente, en agosto de 2006, con la amplia participación de los actores

³ El Pacto de Unidad nace en Santa Cruz en 2004, con el desafío de articular al movimiento campesino indígena del país e impulsar la realización de una Asamblea Constituyente «fundacional, soberana y participativa» que aprobara una Constitución fundada en el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos y naciones originarias. Los estudiosos del tema coinciden en afirmar que «el Pacto de Unidad fue el espacio de imaginación y diseño del Estado Plurinacional» (Tapia, 2011). Fue la instancia que asumió la articulación del proyecto de un Estado Plurinacional en Bolivia en torno a las organizaciones campesinas-indígenas «que se configura como una especie de intelectual orgánico colectivo y que produce los dos documentos globales más importantes. Uno inicial, que está más marcado por los principios organizativos, y una segunda propuesta que ya contiene un diseño bajo la forma de Constitución» (Tapia, 2011).

colectivos populares. Así, se inauguró un periodo de transformaciones discursivas y políticas profundas, con la redefinición del horizonte de los cambios deseables y posibles, que llegó a su máxima expresión en la nueva Carta Magna aprobada en 2009 con la revalorización de la comunidad, sus valores y principios de vida colectiva, en contraposición a los valores y principios del proyecto político liberal.

Nuevos referentes simbólicos de la comunidad política imaginada y los principios legitimadores de ciudadanía marcaron los primeros años del gobierno del MAS. Ser indígena y pertenecer a colectivos populares se consolidaron como pilares de la identidad boliviana. Ese proceso ocurrió a través de la introducción de un nuevo vocabulario en los discursos políticos y la normativa nacional, como el Vivir Bien, la Madre Tierra, el pluralismo político y económico, la comunidad y la solidaridad.

El escenario político también se transformó, con la inclusión de nuevos actores de ascendencia popular, campesina e indígena en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los impactos subjetivos de la revalorización política y simbólica de lo popular, indígena y campesino fueron intensos. Los sectores populares se sintieron reivindicados como individuos y colectividades en una sociedad estructurada por persistentes y profundos clivajes étnicos y de clase. La identificación con la historia personal de Evo Morales así como con las rupturas sociales que él y su gobierno llegaron a simbolizar, incluyendo la desnaturalización de prácticas y discursos discriminadores y excluyentes por parte de las elites criollas, fueron trascendentales.

A esta fuerza simbólica, encarnada físicamente por los nuevos representantes políticos, reforzada por los contenidos de los discursos oficiales y los nuevos espacios de interlocución con el Estado, se sumó la ascensión de una nueva clase media de origen popular e indígena, en un contexto

excepcional de crecimiento económico, impulsado fuertemente por el alza de los precios internacionales de las materias primas y en específico de los hidrocarburos, minerales y alimentos. La inclusión social se fundó en la expansión de la capacidad de consumo de los estratos menos favorecidos.

Sin embargo, dicho proceso de inclusión simbólica, política y social se sustentó sobre bases económicas y políticas precarias que empezaron a agotarse con el fin del periodo de bonanza y de la disminución de recursos públicos que garantizaban el apoyo de grupos corporativos como la continuidad de las políticas redistributivas. La inclusión política de las clases populares siguió la lógica de distribución discrecional de recursos y favores por parte del gobierno a cambio de apoyo político. Proceso que fortaleció relaciones particularistas entre grupos corporativos y aquellos que toman decisiones, los resultados fueron la captura de políticas, programas y proyectos en lógicas no democráticas y la escalada de prebendas y de corrupción.

Silvia Rivera Cusicanqui (2012) expresa la reproducción de este tipo de gobernanza a lo largo de la historia de Bolivia:

No está por demás reiterar el nexo perverso que exhibe el gobierno de Evo Morales con el Estado colonial del MNR de los años 1950, que propició una escalada de corrupción y relaciones prebendales con dirigentes del campesinado indígena. Hoy, todo ello forma parte de una memoria estatal de colonialismo interno que ya no se circunscribe a un partido, siendo patrimonio de la clase política y del sistema de partidos en su conjunto. Así, todo alarde de ruptura del MAS con el viejo modelo político hace aguas al contemplar esta versión remozada de la parodia revolucionaria, tan bien expresada en sus políticas culturales y desarrollistas, que son una repetición, en clave de farsa, del adusto y racional programa de desarrollo del MNR.

El contexto de bonanza económica favoreció la reedición de prácticas políticas clientelares y prebendales. Entre 2006 y 2014, el incremento de la capacidad de gasto corriente y de inversión pública fue exponencial en relación con el periodo anterior (1996 y 2005) y se sostuvo sobre la profundización de la dependencia del Estado respecto de las rentas de la explotación de recursos naturales. Para puntualizar, alrededor de 50 por ciento del presupuesto público fue generado por recursos provenientes de la exportación de hidrocarburos, minerales y agroindustria.

Asimismo, el buen desempeño macroeconómico en este lapso con un crecimiento promedio anual de 4.5 por ciento se explica tanto por la mejora de los términos de intercambio de las materias primas, como por una mayor demanda interna (capacidad de compra de la población), impulsada por los significativos incrementos en el gasto e inversión pública, que compensaron la contracción de la inversión extranjera directa (IED) y de la inversión privada nacional.

En consecuencia, hubo una disminución de la pobreza y la desigualdad. La inyección de recursos estatales en la economía ocurrió principalmente a través de obras públicas; compra de insumos de capital para empresas estatales; expansión del empleo en las entidades públicas; profundización de políticas redistributivas (en especial transferencias monetarias en forma de bonos); subsidios de gasolina, gas domiciliario y energía eléctrica; fondos de transferencia directa a las comunidades territoriales, como el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (conocido como Fondo Indígena).⁴

⁴ Este fondo se investiga por manejos discrecionales y corrupción con algunos líderes indígenas y campesinos presos.

El incremento del salario mínimo nacional, el establecimiento de un techo en los sueldos de la administración pública y la implementación del doble aguinaldo, contribuyeron a profundos cambios en la dinámica del mercado de trabajo, por ejemplo, aumento del empleo menos calificado en servicios, comercio, construcción y transporte no vinculados con la producción y de baja productividad; disminución del desempleo; incremento de los ingresos reales de los trabajadores menos calificados; disminución de los ingresos reales de los trabajadores más calificados (Wanderley, 2015). Dinámicas que llevaron a los resultados sociales de signo positivo en el corto plazo como la disminución de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, con el fin de la bonanza, estos resultados están en riesgo.

En un contexto internacional de retracción de la demanda y de los precios internacionales de las materias primas, de reversión de las dinámicas socioeconómicas y de la intensificación de los conflictos sociales, resurgen interrogantes en cuanto al modelo efectivamente implementado a principios del siglo XXI y su sostenibilidad en el largo plazo. ¿Bolivia ha encauzado su trayectoria hacia el paradigma del Vivir Bien o ha profundizado el patrón de crecimiento extractivista bajo un nuevo capitalismo de Estado?

Con base en los análisis acerca de las políticas efectivamente implementadas y los resultados alcanzados en diez años,⁵ se constata que no obstante a los innovadores principios constitucionales y el conjunto de leyes aprobadas en concordancia con el paradigma de un desarrollo alternativo, dichas políticas propugnaron por la profundización del patrón extractivista. En realidad, la mayoría de las normativas referidas a los valores

⁵ El análisis minucioso de las políticas públicas puede consultarse en Wanderley (2013).

del Vivir Bien, al fortalecimiento de la economía social y comunitaria, a la promoción de la diversificación productiva y al respeto por el medio ambiente no se reglamentó ni se tradujo en políticas públicas coherentes e integrales; hasta la actualidad, el debate sobre otro desarrollo permanece marginal en la gestión de la política económica.

Todavía más revelador es la distribución del gasto e inversión pública. En un contexto excepcional de bonanza, el gobierno del MAS destinó la mayor parte de los recursos públicos a los rubros de hidrocarburos, minería y agronegocios, en desmedro de otros sectores económicos (agricultura familiar campesina, turismo e industria). Aunque el gasto y la inversión pública absoluta en cualquier sector se ha elevado en consonancia con el incremento de los ingresos públicos, en términos relativos la inversión pública se orientó a grandes proyectos en los sectores estratégicos principalmente hidrocarburífero y mineral. De ese modo, se reeditó el círculo vicioso: los ingresos estatales dependen en gran medida de los excedentes generados por las actividades extractivas y éstas se mantienen como destinatarias priorizadas del gasto e inversión públicos.

Tal orientación de las políticas económicas desencadenó o agudizó dinámicas económicas, laborales y sociales de difícil reversión. Tomando en cuenta que los principales yacimientos se encuentran en territorios comunitarios e indígenas, esta base de sustento del financiamiento público posee graves implicaciones sociales, políticas y económicas en las posibilidades de fortalecimiento de las otras economías (comunitarias indígenas) y en el respeto por la naturaleza, por lo tanto, son incompatibles con el paradigma del Vivir Bien.

De igual manera y considerando el bajo eslabonamiento del sector hidrocarburífero y minero, la priorización de la inversión aparte de no

reforzar procesos de diversificación productiva, posee efectos negativos sobre los otros sectores económicos, en particular, en los generadores de empleo. Un ejemplo se observa en la producción nacional de alimentos, en la agricultura familiar de base campesina e indígena. Al no sobresalir en las políticas económicas, la producción nacional campesina no creció para responder al incremento de la demanda interna de productos de la canasta básica. Tampoco hubo incremento significativo de la productividad de la producción agrícola para el consumo interno, con excepción de algunos rubros (quinua, cacao y café) para exportación. Si anteriormente se tenía la capacidad de autoabastecimiento, como frutas y legumbres, en la actualidad su importación se ha elevado de manera considerable. Para tener una idea más clara, hoy se importa el triple de los alimentos respecto de hace diez años.

La insuficiencia de una estrategia efectiva que genere condiciones que sostengan los objetivos de seguridad con soberanía alimentaria se expresa en los exiguos recursos destinados a políticas y programas integrales dentro de un periodo de excepcional bonanza económica.⁶ Así expresa Urioste la visible contradicción entre el compromiso político y las políticas implementadas:

El actual Gobierno empezó su gestión en 2006 prometiendo una radical reforma agraria para eliminar el latifundio, promoviendo un modelo de base campesina, indígena, diversificado, con una producción que permita la seguridad y soberanía alimentaria. Pero estamos cada vez más lejos de eso. Hoy en Bolivia se importa el triple de alimentos que hace diez años. Lo que quiere

⁶ Colque, Urioste y Eyzaguirre (2015) han efectuado un análisis reciente sobre la agricultura en Bolivia.

decir que el aumento en el consumo que está viviendo la población boliviana no proviene de la producción local, sino de la importación de alimentos (entrevista con Iván Bustillos Zamorano, *La Razón*, 2015).

Esta situación también produce efectos negativos en la generación sostenida de empleo. En relación con el sector primario, principal reactivador de empleo, se constata la disminución de la ocupación en la agricultura y pecuaria debido a la migración campo-ciudad y a la reconversión de agricultores y productores rurales en comerciantes, transportistas, albañiles y mineros en trabajos informales. Dinámica impulsada por el incremento significativo de circulante (dinero) en la economía proveniente del alza de los precios internacionales de las materias primas exportadas por Bolivia. La caída de los precios del gas y de los minerales en los últimos años y consecuentemente la disminución de los ingresos por exportación, coloca en una encrucijada la sostenibilidad de los ingresos laborales de la mayoría de los trabajadores.

De modo paralelo, pelagra la sostenibilidad de las políticas sociales. Además de que el gasto social se mantuvo dependiente de las rentas de los sectores extractivos se distribuyó a través de bonos monetarios, gasto corriente (salarios) y subsidios a servicios básicos (gas domiciliario, energía eléctrica y combustible), antes que el fortalecimiento de los sistemas institucionales de protección social (sistema público de salud, educación y seguridad social).

En conclusión, el objetivo de diversificación productiva y fortalecimiento de la economía social comunitaria fue marginal en las políticas efectivamente implementadas por el gobierno del MAS. La marginalidad de estos objetivos en las políticas económicas se comprueba incluso por

la debilidad institucional del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) —entidad que fortalece la institucionalidad de la economía plural y fomenta la agroindustria, producción de alimentos, artesanía, manufactura, industria y turismo. Tal ministerio no tuvo un papel protagónico en las políticas económicas, la opinión pública, las autoridades y los técnicos consideraron su actuación de «segunda línea»; en adición, estiman que su influencia en las decisiones económicas estratégicas fue escasa y sin mayores efectos en las políticas macro y microeconómicas de desarrollo productivo.

Dicha apreciación se manifiesta en los documentos oficiales del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que reclama un mayor protagonismo político como coordinador entre diferentes ministerios e instancias (Ministerio de Planificación del Desarrollo, de Educación y su Viceministerio de Ciencia y Tecnología, a cargo de la creación del Sistema Boliviano de Innovación; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Ministerio de Trabajo; Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; Banco de Desarrollo Productivo). Dicha función tampoco fue transferida a otro ministerio, de ahí que se ha observado una fragmentación y descoordinación entre los entes estatales centrales, y entre éstos y los subnacionales en la promoción de las políticas de desarrollo productivo en los sectores no tradicionales y fortalecimiento de la economía plural.

La novedad del modelo de desarrollo efectivamente implementado fue el mayor protagonismo del Estado en articulación con el sector privado empresarial, con base en la hipótesis de que la superación del lugar secundario del Estado durante el periodo neoliberal sería la condición suficiente para promover el desarrollo productivo del país. Esta idea desembocó en la ampliación de la economía estatal vía procesos de nacionalización y

creación de empresas públicas, en un vasto espectro de sectores económicos. La economía social y comunitaria se relegó con relación a la economía pública y privada. Se asistió a la consolidación de alianzas políticas y económicas entre el gobierno del MAS y parte del empresariado tradicional (especialmente de los ámbitos financiero y agroindustrial) y de actores de la economía privada popular, en los sectores de servicios, transporte, comercio y minería, altamente dependientes de la bonanza económica.

Dos fueron las prioridades del modelo: mayor participación del Estado como agente directo en la economía mediante empresas públicas y redistribución de la riqueza por medio del aumento en el consumo social y el control de la inflación. Objetivos expresados en el Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo Digno de 2006. En concordancia con el primer objetivo, las empresas públicas se convirtieron en el principal instrumento de política pública, además no se otorgó atención ni recursos al fomento —en paralelo— de un tejido productivo social y comunitario popular, a través de servicios y agencias de desarrollo, sistemas de innovación y asistencia técnica u otros. Respecto al segundo objetivo, se priorizó la regulación de precios y la importación de bienes de primera necesidad (alimentos), antes que la promoción de la producción nacional. Una consecuencia de lo anterior es el estancamiento de la productividad dentro del sector agrario campesino e indígena, el deterioro de la producción agrícola familiar y la creciente importación de productos de consumo.

La actuación de las empresas públicas (instrumento esencial de política pública) en los sectores no extractivos no propició el fortalecimiento de las organizaciones colectivas de productores. Se evidencia una tendencia a la relación contractual directa con productores individuales, debilitando a las asociaciones y la acción colectiva en el ámbito productivo. Asimismo,

la relación vertical (de arriba hacia abajo) entre empresas públicas, productores individuales y asociaciones, debilitó las organizaciones colectivas referente al Estado (Quino, 2011; Ruesgas, 2013). El testimonio de un pequeño productor es elocuente:

El gobierno dice: «Si les quiero apoyar a ustedes» y nos han matado a los cuatro, cinco meses que estábamos produciendo yogurt, queso, nos han matado con Lacteosbol (una de las empresas estatales creadas desde 2006). Además que ni siquiera son sostenibles. No terminan de destruir todo eso y se apartan, y esa población queda totalmente en ruina (representante del Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo).

A largo plazo, el modelo establecido no trilló la ruta para la transformación del patrón extractivista en la Bolivia, es decir, no se implementaron políticas consistentes para transformaciones económicas estructurales en el marco de un proyecto de desarrollo alternativo con base en la pluralidad económica y la sostenibilidad ambiental. Por el contrario, se ha profundizado el extractivismo (hidrocarburos, minerales y agroindustria de monocultivos) en alianza con el sector privado transnacional y nacional, en menoscabo de la sostenibilidad ambiental, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la diversificación productiva nacional.

De frente al futuro se corrobora la continuidad de la apuesta por las actividades extractivistas en el tercer mandato del presidente Evo Morales. Los tres últimos decretos supremos (aprobados entre mayo y junio de 2015)⁷ dejan atrás las esperanzas sobre la gestación de un modelo de desarrollo

⁷ Para ampliar la información, véase Agencia de Noticias Fides (13 de octubre de 2015).

alternativo en Bolivia, en la medida que autorizan el ingreso de empresas petroleras a las 22 áreas protegidas del país, además de hacer retroceder el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa sobre proyectos en sus territorios.⁸ El presidente Evo Morales lo justificó en los siguientes términos: «Fundación que perjudique la explotación de los recursos naturales» en Bolivia «se tiene que ir del país», recordando que sufrirán el mismo destino que la cooperación danesa, expulsada por apoyar a los pueblos indígenas en la promoción de los derechos de la Madre Tierra. Aclaró también la medida: «No seremos guardabosques de los países industrializados». Explicó que las áreas forestales son una invención del «imperialismo norteamericano» (ANF, 2015).

Inflexión del proceso de cambio y fragmentación de los movimientos sociales

El proceso de cambio, que comenzó con rasgos de transformación épica en los niveles simbólico y político presentó problemas a partir de 2010. En 2011 ocurrió un conflicto entre el gobierno del MAS y los pueblos indígenas de tierras bajas por la construcción del tramo de la carretera que atraviesa el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), ubicado en los departamentos de Beni y Cochabamba, y jurisdicción de los pueblos Mojeno, Yuracaré y Chimán. Los pueblos indígenas denunciaron la vulneración de los principios constitucionales de la consulta previa, el

⁸ En efecto, estas disposiciones desconocen el artículo 352 de la Constitución Política del Estado que establece la consulta libre, previa e informada, según las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, y dan paso a contratos con empresas transnacionales a fin de explotar petróleo en esas áreas, sin reparar las resistencias indígenas o daños ambientales y sociales que puedan provocar las nuevas medidas.

consentimiento libre e informado, la autonomía de los pueblos indígenas sobre su territorio y los impactos socioambientales negativos del megaproyecto. La intransigencia del gobierno a favor de la construcción de la carretera movilizó a la ciudadanía, que exigió coherencia con los compromisos políticos de transformaciones económicas estructurales.

Este conflicto evidenció los diferentes proyectos de desarrollo y las contradicciones de los intereses económicos de los actores sociales representados por el gobierno del MAS: por un lado, los intereses de los cocalleros, colonizadores, agroindustriales, empresarios del sector petrolero y minero, comerciantes, transportistas, cooperativistas mineros de ascendencia indígena; por otro, los derechos de los pueblos indígenas de tierras bajas y la defensa del medio ambiente. El TIPNIS entra a la historia como el evento que visibilizó las contradicciones entre dos proyectos económicos concurrentes en el partido gubernamental en los primeros años: *a)* la superación del modelo capitalista neoliberal y de base extractivista, a través del fortalecimiento de la economía social-comunitaria en el marco de la pluralidad económica y del Vivir Bien; *b)* el capitalismo de Estado fundado en la profundización del extractivismo (hidrocarburos, minerales y agroindustria), en alianza con empresarios internacionales y nacionales (tradicionales y de extracción popular). Al inicio del tercer mandato se puede afirmar que el segundo proyecto fue el vencedor.

Un resultado del conflicto fue la ruptura del Pacto de Unidad, tras la negativa de la Cidob y Conamaq de seguir respaldando al gobierno del MAS, y la redefinición del mapa político de los movimientos sociales con la formación de dos bloques: el primero con las organizaciones que están a favor del gobierno del MAS de modo incondicional y el segundo con las organizaciones que le retiraron su apoyo.

Otro evento importante en el proceso de inflexión y que terminó en el enfrentamiento entre organizaciones sociales y económicas que luchan por el modelo de economía social y comunitaria, se suscitó a raíz de la elaboración de las normativas para su desarrollo,⁹ cuando se desencadenó una disputa sobre quién debería ser el interlocutor legítimo de la economía social-comunitaria frente al Estado en cuanto a la incidencia en la toma de decisiones y el acceso a recursos públicos, en particular los provenientes del Fondo Indígena.¹⁰

Las nuevas leyes establecieron dos conceptos de economía: «economía comunitaria», representada por federaciones y confederaciones político-territoriales; «economía social y solidaria», representada por centrales, plataformas y movimientos de asociaciones y cooperativas de productores. Es así que las normativas establecieron también dos tipos de actores sociales: Organizaciones Económicas Campesinas (Oeca) y Organizaciones Económicas Comunitarias (Oecom). Esta última categoría no existía antes de la Ley 144 de 2011.

La diferencia primordial entre ambos actores sociales, siguiendo la normativa, radica en el tipo de membresía de los socios que asumen la gestión de los emprendimientos colectivos. En las Oecom, la membresía es obligatoria por pertenencia a un territorio y la gestión es asumida por los gobiernos comunales. Esto significa que los socios de los emprendimientos económicos comunitarios son los habitantes de un territorio. En las Oeca, la membresía es voluntaria por afinidad de intereses entre personas

⁹ Se alude en específico a la Ley 144 Revolución productiva comunitaria agropecuaria de 2011 y la Ley 338 Integración de la agricultura familiar y la soberanía alimentaria de 2013.

¹⁰ Para más información correspondiente a los procesos de aprobación de estas leyes y su relación con las organizaciones sociales y económicas, véase Wanderley, Sostres y Farah (2015).

que deciden formar asociaciones o cooperativas al interior de las comunidades territoriales o entre comunidades y la gestión la llevan a cabo los socios-trabajadores del emprendimiento.

La adscripción obligatoria territorial y la asociación voluntaria por afinidad constituyen diferentes principios de membresía y gestión colectiva. En las comunidades, en numerosas ocasiones, campesinos e indígenas están afiliados a ambas estructuras organizacionales y para ellos no existe ningún conflicto con mantener la doble membresía. Pese a que ambos tipos de organizaciones convivieron en los territorios rurales, los nuevos preceptos impulsaron disputas políticas en el país para ser elegidos como únicos representantes de la economía comunitaria. En realidad el conflicto tuvo lugar en la esfera de la política nacional alrededor de la adhesión o no al proyecto del partido oficial y su defensa incondicional: las Oecom con organizaciones sociales que alientan al partido en funciones de gobierno y las Oeca, que hasta ese momento habían mantenido un perfil político independiente.

De esta manera, la creación de la figura de las Oecom por la Ley 144 de 2011 pretendía expandir las funciones de los gobiernos comunales (denominados sindicatos agrarios territoriales) desde sus atribuciones sociales y políticas a funciones económicas como emprendimientos comunitarios. A pesar de la escasa experiencia organizativa en el ámbito económico, tales organizaciones fueron ascendidas como representantes legítimos de la economía social-comunitaria y, por lo tanto, se convirtieron en canalizadoras de los recursos dispuestos directamente para el fortalecimiento de la economía sociocomunitaria mediante fondos gestionados por ellas, mientras que las Oeca fueron excluidas.

Las organizaciones matrices de base territorial —la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Federación

Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia «Bartolina Sisa»— fueron reconocidas como las representantes únicas de la economía social-comunitaria. En tanto, las organizaciones matrices de la economía solidaria —el Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo y la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas— siguieron peleando su inclusión desde sus espacios de representación. La contienda derivó en la aprobación de la Ley 338 de 2013 que las incluyó como otro actor económico de la economía comunitaria. Sin embargo, no se ha resuelto la pugna entre las organizaciones económicas colectivas por el reconocimiento del Estado.

A lo largo de diez años se observa que las organizaciones sociales y económicas populares concentraron sus esfuerzos en disputas sobre su participación legítima dentro del nuevo modelo de economía social y comunitaria con un manejo político del MAS y un dudoso compromiso con la diversificación productiva en un marco democrático, pluralista y sostenible ambientalmente.

Conclusiones

Varias preguntas surgen de la experiencia de los gobiernos progresistas en América Latina en los albores del siglo XXI. Es importante explicar las razones por las que los gobiernos que lograron canalizar una potente energía política gestada al interior de las sociedades contra el modelo económico hegemónico y a favor de modelos alternativos de desarrollo, se apartaron, en la práctica, de esos compromisos políticos. Aunado a ello, se caracterizaron por tensiones y contradicciones, entre cambios

discursivos profundos y continuidades en la orientación de las políticas económicas.

En el caso boliviano, las normativas aprobadas no sólo guardan discordancias entre sí, además de que no fueron reglamentadas ni traducidas en políticas públicas. Debido a que las normativas agravaron conflictos y fragmentaciones al seno de las organizaciones sociales dificultaron la generación de acuerdos referentes a intereses compartidos, por encima de controversias bilaterales por favores y beneficios políticos. En efecto: pese al compromiso político con la superación del patrón extractivista a través de la diversificación productiva y el fortalecimiento de la economía plural de base popular, campesina e indígena en el marco de la armonía con la naturaleza, Bolivia siguió confiando en el patrón de acumulación fundado en actividades extractivas de recursos naturales no renovables, escasamente articuladas con aquellas que crean empleo, y dependientes de variables exógenas, proclives a tendencias cíclicas como el precio internacional de materias primas. Uno de los resultados del patrón de acumulación es la continuidad de la precariedad y marginalidad del empleo, más allá del aumento del ingreso de los trabajadores, en concreto de los menos calificados, en la última década. La mayoría de la población ocupada continúa generando sus propias fuentes de trabajo al margen de la seguridad social.¹¹

La experiencia reciente en la región obliga a que las reflexiones crítica, académica y política trasciendan el debate discursivo contra la ideología neoliberal y los ataques de la derecha. Es imperante redefinir las preguntas

¹¹ Si bien hay una tendencia al incremento de la cobertura de la seguridad social de corto y largo plazos en los últimos diez años, 65 por ciento del total de la población boliviana estaba excluida de la seguridad de corto plazo (salud) en 2010 y 71.46 por ciento de la población ocupada en 2011 no estaba afiliada a un fondo de pensiones (seguridad de largo plazo).

y los marcos analíticos para explicar los procesos vividos, las relaciones entre el poder instituido y la sociedad civil, entre discurso y práctica política, y así ampliar la complejidad de los desafíos que enfrentan los horizontes de transformación ética y política hacia otra economía y otro desarrollo.

Al respecto, la pérdida creciente de legitimidad de los gobiernos progresistas en la región no puede interpretarse como el resultado del asalto de la derecha. Hoy vivimos una crisis de representación desde la izquierda, de ahí que sea el momento de ahondar en la reflexión crítica de los horizontes que guiaron prácticas y políticas de gobiernos que se mantuvieron en el poder por más de una década. La discusión abierta y plural de la historia reciente, sus avances y retrocesos, y la identificación de las contradicciones de los gobiernos progresistas permiten reconocer las profundas brechas entre las demandas y las expectativas gestadas al interior de las sociedades, así como las perspectivas políticas de la izquierda en el poder. Dicha inmersión hará factible delinear los desafíos de nuevos proyectos políticos progresistas.

Una de las lecciones fundamentales de las experiencias aludidas concierne a la incapacidad de la izquierda de comprender la gran novedad a inicios del siglo XXI: la insostenibilidad ambiental de un modelo de crecimiento ilimitado. Esta nueva realidad invalida el supuesto de la infinitud de los recursos naturales, el cual defiende modelos de pensamiento y de políticas de desarrollo que comparten derecha e izquierda. Es decir, el cambio climático, los desastres y desequilibrios ambientales y el agotamiento de los recursos naturales conforman las nuevas verdades que no fueron asumidas con seriedad en la gestión pública.

En contigua tesis, las experiencias recientes de gobiernos progresistas en América Latina reflejan la historia de inercias cognitivas y políticas que

en la actualidad deben afrontar sus propios límites. Los gobiernos progresistas no abandonaron el *modus operandi* de gestión pública vertical, de arriba hacia abajo, y no se preocuparon por el fortalecimiento de espacios locales de deliberación democrática. Tampoco transformaron el *modus pensanti* de negación de la importancia de la diversificación productiva ambientalmente sostenible. Se afirma, entonces, que la apropiación política de visiones creativas (como Vivir Bien) cumplió un papel de legitimación política para líderes y tomadores de decisiones que no creían en ellas y por ende siguieron haciendo más de lo mismo: profundizar un patrón extractivista, comandado ahora por el Estado y, correlativamente, con la justificación del uso de las rentas para el combate a la pobreza.

Otra lección, que se relaciona estrechamente con la anterior, alude a la visión de inclusión social como disminución de la pobreza sin reducción significativa de la desigualdad. Ello condujo a políticas sociales dependientes del patrón extractivista, pautadas por la lógica de la acumulación irrestricta del capital en el mundo y la explotación ilimitada de los recursos naturales. Tal visión pretende justificar la profundización del extractivismo con el propósito de generar recursos suficientes para una relativa y coyuntural aminoración de la pobreza, sin alterar la vorágine de un capitalismo no regulado.

Es preciso, por tanto, efectuar una revisión crítica de la noción de inclusión social que pautó las estrategias de estos gobiernos y que se limitó a la ampliación de la capacidad de consumo a un costo ambiental insostenible. De modo semejante, es importante replantear qué se entiende por justicia social desde el paradigma del cuidado de los seres humanos y de la naturaleza con viabilidad económica. El desafío es pensar las transformaciones viables de construcción de justicia social (extinción de

la pobreza, disminución de las desigualdades y nuevos patrones de consumo y estilos de vida) con equilibrio ambiental (reposición de los ciclos naturales y su preservación). Ambas dimensiones en igualdad de relevancia y, en consecuencia, fuera de la lógica secuencial —primero se explotan al máximo los recursos naturales para reducir la pobreza y después se intenta superar el extractivismo mediante la diversificación productiva. La lógica debe ser revertida a través de la articulación de políticas económicas de promoción de la diversificación productiva y de políticas sociales sostenibles. Tal proceso conduce a la discusión sostenida y abierta de la reforma fiscal progresiva y la asignación presupuestaria en un marco de deliberación con amplia participación ciudadana.

Una lección más se refiere a la gobernanza política, esto es, la relación Estado y sociedad en la gestión del poder. Estos gobiernos mantuvieron lógicas rentistas, extendieron prácticas clientelares y prebendales entre dirigencias sociales y políticas con manejos poco transparentes de los recursos públicos e institucionalizaron el uso discrecional de los fondos y la corrupción. Todo en nombre de la disminución de la pobreza en un contexto de bonanza económica excepcional. En el caso boliviano, dichas acciones han menoscabado la independencia organizativa de la sociedad civil con varios mecanismos de cooptación: reparto de cuotas de poder, oferta de empleos en el sector público, distribución de recursos y oportunidades de negocios a la sombra del Estado, al margen de la institucionalidad democrática y de procedimientos de rendición de cuentas.

Este modelo de gestión pública consolidó grupos de poder orientados a la defensa de intereses corporativos, en contra del bien común, a la vez que fomentó un *modus operandi* autoritario y violento en el seno de la sociedad civil. Es evidente además que en ese periodo se redujeron los

espacios de discusión y deliberación de las políticas económicas que cimentaron el modelo económico implementado a escalas local y nacional; situación que ocurrió gracias a la reversión de la descentralización política y administrativa.

Con base en el análisis previo se plantean algunos desafíos que encaran los nuevos proyectos políticos progresistas. El gran reto radica en desarrollar un paradigma que traduzca los principios del Vivir Bien en políticas, programas y acciones por medio de la apertura de espacios de debate y deliberación; iniciativa que sin duda se encuentra en manos de la sociedad civil. Se trata de construir colectivamente trayectorias posibles de transformación económica con la articulación de tres principios: respeto por los ecosistemas, justicia social (superación de la pobreza y disminución significativa de la desigualdad) e inclusión del pluralismo (de actores sociales, organizaciones económicas y gobernanzas político-económicas) en un marco democrático.

Ello implica un cambio radical del paradigma del desarrollo, concepto con dos significados. El primero, de cambio histórico y procesos de transformación de las estructuras sociales, impulsado por fuerzas de índole variada y emergentes relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. El segundo, de estrategias para direccionar los procesos económicos y sociales hacia determinados objetivos u horizontes políticos; estrategias que parten del rechazo del supuesto del crecimiento ilimitado asociado a la explotación irrestricta de la naturaleza y de la reproducción del patrón vigente de consumo de bienes materiales.

Constituye un cambio cognitivo profundo que trastoca el horizonte político progresista sobre la organización alternativa de la economía. El desarrollo económico, entendido como procesos de mejora sostenida

de las condiciones de vida de poblaciones distintas insertas en ecosistemas disímiles (los cuales requieren cuidado para su continua reposición), replantea la forma de encarar los desafíos desde las dimensiones territorial y ecológica. Intervienen también: transición energética a fuentes renovables, limpias y bajas en niveles de carbono distinguiendo corto, mediano y largo plazos; innovación y desarrollo tecnológico para la diversificación productiva ecológicamente sostenible; uso consciente de recursos como el agua; procesos productivos limpios, eficientes y eficaces de bienes y servicios; gestión responsable de residuos y fortalecimiento de gobernanzas comunitarias-territoriales en contextos democráticos de deliberación y control social.

El nuevo paradigma impone una nueva escala de valores (métrica) para evaluar la contribución de las diferentes actividades económicas al desarrollo de las sociedades. Por lo tanto, la revisión crítica de los conceptos de eficiencia, eficacia y sostenibilidad financiera, en una perspectiva que no se limita a la dinámica mercantil y al principio de ganancias.¹² Los proyectos políticos alternativos requieren de otros indicadores (parámetros) de análisis de «costo y beneficio» de las actividades económicas, atendiendo a implicaciones y efectos medioambientales de la generación de excedente, de los resultados sociales (redistributivos) y de la calidad del empleo, tanto en territorios locales como de su impacto de derrame en la región, el país y el mundo. En otras palabras, nuevos criterios de evaluación de las actividades económicas para la transformación social-ecológica.

Con base en parámetros alternos puede comenzar la discusión sobre beneficios y costos del patrón extractivista a corto y largo plazos. Si por un

¹² Al respecto, Tauile (2009), Gaiger (2008) y Coraggio (2008) abordan ese tópico.

lado las ganancias económicas en periodos de bonanza crearon ingresos y políticas de reducción de la pobreza; por otro, establecieron la dependencia fiscal de los Estados, desestimularon otros sectores económicos y produjeron consecuencias medioambientales y sociales negativas y no sostenibles a largo plazo. Adicionalmente, se justifican propuestas de imposición tributaria a procedimientos económicos a fin de evitar la externalización de los impactos sociales y ambientales e incentivar las actividades o prácticas deseables.

La construcción de nuevos criterios de evaluación de beneficios y costos también hace plausible delinear la viabilidad de otros sectores económicos para sustituir las actividades extractivas y orientar la inversión pública y privada. Mientras no se superen las formas tradicionales de plantear el problema, no se conectarán adecuadamente economía, ecología y justicia social. En específico, es importante trascender la lógica de buscar sectores que sustituyan las rentas de los sectores extractivistas en el corto plazo. Se requiere identificar sectores, cadenas y emprendimientos que cumplan o tengan potencial para cumplir las exigencias ambientales, el aprovechamiento sostenible de los recursos, la contención de la contaminación, la articulación con otros actores y la generación de beneficios sociales y colectivos (empleo de calidad, redistribución justa de los excedentes, etcétera) desde una visión territorial.

Dentro de dicho escenario, las opciones estratégicas deben construirse en espacios democráticos de gestión pública. Los nuevos proyectos políticos progresistas tienen que comprometerse con seriedad con la necesidad de transformación real de la institucionalidad de la gestión del poder y de gestión pública. El punto de partida es el cuestionamiento de las relaciones clientelares y prebendales, de la apropiación privada de lo público, de

las modalidades bilaterales de relación entre gobierno y grupos de interés de sociedad civil, y de las prácticas inequitativas (de género y otras) en todos los ámbitos sociales. Por tanto, se trata de cambiar las estructuras del sistema político y de la toma de decisión de política económica hacia un ámbito institucional efectivamente democrático.

En síntesis, debe ser un nuevo modelo de gestión orientado al fortalecimiento de la vida asociativa democrática en los territorios para que el conjunto de ciudadanos, actores sociales y económicos, puedan ser agentes activos en la búsqueda de soluciones colectivas a sus problemas y necesidades. Bajo el nuevo marco conceptual y de gestión, la preocupación central de las políticas económicas y sociales se vuelca en la construcción de capacidades institucionales democráticas y el fortalecimiento de sentidos compartidos de bien común y bien público por los actores sociales. Esto implica la articulación entre la consolidación de las capacidades democráticas de acción colectiva de los territorios y la promoción de espacios públicos e instituciones que faciliten la participación de organizaciones representativas para hallar soluciones a sus problemas y de control social del uso de recursos públicos y colectivos.¹³

Los nuevos proyectos políticos progresistas se comprometen con la inscripción de la economía en un entorno democrático a través del diseño de mecanismos efectivos de acceso a la información sobre las decisiones públicas y privadas, el destino de recursos, los gastos estatales y los resultados. En otras palabras, comprometidos con modelos de gobernanza democráticos en la toma de decisiones concernientes a las políticas económicas con amplia legitimidad social; propuesta central para enfrentar

¹³ Acerca de este enfoque y las experiencias latinoamericanas, se recomienda consultar Bebbington, Delamaza y Villar (2005).

problemas endémicos en la región: la corrupción y el uso discrecional de recursos públicos.

Desde esa visión, el horizonte político se amplía sustancialmente. Se trata de transformar las asimetrías de poder, de información y participación de los actores sociales en territorios con la construcción de nuevos entramados institucionales. La propuesta no pretende eliminar conflictos entre actores, sino generar espacios transparentes de diálogo y prácticas deliberativas para que gestionen sus diferencias y disputas, y lleguen a acuerdos que promuevan el desarrollo productivo.

En el nuevo paradigma, el fortalecimiento de los sistemas económicos debe estar al servicio del bienestar de la colectividad, en un marco democrático, de igualdad y respeto por la cultura local y la sostenibilidad ambiental. Esto implica, en términos más convencionales alterar las estructuras económicas a través de la diversificación productiva para crear empleos productivos y dignos. Sólo de esa manera es posible superar con sostenibilidad la pobreza y promover el ejercicio de derechos sociales —vivienda, educación, salud, acceso a servicios (agua, electricidad, saneamiento) y trabajo digno— con reglas y prácticas democráticas y gobernanzas locales plurales. La dimensión ecológica se enlaza con la dimensión económica debido al crecimiento de encadenamientos productivos sostenibles ambientalmente enmarcados en el ritmo normal de reposición de la naturaleza y en el manejo responsable de su apropiación, en el uso y destino de los residuos producidos por las actividades humanas.¹⁴

En este sentido, la propuesta de desarrollo económico alternativo entraña el fortalecimiento de tejidos socioeconómicos con base en las

¹⁴ Para un análisis sobre las alternativas de transformación productiva ecológica, véase Gudyas (2015).

potencialidades de los territorios y en el énfasis en las conectividades entre actores económicos, organizaciones e instituciones (ubicadas en las localidades y más allá de éstas). Por ello, el desafío reside en la promoción o expansión de la asociatividad y la cooperación horizontal y vertical entre unidades o emprendimientos económicos, en toda su pluralidad organizativa y jurídica, existentes o latentes en una localidad, así como en la innovación tecnológica y organizacional en armonía con la naturaleza. La apuesta se dirige a la función activa de actores-ciudadanos con identidades, modos de vida propios, saberes y prácticas, formas de relacionar y estrategias de vida plurales. Es decir, a la visibilidad y valorización del papel de la diversidad de actores económicos: empresas, emprendimientos sociales y solidarios, asociaciones, cooperativas, comunidades indígenas, unidades campesinas y domésticas, redes sociales y emprendimientos individuales y colectivos en el desarrollo económico y social de localidades, países y regiones.

Referencias

- Agencia de Noticias Fides (ANF) (13 de octubre de 2015), «Evo: «Fundación que perjudique a la explotación de recursos naturales, se tiene que ir del país»», *Página Siete*, en <http://www.paginasiete.bo/economia/2015/6/18/evo-fundacion-perjudique-explotacion-recursos-naturales-tiene-pais-60339.html>
- Albó, Xavier (1999), *Raíces de América. El mundo aymara*. Madrid, Alianza América/UNESCO.
- Bebbington, Anthony, Gonzalo Delamaza y Rodrigo Villar (2005), «El desarrollo de base y los espacios públicos de concertación local en América Latina»

- (ponencia en la V Conferencia Latinoamericana de la International Society for Third-Sector Research, 10-12 de agosto), en http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/11/rodrigo_villar_gonzalo_de_la_maza_anthony_bebbington.pdf
- Colque, Gonzalo, Miguel Urioste y José Luis Eyzaguirre (2015), *Marginalización de la agricultura campesina e indígena*, La Paz, Fundación Tierra.
- Condori Laruta, Genaro (2003), «Experiencias comunicacionales de la Asociación de Radioemisoras Aymaras de La Paz», en Esteban Ticona (dir.), *Los Andes desde los Andes: Aumaranaka, Qhichwanakana Yatxatawipa, Lup'iwipa*, La Paz, Yachaywasi.
- Coraggio, José Luis (2008), «La sostenibilidad de los emprendimientos de la economía social y solidaria», *Otra Economía. Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria*, 2(3).
- Gaiger, Luis Inácio (2008), «A dimensao empreendedora da economia solidaria: notas para un debate necessário», *Otra Economía*, 2(3).
- Gudynas, Eduardo (2015), *Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza*, Cochabamba, Centro de Documentación e Información Bolivia/Centro Latinoamericano de Estudios Superiores.
- Moller, Edwin (1986), *El cooperativismo como proceso de cambio. De la comunidad tradicional a la cooperativa moderna*, La Paz, Los Amigos del Libro.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2016), *Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2016*, Naciones Unidas.
- Quino Mamani, Eliseo Manuel (2011), «Evaluación del Decreto Supremo 0225 — Creación de la Empresa Boliviana de la Almendra y Derivados—, como política pública para la Amazonia de Bolivia, y de sus efectos entre los actores

- primarios de la cadena productiva de la castaña» (tesis de maestría), La Paz, Universidad Mayor de San Andrés/Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable.
- Rivera Cusicanqui, Silvia, Ramón Conde y Felipe Santos (1992), *Ayllus y proyectos de desarrollo en el norte de Potosí*, La Paz, Aruwiyiri/THOA.
- Rivera Cusicanqui, Silvia (2012), «Del MNR a Evo Morales: disyunciones del Estado colonial», en <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012123104>
- Ruesgas Requena, Gabriela (2015), «EMAPA y el modelo de agricultura por contrato en la producción de trigo: dos estudios de caso en Cochabamba y Tarija» (tesis de maestría), La Paz, Universidad Mayor de San Andrés/Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable.
- Tapia Mealla, Luis (2011), «Consideraciones sobre el Estado Plurinacional», en *Descolonización en Bolivia. Cuatro ejes para comprender el cambio*, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia/Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria.
- Tauile, José Ricardo (2009), «Economía solidaria y autogestao: criação e recreação de trabalho e renda», en Marcelo Paixao y Castelo Braco (orgs.), *Trabajo, autogestao e desenvolvimento: escritos escolhidos 1981-2005*, Rio de Janeiro, Editora UFRJ.
- Wanderley, Fernanda, Ivonne Farah y Fernanda Sostres (2015), *La economía solidaria en la economía plural: discursos, prácticas y resultados en Bolivia*. La Paz, Universidad Mayor de San Andrés/Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable/Hegoa/Plural Editores, en <https://cides.academia.edu/FernandaWanderley>
- Wanderley, Fernanda (2013), *¿Qué pasó con el proceso de cambio en Bolivia? Ideales acertados, medios equivocados y resultados trastocados*, La Paz, Universidad

Mayor de San Andrés/Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable,
en <https://cides.academia.edu/FernandaWanderley>

——— (2015), «¿Qué cambió en el mercado de trabajo para hombres y mujeres en Bolivia? (2001-2011)», *Umbrales* (27/28).

Urdimbres de la crisis del capitalismo: proceso histórico y colapso civilizatorio

Humberto Márquez Covarrubias*

Resumen. El sistema capitalista mundial está compenetrado por diversas expresiones de la crisis. A escala superficial y coyuntural, el capitalismo global experimentó en años recientes el estallido del capital ficticio y el derrumbe de la arquitectura financiera que armonizaba la economía mundial. Fue necesario el rescate del Estado para solventar la bancarrota de las grandes corporaciones a costa de los contribuyentes y la mayor explotación de los trabajadores. En un estadio intermedio se resquebraja el modelo neoliberal y la forma de sobreproducción operada por las corporaciones multinacionales mediante la dislocación de la producción y el consumo en el mundo, la superexplotación de los trabajadores y la depredación ambiental a fin de concentrar capitales y apropiarse de los excedentes. Frente a la gran depresión se implementan severos programas de ajuste que depuran empresas, consolidan monopolios e imponen penurias a la población. En un nivel profundo, la crisis trastoca los cimientos culturales y políticos del entramado civilizatorio y cuestiona los fundamentos de la economía política, las fuentes de riqueza, es decir, la humanidad y la naturaleza; con ello el devenir de la humanidad y el entorno planetario se encuentran en predicamento.

Palabras clave: crisis, capitalismo, economía mundial, neoliberalismo, crisis civilizatoria.

* Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

**Warps of the crisis of capitalism:
historical process and civilizing collapse**

Abstract. The world capitalist system is visibly afflicted by various manifestations of the crisis. At a superficial and contextual scale, global capitalism in recent years experienced an upsurge in fictitious capital and the collapse of the financial architecture that facilitated the world economy. The State-led rescue of nearly-bankrupt large corporations to the detriment of taxpayers and even greater exploitation of workers was necessary. In an intermediate phase, the neoliberal model is divided and the mode of overproduction operated by multinational corporations through the dislocation of production and a ravaging of the world, the overexploitation of workers and environmental degradation, in pursuit of the goal of capital concentration and surplus expropriation. In the face of a massive slump, harsh adjustment programs were implemented that purged companies, consolidated monopolies and imposed hardships on the populace. To a very deep degree, the crisis disrupted the cultural and political foundations of the tapestry of civilization and questioned the fundamental concepts of the existing political economy, and sources of wealth —humanity and nature. As a result, humanity's future path and the entire world are placed in jeopardy.

Keywords: crisis, capitalism, world economy, neoliberalism, crisis of civilization.

Preámbulo

Adentrada en un mundo donde además de supeditar las diversas formas de trabajo, la lógica del capital atrapa al consumo productivo e improductivo y al conjunto de actividades que involucran a la cultura, la política y la vida cotidiana. Los tiempos y movimientos que subyacen en la reproducción de la sociedad y la naturaleza son acompasados a una lógica normativa que sigue los imperativos de la valorización a escala mundial. En esa dinámica el signo de la crisis impregna todos los ámbitos de producción material y subjetiva de la modernidad capitalista y atenaza los mundos de vida.

La actual crisis del capitalismo mundial es compleja (entraña la acumulación de capital y la reproducción de la vida): enlaza esferas superpuestas del capital (producción, distribución y consumo), unifica horizontes temporales (corto, mediano y largo plazos), articula ámbitos espaciales (centros y periferias), entreteje clases sociales (capitalistas y trabajadores) y ensambla andamiajes políticos (Estados, instituciones, corporaciones, partidos, movimientos, sindicatos).

Conjuga dimensiones, ámbitos, temporalidades, intereses y agentes a través de las principales contradicciones del capitalismo para dar forma a una crisis de gran calado, una crisis sistémica que degenera en una crisis civilizatoria; es decir, un cortocircuito en el proceso de valorización dentro de la economía mundo cuyo trasfondo es la ruptura en el metabolismo social, en el sistema de reproducción de la vida humana y el entorno planetario.

La consideración analítica de esta problemática suele cargar la tinta sobre los grandes desafíos que acotan o ponen en jaque a la vida humana y

natural; en contrasentido suele manifestarse incredulidad al expresar que es un problema pasajero, recurrente, del cual se saldrá bien librado. No es tanto un problema de percepción como de una acumulación de desajustes, desequilibrios, desproporcionalidades y contradicciones que tornan insustentable o inviable la vida socioambiental. La modernidad capitalista se encuentra en vilo toda vez que su estrategia de «globalización neoliberal» está socavando aceleradamente las fuentes de la riqueza social (humanidad y naturaleza) por lo cual está en predicamento la coexistencia de los sistemas de vida. Esta situación advierte desenlaces catastróficos que reclaman cambios económico-políticos sustanciales.

Expansiones y fisuras

La palabra crisis permea todas las capas de la sociedad, aflora en el lenguaje común y atiza el debate político. En primera instancia aparece como un quiebre en los centros neurálgicos del capital global, donde se asientan los poderes financiero, industrial y comercial, que han configurado la actual economía mundial. Es posible apreciar en lo inmediato la fractura de la rentabilidad de las grandes corporaciones multinacionales. Aparenta ser un problema coyuntural semejante a otras crisis económicas que con frecuencia atormentan al capitalismo tardío en distintos países, pero ahora el epicentro se localiza en Estados Unidos, nada menos que el hegemon, la principal fuerza gravitacional de la acumulación mundial. El capitalismo del nuevo milenio funciona como un gran molino de viento que agita dos poderosas aspas: la exorbitante acumulación de capital ficticio y el exceso de producción; se trata de fuerzas

dinámicas que a la vez que impulsan la actividad económica destruyen los tejidos socioambientales.

Ficticios estallidos genéricos

Los despachos económicos se remiten a mediados de 2008, cuando en Estados Unidos, eje toral de la economía mundial, estalló una burbuja financiera por una miríada de agujonazos propinados por una multiplicidad de insolventes deudores hipotecarios que inevitablemente cayeron en la morosidad de pagos. El capital ficticio se había solazado con una serie de instrumentos financieros derivados y titularizados que colocaba en la órbita financiera créditos de alto riesgo convertidos en mercancías ficticias y vendidos en oleadas sucesivas entre operadores especuladores de diverso signo. En la morfología del capital ficticio participaban distintos agentes —grandes bancos privados, fondos de inversión, bolsas de valores, aseguradoras, fondos de pensiones— que engullían los excedentes de capitales productivos, fondos públicos, deudas soberanas y ahorros.

Una arquitectura financiera tan endeble, que había bombeado ganancias espectaculares, pronto se colapsó y puso al desnudo, una vez más, el funcionamiento parasitario del capital ficticio. La afectación inicial sorprendió a los bancos estadounidenses, desde los pequeños y medianos que operan en los ámbitos local y nacional hasta los grandes bancos globales que tejen las redes de los circuitos financieros en el orbe. En esa plataforma financiera de gran alcance aconteció una suerte de efecto dominó que se desplazó con prontitud hacia los otros centros vitales de las finanzas especulativas, Europa y Japón. Luego se propagó al conjunto de la arquitectura económica mundial, cuyo sistema circulatorio estaba armonizado

por el capital financiero y pasaba por momentos de esplendor al punto en que los análisis convencionales, y buena parte de los heterodoxos, se habían reducido al dominio de las finanzas.

Para ofrecer una explicación plausible de la crisis, el relato pergeñado por tecnócratas, académicos y comunicadores afectos a la economía de mercado sigue la trama de la desregulación, la especulación y la codicia de bancos y bolsas que operan los mecanismos de titularización de créditos con alta dosis de riesgo sin limitaciones, en la oscuridad y con impunidad garantizada. La tesis financista alcanzó popularidad pese a que sólo daba cuenta de la superficialidad de un episodio cargado de dramatismo que apenas representaba la punta de un iceberg. En el trasfondo se ocultaba un colosal entramado de operaciones amañadas y fraudulentas orquestadas por el gran capital financiero que actuaba de modo reticular y ficticio a escala internacional, sobrepasando los controles estatales y las fiscalizaciones de organismos internacionales, sin consideración alguna de los intereses de las clases populares y las múltiples afectaciones a los trabajadores.

Una especie de fascinación envolvía al mundo que se entregaba a la mercantilización, el consumismo y la espectacularidad de un capitalismo triunfalista, que incluso ya no se reconocía como tal al no tener un oponente de gran calado encarnado en un proyecto económico-político asequible, sino que se presentaba como la cristalización de la historia humana y la personificación del progreso. El predominio de las finanzas, el empuje de las tecnociencias y la proclamación de la democracia representativa hacían las veces de un destino manifiesto coagulado en la modernidad capitalista, el neoliberalismo y la subjetividad individualista. Pero el estallamiento de lo que genéricamente se designa como «financiarización» desmoronó la utopía capitalista del mercado total y puso a la luz del día,

como si fuese una revelación, una novedad cristalina: el funcionamiento perverso del capital ficticio. Entonces, proliferaron informes que hacían un recuento de los daños en los diversos ámbitos de la vida social. Después de la orgía del capital especulativo, la epifanía de la cruda realidad significó un reencuentro tormentoso con el realismo salvaje. Prácticamente en todo el mundo los espectadores contemplamos una lección instantánea sobre el capitalismo (Katz, 2008), un vocablo que en gran medida había sido desterrado de la academia y la política.

En las últimas décadas, el dinero conducido por los circuitos financieros globales especulativos experimentó una bonanza de ganancias ficticias amparadas por una barroca formación de burbujas financieras insufladas por la titularización (*securitización*) que permitía a los enormes bancos desprenderse de numerosos créditos que en términos contables eran inviables, dudosos y riesgosos, pero que las instituciones bancarias transferían a otros agentes financieros en grandes caudales que paulatinamente fueron anegando los receptáculos de la economía mundial con una cantidad abrumadora de papeles preñados más que de liquidez de pura incertidumbre: bonos diversificados y seguros para títulos incobrables apalancan las obligaciones crediticias con el respaldo de poco capital propio y crédito riesgoso. Signo de los tiempos, las ganancias ficticias inconmensurables se fundamentan en instrumentos colmados de riesgos (Carcanholo y Sabadini, 2008).

Sin embargo, bajo la ética del capitalismo, cuyo principio central es la maximización de las ganancias sin importar los daños humanos y ambientales, la orgía especulativa era una muestra de vitalidad dentro de una economía mundial sin fronteras. En el teatro de operaciones, la especulación desbordada pretende hacer caso omiso de los daños colaterales —meras

externalidades— e ignorar los riesgos crediticios; pero víctima de sus propios excesos, el entramado financiero recayó en un estado de hipertrofia que redundó en la inflación de una burbuja especulativa amplificadas. La búsqueda afanosa de altos márgenes de rentabilidad financiera mediante el traspaso de los riesgos hacia agentes financieros colaterales se convierte en un mecanismo depurador de incertidumbres y en un estímulo mordaz para que los bancos incrementen la colocación de créditos, créditos y más créditos, sin reflexionar —el capital no acostumbra a recapacitar— en que el dinero así otorgado pueda ser en efecto recuperado, como dictaría la norma. Simplemente el riesgo se transmite y se genera una vasta red de operadores especulativos, convidados de la danza orgiástica de las ganancias ficticias, que por mucho tiempo han trazado el espíritu del capitalismo de entre siglos y punta de lanza del nuevo milenio.

El consenso de las elites financieras plasmado en la política neoliberal que alienta la desregulación para permitir la expansión sin cortapisas del capital financiero desbocado es el acicate de un caudal de prácticas disolutas que permiten la ejecución de masivas operaciones riesgosas y discrecionales. No obstante, todo parecería hallarse bajo el control de comedidas instancias supervisoras de la probidad del ambiente financiero y de la salubridad de los mercados. El desenfreno crediticio es convalidado por reputadas agencias calificadoras que presumen regular o definir los niveles de riesgo de tales mecanismos de propagación crediticia; al contrario, en vez de cumplir su atribución con responsabilidad, como dictaría la sacrosanta institucionalidad burguesa, terminaron por unirse al festín del gran dinero y a la postre fueron cómplices de la gran trama especulativa. El botín era demasiado apetitoso, de ahí que no se emitieran dictámenes precautorios y restrictivos.

Los bancos, presentados como las instituciones más eficientes y armonizadoras de la sociabilidad económica de la modernidad tardía, no administraron el factor de riesgo con sobriedad y responsabilidad. En lugar de propiciar la regulación y autorregulación financieras, fueron consecuentes con la racionalidad irracional del capital que hace de la competencia el dinamismo de la maximización de beneficios, y en tal sentido se entregaron a la frenética competencia interbancaria compelerada por el «sano afán de lucro» mediante la multiplicación de créditos de alto riesgo y la consecuente propagación de papeles que se transferían a otros agentes participantes de la juerga de una economía escrita con argumentos ficticios. Los créditos tóxicos fueron la epidemia global más nociva de principios del siglo XXI, dejando a las muy publicitadas influencias como enfermedades pueblerinas.

La fenomenología del capital ficticio cobra vida con el alto riesgo asumido, se alimenta de la efervescencia especulativa y redundante en la inflación de ganancias ficticias, que no tienen parangón en otros sectores económicos, pero el virus estaba inoculado y se decantó en la emergencia de una enfermedad perniciosa, una crisis de sobreacumulación en el ámbito financiero, hasta entonces el sector más dinámico de la economía mundial. El capital ficticio engendra la imagen horripunda del enriquecimiento desmedido y la convulsión económica en el planeta.

Esta crisis no es similar a otras registradas en las últimas dos décadas en países periféricos como México, Rusia, Brasil, Turquía, Argentina o el sudeste asiático. O la reciente crisis de la deuda pública en Grecia apuntalada por bonos derivados de Estados Unidos. Crisis que han estado latentes en España, Portugal, Italia, Argentina, México. Un rasgo novedoso es que el epicentro de la crisis no se ubicó en los eslabones débiles de las

economías periféricas, sino que impactó en el centro del capitalismo mundial: Estados Unidos, que ha fungido como el hegemón, el gran imperio, desde la segunda posguerra hasta el presente. En virtud de que este centro de centros —con el acompañamiento de socios estratégicos como la Unión Europea, Japón y China— se conecta con el resto de regiones, bloques y periferias, cuyos conectores cardinales son las finanzas globales, los mecanismos de propagación actuaron con virulencia y la crisis financiera se esparció con prontitud hasta los confines del planeta, aunque de forma diferenciada, por lo mismo se puede observar que las regiones entregadas sin cortapisas a los dictados económicos imperiales son más vulnerables, pues han desmantelado todas las barreras defensivas y modos de gestión soberana de sus propias economías; en contraste con los proyectos de nación que intentan erigir diques y articular economías vinculadas con mecanismos de intercambio comercial menos perniciosos. Al respecto, los efectos dañinos afectaron y tomaron como correas de transmisión a Europa, donde los estragos fueron muy fuertes, y a Japón, donde también fueron muy perniciosos, para después extenderse por el planeta con un pesado efecto recesivo, que todavía sigue vigente en numerosas economías centrales y periféricas (Roberts, 2017).

Desde una mirada inmediateista, proveniente de los despachos informativos publicados en los medios de comunicación y de los artículos de análisis plegados a la situación de la coyuntura, se puede tomar nota que la crisis financiera comenzó a forjarse en 2007 y estalló en 2008. También puede agregarse que no se trató de una crisis cíclica, en el sentido de que siguiera un supuesto curso natural en el que las propias fuerzas del mercado fueran las que paulatinamente ayudaran a salir del escollo y transformar la gran depresión en recuperación con miras a un ascendente

empuje hacia un nuevo auge económico. Es bien sabido que el libre mercado entraña una falacia y que el Estado mínimo que postula el neoliberalismo es una quimera, pues sólo se reducen las funciones sociales estatales en la misma medida en que se refuerzan las políticas orientadas a la contumaz acumulación de capital.

En efecto, la debacle fue contenida, hasta cierto punto, por la necesaria y providencial intervención de los Estados. Apenas se estaba elaborando un diagnóstico mínimo de la crisis cuando al año siguiente los agentes del Estado hacían acto de presencia para rescatar al gran capital financiero e industrial que se desmoronaba en su propio pantanal mediante el infausto mecanismo de socialización de la deuda con fondos públicos, con cargo al contribuyente y a una explotación redoblada de los trabajadores. Al rescatar a los bancos con fondos públicos no se redime al capital ficticio, sino que se reaviva a Wall Street, centro financiero mundial, para que se entregue de nuevo a la francachela y se ponga de inmediato a fraguar nuevas burbujas especulativas en el sector financiero y en otros sectores productivos: materias primas, bienes raíz, monedas de mercados emergentes, etcétera.

Paradójicamente, el rescate financiero con fondos públicos posibilita la regeneración de condiciones económicas para inflar nuevas burbujas especulativas con el riesgo de más estallidos, como se advirtió en Dubái y Grecia, y estuvo a punto de acaecer en España, Portugal e Italia, además de los embates especulativos sufridos en Argentina y México. Claro está que los sectores populares, las clases trabajadoras y las instituciones de servicio público, damnificados en grado sumo por la crisis, no fueron rescatados; al contrario, se les pasó la factura. Se aplicaron programas más severos de flexibilización y precarización laboral, al igual que programas de despidos y se incrementaron las cargas impositivas a contribuyentes y consumidores

en general, no así a las grandes corporaciones. Tales medidas contribuyeron a reforzar uno de los saldos de las crisis: reconcentrar los capitales, acumular las riquezas en pocas manos y golpear a las clases trabajadoras.

Trasfondo productivo

Más allá del microrrelato financiero que sigue un guión predestinado que se tropica con el pleonismo del dinero autorreferenciado y reduce el complejo mundo actual a la esfera del dinero ficticio y al atado de instituciones reguladoras y crediticias inmersas en una arquitectura financiera global apuntalada por instrumentos convencionales y derivados acompañados mediante formas de contabilidad no muy creativas, es evidente que el descalabro económico no sólo acontece en el mundo del dinero. El mundo es más ancho que las caderas de los grandes bancos y fondos financieros. La crisis no consiste en un asunto exclusivamente financiero y en consecuencia los responsables no sólo son los agentes del capital ficticio (bancos, bolsas de valores, aseguradores, fondos de inversión y fondos de pensiones). En realidad, bajo la punta del iceberg se esconde una voluminosa economía globalizada que engendra el valor con mecanismos parasitarios y rentistas, en convivencia con las formas encubiertas de superexplotación, precarización, despojo, extractivismo y violencia, donde la forma crisis es una hidra de múltiples cabezas. La crisis tiene un amplio trasfondo, habitualmente ignorado, ubicado en la médula del capitalismo: la producción global, justo donde se engendra el valor, la sustancia de la cual se alimenta la dinámica del capitalismo.

Organizada en el terreno productivo por las grandes corporaciones multinacionales y sus aliadas nacionales, la economía mundial ha

desplegado una gran capacidad productiva merced a una extensa variedad de nuevas tecnologías y medios de transporte, el respaldo estratégico de los Estados y del capital financiero, que redundan en la sobreproducción, un severo problema estructural que ocasiona cortocircuitos en los procesos de valorización. En la afanosa búsqueda de ganancias extraordinarias, en el menor plazo posible y al más bajo costo permisible, los capitales compiten con todos los elementos a su alcance. De forma clásica introducen mejoras tecnológicas en la producción y convierten a la ciencia en una fuerza económica aplicada a la órbita de los negocios, pero en la era del capital global además se valen de la sobreabundancia de fuerza de trabajo barata, desorganizada y desechable, dispuesta a ser explotada, incluso superexplotada, para articular redes de fábricas diseminadas en Asia, América Latina y otras regiones, mediante formas productivas relocalizadas desde los grandes centros industriales de las economías centrales a las periféricas que toman la forma aparente de «fábricas globales» en los enclaves exportadores.

Dichos territorios son reservorios de recursos naturales, biodiversidad y formas culturales que se convierten en abastos de materias primas, fuentes de energía, productos básicos y saberes tradicionales engullidos por la maquinaria productiva a través del cercamiento de bienes comunes y el despojo de medios de vida que derivan en contaminación, destrucción y aniquilación del medio ambiente y de comunidades, al punto que la naturaleza y la población se tornan en meros insumos productivos. En los denominados talleres del moderno «trabajo esclavo» se produce un «enorme cúmulo de mercancías» que inunda el mercado mundial a grado tal que irrumpe el gravoso problema de la producción superlativa. La pauta de la producción capitalista es desbocada, ciega, compulsiva y furiosa; a su paso

encuentra severos problemas de realización y el estallido de crisis enraizadas en la razón íntima del capital: la valorización del valor.

La sobreproducción es un problema estructural y recurrente del capitalismo; sin embargo en la era del capital global no se constriñe a un país o una región, sino que acontece en el ámbito planetario, toda vez que la forma valor se mundializa, por tanto, se trata de un fenómeno de nuevo tipo, debido a que ahora es el capital multinacional el que en gran medida organiza la producción, la distribución y el consumo en el tablero de la economía mundial. En esa trama se reconfigura la división internacional del trabajo y la biodiversidad para articular redes globales de capital monopolista, una de cuyas expresiones es la reinserción de las periferias a las pautas de acumulación mundial centralizada mediante la reedición de economías de enclave en los sectores alimentario, extractivo, industrial, comercial, turístico, de servicios, financiero e inclusive criminal. Es una economía de amplio espectro largamente tejida por el capital global.

Un rasgo importante del capitalismo mundial es la desvinculación entre oferta y demanda. Merced a la sobreproducción y a la apertura al comercio internacional, los tratados de libre comercio y la expansión de las redes globales de capital monopolista, se arroja al mercado una cantidad inconmensurable de mercancías que inevitablemente se quedarán sin ser compradas. La sobreproducción invocará el problema de la realización que toma la forma aparente de subconsumo.

Otra dislocación importante, inscrita en la entraña íntima de la mercancía, es la desconexión entre valor de uso y valor de cambio. Las mercancías que inundan el mercado son lanzadas para ser vendidas, independientemente de su utilidad, incluso ahora son menos útiles y duraderas («obsolescencia programada»), más irrelevantes y desechables. La primacía del valor

de cambio incentiva una mercantilización desbocada, la depredación de la naturaleza y el predominio de las tecnociencias; en suma, el privilegio de la valorización sobre la reproducción social.

La sobreproducción global es más voluminosa que las registradas con anterioridad, como en el sureste asiático en 1997. El desbordante excedente de mercancías, a la par de la sobreacumulación financiera y el estallido de la burbuja especulativa, provocó una gran recesión en la economía mundial que en 2009 requirió un enorme gasto público para contrarrestar los efectos recesivos, pero las medidas resultaron insuficientes, pues continúan los periodos de caída o estancamiento de la producción, que de manera convencional y limitada se registran en alicaídos crecimientos del PIB, la restricción del crédito, la contracción del consumo y el declive de la inversión.

Rescate estatal y factura social

Salvar en última instancia a los grandes capitales en apuros es una de las funciones conferidas al Estado, quien también debe ser un gestor oportuno del capital al abrir mercados, dotar de infraestructura, controlar a los trabajadores, brindar un ambiente de seguridad a la inversión y otras actividades a fin de garantizar los márgenes de rentabilidad. No obstante, en épocas de crisis salen a relucir los programas de rescate financiados con fondos públicos, que abren enormes boquetes al erario, cuya huella se imprime en la figura duplicada de la deuda pública incrementada y la profundización del déficit fiscal. Entonces se desencadena una espiral de finanzas públicas debilitadas; para compensarlo, los gobiernos implementan drásticas políticas de ajuste, presentadas como responsables programas de

austeridad, que afectan directamente a los trabajadores y a la sociedad en general, pues se restringe, primero que nada, el gasto en servicios públicos (educación, salud y alimentación), además de que constriñen salarios y prestaciones a la vez que aumentan los impuestos. Comienza un nuevo episodio de abrogación de conquistas sociales y laborales previamente alcanzadas por pretéritas luchas sociales y en general se asienta un denso clima de regresión social.

En 2010 se implementó la política de ajuste con el propósito de rescatar empresas y bancos mediante la deuda pública. La problemática escaló por el efecto combinado de la acumulación de la deuda pública y el déficit fiscal, con la paradoja de que los banqueros, en tanto personificaciones del capital financiero, se presentaron a su vez como los acreedores de la deuda pública, y en esa trama reclaman siempre un lugar privilegiado para acceder invariablemente al premio mayor, de ahí que reciban el apelativo de buitres que se alimentan de las catástrofes sociales. De hecho, los gobiernos reservan las partidas más atractivas de los presupuestos para priorizar el pago de deuda y postergan o reducen el gasto destinado a la promoción del desarrollo social. Tal es la tónica del «salvataje» estatal en tiempos de crisis; política que se aprovecha además para bajar los compromisos públicos y establecerlos como parámetros de largo plazo, más allá del horizonte tentativo que supone el periodo especial de una crisis.

Cabe aclarar que la política de ajuste sugerida por los organismos financieros internacionales no se aplica con la misma intensidad y temporalidad en los países centrales y en los periféricos. Es sintomático que en Estados Unidos, Japón y los principales países europeos no se hayan aplicado las políticas contraccionistas y antipopulares; pero sí en el sur de Europa, donde se incubaba una suerte de mundo periférico dentro de las economías

centrales. La primera prueba de fuego se registró en Grecia, nación en la que se impuso un plan de ajuste diseñado por la Troika, es decir, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ajuste se impuso en Grecia y amenazó a España, Portugal e Italia. Sin embargo, la medida no es del todo novedosa, se remite a los programas de ajuste aplicados con determinación autoritaria en América Latina: disminución de salarios, reducción del gasto social, despido de empleados públicos, aumento de la edad jubilatoria y privatización de servicios públicos (escuela y salud).

En un mundo convulsionado por la expansión del capital ficticio y el exceso de producción, con un derrotero inmerso en ciclos económicos erráticos tendientes al estancamiento, atizado por severas políticas de ajuste, el costo social más relevante de la crisis global es la combinación del desempleo generalizado y la profundización de la pobreza, fenómenos que repercuten indubitablemente en la degradación social: hambre, violencia y migración forzada. Este es un desempleo estructural y una pauperización abarcadora que inevitablemente repercutirán con efectos recesivos en el ciclo económico y disruptivos en la dinámica de reproducción social que amplifican y dan continuidad a la crisis general. De igual forma, el desempleo y la pobreza no son problemas exclusivos de las economías subdesarrolladas; en Estados Unidos, pese a los informes sobre la recuperación del crecimiento del PIB y el aviso de que la recesión habría quedado atrás, el desempleo y la pobreza conforman problemas persistentes que redundan en exclusión, violencia e inseguridad.

Dislocaciones abismales

Paradójicamente, la economía mundial ha estado articulada por una separación entre la producción y el consumo. La estructura funcional ha separado los espacios con mayor capacidad de producción y de consumo masivo. En uno de los polos China se consolida como el principal centro de producción (dentro de la tónica de la sobreproducción) soportado con altos niveles de ahorro e inversión, pero con bajos niveles de consumo, superexplotación del trabajo y depredación de la naturaleza, es decir, en un solo país, en este caso colosal, se sintetizan los principales rasgos que otrora permitían distinguir el desarrollo y el subdesarrollo. Por otra parte, Estados Unidos funge como el centro de mayor consumo (en la pauta del sobreconsumo), pero con bajos niveles de ahorro e inversión, un capital industrial menguante y altos costos de producción internos. Entre ambos polos existen muchos matices ejemplificados por el papel que cumplen las distintas regiones en la trama de la acumulación mundial (Katz, 2011).

No es un arreglo orientado por las fuerzas ciegas del mercado, sino que atiende a acuerdos geoeconómicos multirregionales pactados por las potencias capitalistas. La división internacional de la producción y el consumo permite a Estados Unidos asegurar altos niveles de consumo acorde con su cultura del derroche y la ostentación hedonista por encima de las posibilidades de su economía, mediante el abastecimiento de cantidades ingentes de mercancías baratas producidas ya no en su espacio económico interno sino en las economías periféricas en condiciones de superexplotación del trabajo, depredación de recursos naturales y altos niveles de inversión de capital, sobre todo en China y en países que fungen como proveedores o se adhieren al esquema de producción subordinada, tal como

ha ocurrido en América Latina con la formación de economías de enclave, desde el «extractivismo» hasta la «maquilización». En gran medida, la estructura de la economía mundial está soportada por la reinserción de China como polo productivo. En tanto, el desequilibrio entre producción y consumo permite que el capital multinacional extienda sus redes globales de capital monopolista en las economías periféricas proveedoras de trabajo barato y recursos naturales desregulados (Márquez y Delgado, 2011).

Por supuesto que la economía mundial no se limita al nexo entre Estados Unidos y China. Tras el arreglo bipolar subyace un mundo económico multipolar que vincula los términos de la producción y el consumo entre diversas regiones con disímiles grados de desarrollo y relaciones de complementariedad, dominación y dependencia, según sea el caso. Estados Unidos extiende conexiones asimétricas con casi todas las regiones, una relación múltiple que le resulta muy provechosa para extraer el excedente económico y financiar sus déficits fiscal y comercial (Varufakis, 2012) al hacer valer su supremacía militar, el poder del dólar, el influjo de los monopolios, la preponderancia de los organismos internacionales que controla tras bambalinas y la omnipresencia de sus industrias culturales. China también ha diversificado sus lazos comerciales con Asia, Europa, América Latina y África; de modo particular, en Asia ha consolidado su liderazgo. Dentro de la Unión Europea, Alemania, Gran Bretaña y Francia mantienen relaciones con el resto. En tanto que América Latina se inserta como proveedor especializado de materias primas y fuerza de trabajo barata de China, Estados Unidos y Europa, pero con bajos niveles de ahorro, inversión y consumo (Katz, 2011).

La economía mundial opera en dos pistas principales y articula relaciones de poder bipolares y multipolares. No obstante, este esquema

genera de forma inevitable desequilibrios comerciales y financieros. En la relación bipolar, los agregados comerciales propician un desequilibrio: el déficit comercial de Estados Unidos es financiado a escala mundial y también los excedentes comerciales y el sobrefondo de capitales en China. Por lo anterior, Estados Unidos aprovecha su hegemonía mundial con la intención de orientar los desequilibrios a su favor y consolidar una sociedad de hiperconsumo que engendra una base social de legitimación entre las masas de consumidores internos y externos afectos al *american way of life*. A la postre, la economía estadounidense funciona como un poderoso factor de atracción de los excedentes generados en la economía mundo y de las migraciones laborales multinacionales de contingentes altamente calificados, pero también de masas laborales inermes dispuestas a ocuparse en puestos intensivos, inseguros y mal pagados.

Tensiones de entresiglos

El neoliberalismo, la configuración política del capitalismo de entresiglos, significa una contrarreforma que derroca el poder del proletariado y la institucionalidad laboral con objeto de concentrar el poder y la riqueza en la elite burguesa multinacional y la oligarquía nacional. Este proyecto de clase cumplió su doble cometido pero engendró sus propias contradicciones hasta caer en una enorme y profunda grieta. Una mirada menos inmediata, apostada en el mediano plazo y más atenta al modelo de desarrollo capitalista que opera desde los 1980, puede advertir que está en curso una crisis estructural del capitalismo neoliberal. Empero, no representa una prolongación automática de la crisis precedente de mediados de los 1970;

la cual culminó a principios de la década siguiente cuando las clases dominantes lograron imponer el proyecto neoliberal, que toma la forma de un modelo de desarrollo capitalista de alcance global, en cuya operación se van incubando múltiples contradicciones (Harvey, 2014).

El modelo de desarrollo capitalista neoliberal difiere del capitalismo de posguerra, el cual fue articulado por el modelo de acumulación basado en la producción fordista y en el consumo masivo tutelado por el Estado de bienestar o el Estado desarrollista para la región latinoamericana. En cambio, el modelo neoliberal se sustenta en las privatizaciones, la desregulación, la apertura comercial y la desvalorización del trabajo. Un recetario de políticas sintetizado en la expresión del Consenso de Washington. Las peculiaridades económicas y políticas del modelo suscitaron una serie de desequilibrios estructurales que estalló en la crisis mencionada de 2007-2008. Más allá del corto plazo, la crisis global abarca el periodo neoliberal que va de los 1980 hasta el presente. De manera agregada, la crisis global entraña los problemas cercanos en materia financiera, productiva y comercial (2007-2008 a la actualidad); también incluye los problemas acumulados en las últimas tres décadas de neoliberalismo, que aluden a la derrota histórica del trabajo por el capital.

Entre las contradicciones del modelo neoliberal, en la esfera financiera destacan la sobreacumulación (que genera una escalada de titularización), los derivados y el apalancamiento; en la esfera productiva, el capital multinacional provoca episodios de sobreproducción; en el comercio, los desequilibrios entre producción y consumo originados por los centros torales de la economía mundial (China y Estados Unidos) y otras regiones que activan nuevas dinámicas de intercambio desigual. La globalización neoliberal se complementa con arreglos políticos, militares y culturales

igualmente contradictorios. En las últimas tres décadas, las contradicciones ensambladas a las de los años recientes del capital global se refieren a las limitaciones en las esferas de la realización y la valorización.

Callejón sin salida

El modelo neoliberal propicia una limitación crucial en el ámbito de la realización que termina por entramparlo. Conforme logra el cometido de ampliar los márgenes de rentabilidad mediante la disminución de los salarios y el incremento del desempleo, desvaloriza la fuerza de trabajo para extraer más plusvalor. Los trabajadores y sus familias se empobrecen y reducen drásticamente su poder de compra. Un efecto indirecto no intencional del modelo es el estrechamiento de la demanda. La pauperización generalizada de la población oprime al mercado porque el abatimiento del consumo popular vulnera la realización de las mercancías.

Por una parte, el neoliberalismo estimula altos márgenes de rentabilidad a costa del empobrecimiento de la población y, por otra parte, que constriñe la demanda. Esta contradicción contiene diferencias según los grados de desarrollo económico. En las economías centrales se aplican mecanismos de compensación, aun a costa de eventuales estallidos financieros; mientras que en las periféricas se combina la superexplotación y la inclusión al consumo a través de la «servidumbre por deudas» lo cual desencadena profundas crisis humanitarias.

En los países centrales se implementan diversas estrategias para alentar la demanda. Las clases sociales con altos y medianos niveles de ingreso mantienen elevadas cotas de consumo, que incluyen la ostentación y el derroche; las clases con ingresos medios, compelidos por la euforia

especulativa, realizan inversiones financieras y conforme obtienen rendimientos de sus títulos incrementan o no su consumo; por último, las clases sociales de medianos y bajos ingresos, las más afectadas por la creciente desigualdad social y la reducción de salarios —especialmente en Estados Unidos—, a fin de mantener sus patrones de consumo padecen un progresivo endeudamiento familiar. A nivel agregado, la deuda de las familias erige la demanda efectiva y permite el sostenimiento del consumo para alentar periodos expansivos artificiales. El problema es más severo en el Sur global (África, América Latina y partes de Asia), donde habita la mayoría de los pobres del planeta. En esas demarcaciones las personas más pobres tienen exiguos grados de consumo y presentan cuadros patológicos de hambre, desnutrición, enfermedad y mortandad. Los informes evidencian que alrededor de 2 mil millones de personas padecen desnutrición y una cifra cercana sobrepeso (IFPRI, 2015), datos de una malnutrición derivada de la «dieta neoliberal» (Otero, 2013).

Convulsiones orgánicas

El modelo neoliberal no sólo acarrea el problema de realización concerniente a la fractura de la demanda o la incapacidad gradual de vender las mercancías, sino que reproduce un inconveniente estructural del capitalismo que se ubica en el crucial proceso de valorización. Al respecto, la valorización es un rasgo estructural del capitalismo soslayado en el modelo neoliberal. En el largo plazo la competencia obliga a los capitalistas a mejorar los procesos productivos mediante la mecanización; ello repercute en el incremento de la composición orgánica de capital y en el consecuente declive de la tasa de ganancia (Marx, 1867). Conforme la economía

se mecaniza y automatiza por la generalización de nuevas tecnologías, se forma una gran capacidad de producción que redundará en efectos estructurales no intencionales que afectan la cuota de ganancia, esto es, en la medida en que los procesos productivos se automatizan impelidos por la competencia se disminuye la proporción del trabajo vivo y con ello se cae el plusvalor que sustenta el beneficio de los capitalistas.

Este proceso acontece primordialmente en los países desarrollados cuando se incrementa la inversión, los procesos económicos se informatizan y en consecuencia se amplifica el desempleo. Entonces el desempleo no sólo es un saldo coyuntural, como sucede si una empresa cierra, sino que deviene en un problema estructural debido a la automatización de la producción que aumenta la proporción de maquinaria frente al uso de fuerza de trabajo. La máquina de hierro devora al trabajo vivo y la naturaleza.

En distintos periodos y con diversas intensidades, la tendencia a la caída de la cuota de ganancia ha sido compensada con disposiciones como el incremento de la tasa de explotación de los trabajadores, el abaratamiento de las materias primas y la depuración de capitales. Sin embargo, tales contratendencias tienen sus límites: los trabajadores pueden organizarse y resistir para mejorar salarios y prestaciones; las materias primas baratas se agotan (petróleo, minerales); los procesos extractivos se encarecen o aumentan los precios debido a las especulaciones (presas de burbujas especulativas); y la monopolización puede conducir a la hipertrofia y a la sobreproducción.

Huida hacia adelante

Dos posibles rutas de salida a la crisis del neoliberalismo se advierten en el mediano plazo. En primer lugar, y a tono con la huida hacia adelante que

acostumbra el poder, se vislumbra un relanzamiento del proyecto neoliberal. De lograrse, no sería esta la primera oportunidad en que pretenda superarse una crisis con estrategias más agresivas. Entre mediados de los 1980 y comienzos de 2000, las crisis fueron superadas implementando contraofensivas cada vez más devastadoras. En esta ocasión, se fraguó un resurgimiento vía la expansión de la demanda no sólo en los países centrales sino considerando un mundo multipolar que incluye a las economías emergentes (China, India, Brasil) que adoptan modelos neodesarrollistas para compensar, no contrarrestar, la caída del consumo en los países desarrollados.

La segunda ruta significa restaurar la tasa de ganancia, que se ha precipitado con la crisis actual, mediante la imposición de nuevas formas de explotación y la sustracción de excedentes de economías tributarias, como lo atestigua el programa de ajuste en Grecia y el relanzamiento de programas de privatización y flexibilización laboral. Estas medidas podrían aliviar los problemas estructurales de la crisis, pese a que pervivieran algunos de sus rasgos coyunturales.

Una dificultad mayor es la convergencia de las dos crisis, la global y la neoliberal. La unión de ambos componentes no sería una réplica de crisis neoliberales previas, sino que implicaría la crisis última del modelo neoliberal y estaría latente la implantación de otro modelo de desarrollo. Asimismo, cabe la posibilidad de una profundización del neoliberalismo con métodos más severos y mayor sufrimiento de la población.

Estertores civilizatorios

El capitalismo despliega fuerzas productivas que fomentan esperanzas de progreso y desarrollo, al tiempo que desencadenan fuerzas contraproductivas y autodestructivas que socavan el funcionamiento del sistema capitalista (la valorización del valor) y acotan o amenazan al sistema de reproducción de la vida humana; por ende, a la crisis sistémica del capitalismo se suma el colapso civilizatorio (Márquez, 2010).

En la trama histórica del capitalismo, desde sus orígenes y durante su desarrollo, el sistema ha basado su reproducción en métodos violentos y rapaces que han arrasado civilizaciones y exterminado pueblos. De hecho el capitalismo emergió con la acumulación originaria (Marx, 2004). En el continente americano el arribo del capitalismo significó una colosal masacre de los pueblos originarios mediante la conquista y el régimen colonial. La modernidad capitalista solventó en gran parte su desarrollo industrial con el saqueo de las colonias y esta empresa transatlántica fue posible gracias a la esclavitud africana. Ya avanzado el siglo XX, el capitalismo renovó bríos tras dos guerras mundiales que redundaron en la emergencia de Estados Unidos como la indiscutible potencia mundial a costa de la muerte de millones de personas. En el siglo XXI persisten, se multiplican y convergen los mecanismos de saqueo, superexplotación y ecocidio.

En la trama histórica del capitalismo la crisis civilizatoria no es precisamente una novedad, pero en nuestro tiempo sí lo es el alcance y la profundidad que adquiere la crisis del capitalismo neoliberal, una grieta en el proyecto dominante de la modernidad capitalista, que adquiere visos de una fractura civilizatoria en la escena mundial que pone en entredicho las posibilidades de reproducción de la vida humana en vastas regiones del

planeta merced a varias amenazas globales latentes que superan cualquier mal augurio o febril relato apocalíptico.

De manera acumulativa, según la secuencia del devenir histórico estructural, la crisis actual es una crisis del capital global, del modelo neoliberal y del modelo civilizatorio. Valga decir que es una crisis que entrelaza los problemas coyunturales, estructurales e históricos del capitalismo. Como producto histórico, el capitalismo presenta, en diversos momentos de su devenir, una contradicción que socava al sistema, más allá de los desajustes de las coyunturas. Se trata de una fuerza profunda que deteriora al sistema a largo plazo. Varios rostros de la crisis aparecen yuxtapuestos, algunos parecieran ofrecer perfiles más siniestros que otros, pero comparten como causa común la lógica del gran dinero sobrepuesta a la lógica de la vida humana digna.

Desempleo estructural

El fantasma del desempleo estructural que recorre la economía mundial es insuflado por dos fuerzas expansivas. La primera es la dinámica de expansión industrial que desde los 1970 del siglo pasado ha seguido una ruta paradójica de desindustrialización-reindustrialización. En las últimas tres décadas las empresas multinacionales con sede en Estados Unidos y las principales potencias capitalistas han perpetrado un traslado masivo de plantas industriales hacia los países periféricos —sobre todo a Asia y América Latina—, donde abunda el trabajo barato y existe una desregulación ambiental, aunado a que no tienen la obligación de cumplir leyes ambientales y laborales ni pagar altos costos por fuerza de trabajo y materias primas.

En los países receptores se ha configurado un régimen laboral con condiciones miserables para los trabajadores y se ha generalizado la destrucción ambiental debido a la operación de industrias depredadoras. Estos espacios son verdaderos paraísos laborales y ambientales para saciar la sed de ganancia del capital multinacional. Las desmanteladas economías periféricas fueron previamente desindustrializadas con el propósito de insertarlas después a los sistemas productivos del capital global, por lo que se implementaron tratados y reformas legislativas para construir una tersa pista de aterrizaje del capital foráneo y el fácil despegue de los flujos exportadores. En esa trama, un caso paradigmático ha sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la punta de lanza para derrumbar los mecanismos de protección de la economía mexicana frente a los intereses capitalistas estadounidenses, derogar tasas impositivas, garantizar la seguridad de la inversión y facilitar los procedimientos para la explotación del trabajo y el medio ambiente, con lo cual se refuerza el bombeo sistemático del excedente generado de la periferia hacia el centro.

La otra fuerza impulsora proviene de los procesos de innovación tecnológica que han difundido cada vez más la automatización y la robotización de los procesos productivos, al igual que la adaptación de otras nuevas tecnologías. Al respecto, la Reserva Federal de Estados Unidos estima que se producen 85 por ciento más bienes con 2/3 partes de la fuerza laboral que se ocupaba hace veinte años (Ribeiro, 2017), sin considerar lo que se produce en el exterior. Las empresas más competitivas programan saltos tecnológicos que les permiten producir más con menos empleo.

Hambruna mundial

Un problema coyuntural irrumpió en 2008 para escenificar la crisis alimentaria. En busca de nichos de ganancia extraordinaria y pronta, el capital financiero tomó por asalto de forma masiva al sensible sector alimentario. El centro operativo de la burbuja especulativa fue la bolsa de Chicago donde ocurrieron alzas artificiales de los precios de los granos (maíz, trigo, etcétera), de la soya y del etanol (producto del maíz o de la caña de azúcar); incrementos espectaculares que, en el caso del trigo llegaron a 100 por ciento en menos de un año. No fue la escasez sino la especulación lo que detonó el alza de precios. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), cayeron en la pobreza, en situación de hambre, 115 millones de personas. De aquí se deriva un problema ético: para el capital especulativo global el dinero es lo único que importa, en modo alguno los seres humanos.

La crisis alimentaria también ostenta rasgos estructurales. Durante el modelo neoliberal, en los últimos treinta años, está en curso un proceso de reconcentración de las tierras (conocido como acaparamiento de tierras) que significa una verdadera contrarreforma agraria a escala mundial. En términos gruesos, este proceso ha favorecido a las empresas multinacionales y a latifundistas locales. El hecho es que la agricultura, que había sido omitida por el gran dinero, de pronto se transformó en una nueva frontera para el capital. Es sabido que la agricultura campesina contribuye poco a la acumulación capitalista, pero se halla bajo su dominio (Bartra, 2006). Sólo su plena conversión en agricultura capitalista puede crear enormes rentas. Para ello es necesario incrementar notablemente la productividad (que en

términos capitalistas puede alcanzar desde 100 hasta mil por ciento), pero con un considerable costo humano y ambiental.

En cualquier caso, la lógica inmarcesible del capital ignora las llamadas externalidades, saldos que no entran en los cálculos mercantiles. Los costos ecológicos y sociales no los paga el capital, los asumen las poblaciones afectadas. A mediano y largo plazos, el costo ecológico de la agricultura capitalista resulta desproporcionado. El uso masivo e intensivo de productos químicos que requiere la agricultura capitalista altera los suelos y contamina las aguas. Dicha producción reporta altos rendimientos en el presente, aunque previsiblemente configura las zonas desérticas del futuro. Las consecuencias sociales no son menores: la expulsión de millones de campesinos de sus tierras a barrios marginales de las grandes ciudades, lo que acentúa la crisis urbana.

Migraciones forzadas

La migración forzada es consustancial al capitalismo neoliberal. Las reformas neoliberales aceleran el proceso de acumulación por despojo que separa a amplios sectores sociales de medios de producción y subsistencia y los obliga a trasladarse a otras latitudes, del interior o el extranjero, en circunstancias que vulneran sus condiciones de vida y los colocan en la perspectiva de emplearse en situaciones de elevada explotación laboral y exclusión social. Los derechos humanos son conculcados en el origen, tránsito y destino. Las condiciones materiales de esta migración tienen como detonadores sintomáticos al desempleo estructural, la pobreza, la violencia, los conflictos, la inseguridad, las catástrofes naturales, al igual que la falta de oportunidades para el ejercicio pleno de las capacidades

profesionales, intelectuales y artísticas, como sucede en el caso de la migración calificada.

No obstante, las causas profundas se localizan en las dinámicas del desarrollo desigual y el proceso de neoliberalización implementados con la intención de satisfacer las necesidades de acumulación de capital centralizado. La migración forzada responde a una estrategia de supeditación del trabajo inmediato y el trabajo conceptual (científico-tecnológico) en el horizonte transnacional. Las condiciones materiales repercuten en la configuración de una subjetividad adocenada que concibe a la migración como una cultura, una tradición y una estrategia de desarrollo, pero también como una expresión de malestar, resentimiento y rebelión ante las condiciones estructurales y políticas subyacentes en las causas profundas de la migración.

Al tiempo que el desmantelamiento del aparato productivo de las economías de las periferias se tradujo en la bancarrota de sectores clave para la subsistencia social —como el agrícola, en particular el modo de vida campesino—, fluyeron oleadas masivas de trabajadores migratorios que se vieron forzados a buscar el sustento en centros urbanos o campos de cultivo de sus países y en mayor medida en Estados Unidos y la Unión Europea, las zonas de mayor atracción de inmigrantes, aunque de igual forma se registraron grandes movimientos migratorios laborales al interior de los países, como ha ocurrido en China, por mencionar el caso más relevante. De ese modo, los principales centros económicos absorbieron grandes contingentes de trabajadores ya formados y dispuestos a emplearse en las peores condiciones laborales imaginadas.

Colapso energético

Después de la Segunda Guerra Mundial, el uso de la energía fósil se incrementó, pero con el despliegue del modelo neoliberal el consumo aumentó de manera significativa y generó conflictos socioambientales. La acumulación mundial fosilizada, sustentada en el consumo de energía fósil a bajo precio, degeneró en el despilfarro, hasta prácticamente agotar las fuentes de petróleo barato o los yacimientos de diversos minerales. Los expertos anticipan que en el medio siglo venidero la humanidad tendrá que cambiar las fuentes de energía y modificar los patrones de consumo.

Paradójicamente, el gran dinero asume las crisis como ventanas de oportunidad para emprender nuevos negocios. Mientras que para amplios sectores poblacionales la crisis energética es grave, los capitalistas aprovechan los problemas que ellos mismos provocan con la finalidad de reconvertirlos en fuentes de lucro. Un ejemplo es la industria de los desechos, que se presenta como una vía de reciclaje, a la vez que continúan los vertederos de sustancias tóxicas y se agudizan los problemas de contaminación transgeneracional. Otro ejemplo es el surgimiento del negocio de los agrocarburos tras la crisis energética, que a su vez propició el alza en el precio de los alimentos básicos. La tentativa de producir energía «verde» posterga la crisis y legitima el capitalismo al presentarse como si fuese consciente del cuidado y preservación del medio ambiente. La adopción del modelo de monocultivos de maíz o caña de azúcar para la producción de etanol o de palma, soya o jatrofa para la generación de agrodiesel propicia considerables daños ecológicos y sociales. La escasez de productos minerales y energéticos se acompaña de una escalada de las actividades militares, pues lo que se encuentra en juego es el control de las fuentes de energía y materias

primas mediante el incremento desmesurado de la carrera armamentista y el asentamiento de bases militares en zonas geoestratégicas.

Señales de ecocidio

La crisis ambiental es uno de los sellos más conspicuos de la crisis civilizatoria. Algunos de sus rasgos son: cambio climático, calentamiento global; emisión de gases que supera la capacidad de absorción planetaria; profundización de la huella ecológica; aumento de sequías, tsunamis, inundaciones, extinción de especies; deshielo de glaciares e incremento del nivel del agua en las costas. No obstante, la crisis ambiental no puede atribuirse en abstracto a la actividad antropocéntrica y en tal sentido responsabilizar al hombre o la humanidad en general, o incluso adjudicarlo a la actividad de la naturaleza, como si fuesen simples catástrofes ambientales. No podemos omitir que en gran medida el sistema capitalista, que opera impelido por la competencia ciega en pos del lucro, ignora los límites de la naturaleza y continuamente los vulnera, lo cual deriva en la irracional sobreproducción de mercancías y, en consecuencia, en la devastación de la naturaleza que funciona como fuente perpetua de materiales y energía que nutren la producción capitalista.

En todo caso, se trata de una crisis histórica de degradación ambiental que no se reconoce y tampoco se atribuye la responsabilidad que tienen sobre ella los grandes capitales y las potencias económicas; en contraste, se asumen los costos financieros y rescates de bancos e industrias con esquemas que extienden el cobro de la factura a trabajadores y contribuyentes, mientras tanto se sigue reproduciendo el ecocidio. Por su parte, Estados Unidos bloquea los acuerdos mundiales y elude la reconversión energética

para proteger sus industrias, de ahí que sea previsible la profundización de la degradación ambiental, quizá hasta un punto donde una mayor catástrofe afecte los grandes centros urbanos del mundo desarrollado, en grados más agresivos que, por ejemplo, los registrados por el huracán Katrina (Klein, 2007). Esta crisis no se resuelve con medidas simplistas como el impuesto al petróleo o al carbón, ni se advierte un milagro tecnológico de sustitución nuclear o del hierro del carbón. El mercado de emisiones, el negocio de conservación y todos los proyectos del capitalismo verde sólo auguran mayores desigualdades sociales y desequilibrios regionales.

Conclusiones

*La gran crisis del capitalismo global entraña
la convergencia de varias formas de crisis*

La gran depresión de la economía mundial orquestada por los grandes capitales multinacionales, la contravención de la rentabilidad diseñada por el modelo neoliberal y la fractura del metabolismo social confluyen en una ampulosa crisis que atenta contra los fundamentos del sistema capitalista y contra la reproducción de la vida humana. Tal crisis gravita en los cimientos del sistema mundial y opera en distintos marcos temporales superpuestos que permiten dilucidar diversos factores explicativos, que al final de cuentas se funden en la lógica perversa del funcionamiento del sistema capitalista como un todo. Las crisis tienen compartimentos y vasos comunicantes: en un plano inmediato resalta la faceta coyuntural de la globalidad, en un nivel intermedio se ubica la estructura del modelo de desarrollo vigente (el neoliberal) y en las raíces se sitúa el sustrato histórico,

el de mayor alcance, el componente civilizatorio que sintetiza la sustancia de la vida humana en el planeta.

*Deliberación sobre el diagnóstico y las soluciones
de las crisis en un ámbito de disputa teórica y política*

Las concepciones teóricas y políticas sobre el desarrollo han sido afectadas por las crisis. Muchos partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales, además de académicos y activistas que pretenden mejorar la situación están limitados porque permanecen en los marcos categoriales y políticos del modelo de desarrollo dominante y consideran que es suficiente implementar reformas en el sistema, como la regulación, sin advertir que la vida humana en el planeta se encuentra seriamente amenazada. Para impulsar un nuevo paradigma civilizatorio es preciso cambiar en principio las concepciones teóricas y políticas que emanan del sistema ideológico hegemónico.

La descripción, el análisis y la interpretación de la gran crisis se llevan a cabo en el ámbito de la disputa teórica. Es importante reconstruir el estado del arte, recapitular los debates relativos a las crisis, para analizar teórica y políticamente el trabajo de los investigadores y hacer investigaciones críticas de relevancia social; también es fundamental atender a las fuerzas sociales que actúan sobre las crisis en varios sentidos y con distintos intereses. La cuestión del desarrollo aflora como un campo en disputa, sujeta a debate, donde confluyen ideas, conceptos, explicaciones y propuestas desde visiones viejas, renovadas y novedosas. Evidentemente, no existe un consenso porque hay muchos intereses en juego.

Las visiones neoliberales amasadas en el Consenso y el Posconsenso de Washington, así como en sus variantes y adaptaciones, refrendan en

especial los intereses del gran capital, pero el núcleo duro de esta expresión lo hace de un modo contradictorio: reclaman el rescate estatal de las grandes corporaciones con fondos públicos, cuando en el discurso ideológico abominan la injerencia del Estado, y preparan una contraofensiva que puede profundizar aún más la crisis porque siguen empeñados en ahondar las fuentes de ganancia extraordinaria mediante determinadas estrategias, que en cierto sentido pudieran catalogarse como «espurias»: superexplotación, especulación y extractivismo bajo una racionalidad irracional que pretende «estirar la cuerda hasta que se rompa».

La crisis desvirtuó el pensamiento único centrado en las premisas neoclásicas y el ideario neoliberal; entonces cobró cierto auge el pensamiento heterodoxo, sobre todo las posturas keynesianas que apuestan por una especie de humanización del capitalismo. Frente a la crisis, autores reputados como Stiglitz (2010) y Krugman (2012) postulan la idea de que para salir del pantano hay que reformar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y someter al capital financiero mediante la rehabilitación de mecanismos de regulación; aunque es sabido que el capitalismo admite las regulaciones para procesarlas a su favor y llegado el momento conjugar los mecanismos de monopolización y control que le permitan obtener ganancias superlativas. La tentativa heterodoxa de humanizar el capitalismo a través de políticas de regulación y control con el propósito de contener la codicia y voracidad del capital se contradice en sus propios términos, puesto que el capital no reconoce límites, excepto los que eventualmente le imponen las crisis y la competencia.

El pensamiento crítico también se ha regenerado. En concreto el que impugna la explotación del hombre por el hombre y postula el principio de la emancipación humana. Ante los desafíos del colapso civilizatorio

significa un proyecto histórico en beneficio de otro paradigma civilizatorio enfocado en la reproducción de la vida humana y no en los intereses del capital. Esta premisa no es posible dentro del capitalismo como sistema dominante. Garantizar las condiciones materiales y espirituales de existencia de la población es un asunto de la mayor importancia que no puede ser gestionado por el capital ni por burocracias fetichizadas en las altas esferas del poder sino desde instituciones democráticas en distintos niveles de la sociedad. Frente a la existencia de una crisis global, una conspicua crisis del sistema capitalista, la solución es un proyecto emancipador de la humanidad, un proyecto de largo aliento que carece de instructivos o de un solo camino; en todo caso se trata de un proceso en ciernes.

*Se libra una lucha de clases de largo aliento
con los dados cargados a favor del gran capital*

Las crisis capitalistas, en su mayoría de raigambre económica, se resuelven en términos políticos. No existe un desenlace automático, una salida puramente económica, en el sentido simulado por los economistas: un ciclo económico que por sí mismo sigue una ruta de subidas, bajadas y nuevas subidas, como si las fuerzas del mercado fuesen racionales y recapacitaran. La historia lo demuestra: la depresión de los 1930 fue disipada con la guerra, que al efecto fuera caracterizada, y retomando las palabras de Karl von Clausewitz, como la «continuación de la política por otros medios», es decir, por las dos guerras mundiales —así llamadas pese a que se desarrollaron en territorio europeo con un destacado protagonismo estadounidense, a la sazón la potencia triunfante—; sin embargo, el *boom* de la posguerra se agotó con la oleada revolucionaria de los 1970; el neoliberalismo fue impuesto luego de

que se asestaron relevantes derrotas a la clase obrera, y la etapa actual puede ser culminada por una acción política de las clases dominantes, aunque sin descartar los contramovimientos de los sectores oprimidos.

En la actualidad las respuestas que la crisis ha suscitado desde el Estado y el capital, pero también desde gran parte de los partidos, los sindicatos y los movimientos sociales, se refieren sobre todo a la capa inmediata o coyuntural de la crisis; a lo sumo se toma en cuenta el rescate o abrogación del modelo neoliberal, aunque se omite el componente sistémico, el funcionamiento del capitalismo, y también se desdeña el complejo entramado de la crisis civilizatoria, que va más allá del propio capitalismo. Con visiones cortoplacistas discurre un debate teórico-político en torno a diagnósticos, problemas, políticas y alternativas.

En el terreno de la lucha de clases, los proyectos de las clases dominantes frente a la crisis global tienen ventaja una vez más. El proyecto neoliberal se presenta como si fuese ahistórico, y más aún como si el capitalismo fuese eterno, una suerte de estado natural de la humanidad, y en tal sentido estuviese dotado de una capacidad de reproducción infinita, por lo que sus defensores esperan que siempre tenga la capacidad de renacer a partir de la recuperación del campo económico. No en balde se manifiesta como el mejor de los mundos posibles. Esta mitología ha sido desacreditada en los ámbitos políticos e ideológicos por la crisis general. En consecuencia, se puede afirmar que «la moneda está en el aire»; sin embargo, de acuerdo con Warrent Buffet, el tercer hombre más rico del orbe, «hay una guerra de clases, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando» (Stein, 26 de noviembre de 2006).

Desde el frente popular, la crisis de la civilización actual exige una revisión detallada del estado del mundo, que entraña múltiples aplicaciones

a realidades concretas. Empero, se advierte que la acción de las clases populares no ha sido lo suficientemente fuerte, organizada y perdurable a escala mundial. El capital actúa a nivel global, no así los trabajadores; tampoco las instancias de representación popular. Las reivindicaciones de los movimientos sociales en el mundo lo testifican. En general, los movimientos representan fracciones del sector popular: campesinos, indígenas, obreros, mujeres, jóvenes, etcétera. No es suficiente expresar alegorías a la «multitud» o la «primavera de los pueblos» para congratularse de la emergencia de fuerzas transformadoras efectivas. Es imprescindible articular una perspectiva holística en la teoría y la práctica para develar la ubicación de cada cual en el conjunto.

Pese al descrédito del capitalismo y su proyecto neoliberal, la correlación de fuerza en el mundo sigue siendo favorable al capital. De hecho, la debilidad popular permitió al capital global salir bien librado en 2009 con los múltiples programas de rescate de corporaciones financieras e industriales sumidas en la bancarrota con cargo a los contribuyentes y no a un fondo de capitales. Además la derrota del movimiento obrero permitió una mayor extracción del valor de los salarios mediante la aplicación de severos programas de ajuste que contribuyeron a recuperar la riqueza de la plutocracia y a deteriorar la calidad de vida de la mayoría de la población.

El caso de Grecia en 2010 fue revelador: el capital financiero enfrentó y venció a un pueblo entero y lo sometió a un severo plan de choque llamado «austeridad» (Badiou *et al.*, 2013). La finalidad era garantizar el cobro de obligaciones por el capital financiero internacional en detrimento de la calidad de vida de la población y del desmantelamiento del Estado y la democracia como instancias de representación popular. Claramente, no sólo fue una derrota implacable del pueblo griego, sino una derrota

ejemplar de los pueblos del mundo que ven desvanecer las aspiraciones de soberanía popular ante los poderes imperiales y se encuentran una vez más enfrentados a los castigos que significan los programas de ajuste. Al final de cuentas, los programas económicos refrendan poderosos intereses de clase que se dirimen en la arena política mediante discursos teóricos y políticos que salen triunfantes en la medida en que están respaldados por correlaciones de fuerzas favorables.

América Latina se ha configurado como laboratorio de transformación social merced a movilizaciones sociales y formaciones políticas posneoliberales y anticapitalistas

En América Latina están en curso diversos procesos de transformación social sujetos a extensas deliberaciones y al acoso de los poderes imperiales y oligárquicos. No sólo se discute y vislumbra en esta región del mundo el proyecto de cambio social acorde a los pueblos latinoamericanos sino que también, de diversas formas, se forja el futuro de la humanidad o al menos se presagian otros horizontes con la certeza de que el futuro posible y necesario de una humanidad digna y provechosa es irrealizable bajo la potestad de un puñado de capitalistas.

Las experiencias de los zapatistas en México; los campesinos sin tierra en Brasil; la movilización de los pueblos originarios en la región andina, amazónica y maya; los gobiernos populares en Venezuela, Bolivia y Ecuador, en distintos planos y niveles, con mayor o menor intensidad e ímpetus transformadores; han acuñado o reivindicado conceptos y experiencias por demás útiles para la reflexión y la proyección política: «mandar obedeciendo», *Sumak Kawsay*, Buen Vivir, socialismo del siglo XXI o

socialismo comunitario. En términos generales, anteponen las necesidades radicales de la población a los intereses radicales del capital y plantean relaciones sociales democráticas y comunitarias, otra forma de organizar la economía y un nuevo vínculo entre el ser humano y la naturaleza.

Esos conceptos son poderosos en tanto atribuyen al capitalismo y sus valores una condición histórica y perecedera, no un estado permanente y definitivo de la humanidad. No se trata de un retorno al pasado, sino una construcción del presente y futuro de la humanidad. Además, son críticos porque representan lo contrario de los valores del sistema capitalista y son propositivos de nuevas formas de organización de la vida colectiva de la humanidad en el planeta. Tampoco consiste en la implantación de otros dogmas de fe ni cosmovisiones específicas que tengan que ser reimplantadas en los contextos más heterogéneos. Más bien son caminos, modos de pensar y actuar sobre la realidad para transformarla.

Las aportaciones de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, los movimientos sociales, los sindicatos, los partidos políticos, los investigadores y los intelectuales afines a estos proyectos políticos ofrecen múltiples ideas y propuestas para solucionar una crisis civilizatoria que no es localizada, sectorial o privativa, sino que es universal e interpela al conjunto de la humanidad, por lo que su tratamiento reclama una pluralidad cultural y política, un trabajo colectivo de clases, movimientos y comunidades.

El horizonte de posibilidades de un desarrollo humano orientado por el sentido de la vida es de talante poscapitalista

En un sentido profundo, la crisis del sistema capitalista sólo puede superarse trascendiendo al sistema mismo (Amin, 2009). La tentativa de

reformular el sistema mediante la regulación (Stiglitz, 2010; Krugman, 2012) o la decencia o humanización del capitalismo (Sen, 2009; PNUD, 2014) es poco menos que ilusoria, pues es bien sabido que el sistema se funda en la explotación, una relación social que de suyo no puede ser humanizada. De igual manera, la defensa de los derechos humanos como un dispositivo político del propio sistema no busca seriamente la emancipación social, a lo sumo pretende reparar ciertos agravios, resarcir a determinadas víctimas, atemperar algunos abusos de autoridades, pero no desatar el nudo crítico de la explotación y la dominación que seguirá generando víctimas bajo la forma aparente de la violencia, la exclusión y la pobreza. Otro tanto puede decirse de la democracia representativa, que simula la participación popular en la toma de decisiones, cuando se trata de un simulacro de las elites que detentan el poder político.

Resulta evidente que un sistema dirigido hacia la búsqueda insaciable de ganancias no repara en el respeto de la persona y si lo enuncia es con fines de maquillar, colocar una careta de rostro humano, a un sistema inhumano. Al basarse en la competencia y a la vez en el monopolio es incapaz de procrear una cultura de solidaridad. Tal pretensión constituye una utopía irrealizable, una mera ideología. En el largo plazo, el único proyecto sustentable para la humanidad es una sociedad poscapitalista, que todavía carece de nombre al ser un proyecto en construcción, con avances y contradicciones, pero que ya comienza a tomar forma en prácticas instituyentes, municipios autónomos, gobiernos populares, constituciones libertarias...

*La defensa de la humanidad y la naturaleza amerita
un nuevo paradigma civilizatorio*

El sistema capitalista ha producido el mayor cúmulo de riqueza en la historia de la humanidad, pero también ha desbocado una enorme capacidad destructiva que relega sus atributos constructivos. Esta contradicción no se reduce al ámbito material de las relaciones sociales, donde se dirimen las formas de explotación y dominación; además es una cuestión ética en tanto se plantea la disyuntiva de la primacía de los intereses de la reproducción del capital o de la reproducción de la vida humana (Dussel, 2013). Asimismo, es una encrucijada civilizatoria que pone en entredicho el desarrollo capitalista explotador y excluyente con la finalidad de replantear otro paradigma de desarrollo humano.

No sólo está en cuestión la perversión con la que opera la estructura del capital global, que para satisfacer su sed de ganancia recurre a la superexplotación del trabajo, la especulación financiera y el extractivismo de bienes naturales, ni los mecanismos de distribución del excedente en forma de plusvalor y renta, también se encuentra en peligro la pervivencia en el planeta de la vida humana, inmersa en una naturaleza depredada. El problema es tan serio que no puede ser resuelto únicamente por economistas, tecnócratas, especialistas y la clase política, sino que interpela a la humanidad, a todas las esferas del pensamiento y de la praxis social, pero de manera particular a los sectores subalternos que llevan la carga del trabajo y las penurias de la sobrevivencia. No sólo se delibera sobre la posible extinción del capitalismo sino del futuro de la humanidad.

Más allá del capitalismo, depredador de todo lo vivo y aun de lo muerto (el trabajo vivo y el trabajo muerto, la materia biótica y la materia pétreo,

los recursos renovables y los no renovables, lo animado y lo inanimado), es imprescindible formular otro paradigma civilizatorio y replantear los fundamentos de la vida humana en la Tierra. Ante la primacía del valor de cambio que funge de catalizador de las relaciones sociales en las que la mercancía es un fetiche, se antepone la necesidad de privilegiar el valor de uso como soporte de la producción material de la vida. La consideración de la naturaleza como insumo productivo y la propagación del ecocidio reclaman instaurar otro tipo de metabolismo social donde la simbiosis con los ecosistemas se reconozca como fuente de la vida. Asimismo, la perversión de la democracia como potestad de las elites en detrimento del poder popular invoca un cambio político profundo para generalizar la democracia como un genuino principio de las relaciones humanas y de las instituciones basadas en la soberanía popular. En el mismo sentido, la homogeneización de la cultura neoliberal tiene que ser confrontada con la interacción entre las diversas culturas y la pluriversidad en un horizonte de emancipación social.

Referencias

- Amin, Samir (2009), «¿Salir de la crisis del capitalismo o salir del capitalismo en crisis?», *El viejo topo* (261).
- Arrizabalo, Xavier (febrero de 2012), «El imperialismo, los límites del capitalismo y la crisis actual como encrucijada histórica», *XIII Jornadas de Economía Crítica. Los costes de la crisis y alternativas en construcción*, pp. 705-736.
- Badiou, Alain et al. (2013), *El síntoma griego. Posdemocracia, guerra monetaria y resistencia en la Europa de hoy*, Madrid, Errata Naturae.

- Bartra, Armando (2006), *El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta de la vida*, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México/Ítaca.
- (2013), «Crisis civilizatoria», en Raúl Ornelas (coord.), *Crisis civilizatoria y superación del capitalismo*. México, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Damián, Víctor (2015), «La producción de consumidores y el estancamiento económico», *Revista de Ciencias Sociales* (28).
- Dussel, Enrique (2016), *14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico*, México, Trotta.
- Estermann, Josef (2012), «Crisis civilizatoria y vivir bien», *Polis* (33).
- Fondo Monetario Internacional (FMI) (2009), *Perspectivas de la economía mundial*, Washington, FMI.
- Gutiérrez, Eduardo (2010), «Prospectiva de la crisis: la salida diseñada por las elites occidentales», *Viento Sur* (112).
- Harvey, David (2014), *Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo*, Quito, IAEN.
- Katz, Claudio (2011), «Las tres dimensiones de la crisis», *Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad*, 19(38).
- Klein, Naomi (2007), *La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre*, Buenos Aires, Paidós.
- Krugman, Paul (2012), *¡Acabad ya con esta crisis!*, Barcelona, Crítica.
- Lander, Edgardo (2011), «Los límites del planeta y la crisis civilizatoria», *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 17(1), pp. 141-166.
- Laval, Christian y Pierre Dardot (2013), *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*, Barcelona, Gedisa.
- Löwy, Michael (2009), «Crisis ecológica, crisis capitalista, crisis civilizatoria: la alternativa ecosocialista», *Razón y Revolución* (29).

- Márquez, Humberto (2009), «Diez rostros de la crisis civilizatoria del sistema capitalista mundial», *Problemas del desarrollo*, 40(159), pp. 191-210.
- (2010), «La gran crisis del capitalismo neoliberal», *Andamios*, 7(13).
- Márquez, Humberto y Raúl Delgado Wise (2011), «Una perspectiva del sur sobre capital global, migración forzada y desarrollo alternativo», *Migración y Desarrollo*, 9(16).
- Marx, Karl ([1867] 2004), *El capital. Crítica de la economía política*, México, Siglo XXI.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2014), *Informe sobre desarrollo humano 2014. Sostener el progreso humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia*, Nueva York, PNUD.
- Rubio, Blanca (2011), «La nueva fase de la crisis alimentaria mundial», *Mundo Siglo XXI*, 6(24).
- Sáenz, Roberto (2012), «Perspectivas del capitalismo a comienzos del siglo XXI», *Socialismo o Barbarie* (20).
- Sen, Amartya (2009), «Capitalism Beyond the Crisis», *The New York Review of Books*, 56(5), in <http://www.nybooks.com/articles/2009/03/26/capitalism-beyond-the-crisis/>
- Stein, Ben (26 de noviembre de 2006), «In Class Warfare, Guess Which Class Is Winning», *The New York Times*, in <http://www.nytimes.com/2006/11/26/business/yourmoney/26every.html?r=0>
- Stiglitz, Joseph (2010), «Regulación y fallas», *Revista de Economía Institucional*, 12(23).
- Ugarteche, Oscar (2012), «México: tan lejos de Dios, tan cerca de la crisis. Mecanismos de contagio de la crisis en Norteamérica», *Nueva Sociedad* (237), en <http://www.obela.org/system/files/La%20crisis%20de%20norteamerica.pdf>
- Varoufakis, Yanis (2012), *El minotauro global*, México, Crítica.

Discusiones en torno a la pobreza y el campesinado

Mónica Guadalupe Chávez Elorza*

Boltvinik, Julio & Susan Archer Mann (2016),
*Peasant Poverty and Persistence
in the 21st Century. Theories, Debates,
Realities and Policies*,
Londres, CROP/ZED, 430 p.

Desde una perspectiva crítica de la economía política marxista, el libro editado por Julio Boltvinik y Susan Archer Mann, *Peasant Poverty and Persistence in the 21st Century. Theories, Debates, Realities and Policies*, reúne 12 textos, cuyo objetivo central es responder a tres preguntas sobre la relación entre la pobreza y el campesinado: 1) ¿por qué los campesinos se han mantenido como una forma no capitalista de la producción, cuando otras áreas de producción no capitalistas han desaparecido?; 2) ¿por qué la inmensa mayoría de los campesinos es pobre?; 3) ¿cómo se relacionan estas dos interrogantes?

Resalta la particularidad del libro, desde su integración, contenido y surgimiento, en tanto que es el resultado del Seminario Internacional sobre Pobreza y Persistencia Campesina e inicia la discusión con un texto de Julio Boltvinik (capítulo I). Asimismo, es conveniente subrayar que el libro da cabida a distintos puntos de vista que permiten conocer un amplio panorama del tema en cuestión.

* Docente investigadora de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

El contenido se estructura en tres secciones. La primera se constituye por un prefacio de Meghnad Desai y la introducción general del libro a cargo de los editores. En la segunda aparecen los artículos expuestos en el seminario, los cuales se organizan en cuatro subsecciones: 1) «Perspectivas teóricas de la pobreza y persistencia campesina» engloba los capítulos 1 a 4; 2) «Perspectivas teóricas y empíricas» comprende los capítulos 5 y 6; 3) «Medio ambiente, crisis alimentaria y campesinos» se conforma con los capítulos 7, 8 y 9; 4) «Política, autoconfianza y pobreza campesina» contiene los capítulos 10 y 11. Finalmente, en la tercera sección Boltvinik contesta a las críticas del capítulo 1, presenta los debates pendientes y resume de manera ágil las respuestas de los distintos autores sobre las preguntas planteadas en un inicio. A continuación se expone de modo sucinto el contenido de cada uno de los once capítulos.

Julio Boltvinik abre el debate concerniente a los aspectos que ayudan a analizar la existencia de los campesinos y su condición de pobreza. Su tesis se centra en la «naturaleza discontinua del insumo trabajo requerido durante el proceso de producción agrícola», dado que éste es el factor principal que explica la condición de pobreza del campesinado y su persistencia. En otras palabras, el campesinado asume el costo del tiempo muerto entre la siembra y la cosecha sin cobrar por él, lo que provoca que los precios agrícolas sean más bajos de lo que deberían, circunstancia que a su vez hace que el campesinado sea estructuralmente benéfico para el capitalismo. Añade que la persistencia no sólo es funcional sino indispensable para la existencia de las empresas capitalistas agrícolas.

En términos teóricos, Boltvinik insiste en la necesidad de incorporar una tercera ecuación en la teoría del valor propuesta por Marx, que contemple la discontinuidad del tiempo requerido en la producción agrícola,

con lo que se podría avanzar hacia lo que denomina «teoría general del valor» para distinguirla de la teoría original de Marx. Considera que la solución se centra en aplicar una política de subsidios dirigidos a la producción agrícola. De tales proposiciones se desprenden debates específicos con Armando Bartra (capítulo 2), Luis Arizmendi (capítulo 4) y Henry Bernstein (capítulo 5).

Las proposiciones de Armando Bartra, en el capítulo 2, se enfocan en que es más pertinente hablar de «las causas de la explotación del campesinado en lugar de las causas de la pobreza». Esto es, que el campesino es explotado cuando vende su producto por menos de lo que vale, pero también lo es al pagar tasas de interés exorbitantes, comprar insumos sobrevalorados y emplearse por periodos cortos con salarios de subsistencia. Asimismo, la existencia de diferenciación en rentas, dado que los campesinos no determinan los precios, les impide generar ganancias e inclusive les hace operar con pérdidas. Por tanto, Bartra plantea una diversificación de la agricultura y el cultivo de granos o el latifundio, en lugar de subsidios.

En el capítulo 3, Gordon Welty, Susan Martin, James Dickinson y Emily Blumenfeld, utilizan la tesis Mann-Dickinson para analizar, desde el punto de vista del trabajo, la incongruencia del tiempo de producción y el tiempo de trabajo, los cuales obstaculizan las relaciones de producción capitalistas en la agricultura. Consideran la reproducción del trabajo a partir de una perspectiva de género; enfatizan el trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares campesinos y proletarios. Advierten que un análisis histórico y específico a un bien es siempre preferible en comparación a un esquema explicativo sustentado en elementos ontológicos; es el caso de los argumentos contrastantes de Boltvinik sobre industria y agricultura. También indican que los salarios reflejan desigualdades mayores

asociadas con la composición demográfica de la fuerza de trabajo, tales como edad, raza, etnicidad y género. Al respecto, exponen que las sociedades se basan en tres procesos de producción interconectados: producción de medios de subsistencia, medios de producción y producción de fuerza de trabajo. En esta última, el trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares absorbe los costos de producir y reproducir la fuerza de trabajo que el capitalismo por sí mismo es incapaz de generar, y lo hace de manera que no es reconocido. De hecho, subrayan que los estudios agrarios actuales continúan recurriendo al trabajo de Chayanov, el cual soslaya la perspectiva de género. Pese a ello, es de suma relevancia la presencia de las mujeres en el trabajo agrícola: tan sólo en los países en vías de desarrollo constituyen 40 por ciento de la fuerza de trabajo. Por último, reconocen que la subcontratación, el trabajo informal, la migración, el trabajo temporal, entre otros, propician la existencia de un ejército laboral de reserva; en tanto que los subsidios representan una solución viable de la pobreza campesina.

Luis Arizmendi, en el capítulo 4, menciona que la humanidad se encuentra frente a la «mundialización de la pobreza» con más de 1.33 billones de personas mal nutridas en 2012. La idea de que el progreso asume la pobreza del campesinado como consecuencia de las formas de producción pre capitalistas es errónea, pues no reconoce que su causa es más bien efecto del dominio del capitalista sobre el trabajo campesino.

Su argumentación primordial enuncia que lo que existe es «una violación a la ley del valor». Esto ocurre cuando en el mercado se consuma la explotación de los campesinos, ya que no se transfiere únicamente plusvalía a través de intercambios desiguales, sino que se expropia el valor del fondo salarial de consumo. Arizmendi apunta que las soluciones posibles se deben basar en estrategias de resistencia agroecológicas y en la promoción de la soberanía

alimentaria con proyectos de cultivos mixtos, dentro de un esquema estratégico de desarrollo nacional y respetando la soberanía indígena.

Por su parte, en el capítulo 5, Henry Bernstein cuestiona los tres elementos esenciales del argumento de Boltvinik —el contraste sistemático de las condiciones de producción entre la agricultura y la industria, la diferencia entre la agricultura de los capitalistas y de los campesinos, y la propuesta política de subsidios como solución— para mostrar algunos problemas inherentes como el alto grado de abstracción y la generalización de la persistencia de la pobreza rural. Propone entonces centrarse en aspectos que hagan posible analizar «el desarrollo de la agricultura en la sociedad capitalista» desde una visión histórica. Para ello, examina la distinción entre *«farming»* y *«agriculture»*, dado que el cambio de terminología siguió los fines y la lógica del capitalismo; así, las nociones de «agricultura» y de «sector agrícola» articulan no sólo la división social del trabajo, sino que funcionan como objeto de políticas y de política.

Con la finalidad de comprender la evolución del campesinado, Bernstein propone cinco tesis teóricas que permiten cuestionar si deben ser considerados campesinos o agricultores, o trabajadores pertenecientes a las «clases de trabajo» en el tercer mundo. En adición, sugiere la existencia de una «fuerza de trabajo rural que va más allá de la agrícola» y que comprende a los trabajadores rurales proletarios y a los agricultores marginales o aquellos que son demasiado pobres para dedicarse a la agricultura como medio de vida y de reproducción. Esto implica dilucidar quiénes son los campesinos, quiénes son rurales y quiénes son pobres. Es necesario, además, considerar «condiciones más generales de existencia y de lucha de reproducción de las clases de trabajo (fragmentadas)» en el contexto del neoliberalismo globalizado.

Bernstein aclara que más que «persistencia» del campesinado se trata de un «cambio»: «el desarrollo de las fuerzas productivas», de la productividad del trabajo en la agricultura. Como alternativas alude al acceso y cultivo de parcelas de subsistencia, las cuales pueden aumentar el precio de reserva de la fuerza de trabajo, lo que daría cierta flexibilidad a los pobres rurales en la venta de su fuerza de trabajo. Puntualiza que los ahorros derivados de la migración laboral pueden ser invertidos con el propósito de mejorar la producción de la granja de pequeña escala como medio de reproducción o medio de vida.

Araceli Damián y Edith Pacheco proveen evidencia empírica de las características socioeconómicas del campesinado mexicano durante el periodo 1991-2003 en el capítulo 6. En particular, la urbanización de la población, dado que en 1910 71 por ciento de la población vivía en una zona rural y en 2010 el porcentaje era de 23.3 por ciento. Se precisa que la crisis de 1982 y la adopción del modelo neoliberal exacerbaron la disminución del sector agrícola en el país; años más tarde, la migración hacia Estados Unidos contribuyó a la persistencia del campesinado mexicano. Cabe resaltar que el factor que esclarece por qué las familias siguen involucradas en actividades agrícolas es el acceso a la posesión de la tierra, ya sea ejido o pequeña propiedad.

En una escala más operativa, las autoras utilizan el Módulo de Agricultura periodo 1991-2003 disponible dentro del esquema de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), el cual permite conocer la actividad económica de la persona tomando como referencia los últimos seis meses. Lo anterior revela que en 2003 hubo 1.5 millones de trabajadores adicionales en el sector agrícola, por lo tanto es evidente la subestimación en el mundo de estos trabajadores. Asimismo, dicho módulo faculta la caracterización del tipo de hogares rurales según el papel del campesinado, el análisis de las

condiciones de pobreza y su relación con determinadas actividades. Con respecto a los hogares, se clasifican en seis categorías: campesinos, agrícolas (capitalistas), proletarios agrícolas, no proletarios agrícolas, proletarios mixtos y de personas no involucradas en actividades económicas.

Dentro del capítulo 7, Enrique Leff se centra en explicar la persistencia del campesinado como forma de producción porque es funcional a la agricultura capitalista, así como a tradiciones y prácticas culturales, entre otros. El autor recurre a una perspectiva ecomarxista y otras propuestas desde la ecología política y la racionalidad medioambientalista. Argumenta que la pobreza del campesinado no se extiende por completo debido a su interdependencia funcional con el modo de producción capitalista o por diferencias en rentas, sino por «el proceso histórico de degradación entrópica de su medio ambiente y sus medios de subsistencia». En consecuencia, puntualiza que la teoría del valor de Marx falla porque no valora la naturaleza, de manera que ésta no puede determinar el valor o la plusvalía.

Incluso, comenta que la óptica ecomarxista ha abandonado el intento de reconstruir una teoría del valor del trabajo que considere la contribución de la naturaleza en los procesos del valor y de asignación de precios. Por ende, es indispensable la deconstrucción de la racionalidad económica y la construcción de «otra racionalidad económica productiva». La persistencia del campesinado, desde un aspecto ecológico, constituye una lucha; es decir, conflictos por el territorio, puesto que no sólo se trata de la apropiación de tierra y recursos naturales, sino de modos de producción, patrones de construcción y formas de territorialidad.

Elma Montaña, en el capítulo 8, presenta la situación del campesinado, de pequeños terratenientes y agricultores, con relación al agua, en

el contexto del cambio climático, especialmente hidrológico. Estudia la subordinación de estas poblaciones en tres cuencas hídricas: el río Mendoza, ubicado en área centro-oeste de Argentina; el río Pucara en Cochabamba, Bolivia; y el río Elqui en Coquimbo, Chile. De su análisis se desprende que, en general, campesinos, pequeños agricultores y terratenientes sufren de segregación, que aumenta en épocas de sequía. En efecto «el agua fluye hacia arriba, hacia el dinero», situación que perpetúa los espirales de pobreza, derivado del contexto institucional, el uso del agua y la manera en que se integran en los mercados. Los campesinados chileno y argentino viven en realidades complejas, en las que entre menos rieguen, menos ganan y más pobres son, y con ello, cuentan con menos posibilidades de hacer un uso eficiente del agua. En Mendoza la oferta de agua para irrigar es proporcional al total de tierra, sin importar el tipo de cultivo; esto es, el agua es inherente con la tierra y no se puede utilizar en otras granjas. Montaña manifiesta que el mercado del agua se añade al de la tierra y al laboral, lo que combina fuerzas asimétricas que se tornan en contra de los intereses del pequeño campesinado. Así, la pobreza se asocia con la escasez de agua y sus afectaciones en usos domésticos y producción de comida, en especial en economías de subsistencia. Finalmente, propone una serie de estrategias y soluciones para que exista una mejor forma de enfrentar la escasez y distribución del recurso hídrico.

En el capítulo 9, Kostas Vergopoulos plantea que en años recientes, y sobre todo después de la burbuja financiera inmobiliaria de 2008, ha surgido una burbuja financiera en los alimentos. Los únicos que no admiten la existencia de dicha «burbuja alimentaria» son los corredores financieros en los mercados alimentarios de Wall Street. Se afirma que la financierización de los agroalimentos crea mayores problemas para el capitalismo

que soluciones. Muestra de ello es que en los 1990 el producto financiero de derivados, el Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) incluía los precios de 24 bienes primarios: metales preciosos, productos energéticos, café, ganado, maíz, productos de soya y trigo. En 1999, los reguladores abrieron instrumentos financieros a operadores financieros externos y contratos de futuros, los cuales reportaron ganancias por 13 billones de dólares estadounidenses en 2003. Algunas de las consecuencias, aunado a la inestabilidad y a la volatilidad de los precios de los alimentos, fueron el rápido crecimiento de las poblaciones con hambre alrededor del mundo, estimadas en 250 millones de personas en 2012, y más de 1 billón de habitantes que padecen inseguridad alimentaria. Por tanto, el problema recae en reducir formas de producción capitalista y promover maneras no capitalistas para evitar pagar beneficios y rentas de la tierra en el nivel sistémico.

Farshad A. Araghi muestra el tránsito del Estado de bienestar agrario moderno hacia los movimientos globales de campesinos en el capítulo 10. Complementariamente conceptualiza la «privatización del desarrollo» basada en la privatización de las ventajas de las corporaciones agroalimentarias; el colonialismo o «régimen de bienestar agrario» del siglo XIX, el cual se caracterizó por el fortalecimiento de esquemas raciales y de creación de fuerza de trabajo forzada, enfocada a la exportación de las colonias hacia los centros industriales. Los resultados fueron la disminución del campesinado y su proletarización y urbanización en los centros industriales; mientras que se incrementó la ruralización y la sobreexplotación de la mano de obra forzada en las colonias.

La etapa del desarrollismo nacional fue marcada por la Revolución rusa de 1917 y la Revolución vietnamita de 1975. Una de las características de esta etapa fue el reparto agrario, que bajo la ideología estadounidense

buscaba la creación de granjas familiares no colectivas. Tales políticas agrarias, en concreto en el tercer mundo, transformaron las relaciones terrateniente-campesino y condujeron a la proliferación de unidades agrícolas de tamaño familiar cercanas a la subsistencia. Por otro lado, entre 1945 y 1972 se dio un auge agrícola en Estados Unidos, cuyos excedentes deprimieron los precios y ocasionó que países del tercer mundo elevaran sus importaciones de comida. El efecto fue la disminución del campesinado y la dependencia en alimentos. La década de 1970 inicia con la era de la globalización y la privatización del Estado de bienestar agrícola, descrito en el término «régimen alimentario cerrado».

Al respecto, Araghi subraya dos elementos clave: el desmantelamiento de la división del trabajo poscolonial, con eje central en el desarrollismo nacional y la reorganización de la producción mundial, y las relaciones de intercambio con base en vínculos globales de valor. Las nuevas relaciones comerciales son asimétricas, con beneficios hacia las compañías transnacionales agrícolas, cuya característica principal es sobreproducir, con ayuda de los subsidios de los países industrializados, y con ello sellar los nexos globales entre Sur y Norte. Concluye al mencionar que la privatización del desarrollo y su Estado de bienestar ha creado millones de migrantes y personas pobres.

David Barkin y Blanca Lemus, en el capítulo 11, plantean la necesidad de repensar si el producto interno bruto (PIB) es un mejor indicador que el producto interno de felicidad (PIF). Este último calcula la riqueza de los países al evaluar el bienestar de sus ciudadanos, esto es, su felicidad; medir sonrisas y no posesiones materiales. Utilizan los conceptos de «decrecimiento», Buen Vivir y *Sumak Kawsay*, el cual reconoce los derechos de la naturaleza y una nueva compleja ciudadanía que acepta los compromisos sociales y ambientales.

En contigua tesis, proponen la necesidad de repensar el análisis social con la incorporación de ideas proporcionadas por varios autores, a la vez que sugieren volver a la «comunalidad» que requiere de cuatro rasgos: *a)* una democracia directa o participativa, *b)* la organización del trabajo comunitario, *c)* la posesión o control comunal de la tierra, *d)* una cosmología común, que incluya la noción de la tierra como madre (Pachamama) y el respeto del liderazgo comunal. De manera provocadora, advierten que lo que aparece como «pobreza» en muchas sociedades rurales se trata más bien del resultado de elecciones deliberadas hechas por sus miembros para moldear o reformar sus comunidades según ciertos principios, enfocándose en la satisfacción de sus necesidades a fin de asegurar efectivamente gobernarse a sí mismos e impulsar su autonomía. También enuncian alternativas para conseguir una mejor calidad de vida, aunque esto no involucre un mayor consumo.

El libro es, en sí mismo, un referente para adentrarse en el tema de la relación que subyace entre la persistencia del campesinado y su condición de pobreza. Como se mencionó con anterioridad, cada capítulo ofrece una perspectiva coherente y desafiante acerca del estudio de dicho vínculo y, por tanto, cuáles deberían ser las aproximaciones teóricas y las soluciones.

Colaboradores

Alberto Acosta. Profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sede Ecuador. Estudió Economía de la Energía, Geografía Económica, Economía Industrial y Administración de Empresas en la Universidad de Colonia en Alemania. Se ha desempeñado como consultor del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Fundación Friedrich Ebert), donde también fue líder del proyecto «Análisis de coyuntura económica». Ejerció cátedra en universidades de pregrado y posgrado en Quito, Guayaquil y Cuenca, en Ecuador, y en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Fue ministro de Energía y Minas (enero-junio de 2007) y presidente de la Asamblea Constituyente (noviembre de 2007-junio de 2008), la cual redactó una nueva constitución en Ecuador que contempla los derechos de la naturaleza. Ha participado como panelista en conferencias nacionales e internacionales y ha publicado en libros colectivos e individuales sobre minería, extractivismo, medio ambiente y desarrollo.

Mónica Guadalupe Chávez Elorza. Docente investigadora en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Doctora en política pública por la Escuela de Gobierno y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y maestra en Economía Aplicada por El Colegio de la Frontera Norte. Sus líneas de

investigación se centran en la interconexión entre la migración calificada y los sistemas nacionales de innovación, el análisis de los modos de precarización de los recursos altamente calificados y la participación de la mujer en la ciencia. Cuenta además con experiencia en temas de pobreza, políticas públicas, evaluación y monitoreo de proyectos sociales y de género.

Raúl Delgado Wise. Director de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Es presidente de la Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD), codirector de la Red de Estudios Críticos del Desarrollo y director de la revista *Migración y desarrollo*. Coordina también la Cátedra UNESCO sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos. Ha sido conferencista en más de treinta países alrededor del mundo. Entre sus publicaciones más recientes destacan los artículos «Migración calificada: entre la pérdida de talento y la oportunidad de transformar a México con innovación», con Mónica Guadalupe Chávez Elorza; «The migration-development nexus»; «Hacia un nuevo horizonte emancipatorio: contribuciones del zapatismo a la teoría y práctica revolucionarias», con Aída Martínez Olivares; y el libro *Agrarian change, migration and development*, con Henry Veltmeyer.

Eduardo Gudynas. Secretario ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) en Montevideo, Uruguay. Maestro en ecología social por la Pontificia Facultad San Buenaventura de Roma y la Multiversidad Franciscana de América Latina. Se ha desempeñado como docente en numerosas universidades latinoamericanas, europeas y estadounidenses. Ha sido consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y otras agencias internacionales. Se especializa en tópicos relacionados con el desarrollo y el ambiente. En 2010 se integró al Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Cabe resaltar que colabora con distintas redes y organizaciones ciudadanas. Asimismo es considerado uno de los principales pensadores en cuestiones ecosociales. Es autor de más de diez libros y numerosos artículos académicos y capítulos en libros.

Claudio Katz. Investigador y profesor en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, donde dirige diversos proyectos. Es licenciado en economía y doctor en el área de geografía. Se desempeña como profesor de las cátedras Economía para Historiadores y Economía II en las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la UBA. Ha impartido seminarios de doctorado y posgrado y ha sido profesor invitado en universidades de varios países. Es pertinente agregar que pertenece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Instituto de Investigaciones Económicas de Argentina. Además de coordinar grupos de trabajo en Clacso participa de manera activa en foros sociales internacionales de impugnación del neoliberalismo, el libre comercio, el endeudamiento externo y la militarización. Colabora con organizaciones de izquierda de América Latina, así como con sindicatos, movimientos sociales y organizaciones políticas de Argentina, como integrante del colectivo «Economistas de Izquierda» (EDI). Incluso, recibió menciones honoríficas del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. En cuanto a las publicaciones, es autor de múltiples textos acerca de la crisis económica global y es miembro del consejo editorial de varias revistas académicas.

Humberto Márquez Covarrubias. Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Doctor en estudios del desarrollo por la misma universidad. Director de las revistas *Estudios Críticos del Desarrollo* y *Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis*. Miembro de la Red Internacional de Migración y Desarrollo y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Autor de varios libros, capítulos y artículos sobre capital, Estado, movimientos sociales, crisis y alternativas.

Ronaldo Munck. Jefe de relaciones con la comunidad en Dublin City University, Irlanda, y profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Liverpool, Inglaterra. Es especialista en relaciones laborales y en estudios del desarrollo. Ha publicado más de veinte libros y cien artículos en torno a dicha problemática. Sus investigaciones se han traducido a diferentes idiomas. Complementariamente, pertenece a los consejos editoriales de *Global Labour Journal*, *Latin American Perspectives*, *Globalizations*, *Global Social Policy* y *Global Discourses*. De sus publicaciones en español sobresalen *Globalización y trabajo: la nueva «Gran Transformación»* y *Trabajo, sindicatos y migraciones en el marco de la globalización neoliberal*. Actualmente, sus estudios se enfocan en la migración y los sindicatos.

Henry Veltmeyer. Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Ha sido profesor de sociología del desarrollo por más de tres décadas. Fue fundador de los programas de Estudios del Desarrollo en Saint Mary's University y en la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como de la red de Estudios Críticos de Desarrollo (Critical Development Studies). Fue presidente de la

Asociación Canadiense para los Estudios del Desarrollo (CASID) y editor en jefe de la revista *Canadian Journal of Development Studies*. Es especialista en teoría del desarrollo, economía política de la globalización y desarrollo local, desarrollo capitalista en el contexto de América Latina, con énfasis en el desarrollo rural y los movimientos sociales. Autor y compilador de más de 40 libros y numerosos artículos publicados en revistas de prestigio. Cabe mencionar que algunos de sus libros han sido traducidos en varios idiomas. Entre sus publicaciones recientes se encuentran *The New Extractivism in Latin America* e *Imperialism and Capitalism in the 21st Century*, en coautoría con James Petras.

Fernanda Wanderley. Subdirectora de investigación del posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA), La Paz, Bolivia. Doctora en Sociología por la Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos. Es autora de *Crecimiento, empleo y bienestar social. ¿Por qué Bolivia es tan desigual?* y coordinadora de *Estudios urbanos en la encrucijada de la interdisciplinariedad* y *Políticas para la inserción laboral de las mujeres y jóvenes en el Estado Plurinacional de Bolivia*, entre otros libros, capítulos y artículos. Su formación académica y profesional, junto con sus publicaciones, puede consultarse en www.fernandawanderley.blogspot.com

Normas para la recepción de originales

1. *Estudios Críticos del Desarrollo* es una revista semestral de investigación científica arbitrada y publicada por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo (UAED) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

2. Los trabajos deberán ser inéditos y sus autores se comprometen a no someterlos simultáneamente a la consideración de otras publicaciones. Deberán ser resultado o avance de investigaciones originales de alto nivel, enmarcados en las Ciencias Sociales y las Humanidades, enfocados en la problemática y las alternativas del desarrollo. Pueden enviarse trabajos en español y en inglés; los cuales serán publicados en esos idiomas. Los autores conceden su autorización para que sus artículos sean difundidos a través de medios impresos y electrónicos por la UAED-UAZ.

3. Los autores deberán remitir los originales en formato compatible con los programas estándares de procesamiento de textos (Word) en tamaño carta, a doble espacio y por una sola cara, con tamaño de letra de 12 puntos en fuente Times New Roman.

4. Considerando que una cuartilla tiene 27 renglones y entre 60 y 64 caracteres con espacios e interlineado doble, los trabajos destinados a las secciones «Artículos» y «Debate» tendrán una extensión de entre 20 y 25 cuartillas; y las colaboraciones para «Reseña» entre 3 y 5.

5. Los trabajos deberán acompañarse de los siguientes datos, con una extensión no mayor de diez líneas: nombre completo del autor o los autores, nacionalidad, máximo nivel de estudios alcanzado, institución, centro de adscripción y línea de investigación, cargo que desempeña, número telefónico, dirección postal, dirección electrónica, dos o tres referencias bibliográficas de las publicaciones recientes o relevantes y otra información de interés académico.

6. Anexo al artículo, deberá enviarse un resumen de 150 palabras (o diez renglones) en el idioma en que esté escrito y cinco palabras clave, que faciliten su inclusión en los índices y bases de datos bibliográficos. *Estudios Críticos del Desarrollo* traducirá, en su caso, el resumen al inglés y utilizará esa síntesis para su difusión en el portal de internet de la UAED.

7. Los cuadros, los mapas y las gráficas deberán presentarse en formato Excel con claridad y precisión; invariablemente deberán incluir la fuente o el origen de procedencia, y en el texto deberá indicarse su colocación exacta.

8. Las notas se presentarán a pie de página y deberán estar escritas a renglón corrido (a un espacio) y numeración corrida (progresiva), e incluirse al pie de la página correspondiente. Las llamadas deberán ser numéricas. Las citas deberán insertarse en el texto abriendo un paréntesis con el apellido del autor, el año de la publicación y la página.

9. Para siglas, acrónimos o abreviaturas, la primera vez que se usen deberá escribirse el nombre completo o desatado; luego, entre paréntesis, la forma que se utilizará con posterioridad. Ejemplos: Banco Mundial (BM), Organización de las Naciones Unidas (ONU), producto interno bruto (PIB).

10. Los textos originales podrán entregarse en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo o enviarse por correo a la siguiente dirección:

Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, campus Universitario II, avenida Preparatoria sin número, fraccionamiento Progreso, 98065 Zacatecas, Zacatecas, México. También podrán enviarse por correo electrónico a la dirección: revista@estudiosdeldesarrollo.net

11. Los originales serán dictaminados por evaluadores anónimos seleccionados entre expertos del tema tratado por el artículo. En razón de lo cual los nombres de los autores u otra forma de identificación sólo deberá figurar en la página inicial.

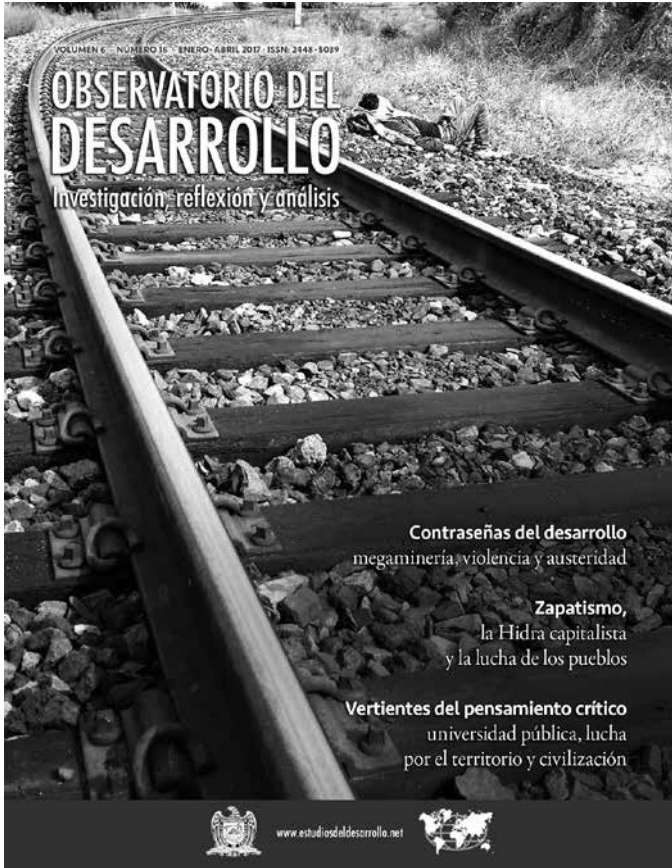
12. Los dictámenes serán comunicados a los autores en un plazo no mayor a 60 días después de la recepción del artículo. El principio de confidencialidad será la guía.

13. Las colaboraciones aceptadas serán sometidas a un proceso de corrección de estilo y su publicación estará sujeta a la disponibilidad de espacio en cada número. *Estudios Críticos del Desarrollo* se reserva el derecho de realizar los cambios editoriales que considere pertinentes.

14. En ningún caso se devolverán originales.

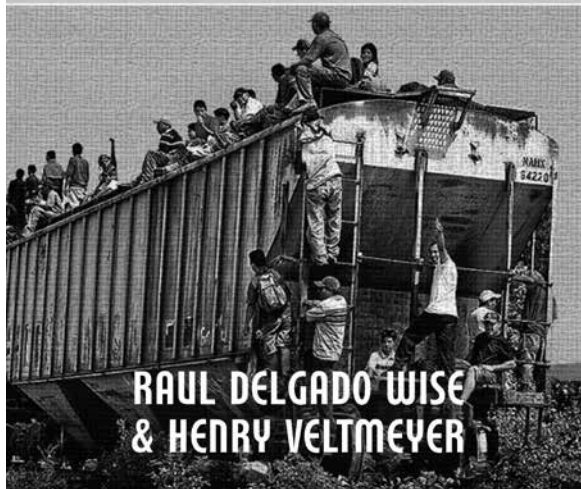
Publicaciones



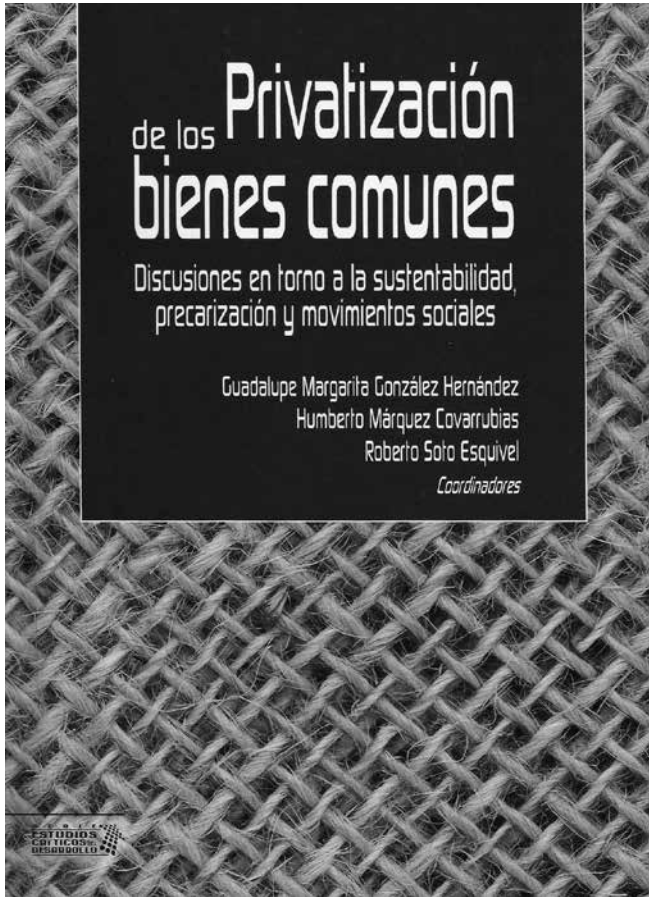


AGRARIAN CHANGE, MIGRATION AND DEVELOPMENT

Agrarian Change & Peasant Studies



**RAUL DELGADO WISE
& HENRY VELTMAYER**



Editorial

La pobreza en el juego de espejos
Humberto Márquez Covarrubias

Artículos

Economía social en América Latina:
¿alter o posdesarrollo?
Henry Veltmeyer

Desarrollo y democracia en América Latina:
resultados y perspectivas
Ronaldo Munck

Desenlace del ciclo progresista
Claudio Katz

Claves para descifrar el sistema imperial
de innovación comandado por Estados Unidos
Raúl Delgado Wise

Los buenos convivires.
Filosofías sin filósofos, prácticas sin teorías
Alberto Acosta

Posdesarrollo como herramienta
para el análisis crítico del desarrollo
Eduardo Gudynas

Entre el extractivismo y el Vivir Bien:
experiencias y desafíos desde Bolivia
Fernanda Wanderley

Debate

Urdimbres de la crisis del capitalismo:
proceso histórico y colapso civilizatorio
Humberto Márquez Covarrubias

Reseña

Discusiones en torno a la pobreza
y el campesinado
Mónica Guadalupe Chávez Elorza